
Tomo III

Memorias

Cardenal Raúl Silva Henríquez

Ascanio Cavallo

Ediciones Copygraph

Diseño de portada: Nemesio Antúnez

Diseño de páginas: Patricio Andrade

Primera edición en forma de libro

Inscripción N° 78.832 / 1991

Con las debidas licencias

© Cardenal Raúl Silva Henríquez

© Ediciones Copygraph

Rafael Cañas 270, Providencia
Santiago, Chile

Composición: Claudio Sapag

Impresor: Salesianos

Bulnes 19, Santiago de Chile

Se terminó de imprimir en el mes de septiembre de 1994

Indice

39.	Una pequeña oficina de paz	7
40.	La "ruptura" del 74	23
41.	El conflicto de la Universidad Católica	39
42.	Cargos ante el Vaticano	55
43.	La guerra contra Pro Paz	71
44.	La misión de la Vicaría	87
45.	El retorno hacia la Iglesia	103
46.	Una historia de lealtades	117
47.	El año de los tres Papas	133
48.	El milagro del sur	147
49.	Mediodía en Puebla	161
50.	Siguiendo al peregrino	175
51.	La prueba de ser pastor	191
52.	Signo de contradicción, signo de unidad	209
53.	Una ofensiva de paz	225
54.	"Disponga, Santo Padre..."	239
55.	Días de hojas amarillas	253
	Epílogo	273
	Agradecimientos	281
	Indice onomástico general	283



Una pequeña oficina de paz

Sólo unos días después del golpe militar, a mediados de septiembre de 1973, un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) llegó a Santiago para ayudar a quienes requiriesen salir del país. Este hombre, Oldrich Haselman, consiguió con gran rapidez que las autoridades militares le dieran garantías de que se cumplirían los tratados internacionales, especialmente en cuanto a los extranjeros residentes en Chile, y le permitieran habilitar recintos bajo la bandera de la ONU para recibir a personas en esa condición.

Pero el Acnur carecía de recintos propios, así que Haselman le pidió al obispo luterano Helmut Frenz que hablara conmigo para saber si la Iglesia Católica podría ayudar en esta tarea. Naturalmente, le dije que sí, que podríamos disponer de nuestras casas de ejercicios, en vista de que la situación se entendía provisoria. Haselman había hablado con el gobierno de un plazo de tres meses para la normalización. Para complementar esto, el Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas (CIME), a cargo de Roberto Kozak, se preocuparía de reubicar a los refugiados en el exterior.

Paralelamente, las iglesias protestantes habían comenzado a moverse para solucionar los problemas específicos de sus fieles. Frenz aparecía a la cabeza de esta intensísima labor. Una delegación del Consejo Mundial de Iglesias había llegado también a Chile y tomado contacto con mi obispo auxiliar Fernando Ariztía para explorar la posibilidad de una acción conjunta con la Iglesia Católica. Ariztía me transmitió este interés, que coincidía plenamente con el nuestro.

Es justo decir que el planteamiento ecuménico de este trabajo fue posible porque las iglesias chilenas venían desarrollando un ecumenismo activo y responsable desde hacía ya varios años. Por eso no costó que el 3 de octubre se oficializara la creación de un Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados (Conar), que gozaría de extraterritorialidad en la Casa

de Ejercicios de San Francisco Javier y en el antiguo Seminario Jesuita de Padre Hurtado. El Conar sería presidido por Frenz, acompañado del obispo Jorge Hourton. La secretaría ejecutiva la asumirían Samuel Nalegach, pastor de Unelam, y los católicos estarían representados en ese nivel por el padre Vicente Ahumada.

**COMITE DE
COLABORACION PARA
LA PAZ EN CHILE**

Las Iglesias Católica, Evangélicas, Ortodoxa y la Comunidad Israelita, en el deseo de afianzar en Chile la paz y de servir a la comunidad, informan:

LOS TRABAJADORES desprovistos de recursos, que en razón del momento nacional, deseen información sobre la manera de recibir la atención que legalmente les corresponde, en la solución de los problemas laborales o penales que les afligen, pueden dirigirse a las oficinas de este COMITE, calle Santa Mónica 2338, de 9 a 13 hrs. y de 14.30 a 16 horas, de lunes a viernes.

**EL DEPARTAMENTO
DE OPINION PUBLICA DEL
ARZOBISPADO DE SANTIAGO**

Informa a los **TRABAJADORES** que se encuentran en situación irregular o que hayan sido **DESPEJIDOS** de sus empresas, que:

1. Se ofrece **ASISTENCIA JUDICIAL GRATUITA**, por parte del Comité de Cooperación para la Paz en Chile, en los tramites preliminares y en la posterior defensa de sus derechos, ante los Juegados y Tribunales competentes.
2. Los Interesados deben dirigirse a las oficinas del Arzobispado de Santiago, calle Erasmu Escala 1622, de Lunes a Viernes de 9.30 a 13 horas y de 14.30 a 17.00 Horas.

Se recomienda no firmar **NINGUNA RENUNCIA**.

Las Iglesias representadas en el Comité de Cooperación para la Paz, renuevan su fe en que vendrá el Señor "E no juzgará por la vista de los ojos, ni aguilera por oídos de niños, sino que juzgará en Justicia, al Pobre, y en equidad a los humildes de la tierra" (Isaías 11: 3-4), y colaboran a la gran misión de pacificación nacional, pues la **OBRA DE LA JUSTICIA SERA LA PAZ**.

Los primeros avisos del Comité Pro Paz: el de la izquierda fue publicado en el diario "La Prensa" el 5 de noviembre de 1973; el de la derecha, en el diario "El Mercurio", el 10 de noviembre de 1973.

Cumplieron una extraordinaria labor. Las acusaciones del gobierno militar habían desatado una verdadera ola de xenofobia, frente a la cual muchos extranjeros estaban en el desamparo más absoluto. Según las cifras disponibles, unos 10 mil eran latinoamericanos, y en una importante proporción estaban ya refugiados en Chile. La amenaza de devolverlos a sus países ponía en real peligro sus vidas. El Conar actuó con tanta eficacia que, a los tres meses, habiendo resuelto el asunto de los extranjeros, pudo disolverse.

Pero el problema de los chilenos era todavía peor, como habíamos constatado con mi secretario, el padre Luis Antonio Díaz, en el Arzobispado. Esto lo discutimos con las iglesias hermanas simultáneamente con el tema de Conar: se requería otro organismo para hacerse cargo de las víctimas nacionales. El obispo Fernando Ariztía, el sacerdote jesuita Patricio Cariola y el ex embajador Alejandro Magnet representaron a los católicos en las primeras reuniones para crear esta

entidad; se discutió largamente el nombre, porque todos querían evitar cualquier connotación que pudiese parecer hostil al gobierno. Al final, resultó tan largo, que parecía un eufemismo: Comité Ecuménico de Cooperación Para la Paz en Chile, Pro Paz con el tiempo.

A su creación concurren el obispo Frenz, por los luteranos; el pastor Tom Stevens, por los metodistas; el pastor Julio Assad, por los metodistas pentecostales; el doctor José Elías, por los ortodoxos; el pastor Luis Pozo, por los bautistas; Augusto Fernández, por Unelam, y el rabino Angel Kreiman, por la comunidad judía. Los católicos estarían representados por los padres Patricio Cariola y Baldo Santi, y también por el presidente del Comité, el obispo Ariztía. El secretario ejecutivo sería un sacerdote jesuita que muchas personas concordaron en recomendarme: Fernando Salas.



El sacerdote jesuita Fernando Salas atiende en la primera oficina del Comité Pro Paz, en el sexto piso del Arzobispado.

Salas llegó a la reunión de constitución del Comité sin ninguna idea de lo que iba a tener que hacer. Dice mucho de su calidad humana el que haya aceptado con una sola pregunta: “¿Dónde?”. Le dije que se ubicara una oficina en el sexto piso del Arzobispado, a la cual derivaríamos a toda la gente que quisiera presentar su caso.

El decreto de fundación estableció que atendería a los chilenos “que se encuentran en grave situación económica o personal”. Una semana después de instalado, el público que acudía era tanto que hubo que abrir nuevas oficinas, en otro piso. Antes de terminar el mes ya había desbordado el propio edificio, por lo que hubo que arrendar una casa del Movimiento Familiar Cristiano, en calle Santa Mónica.

Pronto se debió dividir por áreas el Comité Pro Paz. Los problemas de expulsión de trabajadores requerían, por ejemplo, un enfoque propio. A ellos se agregó la exoneración de profesores y estudiantes en distintos niveles de la educación. Algunos colegios fueron ocupados militarmente; debimos afrontar la intervención por la FACH del Colegio Saint George, al cual se acusaba de ser un foco de indoctrinación extremista, y que vendría a ser devuelto bastante tiempo después.

Dada esta situación, no era extraño que la Universidad Católica fuese afectada. Durante los primeros días, muchos sostuvieron que sería la única universidad que los militares no tocarían, en vista de la posición crítica que habían tenido muchos de sus profesores y los alumnos frente a la UP.

Pero las cosas no eran así. El gobierno aspiraba al “poder total”, y las universidades eran una parte de esto. Además, el rector de la UC, Fernando Castillo Velasco, era considerado un hombre de izquierda. De hecho, en los últimos meses había entrado en conflicto con su partido, el PDC, que incluso había negado el pase a sus militantes para asumir la vicerrectoría académica. Tras fracasar con sucesivos nombres, el rector había logrado que aceptara el abogado Alfredo Etcheberry.

Poco antes del derrocamiento de Allende, Castillo Velasco sufrió un infarto y en su lugar asumió Etcheberry, quien presidió las primeras y muy confusas reuniones del Consejo Superior tras el golpe. Unos días después, el general Pinochet convocó a todos los rectores a una reunión en el edificio Diego Portales, donde los recibió con una pistola sobre la mesa. Allí el rector de la Universidad de Chile, Edgardo Boeninger, expuso, a nombre de sus colegas, la opinión de que la reorganización universitaria debía ser obra de los académicos.

- Y ustedes, ¿están de acuerdo con esto? - dijo Pinochet, mirando cómo cada uno de los rectores asentía -. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo. Así que en los próximos días va a llegar a todas las universidades un reemplazante que se hará cargo de sus puestos. Eso es todo.

Este antecedente nos alarmó. Quería decir que la UC no sería ninguna excepción. Lo conversamos con el nuncio Sótero Sanz y pedimos una audiencia con el ministro de Educación, el contralmirante Hugo Castro, para formularle una propuesta: considerando el *status* pontificio de la Universidad, al cual por supuesto la Iglesia no podía renunciar, habría que respetar los estatutos aprobados por la Santa Sede y permitir que el Gran Canciller eligiera al rector; pero, como entendíamos la necesidad de garantías que tenía el gobierno, haríamos tal nombramiento previo acuerdo con las autoridades. No sabíamos entonces hasta qué punto sería inútil este gesto de buena voluntad. El ministro escuchó la proposición, pero expresó de inmediato su rotunda negativa: el nuevo rector sería nombrado por el gobierno, sin más trámite. Le dijimos que esto sería muy delicado, que la UC quedaría en una situación única en América; pero el hombre no estaba para explicaciones.

Muy pronto nos llegó la noticia de que el nominado era también un almirante, aunque en retiro: Jorge Swett Madge, quien llamó a Castillo Velasco para acordar el traspaso. Parece que la conversación fue muy gentil; Swett dijo incluso que los vicerrectores podrían permanecer. Pero cuando se conoció su nombramiento, todos los vicerrectores quisieron renunciar, empezando por Etcheberry, quien dijo que no podría quedarse en una universidad dictatorial. Finalmente, Castillo Velasco consiguió, por expresa petición mía, que el vicerrector económico, Jorge Awad, aceptara continuar: de otro modo, toda la universidad sería "copada" desde fuera.

De todos modos, Castillo Velasco le hizo notar a Swett que no podría entregarle el cargo directamente, porque dependía del Gran Canciller. Por tanto, dimitiría ante mí. Le advirtió, de paso, que la autoridad del Gran Canciller estaba normada por la Santa Sede, y que saltarse esa instancia era objeto de sanciones canónicas muy severas, que podían incluir la excomunión.

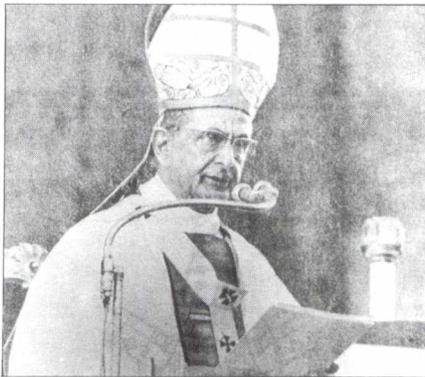
Entonces Swett decidió hablar conmigo, para que su nombramiento fuera refrendado oficialmente, conforme a las reglas de la Sagrada Congregación para la Educación. Pensé mucho si debía dar este paso. No por Swett, a quien no conocía, sino porque la actitud del ministro de

Educación, y la del gobierno en general, dejaban en claro que la universidad era intervenida, y el hecho de que el elegido fuese un oficial retirado no atenuaba el carácter militar de la intervención.

Algunos profesores creían que no debía admitirlo. Varios me fueron a plantear la necesidad de rechazar este acto ilegítimo. Pero mis opciones eran muy pocas. Yo no quería realizar ningún gesto que pudiera parecer agresivo con las nuevas autoridades; si rechazaba el nombramiento, situaría a la Iglesia en una posición de ruptura. Por otro lado, me parecía que lo esencial era mantener la catolicidad de la universidad, lo que estaba garantizado al menos por el Gran Canciller y la vigencia de las normas pontificias. Finalmente, tenía la convicción de que esta sería una situación transitoria, y que la UC recobraría pronto su autonomía.

De modo que el 3 de octubre emití un decreto nombrando como nuevo rector al almirante (R) Swett, en uso de las atribuciones del Gran Canciller, por el período que restaba de la gestión de Castillo Velasco. Cuando éste venciera, vendría la ratificación del Vaticano.

Aquella semana -la primera de octubre- la Conferencia Episcopal decidió realizar su primera visita formal a la Junta. Fue muy divertida, porque el almirante José Toribio Merino había dejado su arma sobre la mesa y cuando entró la televisión, la retiró con una broma. Les dijimos que la Iglesia quería colaborar en todo lo que fuese necesario para el bien del país. Los cuatro recibieron muy bien estas palabras, y luego hablaron brevemente acerca de sus creencias cristianas.



El Papa Pablo VI en un discurso de fines de 1973.

Fue una reunión protocolar, pero anticipó hechos de alcance mayor, que vendrían en las horas siguientes. El domingo 7 de octubre, hablando en la plaza San Pedro, el Papa Pablo VI hizo referencia a Chile y declaró que “es cada día más evidente el carácter irracional e inhumano

del recurso a la ceguera y a la crueldad de las armas homicidas para establecer el orden, o, más exactamente, la dominación represiva de algunos hombres sobre otros”.

Dos días después, la Junta me fue a visitar, como una forma de devolver el saludo de los obispos. En mi oficina del Arzobispado tuvimos una conversación informal en la que ellos expresaron su inquietud por las palabras del Papa, que a su juicio sólo podían deberse a la mala información. Hablé muy poco, pero al final del encuentro quise repetir lo que había dicho al emisario enviado unas semanas antes:

- La Iglesia no quiere pedir nada para sí, aunque por supuesto yo les agradezco las deferencias que han tenido, y les aseguro que nuestros deseos son los mejores. Lo único que les debo pedir es que trabajen para que se respeten los derechos de los pobres, de los que tienen menos y necesitan más ...

Cuando concluyó la conversación, hice una declaración a la prensa. Pensando en la necesidad de cuidar nuestras relaciones con la Junta, anoté que “la imagen que el Santo Padre se ha formado no es la que nosotros quisiéramos que tuviera de Chile”. Más tarde se me dijo que esta frase había caído muy mal en Roma, porque no era aceptable que se dijera que el Papa pudiera estar mal informado.

Pero evidentemente, Pablo VI, disponiendo de muchas fuentes y ejerciendo su clarividencia usual, se había formado una idea bastante completa de lo que había sucedido en Chile, incluso con sus matices más finos. El 12 de octubre, el Papa envió a la Nunciatura, y a varios obispos chilenos, el proyecto de una carta que él podría dirigir al Episcopado si lo estimábamos conveniente. Se trataba de un texto en consulta.

El nuncio lo vio con preocupación; si la Junta ya había reaccionado con disgusto ante nuestras declaraciones (que para nada podían considerarse hostiles), un documento como éste podría dar paso a una ruptura; la Junta no se convencería jamás de que los obispos chilenos no habíamos tenido injerencia. Del mismo modo opinamos quienes fuimos consultados; por lo menos, los que yo recuerdo.

Conversé largamente con el nuncio sobre qué se podría hacer. Concordamos en que lo mejor era pedirle al Papa que el proyecto no se consumara, aunque obviamente esto era necesario decirse en forma personal.

Parecía que, en efecto, la información sobre la situación del país y de la Iglesia se estaba exagerando en Europa. Se hablaba de miles de

muertos, y se atribuía al golpe militar una intencionalidad “fascista”. Varios obispos nos habían escrito en términos dramáticos, a veces para ofrecernos socorro, a veces para darnos fortaleza.

Las informaciones desmedidas que circularon en otros países causaron un indudable daño a Chile. Sobre todo porque no contribuyeron a detener las cosas terribles que sí ocurrían; al ser manifiestamente falsas, crearon en muchas personas la tendencia instintiva a pensar que toda la información -incluso la verdadera- tenía el sesgo de una campaña ideológica o de un ataque intencionado.



Nuncio Sótero Sanz de Villalba.

La Junta Militar tuvo una especial preocupación por estas versiones durante los primeros meses; el 15 de octubre, sus miembros enviaron una carta a Pablo VI, en la que se declaraban “dolorosamente conmovidos” por las palabras del Papa y “por la injusta imagen nuestra que se ha formado en el extranjero y especialmente ante Vuestra Santidad, a quien el gobierno y el pueblo de Chile mantienen su tradicional devoción”. Atribuían tal cosa a una campaña orquestada por el marxismo, y ofrecían al Santo Padre toda la información que requiriese sobre la situación chilena.

Por esos días recibí la visita del nuevo canciller, vicealmirante Ismael Huerta, quien quería plantearme la gravedad que revestía para el gobierno, y para sus propósitos estabilizadores, lo que se decía en el exterior.

Deseaba saber qué podría hacer la Iglesia frente a esto. Le dije que yo pensaba viajar a Roma, y que estaba considerando la posibilidad de extender mi gira por otros países, donde podría aclarar las distorsiones.

Pero aquel viaje no era tan fácil. Desde luego, en la Iglesia había ya un cierto bagaje de información confiable acerca de violencias con los detenidos, actos arbitrarios o persecuciones. El Comité Pro Paz estaba recibiendo denuncias cuantiosas y el gobierno se mostraba ya hostil a la tarea de esta organización, pese a su corta vida.

En otras zonas del país se habían producido roces serios. En Puerto Montt, el administrador apostólico, Jorge Hourton, tuvo un incidente con el coronel de la FACH Hernán Leigh, hermano de un miembro de la Junta, y se amenazaba incluso con su expulsión del país. En Iquique, el obispo José del Carmen Valle, tal vez el más apacible y bondadoso de todos nosotros, debió sufrir la rudeza de una autoridad militar. La persecución a quienes habían pertenecido a los Cristianos Por el Socialismo comenzaba a hacerse sistemática.

Muchos sacerdotes habían sido detenidos, interrogados o allanados, especialmente en los barrios populares; otros tantos debieron salir del país, voluntariamente o por la fuerza.

Un sacerdote que había sido uno de mis ayudantes en Valparaíso y que ahora estaba suspendido de su ministerio, Michael Woodward, murió como consecuencia de torturas en Valparaíso. Otro, Antonio Llidó, que se alejó del sacerdocio, es aún un detenido-desaparecido.

Poco después, en Iquique, Gerardo Poblete, un joven sacerdote salesiano, fue detenido por la policía, aparentemente porque alguien denunció que él mismo decía ser “revolucionario”, lo que era una broma que solía hacer a sus alumnos; la humorada le costó el martirio: según se ha establecido, murió víctima de la tortura, aunque oficialmente las autoridades sostuvieron la inverosímil versión de que se había caído de una patrullera en marcha.

En estas circunstancias, no todos los prelados concordaban en que había que hacer gestiones privadas y tener comprensión con el nuevo gobierno. El 19 de octubre hubo una larga discusión en una reunión de obispos, en la que se llegó a proponer la denuncia pública de los abusos que estábamos conociendo. Yo me opuse firmemente: estaba persuadido de que nuestras palabras podían ser usadas con propósitos políticos. E insistí tanto en esto, que logré incluso un acuerdo para que los obispos no emitiésemos más declaraciones públicas individuales, y nos sometiésemos a la disciplina colegiada.



El cardenal en una misa con jóvenes salesianos. A su derecha aparece el padre Gerardo Poblete, muerto en octubre de 1973.

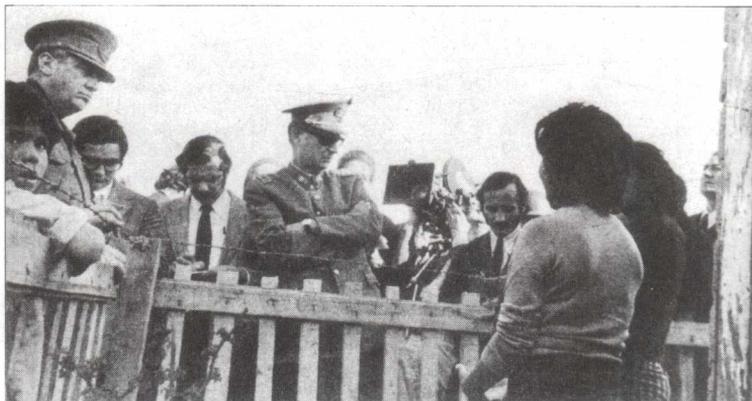
El 20 de octubre envié una carta al general Pinochet, tal como se había acordado, informándole de esta reunión y de las preocupaciones expresadas en ella. El principal objeto era pedirle que designase a un intermediario que pudiese poner especial atención a los planteamientos de la Iglesia. Proponía que fuera el general Oscar Bonilla, ministro del Interior, católico, del cual todos teníamos la mejor impresión.

Bonilla era en esos días una pieza clave para ayudarnos a resolver la situación de muchos detenidos. Daba una especial colaboración al Conar, y se mostraba decidido a impedir que hubiese abusos con los pobres. A muy poco de asumir la Junta había iniciado visitas sorpresivas a las poblaciones marginales, y una vez, a propósito de una denuncia nuestra, llegó a hablar en televisión para advertir al público de cómo debían comportarse reglamentariamente los militares. Creía de verdad que ciertos desmanes podían ser producto de elementos infiltrados en las FF.AA.

Con estas aprensiones llegué a Roma el 30 de octubre. El 3 de noviembre me reuní con Pablo VI, en una audiencia que se prolongó durante 70 minutos, bastante más que los 45 usuales. Le conté lo que estaba ocurriendo en el país, pero muy pronto me sorprendió la minuciosidad de la información que él tenía.

Le dije que la situación de la Iglesia era todavía de expectación, y que nos estábamos preocupando ante todo de que se respetaran los derechos de las personas, de los trabajadores y de los más pobres; pero

para que esto fuese eficiente, agregué, era indispensable que nuestras relaciones con el gobierno militar fuesen buenas y que sus dirigentes no nos viesen como adversarios. Pablo VI estuvo de acuerdo, y accedió a que su proyecto de carta no fuese emitido.



El general Oscar Bonilla, ministro del Interior, visita una población periférica de Santiago, a fines de 1973.

Me dijo, en cambio, que era necesario velar para que la Iglesia chilena mantuviera sus grandes orientaciones: la independencia frente al gobierno, cualquiera que éste fuese; la defensa de los derechos humanos de todos, y el apoyo a las conquistas sociales de los trabajadores.

Me he sentido responsable por muchos años de que esta intervención mía diera lugar a las críticas que, especialmente en la prensa europea, se lanzaron sobre aquel gran Papa, acusándolo de silencio y hasta de indiferencia frente a la situación de Chile.

Es muy difícil juzgar, bajo las luces de hoy, las decisiones y las opciones de ayer. El Señor nos pone una y otra vez frente al desafío de descubrir en la historia, en el devenir pasado y presente de los hechos, los signos de su voluntad. No somos infalibles; vivimos bajo el peso de la imperfección, que es a la vez un llamado insistente hacia la perfección. Nos exponemos cada día, ante cada situación, a identificar correctamente o no en esos signos lo que el Señor quiere. Es nuestra conciencia recta, nuestra intimidad solitaria iluminada por el Evangelio, lo único que puede ayudarnos en esta tarea cotidiana.



El Papa Pablo VI recibe al cardenal Silva Henríquez, en noviembre de 1973.

No tengo duda de haber actuado bajo esa norma de conciencia cuando le formulé al Papa esa petición de 1973. Pero también es verdad que no podía prever los injustos efectos causados por un estado de cosas donde la pasión oscurecía la razón. Envueltos por la vorágine de acontecimientos contradictorios, y que conocíamos sólo parcialmente, nosotros creíamos que nuestra opinión podía aportar a la paz de Chile.

Dos años después, cuando sucesivos episodios de tensión y agresividad pusieron a muchos pastores, y en particular a la Iglesia de Santiago, en una situación de virtual acorralamiento, yo mismo realicé una gestión para que la carta fuese conocida. Se lo planteé al propio Pablo VI. Y con esa sabiduría excepcional que siempre tuvo, me dijo, escuetamente: “Esa oportunidad ya pasó”.

No dejaré nunca de admirar la benevolencia del Santo Padre en los dos momentos que tuvo este episodio. En la segunda gestión, en 1975, me dio a entender que los perjudicados seríamos nosotros mismos, los obispos que conocimos la carta, porque evidentemente se nos atribuiría la no publicación oportuna. Además, tendríamos que decir por qué ahora y no antes; y sería inevitable que se viera en esa explicación un uso político, o al menos coyuntural, del mensaje.

Todo esto era cierto. La Providencia quiso que las cosas se dieran de este modo, y tendría razones para ello. Pero ahora, a la vuelta de tantos años, creo que es un acto de justicia que relate cuál fue el verdadero papel de Pablo VI.

Después de aquella entrevista de 1973, salí de Roma y continué mi gira por Bélgica, Holanda, Francia, Alemania y Estados Unidos, con un agotador programa de reuniones y conferencias, tratando de explicar la situación de Chile. En Holanda hasta tuve que soportar una silbatina por decir que a nuestro juicio las intenciones de la Junta eran sanas.

Pero el viaje tampoco fue bien visto en Chile. Al nuevo régimen le pareció inadmisibles que en una conferencia de prensa, dada en la casa salesiana de Roma, yo hubiese dicho que “ofrecí al gobierno de Chile la misma colaboración que la Iglesia había dado, en todas las obras de bien común, al gobierno marxista del señor Allende”.

Aunque esto quería significar que la Iglesia mantenía su independencia y que se equivocaban quienes (como muchos europeos) nos querían ver como una fuerza de resistencia o de lucha, los voceros del gobierno estimaron que la sola comparación con la UP era inaceptable, y una durísima campaña se desató en mí contra a través de los medios de derecha. Era una orquestación tan pasional, que veía cosas inexistentes; decía, por ejemplo, que yo renunciaría como arzobispo, o que sería removido por la Santa Sede. Se publicaban una y otra vez fotos de los actos del 1° de mayo, donde yo salía junto a Allende o a funcionarios de la UP, y se buscaban declaraciones mías, generalmente fuera de contexto, para mostrar mi supuesta concomitancia con el gobierno depuesto.

Dije a *Ercilla* lo que para mí significaban estos ataques: “No son muy variados los sectores que me critican. Los catalogo en dos: en Chile, son personas de extrema derecha. En Europa, son de extrema izquierda. Aquí me tildan de filomarxista; allá de filonacista. Ante estos juicios tan dispares, yo saco una sola conclusión: hay algo en mí y en mi actuación que no satisface a los sectores extremos de la sociedad. Creo que esta actuación coincide con la de Jesucristo, que a su vez fue criticado, juzgado y condenado por los extremos más violentos y radicalizados de la sociedad de entonces”.

A finales de año ya era inocultable que los hechos de violencia no se habían frenado y que la práctica de malos tratos a los detenidos era muy extendida. El general Bonilla admitía en privado que estaba realmente preocupado por lo que venía ocurriendo.

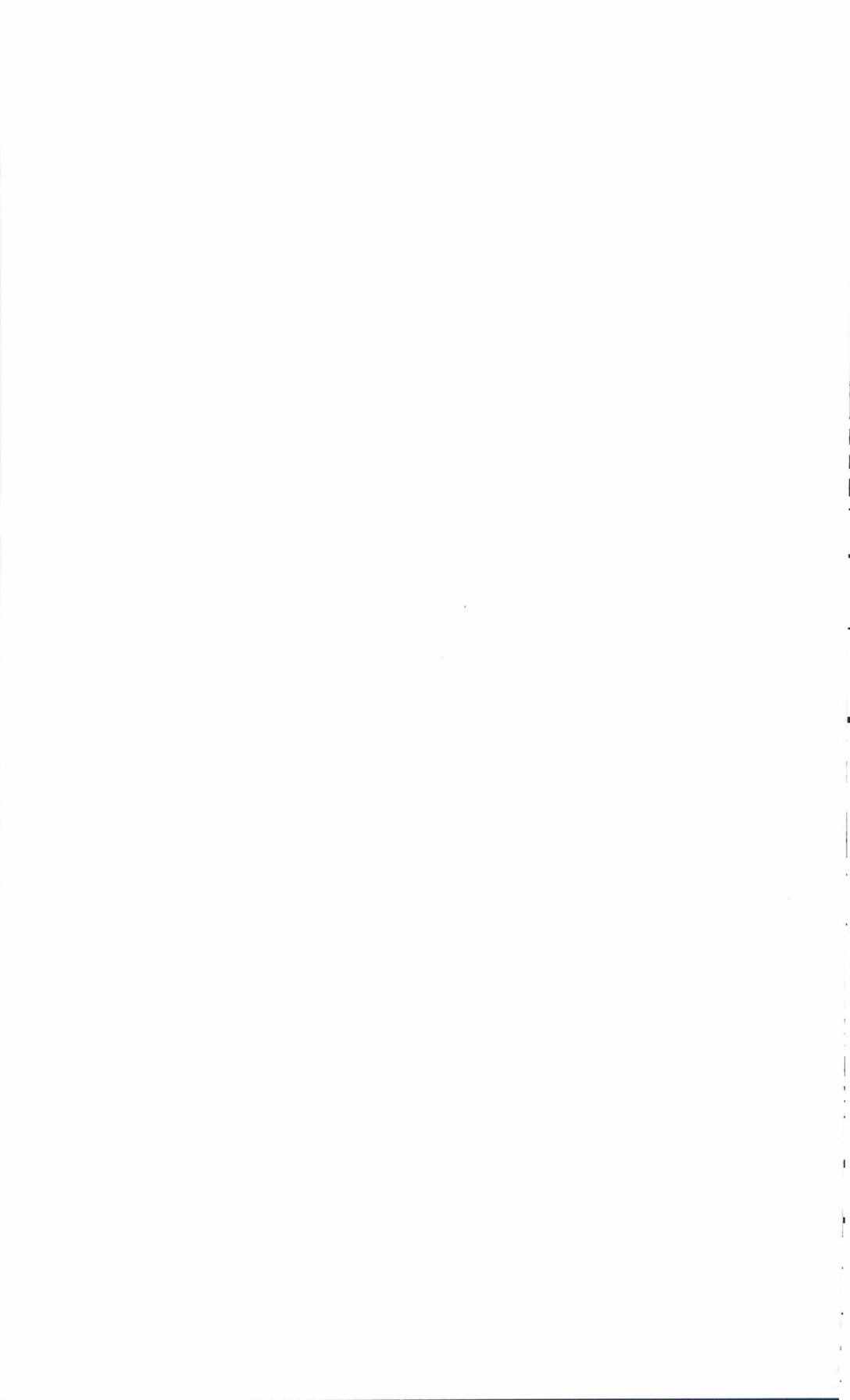
Con estos antecedentes, la Conferencia Episcopal, que se reunió ese mes para analizar el próximo Sínodo de Obispos, decidió que se escribiera una carta privada a la Junta Militar, para hacerle presente estas inquietudes. Nuestra lógica partía del supuesto de que la Junta desconocía lo que estaban haciendo sus subalternos o sus “mandos medios”, según el término que se puso de moda durante la UP. Nuestro mejor servicio sería informarla de estas cosas. Los arzobispos se encargarían de portarla: Francisco de Borja Valenzuela, de Antofagasta; Juan Francisco Fresno, de La Serena; Carlos Oviedo, auxiliar de Concepción, en representación de Manuel Sánchez; además del vicario castrense, Francisco Javier Gillmore, y yo mismo.



El 2 de enero de 1974, una delegación de la Conferencia Episcopal visita a la Junta para entregarle una carta privada. De izquierda a derecha, Francisco de Borja Valenzuela, arzobispo de Antofagasta; Juan Francisco Fresno, arzobispo de La Serena; Francisco Javier Gillmore, vicario castrense; el cardenal Raúl Silva Henríquez, arzobispo de Santiago, y Carlos Oviedo, obispo auxiliar de Concepción.

Guardo recuerdos muy borrosos de aquella entrevista, pero diría que fue un tanto fría, que la Junta no recibió con agrado nuestras observaciones y que se hizo abundante referencia a la “campana” que el comunismo internacional desarrollaba contra el gobierno.

Pero los signos negativos siguieron acumulándose en los primeros meses de 1974. Parecía que la relación de la Iglesia con el gobierno caminaría hacia un inevitable deterioro. En enero, la Junta designó como su nuevo embajador ante la Santa Sede a Héctor Riesle, quien había sido uno de los dirigentes de Fiducia y había suscrito algunas de las peores invectivas de ese grupo contra los pastores chilenos. Ese mes también se creó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), como un departamento del Servicio de Detenidos, pero cuyo poder autónomo y enorme pronto la haría famosa. El estado de guerra, que permitía la instalación de tribunales militares excepcionales, no sólo no se había derogado, sino que se seguía renovando. Los miembros de la Junta comenzaban a hablar de una permanencia prolongada en el poder.



La "ruptura" del 74

Durante los meses de fines de 1973 y comienzos de 1974 conversé más de una vez con el presidente de la Junta Militar de Gobierno, el general Augusto Pinochet, acerca de las cosas negativas que los obispos estábamos conociendo a lo largo de todo el país. La ansiada pacificación no había llegado, el estado de guerra no cesaba, las persecuciones proseguían. Recuerdo perfectamente que en una de esas ocasiones hablamos acerca de las muertes. Le dije que habían aparecido cadáveres en el río Mapocho, gente a la que fusilaban y luego tiraban al agua; que los servicios de inteligencia, actuando con carta blanca, hacían cualquier barbaridad; que la DINA ponía en sus membretes que dependía de la Presidencia de la Junta.

-Esto es muy grave, general -le insistí-. Usted no puede echarse encima la responsabilidad de esto. ¿Qué le va a decir al mundo?

-No, cardenal -me dijo-, esto va a cambiar. No olvide que ha habido una guerra, y por eso ha habido bajas, pero eso va a cambiar. ¿Sabe cuántos son los muertos de la revolución?

Le dije que no. Mencionó una cifra que prefiero no aventurar, porque no la recuerdo con precisión. Y agregó:

-¿Qué revolución hay que cueste tan pocos muertos? Es un número bajísimo para lo que hemos hecho.

Dijo que el estado de guerra se terminaría pronto, aunque no podía asegurar fecha; dado ese paso, cesarían las detenciones y los prisioneros que no fueran sentenciados quedarían libres.

Las conversaciones de aquel período con el general Pinochet fueron siempre muy cordiales. Escuché varias veces su afirmación de que la situación excepcional cesaría, aunque normalmente agregaba que los subversivos se habían ocultado ante la evidencia de que serían derrotados. Decía que si se les dejaba el espacio, volverían a aflorar, tal vez con más fuerza que antes. Yo le insistía en que era necesario contener

los excesos, que se requería de mandos claros; alguna vez le llegué a decir -¡qué consejo!- que no conocía otro caso en el mundo donde gobernarán cuatro, y que me parecía necesario que el mando se concentrara en uno solo...

Pero por debajo de este trato deferente se deslizaba otra realidad, más impersonal, drástica, cargada de dureza.

Ella tuvo su primera expresión pública en el Canal 13 de la Universidad Católica, cuando el rector Jorge Swett acusó al director del canal, el padre Raúl Hasbún, de actuar al margen de sus instrucciones y seguir una línea propia. Le exigió imperativamente despedir a Juan Pablo Román, jefe de personal, y reestructurar el departamento de prensa con la supervisión de Sergio Gaete, decano de Derecho, y Raúl Lecaros, secretario técnico, dos personas identificadas con el sector "gremialista".

Hasbún respondió con una enojada carta, anunciando que no acataría las medidas que estimaba arbitrarias, y acusando al rector de hacer justamente aquello "contra lo cual Chile luchó". "Es la concesión a grupos ávidos de poder", decía. "Es la canonización de la audacia y de la astucia, la premiación de la intriga subterránea, el desembargo del revanchismo, de la desconfianza, del odio".

Previsiblemente, Swett destituyó a Hasbún y asumió personalmente la dirección del Canal. Allí comenzarían a cambiar las cosas. No sólo para mí, que nunca más tuve tribuna en ese medio de comunicación, sino para toda la tarea pastoral y solidaria de la Iglesia chilena, que desapareció de las pantallas hasta muchos años más tarde.

A comienzos de abril recibí la visita del coronel Manuel Contreras, que se identificó como jefe de la recién creada DINA. Quería darme un mensaje: debía cuidarme, porque se temían atentados contra figuras públicas, y yo podía estar entre las víctimas. "Andan muchos locos sueltos", agregó.

Le dije que los "locos" no eran mi problema, y que yo no podía dejar de cumplir mis deberes, por lo cual sólo cabía encomendarme al Señor. Insistió en que deberían ponerme una escolta. A los pocos días me pareció -no sé si habrá sido solamente un mal pensamiento- que la famosa escolta me acompañaba demasiado.

El 13 de abril de 1974 quise hacer públicas mis aprensiones, y dediqué la Homilía de Resurrección a un examen de lo que estaba ocurriendo.

"Hemos dicho que la violencia no genera sino la violencia, y que ése no es el camino de hacer una sociedad más justa y mejor. Hemos

dicho a nuestro pueblo, a nuestras autoridades, que no se puede faltar a los principios del respeto al hombre, que los derechos humanos son sagrados, que nadie puede violarlos. Les hemos dicho, en todos los tonos, esta verdad. No se nos ha oído”.

Agregué cuál era el problema de la Iglesia para la hora histórica: “Vuestro obispo quiere que los dolores de su tierra, de sus hijos, se terminen. No se engaña tampoco creyendo que todo sea dolor, miseria y lágrimas en esta tierra nuestra. Sabe que hay muchos de nosotros, la inmensa mayoría, que no tiene temor, que está en paz. Pero yo tengo que decirles a todos los hombres de esta tierra que hay quienes sufren, para que su corazón sea más fraterno, para que comprendan, para que ayuden a quienes sufren”.

También conté que estaba bajo amenaza y que debía andar con escolta.

Esto produjo cierto revuelo periodístico, que a algunos órganos le sirvió también para no publicar los aspectos de fondo de la homilía. La radio *Balmaceda*, perteneciente al PDC, transmitió dos veces la ceremonia de la Catedral; fue la única en hacerlo. Canal 13 no registró casi nada. En vista de estos desequilibrios, el padre Luis Antonio Díaz llamó a otras radios para analizar una posible retransmisión en conjunto de mis palabras. La *Balmaceda* aceptó la idea, pero recibió la presión de un funcionario de gobierno para que se evitara la retransmisión, o bien se omitieran algunas de mis palabras. La gestión fue un poco ruda; eso hizo posible anularla hablando con otros funcionarios.

Pero dos días después, Alvaro Puga, asesor de la Junta, envió al gerente de la radio, Belisario Velasco, un decreto de clausura por casi una semana, fundado en los comentarios que periodistas del medio habían hecho sobre mi homilía.

La clausura de la *Balmaceda* fue el primer impacto de gran envergadura sobre la libertad de prensa, descontando, por supuesto, el primer y previsible impacto del cierre de los medios de la UP tras el golpe de septiembre anterior. Reveló también cuál era la actitud que algunos sectores del gobierno querían asumir con la Iglesia.

Entretanto, el 16 de abril comenzó en Punta de Tralca la Asamblea Plenaria del Episcopado, cuyo tema central era la planificación del Año Santo local, y su continuación en el Año Santo universal. Estaba decidido que 1974 fuese declarado el año de la reconciliación entre los chilenos.

En la reunión de diciembre se había encargado a un equipo de obispos -José Manuel Santos, Sergio Contreras, Enrique Alvear y Carlos Camus- un trabajo sobre la Iglesia chilena en los últimos años, el que

sería entregado a la Santa Sede y serviría de base para la definición del Año Santo local. El resultado fue un texto magnífico, que el Vaticano apreció y elogió.

Junto con sus felicitaciones, el secretario de Estado del Santo Padre, el cardenal Jean Villot, dirigió también algunas recomendaciones para la Asamblea, al parecer previendo que las discusiones sobre la coyuntura no serían fáciles. Su nota apoyaba la decisión de no hacer declaraciones individuales y pedía mantener con fuerza el espíritu de colegialidad; para la declaración pública, recomendaba una orientación positiva y cautela con el lenguaje; no obstante, nos proponía continuar dando aliento a quienes estuvieran en dificultades. Villot, gran diplomático, seguía en esto la instrucción que el propio Pablo VI había dado a los obispos de Chile: "De ustedes depende la credibilidad de la Iglesia".

Este compromiso tremendo, abrumador, atemorizante -¿quiénes éramos estos pobres hombres a quienes se delegaba tamaña responsabilidad?- pesó sobre cada uno de nosotros durante los seis días de sesiones de la Asamblea.

Fue la declaración que haríamos pública lo que suscitó el debate más extenso y, a ratos, acalorado. A petición de un obispo, el Comité Pro Paz había presentado un informe de unas 60 carillas sobre los casos más importantes de violación a los derechos humanos que conocía; era una desoladora descripción de atropellos, que ponía de manifiesto el amplísimo marco en que se desarrollaba la represión política.

Este informe inclinó la reunión hacia la idea de una declaración muy enérgica, que tuviera el carácter de denuncia y advertencia. En esta discusión, una mayoría de los obispos decidió descartar la posibilidad de una nueva carta privada, con un buen argumento: los destinatarios de nuestra palabra no podían ser sólo los miembros de la Junta, sino todo el pueblo cristiano. Nuestra voz privada sería, para esa inmensa mayoría, simplemente silencio.

Esta posición era sostenida por el sector mayoritario. Pero había otro grupo de obispos, no pequeño, que se oponía completamente a la publicación de un texto crítico. Estos hermanos opinaban que lo fundamental era que los militares habían salvado a Chile del marxismo,

y que debía dárseles el tiempo necesario para pacificar al país; no es que desconocieran los excesos posibles, sino que consideraban que el estado de guerra se agravaría si la Junta no tenía éxito.

Yo había sido reelegido presidente de la Conferencia Episcopal en diciembre del 73; el obispo Carlos Camus me acompañaba como secretario general. En esa calidad, empecé mis esfuerzos para evitar la declaración, o al menos para atenuarla. No compartía la visión optimista del grupo minoritario, pero tampoco creía conveniente romper con el nuevo régimen. Estaba convencido de que, siendo sus integrantes católicos, más temprano que tarde atenderían a la voz de la Iglesia. En el debate se me reprochó duramente la dilación que yo venía haciendo de la declaración desde comienzos del año, y supongo que muchos desconfiaron cuando dije que ciertas informaciones recientes aseguraban que el gobierno terminaría el estado de guerra, por lo cual sería aconsejable posponer el texto. En estas polémicas se consumió el tiempo de la Asamblea, al final de la cual se había redactado ya un borrador. Nos trasladamos entonces a Santiago, para continuar afinando la redacción en la sede del Episcopado.

Por una gestión cuyo origen exacto desconozco, pero que evidentemente constituía un último esfuerzo por apaciguar los ánimos, el nuncio Sótero Sanz nos invitó a un almuerzo al que asistirían los generales Pinochet y Bonilla. Hubo una nueva discusión para decidir si íbamos o no. Recuerdo bien que un obispo dijo que debíamos negarnos, porque “nos quieren poner la pistola al pecho”. Al final primó la disposición de no desairar a don Sótero.

El almuerzo fue sumamente cordial, aunque estuvo precedido por una exhibición de armas que supuestamente habrían confeccionado los prisioneros de la isla Dawson -todos altos funcionarios del gobierno anterior-, para sublevarse contra los militares. Se habló de muchas cosas, e incluso, suavemente, se tocó el tema de los malos tratos a los prisioneros. “Yo he comprobado que no hay tal cosa”, rebatió el general Pinochet. “Tengo un sobrino que era del MAPU, al que tomaron preso; cuando salió, le pregunté si lo habían torturado, y me dijo que no. Así que no hay tortura en Chile”.

Pero en toda la reunión, nadie mencionó siquiera la declaración que ya estaba redactada, y que saldría... ¡en sólo 24 horas!

Esto causó nuevos debates al regresar los obispos a la casa del Episcopado. Yo no estuve presente, pero supe que hubo recriminaciones mutuas por

no haber dicho nada en presencia de los generales. Sin embargo, los obispos sabemos resolver nuestras diferencias y, al menos en mi experiencia, jamás se ha perdido entre nosotros la voluntad fraterna y el respeto recíproco.

De modo que se acordó que el secretario, Camus, fuera a ver esa misma noche al general Bonilla para mostrarle el texto. El general lo recibió de inmediato. Leyó la declaración en silencio, y luego opinó:

-Esto es una puñalada por la espalda.

Pidió que su publicación se pospusiera, al menos hasta que el general Pinochet la viera, y, de ser posible, lo conversara con los obispos. Camus le dijo que por supuesto, que me ubicaría a mí y que iríamos a ver al general Pinochet. Luego se fue a mi casa y, ya cerca de la medianoche, acordamos la cita.

Llegamos poco antes de las 8 de la mañana del 23 de abril de 1974 al edificio Diego Portales. Mientras esperábamos en la antesala, vimos salir del despacho al abogado Jaime Guzmán. Luego nos atendió Pinochet. Fue muy parco:

-Señor cardenal, esto es una puñalada por la espalda.

Se produjo un silencio.

-Pero -siguió-, yo no voy a impedir que la Iglesia hable.

Me pareció que esta frase demostraba la buena voluntad que yo había defendido en nuestra Asamblea. Le dije al general que le agradecía este gesto, y que me comprometía a hacer una introducción cuando presentáramos la declaración, para situarla en el debido contexto.

Evidentemente, esta promesa fue un exceso, porque era algo que no habían aprobado los obispos. Lo hice para asumir una responsabilidad personal, pero también para atemperar el clima de ruptura. Algunos hermanos me reprocharon vivamente esta iniciativa, y no he dejado de encontrarles razón: algún obispo decidió publicar sólo la introducción en su diócesis, al igual que buena parte de los periódicos.

El 24 de abril se hizo la conferencia de prensa. En la ya famosa introducción, dije que tras hablar con el gobierno se nos había dado absoluta libertad para la difusión del texto, y agregué que la situación descrita en éste "resulta incomprensible si no se tiene en cuenta el estado caótico y de enorme exacerbación pasional que existió durante el régimen anterior".

La declaración, titulada *La reconciliación en Chile*, pedía que los chilenos iniciaran el efectivo reencuentro nacional, pero advertía que

éste no sería posible sin el respeto más irrestricto de los derechos humanos.

“Nos preocupa, en primer lugar, un clima de inseguridad y de temor, cuya raíz creemos encontrarla en las delaciones, en los falsos rumores, y en la falta de participación y de información. Nos preocupan también las dimensiones sociales de la situación económica actual, entre las cuales se podría señalar el aumento de la cesantía y los despidos arbitrarios o por razones ideológicas (...). Nos preocupa que se esté estructurando y orientando integralmente el sistema educacional, sin suficiente participación de los padres de familia y de la comunidad escolar (...). Nos preocupa, finalmente, en algunos casos, la falta de resguardos jurídicos eficaces para la seguridad personal, que se traduce en detenciones arbitrarias o excesivamente prolongadas, en que ni los afectados ni sus familiares saben los cargos concretos que las motivan; en interrogatorios con apremios físicos o morales; en limitación de las posibilidades de defensa jurídica; en sentencias desiguales por las mismas causas en distintos lugares; en restricciones para el uso normal del derecho de apelación”.



El obispo Bernardo Cazzaro, el cardenal Raúl Silva Henríquez y el obispo Carlos Camus presentan a la prensa una declaración sobre "la reconciliación en Chile" y el libro del obispo Carlos Oviedo.

En la misma ceremonia presentamos un libro del obispo Carlos Oviedo, donde se recogían todas nuestras intervenciones durante el

período de Allende. “Muchos nos enrostran que mantuvimos silencio en ese período”, dije. “Esta antología es la respuesta a esas afirmaciones”.

La declaración sobre la reconciliación originó, además, la primera acción del comité ejecutivo del Año Santo Chileno, que se había organizado bajo la presidencia del obispo Camus, con el padre Joaquín Alliende y los laicos Jorge Anwandter y Javier Luis Egaña. Ellos habían trabajado en la formulación del lema del Año Santo: *Chile, país de hermanos*. En los folletos para las discusiones de las comunidades, la afirmación se convertía en una pregunta: *Chile, ¿país de hermanos?*



El comité del Año Santo, integrado por el padre Joaquín Alliende, Javier Luis Egaña, el obispo Carlos Camus y Jorge Anwandter.

Esta exitosa fórmula comenzó a aplicarse en el primer folleto impreso por el comité, que fue justamente la declaración de abril. En una de las páginas interiores, pusieron la foto de unas manos asidas de unos barros, ilustrando el problema de los presos. Esta imagen indignó a los militares, que citaron a Javier Luis Egaña para advertirle que los ejemplares se confiscarían. También produjo molestia en los capellanes militares, que pidieron una reunión con el obispo Camus para hacerle ver la “ofensa” que estas sugerencias representaban para las Fuerzas Armadas, y pedirle que no se distribuyera el folleto entre los uniformados.

Todo esto hacía pensar que las garantías del gobierno habían sido dadas a disgusto, y que a pesar de ellas se trataba de impedir que la

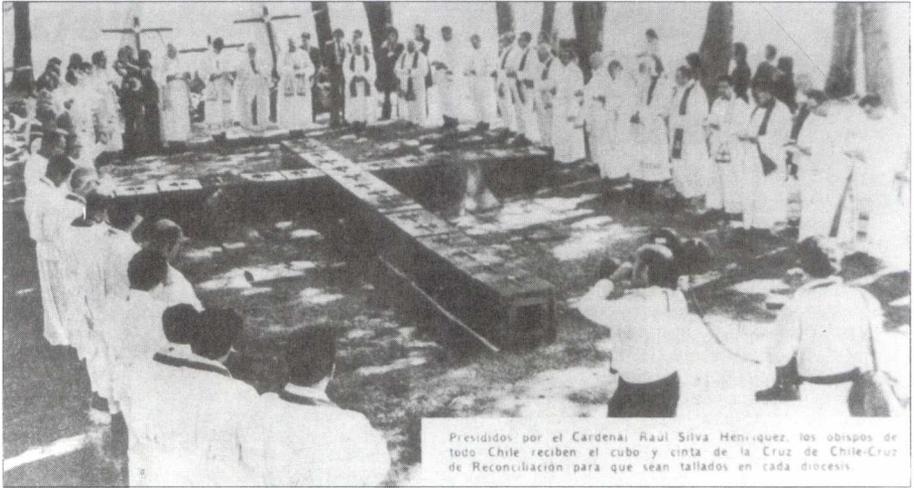
declaración circulara ampliamente. Muchos amigos y ex funcionarios del gobierno me han dicho con posterioridad que a su juicio esta declaración marcó un “punto de quiebre” entre la Iglesia Católica y el gobierno militar. Yo concuerdo con esto, aunque debo agregar que no era ésa nuestra voluntad, y que de hecho no lo veíamos así. Fue pues, en todo caso, un “quiebre” de facto, quizás inevitable: ¿cómo podía la Iglesia resignar su obligación de hablar?



Javier Luis Egaña entrega al cardenal la imagen de la Virgen del Carmen que presidirá el Año Santo Chileno.

Lo cierto es que inmediatamente después de difundida la declaración, la prensa de derecha inició una campaña de ataques que se centró particularmente en mi persona. Primero a través de cartas, y luego en los mismos titulares, se me acusaba de pro-comunista, de encubridor del terrorismo, de partidario de Allende, y muchísimas cosas más que ya no retengo. Algunos impulsaron la iniciativa de conseguir que dimitiera de mi puesto, mientras en el propio gobierno se discutía cómo conseguir que el Papa me sacara de la Arquidiócesis.

La campaña se agravó cuando el diario *Excelsior*, de México, publicó una copia del informe de Pro Paz entregado a los obispos en abril. Algunos diarios calificaron de “traidores” a los sacerdotes de Pro Paz. El general Bonilla, enfurecido, citó a su despacho a mi obispo auxiliar Fernando Ariztía y el padre Fernando Salas, y los hizo declarar, en una conferencia de prensa de la que nada se les había avisado, que no tenían relación con lo que publicó el periódico mexicano, y que el gobierno chileno les daba todas las garantías para desarrollar su trabajo.



Presididos por el Cardenal Raúl Silva Henríquez, los obispos de todo Chile reciben el cubo y cinta de la Cruz de Chile-Cruz de Reconciliación para que sean tallados en cada diócesis.

Los obispos chilenos reciben el cubo que será tallado en cada diócesis para armar la "Cruz de Chile-Cruz de Reconciliación", como parte del Año Santo local.

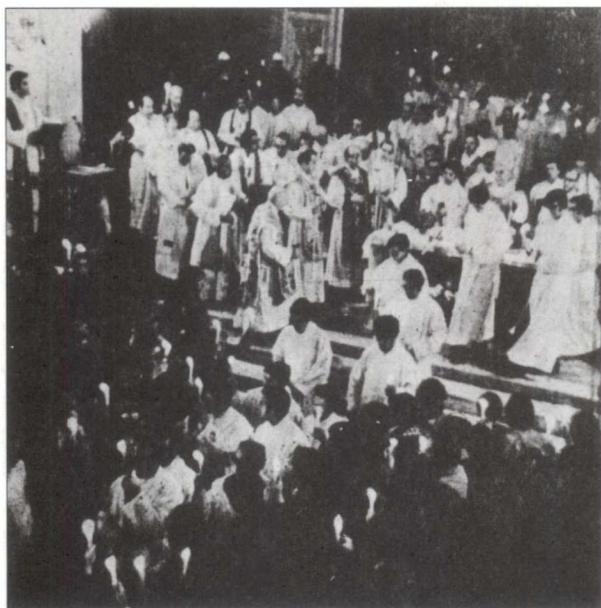
Mientras estas cosas ocurrían, debí hacer un breve viaje a Europa, donde tomaría contacto con las principales fundaciones de ayuda al desarrollo. Para afrontar las nuevas necesidades surgidas después de septiembre de 1973, habíamos estado analizando con asesores y amigos la revitalización de la Fundación para el Desarrollo, de modo que funcionara como un organismo financiero canalizador y asignador de recursos. Tal plan se concretó en el verano del 74, con un directorio que quedó presidido por Raúl Paiva, acompañado, en el nivel ejecutivo, por Santiago Brurón y Enrique Palet. Impulsar esta nueva estructura era uno de los motivos de mi gira.

En mi ausencia, los ataques por la prensa arreciaron. Hasta tal punto, que mis vicarios estimaron que había llegado el momento de cerrar filas alrededor del obispo, y convocaron a un gran acto bajo la consigna *La Iglesia de Santiago recibe a su pastor*. Fue algo emocionante. Miles de personas se congregaron en la Catedral para la Eucaristía que celebraron 300 sacerdotes de la Arquidiócesis.



4 de junio de 1974: el cardenal Silva Henríquez ingresa a la Catedral de Santiago, en el acto "La Iglesia de Santiago recibe a su pastor."

"No pretendemos ser una fuerza de lucha y de resistencia, y quien así lo piense está equivocado", dije en la homilía. "Queremos ser una fuerza constructora, queremos ser el amor que edifica, queremos ser la Iglesia que sirve a todos los hombres de esta tierra".



300 sacerdotes celebran la misa de homenaje al pastor de Santiago, a su regreso a Chile, en junio de 1974.

Pero las injurias no sólo no cesaron, sino que se agudizaron. Comencé a recibir cartas de respaldo de los más diversos lugares del mundo. Cuando el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, el cardenal John Kroll, me envió un telegrama, le remití una copia al general Pinochet, diciéndole que las campañas en contra nuestra “repercuten en el exterior, y es muy difícil que quienes viven en el extranjero no crean que dichas ofensas no cuentan con el aval del Supremo Gobierno”.



El cardenal Silva Henríquez conversa con el cardenal John Kroll, presidente de la Conferencia Episcopal norteamericana.

Sin embargo, el régimen militar comenzaba a entrar en una nueva fase, en la que cada vez importarían menos las opiniones de otras personas.

Recuerdo que en aquellos meses se anunció la destrucción de los registros electorales, señal clara de que no había propósito de realizar nuevas elecciones; el general Pinochet asumió el Poder Ejecutivo en forma exclusiva, bajo el título de Jefe Supremo de la Nación; el general Bonilla salió del Ministerio del Interior, donde fue reemplazado por el general César Benavides, quien no mostraría las mismas preocupaciones; diversos medios de prensa quedaron sometidos a un régimen de censura previa, para ser lentamente asfixiados en los años siguientes.

Fue también cuando la campaña contra Pro Paz, hasta entonces solapada y ocasional, se descargó con toda su fuerza. Bajo evidentes presiones de funcionarios de distinto rango, y también de sus propias

bases, que creyeron los infundios diseminados por la prensa, algunas iglesias evangélicas comenzaron a plantear su retiro de Pro Paz. Varios pastores hablaron conmigo para decirme que su situación era irresistible; otros sencillamente creían que el Comité hacía oposición al gobierno.

El obispo luterano Helmut Frenz se convirtió en un blanco favorito de la hostilidad, hasta el punto de que se publicaron inserciones pidiendo su retiro y hubo una votación de asambleas luteranas en la que se lo quiso destituir. Frenz resistió valientemente a estas presiones, apoyado por la jerarquía de su iglesia.

En agosto recibí un memorando del Jefe Supremo de la Nación, sintetizando algunas de las acusaciones contra el Comité. Creo pertinente transcribirlo:

“a) El Comité de Cooperación Para la Paz en Chile, difundió un aviso en *El Mercurio*, ofreciendo servicios de universitarios para tareas domésticas, dando la dirección de Santa Mónica 2338, cercana a la residencia del sacerdote Salas (...).

“La mayoría de los inscritos son ex estudiantes de las universidades, que no fueron admitidos en sus facultades, debido a problemas políticos.

“b) En la imprenta del Episcopado se han impreso panfletos en contra de las actividades de la Junta(...).

“c) Se ha recibido dinero en dólares de parte de sacerdotes católicos, como pago para sacar en forma clandestina de Chile a exiliados, que mantienen en casas de seguridad.

“d) Se ha evidenciado activa participación de la Iglesia en problemas contingentes, a través del campesinado.

“e) Otra forma de influir en las mentes la han adoptado miembros de la Iglesia y la concretan por medio de conferencias, cursos y encuestas, que se realizan en el Instituto Superior Pastoral de Juventudes, Ipsaj, cuya sede se encuentra en la avenida Salvador 2549(...).

“f) Se tiene información de la creación del Frente Cristiano de Avanzada, quienes están distribuyendo panfletos, los que incluso han estado llegando a las unidades militares.

“Los conceptos y forma de escribir, establecen claramente la influencia sacerdotal.

“g) En Caritas-Chile, ocupa uno de los cargos directivos (vicepresidente) el sacerdote Sergio Correa Gac.

“En sus actuaciones, se ha evidenciado concomitancia con el

obispo Fernando Ariztía (sic) en actividades subversivas, concluyéndose lo siguiente:

“ Sacerdote de ideología comunista.

“ Ha encubierto y ayudado a extremistas prófugos.

“ Da amplia influencia y representación a través de Caritas-Chile a 700 centros de madres, aproximadamente.

“ Se manifiesta abiertamente contrario a los postulados de la Junta, a la que critica fundamentalmente por ‘atropellos a los derechos humanos y poca preocupación por lo social’”.

Respondí con otro extenso memorando. Me parece que la calidad de esas acusaciones se muestra a sí misma, por lo que no vale la pena reproducir los argumentos; salvo para decir que el “dinero en dólares” no lo recibían los sacerdotes, sino quienes tenían que exiliarse, incluidos algunos agentes de inteligencia, y que el sacerdote Correa había sido felicitado poco antes por el propio general Pinochet, por sus sermones, a los cuales asistía.

El 23 de agosto, el obispo Frenz, el rabino Angel Kreiman, el pastor metodista Juan Vásquez y yo, fuimos recibidos en audiencia por el general. Le hicimos entrega de una carta en la que pedíamos el cese del estado de guerra al cumplir un año del pronunciamiento militar, y la concesión de un indulto amplio. Durante la conversación, le anuncié al general que tenía otras cosas que decirle, pero que prefería hacerlo en privado, más adelante.

Días después nos respondió diciendo que la determinación del gobierno “deberá apreciar factores de prudencia y conveniencia nacional que sólo éste puede ponderar”. Añadía que, a su turno, le preocupaba la infiltración marxista en las iglesias, aunque “no consideraría procedente sugerirles medidas concretas en materias que son de su exclusiva incumbencia”.

El 4 de septiembre le dirigí la carta privada que había prometido. Planteaba nuestra preocupación por la tensión que se vivía con Perú, que ponía en el horizonte la posibilidad temible de un conflicto bélico; ante ello, nos causaba dolor que Chile estuviese prácticamente abandonado por los países democráticos, tradicionalmente amigos. Y agregaba una posición: “Estimo, Excelentísimo Señor, sin que mi opinión sea entendida como intromisión (...), que del gobierno militar que tenemos, se puede llegar a establecer un gobierno militar democrático, que dé garantías a

todos los ciudadanos, en que los derechos fundamentales de la persona humana sean siempre respetados, y en que haya tribunales de justicia que apliquen la ley”.

Los años han reducido esta carta a una ingenuidad casi conmovedora. Me asombro yo mismo de haberla escrito. Pero al menos es una prueba irrefutable de las intenciones con que actuábamos.



El conflicto de la Universidad Católica

La Asamblea Plenaria del Episcopado chileno tuvo su segunda reunión del año en septiembre de 1974, en Punta de Tralca, y comenzó bajo la influencia de los roces ocurridos durante los meses previos con el gobierno militar, las crecientes certezas sobre violaciones a los derechos humanos proporcionadas por el Comité Pro Paz, y las campañas de prensa en contra de los pastores católicos.

En parte, los ataques públicos habían arremetido en agosto, cuando se hizo pública la carta que, en conjunto con otras iglesias cristianas y con el rabino judío, enviamos al general Pinochet. Se agudizaron notoriamente a mediados de ese mismo mes, después de que el Comité Permanente, ante las numerosas presiones de lado y lado, emitiera una declaración anunciando que la Iglesia Católica no se sumaría a las celebraciones previstas por el gobierno militar para su primer aniversario, aunque sí haría, como la tradición mandaba, el Te Deum de Fiestas Patria.

El tono francamente injurioso, las acusaciones infundadas, la tergiversación de hechos y palabras, pasaron efectivamente lo tolerable en esos días. Por ello, una de las decisiones de la Asamblea Plenaria fue emitir una declaración protestando por el ataque violento de ciertos medios contra el cardenal, y denunciando “ante la conciencia de todos los chilenos los bajos procedimientos de un periodismo que desprestigia y envilece a nuestra patria”.

De modo que el Te Deum ecuménico del 18 de septiembre de 1974 se realizó en un clima tenso, cargado de amenazas, que llegó ese día hasta las mismas puertas de la Catedral de Santiago, con un enorme despliegue de vigilancia policial y militar.

En la homilía de aquella celebración, propuse buscar los componentes propios del alma chilena, para encontrar en ellos los caminos de la reconciliación y el consenso. Repetí lo que habíamos dicho tantas veces los obispos: el primer rasgo de la historia nacional “es el primado de la libertad por sobre todas las formas de opresión”: “En

Chile no tiene cabida o vigencia ningún proyecto histórico, ningún modelo social que signifique conculcar la libertad personal o la soberanía nacional". En segundo lugar, señalé la permanente primacía del derecho "por sobre todas las formas de anarquía y arbitrariedad", cuyo corolario, la posibilidad de discrepar, singulariza la historia nacional. En tercer lugar, el alma chilena se caracteriza por privilegiar a la fe ante todas las formas de idolatría, material o espiritual; por ello, ha sido siempre un pueblo movilizado, activo, en camino a la trascendencia: "Un pueblo como Chile, nutrido en la fe del Evangelio, no se ha detenido ni puede nunca detenerse. Nada puede interrumpir su marcha, su camino ascendente. Nada: ni siquiera el dolor, el inexpresable sufrimiento de una división, de una profunda herida en el cuerpo social".

Me parecía que este mensaje era bastante claro. La Iglesia debía ofrecer un camino para la reconciliación, pero estableciendo claramente que ésta requería de la restauración de los principales valores nacionales. De otro modo, no sería más que una ilusión autoconvocada -la ilusión de los vencedores-, sostenida sobre bases falsas, que no traería la paz a la nación. El reencuentro sólo podía tener lugar bajo la luz de lo que es esencial, común e irrevocable a los chilenos; fuera de esos valores únicamente se encontraría la división, el rencor, la separación. Ninguna paz artificial, ningún silencio impuesto, podría suplantar una verdad con tanta fuerza histórica, con tanta encarnación colectiva.

Pero no hubo oídos para estas palabras.

Al mes siguiente sobrevino en la Universidad Católica un conflicto que, comenzando de un incidente muy menor, llegaría a convertirse en el peor de los choques con las autoridades impuestas.

En verdad, las tensiones se venían arrastrando desde hacía ya varios meses; prácticamente no había profesor en la Universidad que no las conociera, y todos parecían estar a la espera de que en cualquier momento estallara la crisis.

El almirante (R) Jorge Swett, rector delegado del gobierno, ratificado canónicamente por un decreto mío, había comenzado su gestión marcando muy fuertemente la voluntad oficial de poner fin a los últimos rastros de la reforma, reorientar a la Universidad según los nuevos postulados del régimen militar, e imponer, en todos los niveles, la conducción de un sector ideológico que veía ahora la posibilidad de ejercer el mando sin limitaciones.

Poco después de asumir, en octubre de 1973, el rector Swett había reestructurado el Consejo Superior, eliminando a todos los representantes

docentes, administrativos y estudiantiles, lo cual significaba eliminar también la estructura democrática instaurada seis años antes.

Creó un nuevo Consejo Asesor y un Comité Directivo, en los cuales fueron incorporados principalmente integrantes del movimiento “gremialista”; de los seis profesores que antes participaban en el Consejo Superior, el rector dejó sólo a uno en sus nuevos órganos directivos: el abogado Jaime Guzmán, precisamente fundador y figura principalísima del “gremialismo”.



Almirante (R) Jorge Swett, rector.

Poco después ordenó el cierre de la revista *Debate Universitario*, otra instancia pluralista, y despidió a todos los periodistas que laboraban allí. A ello se sumó el conflicto con el padre Raúl Hasbún en el Canal 13, con lo cual se cerró el círculo en cuanto a los medios de comunicación social de la UC.

Luego vinieron los nombramientos en cargos de relieve. Un ex decano de Derecho fue designado prorector, sin consulta a ninguna instancia de la Iglesia; otro profesor se hizo cargo de la Vicerrectoría Académica, en las mismas condiciones. Estos nombramientos, de primera importancia, hicieron que la presencia “gremialista” adquiriera un dominio sin contrapeso en toda la estructura superior.

No obstante, no era un dominio total: en algunas áreas quedaban todavía militantes de otros partidos, o sencillamente personas cuya orientación terminaría por ser incompatible con los propósitos de la nueva rectoría.

En agosto del 74, el rector, al parecer ante los reclamos de personas del “gremialismo”, inició una serie de críticas al manejo de las contrataciones de la Universidad, proponiendo que, para superar los problemas, se crease una Dirección del Personal. La idea, aparentemente anodina, suponía sin embargo quitar a la Vicerrectoría Económica una atribución que le era propia, y, sobre todo, concentrar en otras manos el enorme poder de decidir sobre académicos y funcionarios.

El vicerrector económico, Jorge Awad, estudió con cuidado las propuestas. A comienzos de septiembre entregó un informe financiero, que mostraba que la situación de la institución era la mejor en muchos años, arrojando incluso excedentes; adjuntaba datos exactos y racionalizados sobre el personal. Sin embargo, el rector Swett, reconociendo la buena situación económica, insistió en que faltaba una mayor fiscalización en los aumentos de personal administrativo -decía que se contrataba a gente de manera inorgánica- y, ahora, además, que el sistema de inventario era deficiente.

Reiterando su decisión de crear una Dirección del Personal tal como él la concebía, planteó varios nombres, ante los cuales Awad expresó sus opiniones con mucha franqueza; ellas significaban de hecho desaconsejar una contratación o nominación rápida. Pero ocurrió que Awad se casó en esos días, y, naturalmente, tomó días de feriado para salir al extranjero en luna de miel. En su lugar quedó Reinaldo Sapag, que lo secundaba en la Vicerrectoría.

A mediados de septiembre, el rector reiteró ante Sapag su decisión de nombrar al director de Personal. Mencionó a su secretario técnico, Raúl Lecaros. Sapag, entonces, le hizo presente sus aprensiones, que apuntaban a la hostilidad con que podía ser recibido por la comunidad universitaria, y a su identificación con un sector político. Conversaron más de una vez sobre esto, pero finalmente, el 26, Swett emitió un decreto creando la Dirección del Personal, y otro designando a Lecaros. Ambos debían contar con la firma del vicerrector subrogante, Sapag, de acuerdo a los reglamentos.

Sapag llevó los decretos a mi casa, donde los analizamos detenidamente. Eran verdaderamente inaceptables: al conferir a un solo funcionario, que sería de la exclusiva confianza del rector, las atribuciones totales sobre la vida del personal, se concentraba definitivamente en unas pocas manos el destino de lo que es el principal activo de toda Universidad: su recurso humano. Además, significaba la cancelación de

los últimos órganos participativos de la UC, que eran justamente todos aquellos que regulaban, a través de consejos integrados por todos los estamentos, las carreras funcionarias.

Consciente de las consecuencias del paso que daría, Sapag regresó a la Universidad para decirle al rector que no firmaría los decretos. Este, entonces, le pidió la renuncia.

Awad retornó a su cargo en esos mismos días. Se reunió con el rector Swett y le hizo ver que la salida de Sapag era del todo inapropiada; le dijo que se lo debía reincorporar y nombrar a Lecaros en otro cargo. Estas proposiciones contaban con mi respaldo, pero Swett insistió en sus puntos de vista. Entonces el vicerrector Awad presentó su dimisión, la que fue aceptada.

El rector Swett diría después que estos hechos “demuestran claramente que existió una divergencia de criterios entre el rector y uno de sus vicerrectores en un aspecto netamente administrativo”. Argumentaba que si bien los vicerrectores debían ser nombrados por el Gran Canciller, el rector podía libremente removerlos, principio que evidentemente anulaba la eficacia de la aprobación previa. Y luego desmontaba su propia afirmación de que se estaba en presencia de un asunto “administrativo”, afirmando que Awad “se mantenía en contacto permanente” conmigo y que era para mí “la persona de máxima confianza”; esto último quería decir que no ignoraba en absoluto la gravedad del conflicto que había suscitado.

Pese a todo, el rector me pidió una audiencia solamente después de que los hechos estaban consumados. Nos reunimos el 22 de octubre; y debo decir que no fue un encuentro agradable en absoluto. Le advertí que haría una petición categórica al gobierno para que la Universidad fuese devuelta a la Iglesia, y que se anunciase claramente la fecha de esto. También le dije que el Papa estaba en conocimiento de los hechos, y que además tendría mi versión de ellos.

La fijación de una fecha para la devolución de la Universidad no era un simple capricho mío. Muchas instituciones europeas que nos ayudaban para desarrollar programas académicos y ampliar la infraestructura venían preguntando, hacía ya meses, cuál era la verdadera situación de la UC: si estaba intervenida, si era un reducto controlado por el régimen militar, si se practicaban en ella los principios de libertad académica. Tenían razones para hacerlo: sus contribuyentes se preguntaban si era justo ayudar a una entidad que no estaba ya con la Iglesia. En carta

posterior a nuestra reunión, advertí también al rector Swett que una institución benefactora alemana podía suspender sus aportes a la UC si el plazo de devolución no se establecía de una vez.

En todo caso, la conversación me reveló que no había en las autoridades de la UC ninguna voluntad de arreglar los problemas, sino una decisión ya tomada de llevar adelante un proyecto propio, excluyente, funcional al gobierno militar y, en definitiva, adverso a lo que la Iglesia había hecho en la Universidad. El rector y sus acompañantes en los cargos superiores estaban empeñados en revertir la reforma universitaria; eran los ejecutores de una vasta “contrarreforma”, que se originaba en los mismos que se habían opuesto a los cambios en 1967, pero que no habían podido constituir mayoría para evitarlos en la década anterior.

Así, esa noche redacté una carta dirigida al rector y a los decanos, que luego se haría pública, tomando una determinación.

“He llegado a la convicción”, decía, “de que en las circunstancias actuales no me es posible ejercer mi cargo de Gran Canciller, ni constituir la elevada autoridad moral que sirve como instancia de apelación para resolver los conflictos que en la Universidad se presentan. Tampoco me parece posible, por el momento, ser el nexo de unión normal entre la Iglesia y la Universidad, y ejercitar en ésta la influencia de la jerarquía católica, que debe hacer de la Universidad la Casa de todos.

“Creo que, para no interferir en la vida de la Universidad ni generar innecesarias tensiones, es mejor deslindar nuestras responsabilidades. He resuelto, por ello, suspender momentáneamente el ejercicio de mi cargo de Gran Canciller”.

Esta comunicación produjo un gran revuelo. Muchos decanos, profesores y alumnos me escribieron para darme su respaldo en una hora difícil, mientras otros lo hicieron también para decirme que apoyaban al rector. Amigos y hermanos de Episcopado me criticaron por lo que consideraron una decisión precipitada; de hecho, hubo quienes opinaron que había “entregado” la Universidad, resignando la posibilidad de enfrentarme a la intervención y forzar una definición.

No quiero poner en duda la validez de esas críticas. Pero diré que la situación no dejaba muchas alternativas. Es cierto que, estatutariamente hablando, el rector dependía de mi aprobación, o mejor dicho de mi confianza, para permanecer en su cargo; así como yo le había dado una precaria legitimidad mediante un decreto, teóricamente podía quitársela

con una expresa y simple declaración de “pérdida de confianza”.

Pero este enfoque jurídico era completamente inoperante, porque nos enfrentábamos a una situación de hecho: además de mi decreto, el rector se respaldaba en un nombramiento como rector-delegado por el gobierno militar; esto significaba que si yo le retiraba mi confianza, existía aún el riesgo de que pudiera permanecer en el cargo por decisión de la autoridad que en efecto había intervenido la Universidad. ¿Y cuál sería la consecuencia? Que, puesto ante un desafío de esa magnitud, el gobierno tomaría el control total de la Universidad y la Iglesia perdería, ya no un cargo, sino todas sus atribuciones.

La otra alternativa, también sugerida en esos días, era la de fingir que el incidente no había ocurrido, o, lo que era parecido, no darle tal nivel de importancia. Pero esto tampoco era posible: muchos episodios menores se habían venido acumulando a lo largo de un año, y con toda probabilidad la autoridad interventora aumentaba el alcance de sus medidas en vista de que no hacíamos nada para frenarla.

Un grupo de profesores que apoyaba al rector me escribió una carta acusándome de haber reaccionado de esta manera por defender a los demócratacristianos (Awad y Sapag lo eran), y afirmando que yo mismo actuaba de modo sectario e interesado; esto no era cierto en absoluto, puesto que el mismo principio se habría violado si la militancia partidaria de los involucrados hubiese sido otra; pero la imputación misma sugiere que este dato era relevante para quienes pensaban como el rector; ellos debían preguntarse, *contrario sensu*, si no se estaría efectivamente persiguiendo a los demócratacristianos por el solo hecho de serlo.

En un extenso documento que distribuyó días después de que mi carta se hiciera pública, el rector Swett afirmó que mis verdaderos propósitos eran los de conseguir la devolución de la Universidad por el gobierno militar, a la Iglesia Católica. En esto no se equivocaba el rector; primero, porque eso era lo único legítimo; y segundo, porque su desempeño mismo me había demostrado que lo que se quería hacer con la Universidad estaba al margen del mandato de la Iglesia. Tiempo después un ministro le dijo a un grupo de obispos que, para el gobierno militar, la Universidad Católica era como las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, pero en el terreno civil; quería decir, en el fondo, que la habían escogido para generar allí el tipo de formación y pensamiento que a ellos les parecía necesario.

Han pasado muchos años desde aquel instante, que ciertamente fue uno de los más ingratos de mi vida. He tenido tiempo suficiente para pensar una y otra vez en ello. Pero, por más que lo analizo, no encuentro que hubiese habido otra manera de encarar la situación.

Sin embargo, las cosas no terminaban allí. La suspensión de mi cargo no equivalía a su anulación, ni tampoco a que la Iglesia dejara de tener una presencia directa en la Universidad. Discutimos con el nuncio y con la Conferencia Episcopal (que tenía, por encargo de la Santa Sede, la tuición última sobre las universidades católicas chilenas), y decidimos que una fórmula viable sería la designación de un Pro Gran Canciller que, ejerciendo similares atribuciones a las del Gran Canciller, mantuviera la presencia de la Iglesia en la alta conducción de la Universidad.



Padre Jorge Medina, Pro Gran Canciller.

Propuse el nombre del padre Jorge Medina, que había sido uno de mis teólogos en el Concilio y posteriormente decano de la Facultad de Teología. El padre Medina tenía una relación estrecha y un conocimiento detallado de la vida de la Universidad; además, era altamente probable que su nombre no fuese objetado por las autoridades militares, al menos por razones políticas.

Así se hizo. El 5 de diciembre del mismo año, la Congregación para la Educación Católica ratificó oficialmente su nombramiento, estableciendo que su desempeño debía atenerse a las normas del Estatuto Básico aprobado en 1971, y que por tanto mantendría la misma relación con la Conferencia Episcopal.

El rector Swett, sin embargo, siguió adelante con sus planes. A poco andar quedó de manifiesto que en el origen de la crisis -la creación de un superpoder para manejar el personal- estaba el propósito de reestructurar selectivamente la Universidad, a través de medidas drásticas.

Entre diciembre de 1974 y enero de 1975, numerosos profesores fueron despedidos o rebajados de categoría, generalmente sin consulta a los decanos respectivos, y a pesar de que un estudio de uno de los centros especializados de la Universidad, dirigido por Alejandro Foxley, había demostrado que ni técnica ni financieramente eran necesarias tales exoneraciones.

La Universidad había podido conseguir incluso créditos con el recién nombrado ministro de Hacienda, Jorge Cauas, pero esta alternativa (que ni siquiera era indispensable) no estaba entre los objetivos de la Rectoría. A comienzos del año 75, el balance era desolador: 152 académicos fueron echados, y a otros 165 se les redujo de tal manera sus jornadas, que prácticamente no tenían razón para quedarse. Una segunda oleada de exoneraciones vino en marzo del 75, con un sesgo político ya del todo indisimulable: se trataba, como diría una autoridad de aquellos días, de una "limpieza" a fondo.

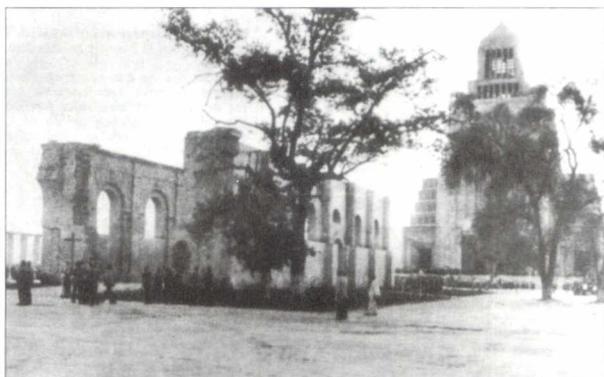
En medio de estas vicisitudes, el 24 de octubre el gobierno hizo entrega a la Iglesia de la obra terminada del Santuario Nacional de Maipú, el edificio más prometido y más postergado de la historia chilena. Para finiquitarlo, el gobierno militar dispuso los fondos en cuanto asumió, y aceleró los trabajos de construcción en su fase final.

Conviene rememorar brevemente la historia de este Templo, porque quizás dice algo acerca de nuestra entidad nacional.

La idea de construirlo se oficializó en la Catedral de Santiago en marzo de 1818, cuando se supo que las tropas realistas de España recibirían refuerzos desde Perú y librarían un combate decisivo contra el Ejército Libertador dirigido por los generales Bernardo O'Higgins y José de San Martín. Ante la inminente lucha que se desarrollaría, seguramente cerca de la capital, autoridades y pueblo de Santiago signaron un voto a la Virgen del Carmen, aliada ya del Ejército que había atravesado Los Andes, prometiendo que se levantaría un Santuario "en el mismo sitio donde se dé la batalla y se obtenga la victoria".

El choque armado se produjo el 5 de abril de 1818, y significó la consolidación definitiva de la Independencia de Chile. O'Higgins, nombrado Director Supremo, asumió personalmente el compromiso

colectivo contraído con la Virgen del Carmen y a fines de año se puso la primera piedra de un templo en el mismo campo donde fueron sepultados los muertos de la batalla. Las dificultades económicas, políticas y sociales paralizaron los trabajos al poco tiempo. Los muros del templo, sin techo, permanecieron desnudos por varios decenios en los terrenos de Maipú, hasta que en 1885, el Presidente Domingo Santa María, advertido de la situación cierto día que pasaba por el lugar, ordenó disponer los fondos y concluir el Templo. Recién diez años más tarde vino a ser instituido como parroquia. En el intertanto, ya había sido el escenario de un segundo encuentro histórico: la marcha de peregrinos de Santiago con la cual se quiso poner fin a las heridas y la división causadas por la Guerra Civil de 1891.



Panorama general de la explanada de Maipú: al frente, los restos del antiguo templo; al fondo, la obra gruesa terminada del Templo Votivo.

El Templo era un bonito esfuerzo, pero no parecía muy coherente con la magnificencia y la solemnidad de la promesa de 1818. Esta evidencia fue ganando consenso en los primeros años del nuevo siglo, y se tradujo en sucesivas peticiones para que se realizara un proyecto nuevo. Todas ellas confluyeron en el Congreso Mariano convocado por el Episcopado en 1942, cuando se realizó una nueva promesa, destinada a “convertir el modesto Templo de Maipú en un grandioso Santuario Votivo de la Patria agradecida a su Celestial Patrona”.

El cardenal José María Caro ordenó el comienzo de los trabajos y en 1944 se dio inicio a la obra. Como era normal en esos años, la construcción fue avanzando lentamente, con equipos pequeños y grandes dificultades técnicas. En 1956 fue concluido el Templo, lo que permitió

trasladar hasta allá, en una solemne ceremonia para la cual el Papa Pío XII envió un hermoso cirio, la imagen de Nuestra Señora del Carmen que los padres de la patria veneraron, y que fue hecha en Quito en 1785.

En los años 60 comenzaron las peregrinaciones sistemáticas al Santuario, cuya construcción seguía avanzando a paso lento, conforme al dificultoso ritmo de los recursos, que nos llegaban con cuentagotas. Cuando el gobierno militar se hizo cargo del país, en 1973, faltaba aproximadamente un 10 por ciento de la obra: ese 10 por ciento constituido por una infinidad de detalles, retoques y terminaciones que siempre incrementa el presupuesto en la fase final. El gobierno tomó contacto con el rector del Santuario, el padre Joaquín Allende, y en diez meses logró terminar la obra.



El general César Mendoza, el almirante José Toribio Merino, el general Augusto Pinochet y el general Gustavo Leigh asisten a la ceremonia de entrega del Templo Votivo de Maipú, en octubre de 1974. Preside el cardenal Silva Henríquez, acompañado (a su derecha) por los obispos Emilio Tagle y Carlos Camus.

Así, el 24 de octubre se hizo la ceremonia de entrega, con una Eucaristía a la que asistieron miles de peregrinos y que contó con la presencia de los miembros de la Junta. La peregrinación repletó la explanada de

Maipú con los símbolos del Año Santo Chileno, cuya apropiada culminación tenía lugar con estos actos.

El 24 de noviembre se realizó la consagración: ¡ 156 años después de la promesa inicial! He dicho que esta historia es reveladora, sobre todo debido a tan increíble plazo; dice mucho acerca de nuestros defectos como nación, de nuestra tendencia a no organizarnos, a esperar, a postergar.

Pero no es sólo esta connotación negativa la que importa. Visto desde otra perspectiva, este caso muestra también la fuerza inmovible que ha tenido la fe cristiana en la historia chilena. Hay que fijarse en esto: la peripecia de un Templo atraviesa casi toda nuestra vida como república.



El cardenal llega al Templo Votivo de Maipú acompañado del nuncio Sótero Sanz de Villalba

De modo que cuando la Iglesia describe y reconoce la presencia de la fe como un rasgo característico de la nación, no hace una metáfora, ni usa un recurso literario: dice una verdad reconocible, que aunque para muchos pudiese estar escondida, se expresa a cada paso en la vida cotidiana. Esta y no otra era nuestra razón para afirmar categóricamente que el reencuentro del país, en cada hora histórica difícil que le tocara, debía partir por reconocer la esencial hermandad, el deber de solidaridad, la exigencia de un alma común, de todos y cada uno de los chilenos.

156 años después de formulada, una promesa católica, y mariana, continuaba viva y activa en el pueblo chileno: la dura prueba de los años, las circunstancias cambiantes y las adversidades no lograron conmovérla en lo más mínimo. Igual (o mejor) que lo hubiera hecho en 1818, a fines de 1974 el pueblo de Chile, sin distinciones sociales, confirmó su compromiso con la Virgen.

Indudablemente, este episodio contribuyó a disminuir las tensiones con el gobierno. Pero la calma duró muy poco. A fines de año, una declaración del Comité Permanente acerca de la Navidad volvió a irritar la sensible epidermis de los funcionarios y de los medios de comunicación controlados. La declaración llamaba, como muchas otras, a recuperar el



El cardenal lee la homilía en la ceremonia de entrega del Templo de Maipú.

verdadero sentido de la Navidad, abandonando los excesos consumistas y la apariencia de feria que se le da en muchos sectores. Recordaba ciertas situaciones concretas: “Para muchos la Navidad este año será triste: no hay plata. Los sueldos no alcanzan. Hay cesantía. Que el que pueda gastar mucho, voluntariamente no lo haga, por respeto a la pobreza ajena y para poder ayudar a los que no tienen. (...) Acordémonos de los que están presos o tienen familiares presos, o fuera del país, o lejos de la casa. De los enfermos y ancianos. De los cesantes y de los que no tienen lo necesario para vivir dignamente. Busquemos soluciones de fondo, pero no olvidemos las situaciones de emergencia...”.

A pesar de la evidente amplitud del llamado, el gobierno estimó que se intentaba pintar un “cuadro negro” de la situación del país. Con esa base se iniciaron de nuevo los ataques públicos a través de diarios y revistas.

1974 se cerró para mí con la sensación triste de que, habiendo pasado situaciones muy duras, tal vez más de lo que esperábamos, nos quedaba todavía un camino muy difícil por recorrer. A pesar de esto, sin embargo, el año había mostrado a una Iglesia de Santiago pujante, activa, dinamizada por las nuevas condiciones como pocas veces antes en su historia, que ganaba rápidamente en credibilidad y prestigio a través de todas las capas sociales.



Los cuatro obispos auxiliares de Santiago, en 1974 : Sergio Valech Aldunate, Fernando Ariztía Ruiz, Jorge Hourton Poisson y Enrique Alvear Urrutia.

Fue el año en que tuvimos también un equipo más amplio para trabajar en todo. El vacío creado por la muerte de Ismael Errázuriz había sido providencialmente llenado por el nombramiento como obispo auxiliar de Sergio Valech, cuya consagración se realizó en octubre de

1973. Valech, un hombre que combina una valentía excepcional con una discreción a toda prueba y una bondad ampliamente reconocida, me ayudaría con todo el complejo mundo del Arzobispado, en una labor semejante a la que venía desarrollando como secretario general, pero revestida ahora de mejor autoridad.

Tenía también a Fernando Ariztía, absorbido ahora por las tareas de Pro Paz y la Vicaría Oeste. A comienzos del 74 supimos, además, que Enrique Alvear, que había pasado por Talca (como obispo auxiliar) y San Felipe (como titular), aceptaría regresar a Santiago. Nos movimos rápidamente para asegurarnos de ello: sabíamos que su aporte a la pastoral sería muy importante. Y, completando el cuadro, por la misma fecha conseguimos que también Jorge Hourton, que había afrontado serios problemas con la autoridad militar como administrador apostólico de Puerto Montt, se viniera igualmente a la capital. Fue la primera vez que Santiago llegó a tener nada menos que cuatro obispos auxiliares.



Cargos ante el Vaticano

La Asamblea Plenaria de abril de 1975, que se realizó nuevamente en Punta de Tralca, definió la elaboración de tres documentos que determinarían la conducta de la Iglesia Católica chilena durante ese año. El primero fue un trabajo de *Orientaciones Pastorales*, que trazó los grandes temas de la evangelización para el futuro inmediato, y constató la presencia de un muy importante fenómeno en pleno desarrollo: el aumento en el aprecio popular por la Iglesia, caracterizado por una nueva percepción de ésta como signo de salvación para todos, y por la idea de que actuaba ahora con más libertad e independencia del poder político y económico.

Del segundo texto sólo alcanzó a definirse la idea temática, que sería desarrollada y elaborada en los meses siguientes: la paz, como fundamento de la justicia, el progreso y el bien individual y social.

El tercer documento fue una nueva carta privada (la segunda desde 1973) dirigida a la Junta, para presentar nuevamente nuestras inquietudes principales. De entre éstas, la primera era, por cierto, en lo jurídico, “pedir el retorno a las prácticas ordinarias que garantizan más plenamente el respeto a los derechos humanos, vale decir, el paso de la justicia militar a la justicia ordinaria”. Anotábamos que este punto era el que causaba más división, más daño a la imagen externa del gobierno y más roces con la Iglesia.

“Otro problema que nos preocupa”, proseguía la carta, “es el de la participación. Las Fuerzas Armadas... se apoyan en la verticalidad del mando. En cambio, el pueblo chileno, desde más de medio siglo, viene luchando por construir sus organismos de base, por iniciativa y con la participación de sus propios militantes, a través de una lucha larga y difícil”. Advertíamos que los dirigentes populares se veían desalentados por la sensación de que no se les escuchaba.

En lo social, "al ver la situación existente en el país, de extrema pobreza para muchos, y de estrechez para casi todos, nos preguntamos si el cambio desde el 'camino hacia el socialismo' al régimen liberal y capitalista no habrá sido demasiado violento o excesivo, y si no hemos caído de un mal en otro mal".

Una última esfera de inquietud era la educación, donde ciertas acentuaciones "nacionalistas" en lo político y "liberales" en lo económico, más "un insuficiente reconocimiento del derecho a discrepar", parecían preocupantes.

Al gobierno le cayó más mal esta carta que la primera, y nos lo hizo saber. Esta circunstancia produjo nuevos debates entre los obispos; algunos opinaban que este esfuerzo de las cartas privadas era inútil, porque de todos modos la Junta se molestaba, mientras que el pueblo cristiano desconocía lo que estábamos haciendo y veía con perplejidad nuestro silencio; otros sostenían que la privacidad de nuestras presentaciones era fundamental para su éxito, aunque trajera molestias, y que en todo caso los obispos no debíamos exponernos a ser instrumentalizados por quienes querían dañar al gobierno.

En verdad, los argumentos sobre la "instrumentalización" atravesaron todo ese tormentoso período de nuestras vidas. Debíamos estar conscientes de que muchos sectores querían aprovechar nuestras palabras para sus propios fines; pero no podíamos inhibirnos de decir lo que era nuestra obligación.

Caso modelo fue el del 1º de mayo de aquel año 1975. Cuando planificamos la Misa de San José Obrero en la Catedral de Santiago, sabíamos que ella podía prestarse para que algunos buscaran allí una forma de expresarse: esperarían encontrar medios de comunicación, el aval de la Iglesia, la confusión de una muchedumbre, la inviolabilidad del templo. Ante este riesgo, ¿debíamos suspender la celebración? Obviamente, no. Teníamos que tomar precauciones, y medidas más severas; pero tampoco podíamos convertir la Catedral en un recinto policial.

Algunas de las cosas previstas efectivamente ocurrieron. Hubo grupos organizados que gritaron consignas, cumpliendo la profecía hecha por alguna prensa en los días anteriores.

Quiero decir que esto era del todo comprensible en una celebración como aquella, en pleno 1975: la organización sindical había sido diezmada, y muchas conquistas sociales históricas habían sido canceladas.

La cesantía y el cierre de fuentes de trabajo iban en aumento, sumiendo en la indefensión a miles de familias.

Pero lo más sorprendente fue que entre el tumulto de unas dos mil personas apareció sin aviso una delegación de las Fuerzas Armadas y de Orden, integrada por cerca de 300 uniformados de las cuatro ramas. El contingente se distribuyó en las cuatro naves de la Catedral, en bloques compactos; para lograr instalarse, debieron desplazar a muchos laicos que se hallaban ya en las bancas, lo que motivó numerosos reclamos e incluso el gesto de protesta de algunos sacerdotes, que se sacaron los paramentos y no quisieron concelebrar ante este hecho. La irrupción obligó al padre Luis Antonio Díaz a invitar “a los miembros de la JOC” a ponerse junto al altar.



El cardenal, acompañado del obispo auxiliar Jorge Hourton, lee la homilía del 1º de mayo de 1975.

Cuando ingresé al templo, el ambiente ya estaba muy caldeado. Por ello hice una inmediata advertencia desde el altar, recordando que este era un acto religioso; ello permitió aplacar los gritos, pero no suavizó la tensión, que se prolongó durante toda la ceremonia. El episodio fue muy historiado, y sirvió a la prensa controlada para reanudar sus ya repetidos ataques contra la Iglesia de Santiago.

Para volver al tema de fondo, ¿quién nos había querido “utilizar” en este caso? ¿Los que se oponían al gobierno? ¿Sus partidarios? ¿Todos? ¿No sería que, estando en medio de un proceso convulsionado, que mantenía dividida a la sociedad entera, la Iglesia debía sufrir lo que otras instituciones?

Al año siguiente, cuando se aproximaba nuevamente el 1º de mayo, envié una carta al ministro del Interior, el general César Benavides, para pedir medidas de seguridad y solicitarle que se evitase la presencia de delegaciones como la de 1975. Esto tenía un solo fin: si podíamos controlar el orden dentro del templo, no debíamos permitir que fuese alterado por lo que mucha gente había considerado una “provocación”.

Creo que mi carta, pese a su franqueza, les pareció mal a los mandos militares, quienes se sintieron ofendidos por la petición. La autoridad respondió con enojo, afirmando que se discriminaba a los uniformados, que eran trabajadores como el resto. A mí me parecía, sin embargo, que extender el concepto de “trabajadores” hasta tal punto no sólo significaba desnaturalizarlo, sino además someter a los propios militares que integrarían estas delegaciones a una situación enojosa e injusta. Las Fuerzas Armadas tenían -y tienen- sus actos litúrgicos propios, y seguramente no tolerarían que los civiles fuesen a desplazarlas en ellos con un argumento cualquiera. En todo caso, con posterioridad pedí las disculpas pertinentes si es que había ofendido a alguien; y diré que me alegro de que al menos el incidente sirvió para que nunca más se repitiera.

Pero las relaciones con el gobierno no lograban remontar la pendiente del deterioro. El hostigamiento a sacerdotes considerados “sospechosos” no cesaba, la molestia con Pro Paz era notoria, y los esfuerzos diplomáticos contra algunos pastores venían subiendo de tono. Los propios obispos no estábamos ya tan unidos como antes; paradójicamente, teníamos más diferencias de juicios acerca del régimen militar que en torno a la UP. Si en los años 60 las incomprensiones habían afectado la relación de obispos con sacerdotes, en los 70 parecía que ellas se trasladarían al colegio de los pastores.

A fines del 74, el gobierno vivió una importante transformación cuando el general Augusto Pinochet, basado en el predominio del Ejército, asumió el título de Presidente de la República, dirimiendo definitivamente el ejercicio del Poder Ejecutivo, mientras sus pares de la Junta asumían el Legislativo.

Esta última tendría también poderes amplísimos, porque las nuevas disposiciones establecieron la preeminencia de los decretos leyes -legislación *ad hoc* - por sobre la Constitución de 1925; de este modo, derechos y deberes ciudadanos pasarían a ser regulados de una manera enteramente nueva.

En mayo de 1975 recibí un oficio del coronel Manuel Contreras, jefe de la DINA, donde me pedía que desmintiera un artículo de la revista *Newsweek*, en el cual un sacerdote anónimo narraba los casos de flagelaciones en la persona de la periodista Gladys Díaz y el secuestro de una niña de tres años, hija de un dirigente del MIR. Ambas cosas eran ciertas, y así lo demostraría el tiempo. En todo caso, el oficio de Contreras me pareció inaudito.

Estaba estudiando cómo responderlo cuando se produjo un hecho que marcaría por muchos años a la Iglesia de Santiago.



Celebración del segundo aniversario del Comité Pro Paz, presidida por el cardenal en la casa de Santa Mónica.

El 15 de mayo, Jaime Zamora Herrera, militante socialista, detenido por la DINA, fue llevado por agentes de ese organismo a las cercanías de las oficinas de Pro Paz, para que reconociera a supuestos contactos de su partido. Un descuido circunstancial de los celadores permitió a Zamora huir y refugiarse en una de las oficinas de Pro Paz. La DINA intentó entrar y, al ver que se trataba de un recinto de Iglesia, retrocedió; pero luego rodeó el lugar y sometió a sus moradores a un cerco de terror.

Para fortuna de todos, ese día estaba allí mi obispo auxiliar Enrique Alvear, al que pronto se sumaron, avisados de la situación, el obispo luterano Helmut Frenz, el abogado José Zalaquett y el padre jesuita Patricio Cariola. Los tres eran piezas claves del Comité Pro Paz: Frenz, desde una posición crecientemente difícil dentro de su propia iglesia, donde era criticado y hostilizado; Zalaquett, como el primer abogado que se había dedicado, de tiempo completo, a defender prisioneros a lo largo de todo el país; y el padre Cariola, como uno de los primeros sacerdotes católicos que había asumido las más complicadas tareas de protección a perseguidos.

Alvear fue quien me avisó que la DINA tenía copado el lugar, y que tal vez se produciría un incidente de violencia si intentaba entrar a las oficinas. Daba la casualidad de que yo estaba en mi casa con varios abogados, estudiando justamente los decretos leyes que daban una entidad jurídica excepcional a la DINA. Tenía claro, por tanto, que la única jerarquía que ese servicio reconocía era la del Presidente de la República; esto significaba, a la inversa, que él podía ser el único responsable de lo que ocurriera.



Un presunto miembro del MIR, armado, resiste a los servicios de seguridad en una calle de la comuna de La Reina, en febrero de 1975. La fotografía fue lograda por la revista "Ercilla". Según su versión, el sujeto cayó muerto minutos después.

Traté de tranquilizar a Alvear y le pedí que empleara sus propios medios para conseguir el levantamiento del cerco. Cuando ello no fuera ya posible, yo trataría de intervenir al máximo nivel. Los esfuerzos de Alvear fracasaron sucesivamente, y así me lo informó poco después. Decidí entonces ubicar al general Pinochet. Era una tarea casi imposible: el general asistía a una cena. Insistí tanto, que finalmente logré que me devolviera el llamado.

-Señor Presidente -le dije-, la DINA ha rodeado el Comité Pro Paz y me dicen que se puede producir un hecho de violencia en contra

de la Iglesia. Una persona se ha asilado en un recinto de Iglesia, y nosotros confiamos en la inviolabilidad que estos recintos han tenido siempre en Chile. Yo le ruego que usted ponga atajo a esta situación.

El general reaccionó con ostensible preocupación. Dijo que si yo se lo pedía, él ordenaría inmediatamente el retiro de la DINA, y que enviaría a dos delegados personales para conocer la situación de este ciudadano que decía ser perseguido. Sucesos posteriores han podido oscurecer estas notables deferencias que me fueron dispensadas; pero yo no he dejado de guardar gratitud por ello.

Cumplió su palabra en cosa de minutos. Alvear me relató cómo de pronto, sin notarse siquiera, todos los agentes de la DINA se habían esfumado del lugar. Unas horas después, ya muy tarde en la noche, llegaron los enviados del general Pinochet; uno de ellos era el propio coronel Contreras.

Pero los sacerdotes a cargo del lugar, actuando con muy buen criterio, se habían llevado al maltrecho Zamora a un refugio más seguro. En la mañana siguiente, el padre Cariola se contactó con mi médico personal, el doctor Alberto Lucchini, y le pidió que examinara a Zamora.

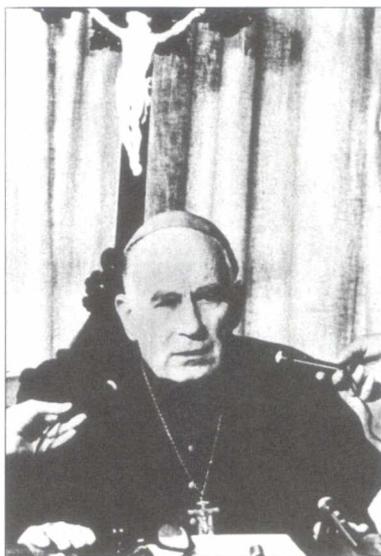
Entretanto, el general Pinochet citó a su despacho al rabino Kreiman, para quejarse por la conducta del Comité Pro Paz y por las gestiones que se habían hecho la noche anterior. Sabía que Zamora había sido llevado a un médico; pero en vista de que este hombre estaba escondido y no podía ser examinado por otros doctores, el general anunció que lo consideraría un caso de "autotortura".

Lucchini realizó un detenido examen del cuerpo de Zamora, que había sido quemado con cigarrillos. Diseñó una silueta y fue anotando todos los lugares donde había señas de flagelación. Cuando vi ese dibujo me dieron ganas de llorar: ¡cómo era posible que en nuestra patria de siempre se cometiera tanta maldad contra el hombre!

Tiempo después el dibujo fue mostrado a otros obispos, con la certificación del doctor Lucchini. Creo que la impresión que tuvieron algunos hermanos resultó imborrable, y en buena medida determinó la energía con que comenzaron a asumir la defensa de los derechos humanos.

Fue con estos antecedentes a la vista que redacté la respuesta al oficio de Contreras. No se la dirigí a él, puesto que no me pareció pertinente; la envié al general Pinochet.

“Creo”, escribí, “en primer lugar, inevitable que un sacerdote católico exteriorice juicios sobre los procedimientos con demasiada frecuencia y evidencia imputados a la DINA. Ellos son, desde luego, conocidos ampliamente en Chile, y en forma particular por los hombres de la Iglesia. Y la calificación moral que merecen no puede ser otra, para una conciencia cristiana y honesta, que el absoluto repudio, en nombre de valores que son ya parte sustantiva y definitiva del patrimonio ético de la humanidad”.



El cardenal presenta ante la prensa la Pastoral de la Solidaridad, en julio de 1975.

“Estimo... que no me corresponde a mí replicar a los artículos que se escriben en contra de la DINA, organismo que -repito- se firma como dependiente de la Presidencia de la República. A ello debo agregar que una intervención de mi parte en el sentido requerido resultaría más mendaz que desmentido; y, consecuentemente, del todo ineficaz. Cualquier intento de justificación basada en hechos inexactos termina en ulterior descrédito de nuestra patria y genera desconfianzas y tensiones todavía mayores”.

Reiteré mi opinión de que la mejor defensa de Chile era el reencuentro sobre los valores que efectivamente nos unen, la libertad y el respeto del derecho.

Sospecho que la DINA se molestó con este asunto. Y parece que otros sectores también, porque los ataques, públicos y privados, arrieron hacia mediados de año.

El más insidioso de todos se urdió justo antes de que yo iniciara un viaje a Roma, y me fue comunicado, en una ingrata conversación, por el nuncio Sótero Sanz. Se trataba de un libelo dirigido a la Santa Sede, en el cual, gruesamente, se me acusaba de “hacer negocios” con bienes de la Iglesia de Santiago.

Fueron momentos tristísimos. Preparé un documento para el nuncio, donde se describía extensamente toda la obra de bien social que realizaba la Iglesia de Santiago a través de sus múltiples instituciones; la sola descripción de estas entidades ocupaba más de 20 carillas.

Bien sabía yo que muchas de estas obras eran criticadas incluso por algunos de los obispos, que consideraban que, al desarrollarlas, la Iglesia asumía la connotación negativa de ser un “centro de poder económico”. Yo no estaba de acuerdo: la experiencia me había demostrado que, para ayudar a los pobres, la Iglesia debía organizarse sin temor a la eficiencia, sin complejos ante las realizaciones materiales. Pero de todos modos, mis anónimos atacantes no usaban los argumentos polémicos de nuestras discusiones, sino que pretendían probar que los recursos que recibía la Iglesia eran empleados con fines políticos, y también personales.

Era una acusación que buscaba crear sospecha. Por eso ponía especial énfasis en una viña que yo había adquirido como parte de la llamada mesa episcopal, que es la parte de libre disposición del pastor, aquella que le permite realizar sus obras y subsistir sin ser una carga para nadie.

En realidad, no desearía hablar de estas cosas, si no fuera porque ello ayuda a comprender la profundidad de la perfidia, y porque de paso puede arrojar algunas luces sobre la modestia de la vida de los sacerdotes chilenos, a menudo ignorada.

Cuando llegué a Santiago, en 1961, la mesa episcopal ni siquiera había sido constituida. El cardenal José María Caro había vivido en una pobreza extrema, lleno de estrecheces, literalmente sin un centavo. El Arzobispado le entregaba para su sustento unos 50 dólares, que fue lo

que siguió dándome a mí cuando me correspondió asumir. Esto era tan obviamente insuficiente, que algunos fieles se acercaban a realizar aportes personales al titular del Arzobispado. En mi caso, yo tenía la suerte de contar con una jubilación como abogado -que el Colegio de la Orden había tenido la bondad de gestionarme- y con mi querida Congregación, cuya generosidad no reconoce límites.

Pero esta situación no podía continuar. De modo que creé la mesa episcopal, a partir de los excedentes de la venta de la antigua casa arzobispal, que el municipio necesitaba para ampliar una calle céntrica, y de donativos entregados a título personal. Estos dineros se invirtieron de diferentes maneras a lo largo de los años, hasta que mis amigos me convencieron de realizar una inversión productiva: la compra de una viña de unas 40 hectáreas, que producía uva de mesa y había comenzado a exportar.

Para la administración le pedí ayuda a un sobrino político, que era ingeniero agrónomo y profesor universitario, y que elevó la productividad del terreno hasta niveles de excepción. Esta circunstancia sirvió para apoyar las críticas en mi contra; y ellas caían en un terreno abonado, porque entre los eclesiásticos hay una desconfianza instintiva hacia el involucramiento de las familias en las cosas administrativas; la tradición del sobrino (*nepote*) metido en las cosas del obispo, y a través de ello también en las del gobierno de la Iglesia, tan clásico de la Antigüedad y el Medioevo, originó precisamente el concepto de nepotismo; y aunque nuestra situación nada tenía que ver con tan viejas e impugnadas tradiciones, esto era lo que se me imputaba.

Viajé a Roma con mis extensos descargos, inquieto y molesto. Hablé primero con mi antiguo amigo el cardenal Sebastiano Baggio, entonces prefecto de la Congregación para los Obispos, quien me advirtió de la molestia de la Santa Sede. Me recibió después el Papa, que parecía esperarme; había conocido con detalles las acusaciones y, con su carácter retraído pero firme, me hizo ver que esto le parecía muy grave, que un pastor jamás podía ser acusado de "negociante".

Fue la audiencia más dolorosa de mi vida. Le entregué al Papa el escrito que había preparado y traté de explicarle parte de él. Contuve malamente mis sentimientos de impotencia; tenía ganas de llorar, y creo que así lo hice más tarde, a solas en mi habitación romana. Tomás González, mi querido amigo salesiano, que había sido nombrado obispo de Punta Arenas el año anterior, fue mi única compañía en esos instantes desolados.

No voy a repetir los argumentos que demostraban que todo no era más que una intriga. Reproduciré, en cambio, parte de la carta que después dirigí al cardenal Baggio:

“Emmo. Señor Cardenal:

“En mi último viaje a Roma, usted tuvo la caridad de indicarme algunas de las críticas que se hacían a mi gestión de pastor de la Iglesia de Santiago y que especialmente incidían en que yo sería un ‘negociante’ y que hacía ‘negocios’ con los bienes de la Iglesia, comprometiéndola a Ella.

“Desgraciadamente estas críticas llegaron a oídos del Santo Padre, el cual, con toda su autoridad, me reconvinó por ser yo un ‘negociante’ que comprometía a la Iglesia de Santiago. Usted puede comprender, Eminencia Reverendísima, que esto ha sido extraordinariamente doloroso para mí, tanto más cuanto creo que es absolutamente falso lo que a V.E. le indican y lo que el Santo Padre ha creído. Por lo mismo, he estimado conveniente enviarle una larga exposición de cuáles son mis actividades económicas y cuáles son los compromisos que como pastor de Santiago yo he contraído. De todo ello, a mi juicio, aparece el que he obtenido grandes ayudas de dinero, que he invertido en beneficio de los pobres, de los necesitados, y de la Iglesia de Santiago; que no hay ningún compromiso económico para esta Iglesia; que yo no he comprometido para nada en gestiones económicas o comerciales el porvenir del Arzobispado; que no tengo un centavo, es decir, que no soy dueño de nada, y que el día en que el Señor o el Santo Padre me llame a dejar esta Iglesia, me iré con las manos vacías como entré a ella (...).

“Cualquiera ampliación que se estime conveniente pedirme, estoy llano de darla. Y si la Santa Sede no está segura de lo que yo digo, desearía que se enviara a un visitador extraordinario en materia económica, para que viniera a inspeccionar las cuentas del Arzobispado de Santiago, su economía, y cuál es la acción del cardenal arzobispo en ella. Quisiera quedar tranquilo en esta materia. Tal vez es orgullo de mi parte, pero he tenido la preocupación de no ser carga al Arzobispado de Santiago, y, como San Pablo, quisiera decirle que con mis manos he contribuido a sustentar a la Iglesia de Santiago y no al revés; y no quiero tampoco que en el futuro se crea que voy a dejar una carga a mis sucesores.

“Hay muchas cosas que se dicen del arzobispo de Santiago. El señor nuncio me ha dicho que soy el hombre más odiado y más discutido

en Chile. Quisiera establecer claramente quiénes son mis adversarios y quiénes son los que me discuten y están en contra mía. Sin embargo, yo espero que la historia hará justicia a cada uno. Por otro lado, creo que la acción de la Iglesia de Chile en este momento como nunca ha estado más cerca de los pobres, y goza de inmensa simpatía del sector mayoritario del país. (...).

“Le quedaría muy agradecido que Su Eminencia Reverendísima hiciera llegar mis descargos, con la prudencia del caso, a Su Santidad el Papa, para que se quede tranquilo sobre la acción que desenvuelve el cardenal arzobispo de Santiago”.

Fecha: 20 de agosto de 1975.

El episodio vino a concluir tres meses más tarde, en noviembre, cuando Pablo VI me recibió y se hizo nueva mención al tema durante la conversación. El Santo Padre había conocido ya todos los informes, y mis descargos, y estaba convencido de que cuanto le decía era la verdad; ahora sabía positivamente que una gran maledicencia se ocultaba tras las imputaciones. Nunca sentí una alegría tan honda como en ese momento; hubiese querido abrazarlo, agradecerle su amistad efusivamente. El Papa debió notarlo, porque sobre la marcha dijo que querría darme una limosna para las obras benéficas de Santiago.

- Por favor, Santo Padre -le dije-, no lo haga. A usted le pide mucha gente, y muchas veces será gente que lo necesite más. Yo tengo quien nos ayude. No lo haga, se lo imploro.

El Papa aceptó mi explicación y nunca más volvimos a hablar del asunto, ni siquiera dos años más tarde, cuando un empleado del Arzobispado intentara fraguar nuevas acusaciones después de que lo separamos de su cargo con fundadas razones.

Así que este esfuerzo de desprestigio había fracasado. Mis detractores más apasionados tendrían que buscar nuevos caminos.

A pesar de todas estas dificultades, el 5 de septiembre de ese año quedó finalmente listo el documento previsto en la Asamblea Plenaria de abril, que se titularía *Evangelio y Paz*. No fue una tarea fácil, entre otras cosas porque sufrió la fuerte interferencia de la situación política, que hizo resurgir las discrepancias dentro del Episcopado.

Aunque el obispo José Manuel Santos había preparado un temario

minucioso para el texto, dos borradores fueron desechados y un tercero comenzó a elaborarse bajo la presión del tiempo y las observaciones recurrentes de algunos hermanos. Todas las sugerencias fueron incorporadas al último trabajo, que debía ser redactado por el Comité Permanente. Pero todavía en la fase final de la tarea, un grupo de obispos continuó realizando planteamientos que obligaban a modificar el escrito. Tuvimos entonces una discusión áspera, en la que mi propia participación fue más brusca de lo que hubiese querido.

Todo esto determinó que *Evangelio y Paz* no tuviera el carácter de una carta pastoral, sino el de un documento de trabajo, cuyo rango doctrinario es ligeramente inferior, pues implica una invitación a continuar desarrollándolo.

A pesar de ello, creo que el valor de *Evangelio y Paz* es permanente y ha tenido una vigencia creciente a lo largo de los años. Su sólida demostración de que la violencia no sólo no es cristiana, sino que en nada contribuye a construir en la sociedad, ha sido confirmada por muchos acontecimientos dolorosos.

Al plantear las condiciones para la paz, el documento estableció también la sacralidad de los derechos individuales y sociales, todos los cuales han constituido el fermento del inmenso prestigio que la Iglesia ha tenido en estos años, así como los cimientos de la visión profética que la ha estado animando.

Notablemente, además, identificaba como obstáculos para la paz a las ideologías excluyentes, que cierran los caminos a la libertad, a la participación y a la integración de todos en la obra común de la patria.

En muchos sentidos, *Evangelio y Paz* se adelantó a prevenir sobre los peligros que podían acecharnos como nación. Pero, una vez más, fue recibido por interpretaciones simplificadoras, que querían descubrir en él la pasión política oculta.

Yo sentía a veces que estas tremendas reducciones que se realizaban sobre nuestro pensamiento podían oscurecerlo o deformarlo en su llegada a la grey. Sin embargo, nunca alcancé a desalentarme; una y otra vez presencié cómo los cristianos verdaderos, los que se sentían en comunión con su Iglesia, oían nuestra palabra con atención y respeto, y, aunque pudiesen estar puntualmente en desacuerdo, terminaban por aceptarla como expresión de una auténtica reflexión pastoral.



El cardenal Silva Henríquez lee su homilía acerca de la inutilidad del odio en el Te Deum del 18 de septiembre de 1975.

Dediqué el Te Deum del 18 de septiembre a subrayar la necesidad de construir un orden social justo. No era un tema elegido al azar: la política económica, impuesta con una convicción que parecía indoblegable, se había transformado en la fuente de desesperación para muchos. Nuestro llamado debía mostrar lo imperioso de estas necesidades.



El cardenal y el obispo auxiliar Sergio Valech presiden el Te Deum del 18 de septiembre de 1975 en la Catedral Metropolitana.

“La impaciencia del amor cristiano no tolera... que nuestras energías y talentos se inviertan en otra cosa que en construir. No tenemos tiempo. No tenemos, tampoco, el derecho de seguir mirando hacia atrás

sólo para reactivar rencores y resucitar agravios. Para aprender lecciones, sí; ¡pero la gran lección que nos deja el pasado es precisamente la de la absoluta inutilidad del odio! ¿Cómo nos juzgará la historia si, teniendo por delante la providencial tarea de satisfacer el hambre y la sed de justicia de un pueblo, lo condenamos a la frustración por ocuparnos en estériles querellas de supremacía?

“El Maestro ya nos ha respondido. Le hemos preguntado cómo debe construirse un nuevo orden social. Y El nos ha dicho: el amor. El amor es el único camino, el único cimiento de la patria que soñamos”.



La guerra contra Pro Paz

La ofensiva final contra el Comité de Cooperación Para la Paz la inició el régimen militar en el segundo semestre de 1975, cuando, por distintos caminos, ya había conseguido debilitar el carácter ecuménico que tuvo en su fundación, y afianzar suficientes dudas acerca de sus propósitos. Pro Paz, a su vez, tenía pocas formas de defenderse, porque su vinculación con las iglesias era demasiado frágil y se erosionaba gravemente con cada nueva deserción.

Las críticas más notorias se habían concentrado en la Iglesia luterana y su obispo Helmut Frenz. A pesar de que Frenz había sido nombrado en la posición máxima de esa Iglesia en Chile por decisión de las propias asambleas de fieles, éstas comenzaron a mostrar inquietud ya durante 1974. Persistentes intentos por lograr que la Iglesia luterana se retirase de Pro Paz, y luego por sacar a Frenz de su conducción, se realizaron a lo largo de todo ese año. Esto se agudizó cada vez que alguna de las iglesias evangélicas se alejó también de Pro Paz, y cuando hubo rumores de que la comunidad judía haría lo mismo.

La verdad es que el gobierno contaba con la simpatía sincera de muchos fieles de las iglesias participantes, quienes estimaban que no había que proteger a sus "enemigos". Se ha dicho que algunas iglesias evangélicas recibieron insinuaciones que podían amenazar su estatuto jurídico, que era de derecho privado y podía ser cancelado por el gobierno. Pero entre los evangélicos con mayor raigambre popular, influyeron más cierto enfoque teológico -ellos estiman que toda autoridad viene de Dios, sin matices-, y un tratamiento de privilegios que creó en algunos de sus dirigentes la sensación de que por fin podrían tener un lugar semejante al de la Iglesia Católica en el país. De hecho, al poco tiempo de salir de Pro Paz se les dio una concesión radial y comenzaron las ceremonias "oficiales" que nunca antes habían tenido especial sonoridad. Con los ortodoxos pasaron cosas más duras; el pastor José Elías dejó de asistir repentinamente a las sesiones de directorio, lo

sustituyó un representante, y éste lanzó graves acusaciones públicas sobre las finanzas del Comité.

En cuanto a los judíos, los mensajes persuasivos se dirigieron a sus bases, formadas por hombres que, habiendo sufrido tantas veces la persecución, no deseaban ser hostilizados en Chile. Pero, por supuesto, aquí era igualmente poderosa la corriente de los que honestamente pensaban que Pro Paz era hostil al gobierno, lo cual fue dejando en una creciente soledad al rabino; y hay que decir que Angel Kreiman la afrontó con una valentía admirable.



El rabino judío Angel Kreiman con el cardenal Silva Henríquez, durante una cena de la Federación Sionista.

Sin embargo, también los católicos habíamos sentido el efecto desgastador de un trabajo realizado en tan duras condiciones. En septiembre de 1974, el provincial jesuita, Juan Ochagavía, me planteó la necesidad de reemplazar al padre Fernando Salas en la secretaría ejecutiva, puesto que ya había cumplido un año, por lo demás muy agobiante. Salas, un hombre excelente, había tenido el buen cuidado de prevenir al provincial de que, si sentía que su sacerdocio podía verse comprometido por su trabajo en esta entidad, preferiría ser relevado.

Busqué entonces al candidato para el puesto; pero no busqué demasiado: ahí estaba Cristián Precht, un sacerdote al que yo conocía desde que inició su formación, y en el cual había depositado ya varias misiones de confianza, siempre con éxito.



El cardenal preside la despedida de Santiago del obispo Fernando Ariztía, nombrado administrador apostólico de Copiapó, en marzo de 1975.

Cristián asumió la secretaría ejecutiva de Pro Paz con la lealtad y la entrega que yo le conocía bien. Pero meses después de que él se hizo cargo, una segunda ausencia vino a deteriorar nuestra posición: fue el traslado del obispo auxiliar Fernando Ariztía, co-presidente de Pro Paz, como administrador apostólico de Copiapó. En este caso se trató también de un perjuicio involuntario, porque Ariztía había conversado mucho antes con el nuncio Sótero Sanz acerca de su eventual traslado.

En septiembre del 75 la DINA detuvo a varios pastores evangélicos y funcionarios laicos que trabajaban con Pro Paz, incluida una secretaria luterana que colaboraba directamente con el obispo Frenz.

En este clima de enervamiento, el 30 de septiembre el secretario del Comité Permanente, obispo Carlos Camus, tuvo un almuerzo con corresponsales extranjeros, cuya condición era el respeto al *off the record*. De entre las cosas que el gobierno quería aprovechar de este diálogo, una de las principales era el reconocimiento de Camus a que en Pro Paz trabajaban personas de izquierda, probablemente marxistas, explicando que otros grupos políticos no habían querido comprometer a su gente en la protección a los perseguidos.

Uno de los periodistas que asistió al almuerzo entregó una versión sobre la conversación *off the record*, que se publicó en la prensa

con caracteres de escándalo y a lo largo de varios días. Este hombre no se conformó con violar todos los códigos de ética conocidos, al revelar una charla privada, sino que además la rodeó de imprecisiones e inventos. Cuando los obispos escuchamos la grabación, descubrimos con asombro que mucho de lo que se ponía en boca de Camus jamás había sido dicho.

Evidentemente, el obispo había sido víctima de una celada. Ni el escándalo ni las imputaciones se justificaban si no se buscaba socavar la tarea de la Iglesia en el ámbito de los derechos humanos. A través de la explotación sensacionalista de palabras dichas con honradez (al menos, las que efectivamente se dijeron), se nos quería acusar de actuar indebidamente; se nos quería acusar de intrusos.

En medio de este revuelo motivado por el primer impacto, antes de que el incidente se investigara, y usando la circunstancia de que Helmut Frenz había iniciado un viaje por Europa, el gobierno decidió prohibir el regreso del obispo luterano, acusándolo de “realizar actividades antinacionales y comprometer gravemente la seguridad y tranquilidad públicas”.



El obispo luterano Helmut Frenz recibe una medalla por su labor en Chile, de manos del príncipe Aga Khan, Alto Comisionado de la ONU para los refugiados, en 1975.

La expulsión de Frenz produjo una inmediata reacción en todo el mundo. El Consejo Mundial de Iglesias, a quien el obispo luterano representaba de manera muy directa, se movilizó para levantar protestas a través de toda Europa, mientras las conferencias episcopales católicas de ese continente y Norteamérica enviaban cartas a obispos y autoridades chilenas pidiendo levantar la medida.

La conmoción no se disipaba todavía cuando otra noticia tremenda vino a sacudirnos desde Italia. En una calle del centro de Roma, un terrorista desconocido había disparado contra Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno, dos católicos de primera línea, que habían estado cerca de la Iglesia a lo largo de toda su vida. El atentado contra el matrimonio era el segundo que sufrían chilenos connotados en el extranjero. Un año antes, en Buenos Aires, el general Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército, y su esposa, habían sido bárbaramente asesinados por una bomba. Parecía inconcebible que compatriotas de tanto relieve fuesen atacados en lugares tan distantes del planeta, con métodos brutales. Parecía inconcebible que nuestra pobre patria se hubiese convertido en noticia de sangre.



El secretario del Comité Permanente del Episcopado, obispo Carlos Camus, acompañado del cardenal, en octubre de 1975.

El Comité Permanente se reunió el 10 de octubre de 1975, para examinar los casos de la conversación *off the record* del obispo Camus y la expulsión de Frenz. Con la integridad que siempre ha tenido, Camus había puesto su cargo a disposición del Episcopado, tal vez notando cierto escepticismo en algunos obispos. Cuando me lo planteó, le dije: “Hazlo, de todas maneras. Nos servirá para decidir en conciencia”.

Así fue. Constatamos en la reunión la falacia de muchas de las imputaciones que se le hacían, afirmamos que los contenidos centrales de lo que dijo eran los mismos de *Evangelio y Paz*, y le ratificamos nuestra

confianza hasta la siguiente Asamblea Plenaria, que se realizaría en diciembre.

En cuanto al caso de Frenz, reiteramos nuestro pleno respaldo a Pro Paz y aseguramos una vez más que su acción no era política en ningún sentido. Hicimos presente que habíamos recibido numerosas cartas del exterior, y pedimos que Frenz fuese autorizado para reingresar.



Entrada de la parcela de Malloco donde se había refugiado la plana mayor del MIR, en octubre de 1975.

Pero, por nuestras gestiones privadas, sabíamos que tal cosa sería muy difícil: en el gobierno había una clara decisión, no tanto de perjudicar a Frenz, sino de desarticular a Pro Paz.

Proseguimos esas gestiones, pese a todo, durante octubre. Pero a mediados de mes -justo el 15- se produjo un nuevo jalón en la escalada de tensiones.

En la noche de ese día, las patrullas de la DINA dieron con el refugio donde se ocultaba la plana mayor del MIR, reorganizada tras la muerte de su líder, Miguel Enríquez. Este escondite estaba en una parcela de Malloco, donde se alojaban Andrés Pascal y su pareja, Nelson Gutiérrez y la suya, y otros dos altos dirigentes de ese grupo de ultraizquierda. Hubo un tiroteo, donde murió uno de los miristas, y los otros cinco lograron iniciar una desesperada huida por la periferia de Santiago.

Dispersándose durante la noche, todos llegaron a distintas parroquias y casas de sacerdotes, seguramente sabiendo que nadie más los querría ayudar. Digo esto para que se advierta este hecho notable: en Chile, hombres que jamás habían querido a la Iglesia, que quizás la hubiesen perseguido de haber tenido el poder, enfrentados al peligro de la muerte, no encontraban más refugio de confianza que Ella. Se me dijo muchas veces que esto era ingenuidad, que confundíamos la caridad con la tontería, que los terroristas no nos perdonarían ni a nosotros; e invariablemente respondí que un sacerdote ante un hombre acorralado, perseguido, herido, no está frente al terrorismo, que es algo abstracto, sino frente a un dolor humano, un dolor que debemos salvar, porque para eso nos instituyó Cristo en la tierra.

A la mañana siguiente, Cristián Precht fue informado de la difícil situación. Y él, consciente de que por primera vez Pro Paz asumía un desafío directo en contra de la DINA al refugiar a personas fugitivas, fue a contármelo. Aunque le previne acerca de la peligrosidad de estas acciones, y de la necesidad de ser muy prudente en cada paso, íntimamente compartí la convicción que movía a todos estos sacerdotes: esos fugitivos, de ser capturados, se enfrentaban a una muerte segura. Siendo así, se podía tener mucho miedo, pero ninguna duda: el mandato del Evangelio es inequívoco.

Lo que pasó en la semana siguiente fue una casi inverosímil carrera contra el tiempo y la muerte. Uno de los fugitivos fue llevado por el padre Gerardo Whelan, norteamericano nacionalizado chileno, miembro de Holy Cross, a su propia casa, después de permanecer en las de los padres Rafael Maroto y Fermín Donoso, en Lo Barnechea.

Otro, Nelson Gutiérrez, estaba malherido en una pierna y junto a su pareja fue trasladado a un convento por el padre Patricio Cariola, con el apoyo del obispo auxiliar Enrique Alvear. También llegó allí la joven que acompañaba a Andrés Pascal, mientras éste se iba a otro lugar, bajo la protección de otro grupo de sacerdotes.

En los días posteriores, el padre Fernando Salas consiguió que una doctora británica que vivía en la casa de unos jóvenes que iban a postular a la Compañía de Jesús, Sheila Cassidy, fuese a atender a Gutiérrez. La doctora concluyó que si no era atendido adecuadamente, la infección de la herida cundiría; por tanto, necesitaban asilarlo.

Narro estas peripecias, y doy los nombres de los sacerdotes, porque los sucesos que ocurrieron después convertirían a esta historia en

un momento excepcional para la Iglesia. El padre Cariola consiguió que Gutiérrez, que se aferraba a sus armas, las entregara. Mientras el padre Salas se ocupaba de arrojarlas en puntos diversos de Santiago, Cariola comenzó a buscar asilo diplomático para sus prófugos.

Fue a verme cuando ya había golpeado sin éxito muchas puertas. Me dijo que hablaría con el nuncio. Le dije que bueno, pero que tuviese muchísimo cuidado.

Para entonces, sin embargo, la DINA ya estaba sobre pistas seguras. En la noche del 2 de noviembre, sus patrullas ubicaron al quinto prófugo en la casa del padre Whelan, a quien también arrestaron; después caerían sobre Maroto y Donoso.

Simultáneamente rodearon la casa de los Padres Columbanos, cerca del centro de Santiago. Y, al parecer suponiendo que encontrarían resistencia, comenzaron a disparar hacia el interior. La empleada de la casa fue alcanzada de muerte. En el interior, la DINA halló a quien buscaba, la doctora Cassidy; la detuvo y la sometió a una sesión de torturas en la que ella narró todo lo que sabía.

Al día siguiente me llamó el ministro del Interior, el general César Benavides, para informarme de lo que estaba ocurriendo, que a su modo de ver comprometía gravemente a la Iglesia. Quería que nos reuniéramos para analizar el caso. Concurrí a su despacho con el obispo Sergio Valech. Tras una conversación que a mí me pareció bastante confusa, acordamos que, por el bien de los sacerdotes comprometidos y del esclarecimiento de los hechos, guardaríamos reserva y se realizarían gestiones conjuntas para investigar. Valech se haría cargo de eso por nuestra parte; por la suya, el ministro mencionó al coronel Contreras.

Pero ese mismo día, 4 de noviembre, informaciones sobre el baleo en la casa de los Padres Columbanos fueron publicadas en la prensa. A su turno, el padre José Kuhl, que era corresponsal de algunos periódicos alemanes, envió un despacho sobre el tema. Ciertas personas del gobierno quisieron aprovechar esto; el coronel Contreras llamó al obispo Valech para notificarle que quedaban canceladas las gestiones conjuntas de indagación.

De inmediato comenzaron a divulgarse versiones oficiales y oficiosas sobre lo sucedido. De entre ellas, la más inverosímil sostenía que en la casa de los Padres Columbanos había habido intercambio de balazos, y que un disparo desde dentro había herido a un agente de la DINA. Para probar esa afirmación, mostraban... ¡la foto de un brazo herido!



Grupos de manifestantes protestan en las calles céntricas contra Pro Paz, poco después del episodio de los Padres Columbanos, en noviembre de 1975.

Tres noches más tarde, a pesar de ser buscado por la DINA, el padre Cariola subió al herido Gutiérrez a la maleta de un auto y entró con él a la Nunciatura. Poco después se las arregló para que el embajador de Costa Rica albergara a Pascal. El padre Salas, que había salido de Santiago para evitar más problemas, regresó en los mismos días. Ambos estuvieron en mi casa mientras la prensa proclamaba que eran fugitivos. En verdad, se decía que lo eran, pero en las numerosas averiguaciones que realizamos, nunca pudimos encontrar orden de detención alguna. De modo que al menos hasta ese momento, más clandestina era la policía que los buscaba y más ilegal el arresto al que los querían someter, que todo lo que los padres hubiesen realizado.

En medio de tan difíciles momentos, logré tener una conversación con el general Pinochet. No perdió su gentileza habitual, pero fue un diálogo bastante áspero.

Basado en los acontecimientos de los días pasados, y en antecedentes que decía tener acerca de las actividades de algunos clérigos, quería pedirme que disolviera el Comité Pro Paz, porque si no, el gobierno se vería obligado a hacerlo por la fuerza. Sus informaciones, según dijo, probaban fehacientemente que en Pro Paz había una estructura organizada para atacar al gobierno y defender a los terroristas, como lo mostraban los lamentables episodios de Malloco y los Padres Columbanos.

Me di cuenta de que no había más espacio para continuar con el Comité. El gobierno disponía de los medios para cerrarlo, y había creado el clima público para que ello se considerara lógico. Pero yo no podía asumir esa responsabilidad haciendo como si la presión no existiera; le dije al general Pinochet que me lo pidiera por escrito.

El general aceptó. Entonces le advertí que de todos modos la Iglesia no abandonaría su deber de cautelar los derechos humanos. Esta observación no le gustó, e hizo un duro comentario.

-Mire, Presidente -le dije-, podemos cerrar Pro Paz, pero no podemos renunciar a nuestro deber. Si usted quiere impedirlo, tendrá que ir a buscar a la gente a mi casa, porque los meteré debajo de mi cama si es necesario.

El 11 de noviembre recibí su carta. Era muy cuidadosa. Decía que le preocupaba cierta campaña destinada a crear la impresión de que existían diferencias entre la Iglesia y el gobierno, la cual era impulsada por terceros, "en concomitancia con declarados enemigos de la patria".

"De lo anterior y tras un sereno análisis de los acontecimientos públicos y de sus proyecciones tanto en el interior como en el exterior del país, nos lleva a buscar las raíces de algunos de los acontecimientos, encontrándolas en el Comité Pro Paz", agregaba.

"Por ello hemos considerado que el mencionado organismo es un medio del cual se valen los marxistas-leninistas para crear problemas que alteran la tranquilidad ciudadana y la necesaria quietud, cuya mantención es mi deber principal de gobernante.

"Será pues, un positivo paso para evitar males mayores, el disolver el mencionado Comité.

"Frente a esta situación, Eminencia, e invocando su buena comprensión, es que estimo de toda conveniencia se adopten las medidas pertinentes a fin de que este organismo llegue a su término".

Entretanto, las detenciones de sacerdotes y laicos que trabajaban con la Iglesia se habían multiplicado en diversos puntos del país. Unas religiosas norteamericanas habían sido expulsadas, mientras que en algunos templos se habían producido incidentes claramente organizados en contra de los párrocos. La prensa agudizaba su campaña contra Pro Paz.



Religiosas norteamericanas acusadas por el gobierno abandonan forzosamente el país, en noviembre de 1975.

El 14 le respondí al general Pinochet. Escribí que no concordaba en absoluto con sus apreciaciones sobre Pro Paz, y que consideraba nobles y sinceros sus empeños por el país. Advertí que la medida de disolución “acarreará con toda probabilidad... daños sensiblemente mayores que los que pretende evitar”.

En vista de que en su carta el general había evitado aludir a la disolución del Comité como una exigencia, a pesar de que de eso se trataba, quise dejar constancia de esta situación en mi propia carta. Las iglesias que concurrieron a la creación de Pro Paz, anoté, “hemos acordado aceptar esta exigencia del Supremo Gobierno, con la expresa reserva de que la labor caritativa y religiosa desplegada hasta ahora por el Comité, en favor de quienes sufren diversas formas de pobreza, continuará desarrollándose dentro de nuestras propias y respectivas organizaciones eclesiales, y siempre en un marco de fraterna colaboración ecuménica”.

Agregué algo que quizás se prestó para ciertas desconfianzas: que los trámites de disolución del Comité tomarían algún tiempo.

Al día siguiente, horas antes de partir al Vaticano, supe que finalmente un fiscal militar había dictado orden de detención contra los padres Salas y Cariola. Siendo así, se presentaron ante él, que los interrogó. Cariola se negó a decir nada, y Salas explicó que no podía comprometer a otras personas.

Fueron encarados reos y conducidos a la cárcel. Después de unos días los sacaron de la incomunicación y los llevaron al anexo de Capuchinos, esta extraña prisión “de primera”.

Ecós de la historia me llegaron hasta Roma: cuando los padres Cariola y Salas entraron a Capuchinos, encadenados y escoltados por gendarmes, los presos formaron un extenso pasillo que recorría patios y escaleras, hasta la puerta misma de su celda; a medida que avanzaban, un espontáneo aplauso comenzó a crecer entre los presos, hasta convertirse en una estruendosa recepción. Esas decenas de hombres en desgracia habían entendido el sacrificio de estos sacerdotes. Sentí ganas de llorar de emoción cuando me lo contaron; y sentí un inmenso, incontenible orgullo: ¡esos eran mis padres, los padres de mi Iglesia, los padres de la Iglesia de Chile, ésa era su bendita locura!

El Papa Pablo VI, siempre muy sereno, se conmovió también cuando escuchó esto que acababa de ocurrir en Santiago. Pero se mostró al mismo tiempo extraordinariamente severo: dijo que no se debía permitir, por ningún motivo, que los padres fuesen sometidos a persecuciones sin dejar en claro que en ellos se perseguía a la Iglesia toda, a la Iglesia Universal. Me pidió que dijera en Chile que para él los sacerdotes presos eran “mártires de la caridad cristiana”.

En cuanto al cierre de Pro Paz, me instó a insistir en la defensa de los derechos humanos, a través de todos los caminos que fuese necesario: percibía él perfectamente que el fin de la experiencia ecuménica tenía un lado negativo, pero que también permitiría a la Iglesia Católica asumir íntegramente la tarea profética de defender el Evangelio en un clima de incomprensión y dureza.

Con todo, la anunciada disolución del Comité Pro Paz no había quietado las aguas en Santiago. En la noche del mismo día en que partí, también fue arrestado en su casa el abogado José Zalaquett, y conducido al campo de prisioneros de Tres Alamos.

Otros varios sacerdotes fueron igualmente detenidos, junto con él. Pero el arresto de Zalaquett se fue prolongando más allá de lo previsible; la gente de Pro Paz comenzó a pensar, creo que con razón, que tal retención arbitraria era una medida de presión para acelerar el cierre del organismo; tal vez la motivaba la prevención final de mi propia carta al general Pinochet.

En contraste, en mi casa y mi oficina se acumulaban centenares de cartas pidiendo que Pro Paz no fuera disuelto. Algunas de ellas eran desgarradoras: nos decían, con angustia, que esta entidad había sido la única esperanza para muchas personas, que ahora quedarían en el desamparo. Familias completas, mujeres, niños, ancianos, los firmantes de estas misivas formaban un verdadero muestrario del dolor en la patria.

Pero la hostilidad de ciertos círculos de gobierno había dejado paso ahora a un clima de guerra abierta. A fines de noviembre mis obispos auxiliares conocieron un oficio secreto de la Secretaría General de Gobierno, que instruía a intendentes y alcaldes de todo el país para informar de sus relaciones con las jerarquías católicas locales, de los problemas con ellas y de los antecedentes que conocieran. En su parte más grave, la circular pedía describir pormenorizadamente la actitud de sacerdotes y religiosas en todas las comunas.

A comienzos de diciembre, esta verdadera escalada se descargó también contra la peregrinación por la Virgen del Carmen, programada para el día 8. A pesar de que los sacerdotes que la organizaban se habían mantenido en contacto permanente con las autoridades, el gobierno, aduciendo antecedentes reservados que nunca dio a conocer, dictó un bando para prohibir la peregrinación como tal: no se podía llegar al Templo Votivo en Maipú en grupos, ni portando pancartas, ni marchando; sólo se permitía la llegada individual.

Evidentemente, el gobierno no podía temer seriamente que en esa peregrinación, que se había realizado con tanta tranquilidad sólo un año antes, se fueran a producir actos contrarios al orden público. No: temía, simplemente, que la Iglesia de Santiago recibiera un respaldo masivo de la población, como parecía casi seguro. Al publicitar su bando restrictivo, esperaba desalentar la concurrencia de gente y atemorizar a quienes quisieran llegar de todos modos.

Captando estas dimensiones del problema, los vicarios de Santiago se reunieron, mientras yo seguía en Europa, y decidieron que en las condiciones impuestas no podía tener lugar la peregrinación. Para sorpresa del gobierno, la cancelaron.

Llegué un par de días después de este incidente. De inmediato fui a la cárcel a ver a los padres presos, y a transmitirles el mensaje del Santo Padre. Creo que esta noticia les dio más fortaleza para soportar esa prueba.

En seguida escribí al general Pinochet para hacerle presente nuestro dolor por la serie de medidas persecutorias que su gobierno estaba tomando. Le representé la configuración de “un clima generalizado que tiene todos los visos de persecución, que nosotros no podemos silenciar ni ocultar, y que genera progresivas y perjudiciales tensiones entre la Iglesia y el gobierno, sin beneficio alguno para Chile”. Pedí que se dieran pasos para poner a nuestros sacerdotes “al abrigo de inquisiciones y detenciones indebidas”, y reiteré nuestra permanente disposición a un diálogo sereno y amplio.



El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo Juan Francisco Fresno, junto al confirmado secretario, obispo Carlos Camus.

El 17 de diciembre los obispos de Chile nos reunimos en Asamblea Plenaria en el Seminario de San José de la Mariquina, que cumplía sus 50 años. Teníamos una larguísima lista de problemas que resolver, desde la elección de una directiva hasta los episodios de data reciente.

El arzobispo de La Serena, Juan Francisco Fresno, fue elegido presidente, mientras que se ratificó a Carlos Camus en la secretaría, confirmando nuestro anterior voto de respaldo. También la Asamblea acordó enviar una carta de agradecimiento a quienes trabajaron en Pro Paz, y reafirmar el derecho de la Iglesia a conducir libremente sus universidades, a las que se describía ahora como “intervenidas”.

Se redactó también un mensaje de Navidad que contenía un llamado a los cristianos a extender las acciones de solidaridad, y una petición al gobierno para que concediera “una generosa amnistía” para los detenidos por razones políticas. Esta última petición fue escuchada, al menos relativamente: un par de días después, el ministro del Interior anunció la liberación de 164 detenidos, incluidos los cuatro sacerdotes presos, Cariola, Salas, Maroto y Whelan.

Este gesto de buena voluntad tenía indudable relación con la confirmación, por los hechos, de que Pro Paz estaba siendo disuelto; y no descarto que hayan influido también las innumerables peticiones que se venían realizando ante los miembros del Ejecutivo.

Entretanto, tuvimos una reunión con los vicarios donde se planteó qué debíamos hacer para reemplazar a Pro Paz. Varios de ellos propusieron dar a este trabajo el rango de una nueva vicaría, idea que de alguna manera ya venía dando vueltas. Durante el 75, Cristián Precht había puesto especial énfasis en la ayuda social que podía prestar una entidad como Pro Paz, a través del apoyo a comedores infantiles, policlínicos y diversas formas de organización de los más pobres. Yo mismo he de reconocer que esta dimensión era una de las que me atraía más, aunque bien sabía que la motivación central de ayudar a los perseguidos no podía desdibujarse en un momento semejante; pero cuando este momento pasara, ¿qué debía quedar de una experiencia tan vital? A mediados del 75 ya lo teníamos claro: la principal enseñanza era la solidaridad; pero no una solidaridad genérica, abstracta, sino una concreta y directamente ligada a los derechos del hombre, a la cual la teología y la doctrina católicas daban un amplísimo sustento. De esas reflexiones nació una *Pastoral de la Solidaridad*, que emití en julio de ese año.

Ese documento daría, pues, su base a la nueva vicaría. Cuando llamé a Cristián Precht para pedirle que se hiciera cargo de esto, me citó varios argumentos que a su juicio hacían inconveniente que él asumiera como vicario. Como se los rechacé uno a uno, al final me dijo que era muy joven. “Esa es una enfermedad de la que te irás mejorando día a día”, le dije. Rió de buena gana, y se convirtió en el primer vicario de la Solidaridad.

La Vicaría nacía sobre las durísimas experiencias de Pro Paz, tomando sus lecciones; y como una de las principales era marcar fuertemente las diferencias con quienes fuesen favorables a los medios violentos (incluso simpatizando con partidos que los propiciaran), así como “cubrir” a la entidad de las acusaciones de infiltración, el primer deber de Cristián sería cerrar Pro Paz, seleccionar de nuevo a la gente y armar equipos nuevos para funciones muy parecidas a las de antes. Vi que se puso a trabajar en esto con gran coraje, pero también con un



El sacerdote Cristián Precht, secretario ejecutivo de Pro Paz.

inmenso dolor; yo mismo le aconsejé que se instalara cerca mío, preocupado de que en una fase tan crítica no fuese a afectarlo algún quebranto.

Al comenzar 1976, mientras los servicios de seguridad multiplicaban las detenciones contra sacerdotes extranjeros, el 1° de enero nació la Vicaría de la Solidaridad, en el edificio de Plaza de Armas 444, antigua sede del Arzobispado y recinto vecino a la Catedral Metropolitana: más oficial, imposible.

La misión de la Vicaría

“¿Por qué se metió en lo de Pro Paz? ¿Por qué hizo la Vicaría? ¿Para qué se creó todos estos problemas?”: estas preguntas me las repitieron muchas veces los católicos y amigos que no querían verme afectado por la gravedad del problema de los derechos humanos en los primeros años del régimen militar. Algunos se inquietaban de buena fe; otros, quizás, con poca fe.

Cuando me vi obligado a cerrar Pro Paz, hubo quienes pensaron que nos habíamos sacado un peso de encima. De modo que, para los que opinaban de esta manera, la inmediata creación de la Vicaría de la Solidaridad fue una no pequeña sorpresa. Tiempo después, cuando se disolvió la DINA y la reemplazó la Central Nacional de Informaciones (CNI), un alto oficial le dijo a uno de mis vicarios, ante el reproche de que la medida era sólo cosmética: “De ustedes aprendimos a hacer lo mismo, con distinto nombre”. Esta humorada era una verdad a medias, tanto porque la Vicaría de la Solidaridad fue algo cualitativamente distinto, como porque habíamos advertido claramente que la Iglesia continuaría defendiendo los derechos humanos.

Pro Paz surgió ante la emergencia, y tuvo la precariedad propia de tal situación. La Vicaría, en cambio, nació como un organismo más permanente, fundado en la doctrina de la Iglesia sobre la solidaridad y en nuestra certeza de que ésta era un valor que debía ser promovido, no sólo para el presente, sino también para el futuro.

Era una creación original, sí. No existía en otras partes, no tenía precedentes. La suscitó una situación extraordinaria, ¿qué duda cabe! Pero no fue una casualidad, ni una súbita inspiración: la Vicaría nació de una larga y sufrida reflexión en torno a lo que vivíamos día tras día. Nos dimos cuenta, poco a poco, a tropezones -que es como razona el hombre cuando se acerca a una verdad profunda-, de que no eran sólo nuestra voluntad ni nuestras capacidades institucionales lo que nos movía en esa dirección: era la doctrina cristiana en sí misma, su llamado imperioso

para ser consecuentes, su sentido directo de los valores superiores.

En la *Pastoral de la Solidaridad* que emitimos el 25 de julio de 1975 -mucho antes de suponer que íbamos a crear esta entidad- tratamos de organizar esta doctrina. Recordamos sus fundamentos bíblicos, exploramos el sentido cristiano del compartir, y acudimos a la definición clásica de la solidaridad: "Dependencia mutua entre los hombres que hace que no puedan ser felices unos si no lo son los demás". Dijimos, siguiendo a Pablo VI, que la solidaridad no se limita a las personas, sino que se extiende también a las comunidades y a los pueblos; que tampoco se agota en el compartir con los necesitados, sino que alcanza a la búsqueda de la justicia y los derechos humanos.

Respondiendo al diario católico *La Croix*, agregué: "El ejercicio de la solidaridad implica ciertamente riesgos: ser malinterpretado por la sociedad; ser mañosamente utilizado por el beneficiario. Jesús lo sabía y lo asumió. La Iglesia está obligada aquí a ser especialmente vigilante y prudente; pero no puede renunciar a ser maestra de misericordia, incluso con aquellos que la han perseguido o podrían hacerlo en el futuro. Si tiene que pagar por ello el precio de ser incomprendida; y si algunos de sus miembros han de sufrir hostilidad y aún privación de libertad por vivirla en toda su pureza, tiene motivos para dar gracias a Dios: se encuentra entonces en el monte de las bienaventuranzas".

Y dicho esto, estábamos a las puertas de la Vicaría.

En enero de aquel año 76, el Papa Pablo VI publicó una exhortación apostólica que se proponía como síntesis de lo que se había discutido en la III Asamblea General del Sínodo de Obispos, en 1974, en torno al tema de la evangelización. La llamó *Evangelii Nuntiandi*.

En mi opinión, fue el documento más importante de la década del 70 y el más profundo del post-Concilio. Creo que, en su apelación a la fuerza propia de la Iglesia, sólo resultó comparable con *Gaudium et Spes*, la constitución conciliar que renovó el quehacer de los católicos a través del mundo.

Evangelii Nuntiandi era una reflexión de estabilizadora hondura. Después del período de cambios y estremecimientos que la Iglesia vivió durante los años 60, esta exhortación regresaba a las raíces, asimilaba los elementos modernos, se hacía cargo de los avances del Concilio y emergía como una síntesis nueva, iluminadora y estimulante.

El principio de que "evangelizar constituye la dicha y vocación

propia de la Iglesia, su identidad más profunda”, servía a Pablo VI para recordar que no hay evangelización fuera de la Iglesia, ni mucho menos en su contra. A la vez, quería decir que nadie dentro de la Iglesia puede sentirse eximido de la tarea evangelizadora. Pero esta tarea no existe en la abstracción, sino que está ligada al desarrollo y a la promoción humana, a la defensa de la justicia y a la práctica de la caridad. El mensaje de liberación del Evangelio debería atravesar la sociedad, y buscar su conversión tal como se convierte el corazón del hombre por la acción de la palabra de Cristo. Sin embargo, este mensaje no debe ser sometido a lecturas ideológicas que terminan por distorsionarlo; con las nuevas experiencias de los 60, el Papa podía precisar las estrictas condiciones de esta misión: ni la violencia ni la destrucción pueden ser caminos fértiles para la auténtica liberación.



El obispo francés "rebelde" Marcel Lefebvre.

Evangelii Nuntiandi tuvo en nuestro continente un impacto particularmente hondo. Así como la gran inspiración de Medellín fue *Gaudium et Spes, Evangelii Nuntiandi* sería el texto fundamental de la reunión de Puebla, tres años más tarde.

La Iglesia chilena también sintió su impulso. Las *Orientaciones Pastorales* acordadas por el Episcopado en marzo, tuvieron como referencia central el texto del Papa. El lema del plan pastoral recogió directamente la invocación: “La Iglesia, alma de Chile”. Y los obispos declaramos el deseo fervoroso de que la Iglesia viviese valores cruciales para su hora histórica: el aliento de la esperanza, la afirmación de la verdad, el servicio de la justicia, la proclamación de la libertad y la expresión del amor en la solidaridad.

La profética exhortación de Pablo VI se anticipó, notablemente, a ciertas tendencias integristas que en esos días, y en nombre de la tradición o de la pureza de la fe -ambas entendidas según puntos de vista muy peculiares-, emergieron a la luz pública para impugnar a jerarquías y episcopados, en lo que parecía ser una reacción algo tardía al conflictivo período postconciliar.

Por su notoriedad, encabezó esa línea el obispo francés Marcel Lefebvre, que desde un pequeño Seminario instalado en Ecône (Suiza) declaró su rebelión contra lo que llamó el “neomodernismo” y “neo-protestantismo” en la jerarquía y, muy especialmente, contra la reforma litúrgica, a la que consideraba una aberración anarquizante. Aunque por entonces todavía declaraba su obediencia al Papa, ya era sabido que Pablo VI le había pedido que declarara su aceptación a los cambios decididos por el Concilio y rubricados por el Papa. Lefebvre mantenía una deliberada ambigüedad con sus declaraciones en favor de Roma, pero para nosotros era ostensible que ya no se sentía en comunión con la Iglesia.

Lefebvre decía realizar su campaña por razones de ortodoxia doctrinal; pero entre sus seguidores asomaba frecuentemente cierta asociación entre algunos principios jerárquicos de la antigüedad con los actuales regímenes políticos de derecha, marcando un énfasis que tenía mucho más de política que de teología.

Sufrimos también nosotros la eclosión de estos grupos en Chile. El más tenaz fue, sin duda, Fiducia, que completaba ya ocho años impugnando las decisiones de los obispos, con acusaciones cuyo cariz político no se disimulaba, ni siquiera bajo las frecuentes y dudosas invocaciones al derecho canónico.

En los mismos días en que Pablo VI emitía *Evangelii Nuntiandi*, Fiducia editaba en Santiago, ahora sin disimulo, un libelo titulado *La Iglesia del silencio en Chile*. Se trataba de una recapitulación de hechos -a veces inconexos, a menudo inexactos, casi siempre fuera de contexto- que demostrarían la connivencia de los obispos, y del cardenal en especial, con el socialismo. Evidentemente, la supuesta “denuncia”, que recibió amplísima publicidad en los medios oficiales, produjo el efecto de unir a todos los obispos en una expresión de enérgico repudio, a la que se sumó la Santa Sede.

Pero nosotros apenas teníamos tiempo para ocuparnos de estas

querellas esencialmente minoritarias. La Iglesia chilena estaba comenzando una nueva etapa, que la llenaba de savia nueva, y había que cautelar y estimular este proceso. Había, también, que hacerse cargo de las dificultades creadas por las inéditas circunstancias políticas.

Durante todo el primer semestre del 76, la Vicaría de la Solidaridad se fue organizando con equipos humanos que en gran medida serían nuevos. Cristián Precht convocó para ello a un amigo de su generación, Javier Luis Egaña, que había demostrado su lealtad con la Iglesia, y cuya capacidad organizativa había sido pieza clave en el éxito del Año Santo Chileno.

Precht y Egaña debieron pasar meses muy difíciles antes de consolidar su tarea. La disolución de Pro Paz había generado un clima de temores y sospechas entre quienes habían trabajado en él o recibido su ayuda. Se rumoreaban muchas cosas, incluso acerca de mí: que el término del Comité se había “negociado” con el gobierno, que la DC había influido para cambiar su orientación, que el gobierno de Estados Unidos, que los alemanes... en fin : la clase de cosas que se dicen y se creen en momentos de angustia, con más desesperanza que racionalidad.

Cuesta echar a andar estas instituciones; cuesta, siempre, superar la tendencia instintiva del hombre al recelo. Cuando el clima social imperante estimula estos sentimientos defensivos, las dificultades son aún mayores. Pero nosotros sabíamos que no debíamos desalentarnos.

En los mismos días, ante la grave situación generada entre los académicos por la intervención de las universidades, habíamos decidido crear otra instancia para responder a esta emergencia también nueva: la Academia de Humanismo Cristiano.

La Academia vino a cristalizar después de copiosas conversaciones que se realizaron en el Arzobispado debido a la exoneración de profesores en las distintas universidades, pero especialmente en la Católica. Una mayoría de tales despidos se debía a razones políticas, y sus afectados temían que si las universidades les cerraban las puertas, no hallarían tampoco trabajo fuera de ellas. Muchos se sentían condenados a la emigración. Convencido como estaba de que la riqueza de un país es la de sus valores humanos, contemplé con angustia cómo se gestaba un inexorable camino de exilio para nuestros talentos.

Para peor, el exilio político no daba señas de declinar. Por el contrario, desde 1973 en adelante, el flujo casi diario de chilenos que abandonaban el país no se había detenido, y a veces parecía incluso

augmentar. Así ocurrió, por ejemplo, a fines del mismo 76, cuando el gobierno anunció el cierre de los campos de detención masiva y liberó a unos 300 presos, que en su mayoría partieron al exilio.

Que el Ejecutivo no pensaba tomar medidas para frenar esto, era algo muy claro. Cuando el arzobispo Juan Francisco Fresno, recién elegido presidente de la Conferencia Episcopal, le planteó al general Pinochet que se permitiera el reingreso de Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno, a quienes quería entrañablemente, el Jefe del Estado dijo que lo estudiaría, pero nunca respondió. Leighton y su esposa habían sido heridos a balazos en un atentado, pero ni siquiera esta circunstancia modificó la opinión del gobierno. La consecuencia era bastante obvia: si Leighton, demócratacristiano, ex Vicepresidente de la República, católico ejemplar y político de inequívoca vocación pacífica, no podía regresar desde el ostracismo, bien pocas ilusiones podían hacerse otros miles de chilenos en decenas de segundas patrias.

Así que cuando estos grupos de académicos llegaron a plantearme la idea de crear alguna entidad, bajo el amparo de la Iglesia, para detener esta sangría intelectual, no tuve que pensarlo demasiado. De este modo nació oficialmente la Academia de Humanismo Cristiano Santo Tomás de Aquino, el 12 de noviembre de 1975. Jaime Bellalta asumió primero la secretaría ejecutiva, tarea en la que lo siguió Duncan Livingston, que fue desde el comienzo uno de sus promotores más activos. Mi amigo Reinaldo Sapag ocupó la secretaría de finanzas, y el primer directorio combinó eficazmente el aporte de académicos laicos y sacerdotes: Enrique d'Etigny, Fernando Monckeberg, Domingo Santa María, el padre jesuita Renato Poblete, el padre Raúl Hasbún...

También me han preguntado muchas veces por qué adoptamos una iniciativa como ésta. Hay que ponerse en el clima político de esos días para entender que la respuesta es sencilla: nadie más podía hacerlo.

Lo que más necesitaban esas decenas de académicos angustiados era una cierta protección jurídica bajo la cual continuar con sus trabajos. Muchos desconocen la razón por la que la Iglesia Católica tenía una posición única para proporcionar ese amparo: cuando Estado e Iglesia se separaron, en 1925, el derecho civil chileno estableció su reconocimiento de la personería jurídica creada por el derecho canónico. Esto quería decir que para crear instituciones reconocidas, la Iglesia no necesitaba pedir permiso; tal autorización era administrada por el gobierno, y éste dejó de concederla a quienes consideró sospechosos después de 1974.

A mediados del '76 la Academia entró en pleno funcionamiento. Desde entonces creció velozmente, en gran medida debido a que la calidad de sus académicos hizo posible que amigos norteamericanos y europeos financiaran numerosos proyectos. Unidades completas de investigación hallaron cobijo en la Academia y se desarrollaron en ella; cuando en 1977 las autoridades de la UC decidieron echar a todos los académicos del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), fue la Academia quien los recibió.

A la vuelta de un par de años, la Academia llegó a tener un cuerpo de más de 200 investigadores y un presupuesto de cerca de dos millones de dólares. Las ciencias sociales, a las que el régimen veía con tanto recelo, hallaron un espacio de libertad y alcanzaron una eficiencia nunca antes vista.

No ignoro que produjo polémicas, incluso en la Iglesia. Había quienes pensaban que sus trabajos eran propios del mundo laico y no existía razón para que el Arzobispado mantuviera su tuición; otros creían que éste debía exigirle tareas de Iglesia; y aun otros opinaban que no era más que un subterfugio de quienes deseaban hacer política bajo techo seguro.

Yo he defendido siempre lo que fue la Academia. Aunque a veces me parecía que estas críticas podían tener parte de verdad, había que considerar que la Academia había sido creada también para la emergencia. No niego que mi compromiso tenía que ver también con el hecho de que, tras haber suspendido mi cargo de Gran Canciller de la UC, me sentía responsable de las decenas de profesores que estaban siendo exonerados. Pero creo que todos los que trabajaron en esos años concordarán si afirmo que, a lo menos hasta 1980, la Academia laboró con la idea de disolverse cuando las universidades se normalizaran; sólo después algunos pensaron que debía ser más permanente.

En junio de ese año debía realizarse en Santiago la Asamblea General de la OEA, un magno evento diplomático en el que todo el país había cifrado grandes esperanzas. El gobierno, porque lo consideraba un triunfo de su política exterior, justo cuando se sentía hostilizado por una campaña internacional; los opositores, porque creían que en esta tribuna continental

podían presentarse crudamente los males que aquejaban al país; y el resto, porque les parecía que el gobierno militar vería en la OEA la oportunidad necesaria para disipar, mediante progresos reales, las acusaciones en su contra.

En el año anterior, el gobierno había negado el permiso de ingreso a una comisión *ad hoc* creada por la ONU para investigar la situación de los derechos humanos, argumentando que sus miembros no tenían una visión imparcial. Dicha negativa había sido una muy mala señal interna, porque significaba que no había disposición a aceptar ningún control.

La Asamblea de la OEA parecía propicia para cambiar esto. Lastimosamente, en los meses previos aparecieron síntomas de que las cosas serían de muy distinta manera. Los aparatos de seguridad no disminuyeron su accionar, sino que lo aumentaron, con el fin de impedir que llegaran a la OEA las denuncias más resonantes.

A comienzos de mayo, toda la dirigencia superior del Partido Comunista fue emboscada y detenida, y sus miembros pasaron a engrosar la ya abultada lista de los "desaparecidos". Conocimos bien este caso, porque el obispo auxiliar Enrique Alvear fue ese día a entregar un encargo en la casa que los agentes habían ocupado, y lo retuvieron durante horas. Alvear mantuvo una gran entereza, pero no vino a saber hasta mucho después que la situación era tan peligrosa: todos los moradores de la casa desaparecieron.

El día 12, bajo la acusación de ser parte del mismo grupo, fue detenido también el abogado Hernán Montealegre, miembro de la Vicaría. Montealegre había sido funcionario diplomático, pero su desaprobación del golpe en 1973 motivó que lo exoneraran en cosa de días; se integró entonces al Comité Pro Paz, y continuó luego en la Vicaría. Todos sabíamos que era un cristiano de probado testimonio, así como también un jurista de gran relieve; pero la DINA le atribuyó la condición de "buzón" del PC y lo acusó de ser poco menos que el jefe de la "resistencia". Claro que estas acusaciones eran sólo publicitarias, porque jamás se le interrogó por ello, y en cambio sí por Pro Paz y la Vicaría. Para entonces, hacía menos de un mes que habían liberado a José Zalaquett, otro de nuestros abogados, que debió partir al exilio.

No es exagerado decir que sólo la rápida intervención de la Iglesia de Santiago en favor de Montealegre, y la denuncia pública de su detención, lo salvaron de males aún mayores.

De todos modos, el gobierno insistió en sus acusaciones. No las modificó tampoco cuando una delegación de la OEA, presidida por el propio secretario general Alejandro Orfila, pidió visitar a Montealegre en Tres Alamos.

En julio decidí ir personalmente hasta el campo de detención. Había estado allí pocos meses antes, durante una breve visita que el obispo Sergio Valech había gestionado con el Ministerio del Interior. Esta vez fuimos juntos. Se nos quiso impedir el ingreso arguyendo que Montealegre estaba incomunicado. Como insistí tanto, accedieron, pero se apuraron en incomunicar efectivamente al jurista.

Un jefe del campo de prisioneros quiso presenciar nuestra conversación y se negó a retirarse cuando se lo pedimos. Entonces Valech dijo, secamente, que llamaría al Ministro del Interior. En ese momento el hombre accedió a dejarnos solos.

Montealegre nos relató sus tristes días en la prisión. Contó de los interrogatorios, las torturas, los gritos que oía por las noches. La obstinación de sus carceleros era total, y me fui con la dolorosa impresión de que poco podíamos hacer para ayudarlo. Cuando unos días después me fue a ver el ex senador Tomás Pablo, quien había asumido la defensa de Montealegre aún sin conocerlo, no pude evitar las lágrimas: pensaba que lo iban a matar. Me emociona todavía releer la carta que me envió desde la prisión, reiterando su compromiso cristiano y su decisión de hacer frente a lo que viniera.

Siguieron gestiones interminables. Yo mismo fui a hablar con el general Pinochet para exponerle el caso de este hombre que había escrito un trabajo sobre los disidentes de la Unión Soviética en 1972.

-General -le dije-, yo le pido que lo entregue a los tribunales y, si es culpable, que lo condenen; pero si es inocente, que lo liberen de inmediato.

-Señor cardenal -contestó él-: yo no le hago procesos al diablo.

Montealegre vino a ser liberado recién en noviembre de 1976, cuando se desmanteló Tres Alamos, sin cargos, tan misteriosamente como había sido detenido. La dura experiencia me empujó a sugerirle que no volviera a la Vicaría y asumiera un programa en la Academia de Humanismo Cristiano. Escribió allí un notable tratado sobre *La seguridad del Estado y los derechos humanos*, que yo mismo presenté tres años más tarde. Luego fue convocado para fundar el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con base en Costa Rica.

La OEA pasó en medio de estos incidentes sin complacer los deseos oficiales de que no siguiera insistiendo en los derechos humanos. El propio secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, declaró en Santiago que este tema dificultaba las relaciones de Chile con

EE.UU., y lo seguiría haciendo si las condiciones no mejoraban.

Durante su transcurso, el gobierno militar se empeñó en evitar que su imagen internacional se deteriorara aún más. Algunos de sus funcionarios -creo que con plena buena fe- prometieron que la situación de los detenidos mejoraría, y que se trataría de aclarar los casos de desapariciones y secuestros. A la vez, consiguieron que los medios diplomáticos se comprometieran a no permitir que se usara el desarrollo de la OEA para actos propagandísticos. Esto explica por qué quienes quisieron asilarse en ese período no pudieron conseguirlo y, en algún caso, hasta fueron expulsados de alguna embajada.



Los abogados Jaime Castillo Velasco y Eugenio Velasco Letelier, en fotografías de 1976.

De todos modos, cinco abogados -Jaime Castillo Velasco, Eugenio Velasco Letelier, Fernando Guzmán, Andrés Aylwin Azócar y Héctor Valenzuela Valderrama- hicieron llegar a la OEA un documento sobre los derechos humanos en Chile, con rasgos severamente críticos.

Esta presentación vendría a tomar relieve al mes siguiente, a comienzos de agosto, cuando Eugenio Velasco y Jaime Castillo fueron violentamente arrestados en sus respectivas oficinas, llevados hasta Pudahuel y expulsados hacia Argentina. Los dos juristas apelaron de este destierro irregular ante los tribunales, pero éstos les denegaron incluso la posibilidad de realizar su propia defensa.

Seguimos con angustia este caso. Los dos habían trabajado con la Iglesia en temas difíciles, y tenían un reconocido prestigio como juristas. Eran, en cierta manera, un símbolo del derecho, que ahora estaba siendo violentado.

Sin embargo, no imaginábamos aún cuán de cerca nos tocaría su situación.

Seis días después, el 12 de agosto, llegó desde Ecuador la noticia más inaudita que hubiésemos conocido en muchos años: el gobierno militar de ese país había decidido arrestar violentamente a dos arzobispos, trece obispos y 22 religiosos y religiosas que estaban reunidos en un hogar de la Iglesia en Riobamba, por invitación del obispo diocesano Leonidas Proaño. Entre los arrestados había tres obispos chilenos: Fernando Ariztía, de Copiapó, Carlos González, de Talca, y Enrique Alvear, mi auxiliar en Santiago.

Todos se habían reunido para dialogar acerca de la situación de los campesinos e indígenas en América Latina, pero el gobierno militar ecuatoriano los acusaba de realizar un encuentro subversivo. Aunque la cita no había tenido el respaldo de la Conferencia Episcopal de Ecuador, ni tampoco del cardenal Pablo Muñoz Vega, ello no significaba que la Iglesia pudiera tolerar la temeraria actuación policial.



Grupos organizados realizan manifestaciones contra los obispos detenidos en Riobamba, a su regreso a Pudahuel, el 15 de agosto de 1976.

El hecho movilizó a las jerarquías de América Latina, pero especialmente a la de Estados Unidos, cuatro de cuyos obispos estaban detenidos. El régimen ecuatoriano fue echando pie atrás a medida que pasaban las horas, hasta que, ya en la mañana siguiente, decidió liberar

a sus prisioneros.

El vejamen no fue publicitado como lo que era por la prensa chilena; ésta prefirió descargar fantasiosas acusaciones contra los obispos arrestados, orquestando el clima de hostilidades que vendría a culminar el día 15. Aquella mañana los tres obispos chilenos aterrizaron en Pudahuel y fueron brutalmente agredidos por una horda de sujetos que habían ido a esperarlos con letreros ofensivos y bien premunidos de armas y piedras.



El Comité Permanente y los obispos agredidos en Pudahuel hablan ante la prensa, el 16 de agosto de 1976. De izquierda a derecha: obispo Carlos Camus, secretario de la Conferencia Episcopal; obispo Carlos González; arzobispo Juan Francisco Fresno, presidente de la Conferencia Episcopal; cardenal Raúl Silva Henríquez; obispo José Manuel Santos, miembro del Comité Permanente; y obispo Fernando Ariztía. No aparece el obispo Enrique Alvear.

Lo que pasó en el aeropuerto no tiene precedentes en la historia de Chile. Bajo el ataque despiadado de estos grupos, los obispos consiguieron salir a duras penas, y se dirigieron a mi casa. Contemplé, casi sin poder creerlo, cómo habían sido destruidos los vehículos y golpeados los sacerdotes, los amigos y los propios obispos. Sin salir del asombro, reconstruimos poco a poco los hechos; llegamos a determinar con precisión que los agresores eran funcionarios de gobierno y agentes de la DINA. Uno de ellos había sido reconocido en el aeropuerto por

Javier Luis Egaña como organizador de actos públicos del general Pinochet. Otro había dejado caer una orden de detención extendida en blanco.

A pesar de estas evidencias, la prensa continuó con sus ataques. Que el gobierno no los desaprobaba fue algo que quedó en evidencia durante el juicio de Jaime Castillo y Eugenio Velasco, en esos mismos días, cuando los abogados del Ministerio del Interior argumentaron que ambos juristas habían estado en Ecuador con el obispo Carlos Camus poco antes de la reunión organizada por el obispo Proaño, como si ello probara concomitancia entre ambos hechos.

Ante tal conexión, el Comité Permanente del Episcopado decidió emitir dos declaraciones: una, para repudiar los violentos incidentes registrados en Pudahuel; la otra, para declarar nuestra perplejidad por las expulsiones de Velasco y Castillo. “La historia”, decía esta última, “juzgará con severidad a la actual jerarquía católica de Chile si, en un momento en que pudimos y debimos alzar nuestra voz, no lo hiciera con la serenidad y verdad que el Evangelio nos impone para bien del país”.

Curiosamente, cuando los obispos agredidos pidieron una audiencia con el general Pinochet, para relatarle lo sucedido, éste decidió invitarlos a un almuerzo, junto con el Comité Permanente del Episcopado. Se mostró relajado y de buen humor en aquella reunión, aunque algunos obispos quedaron molestos por ciertas observaciones mordaces, que tenía anotadas en unas pequeñas tarjetas y que fue formulando cada vez que hablaba uno de los prelados.

Se le expusieron allí las pruebas de la actuación de la DINA en Pudahuel y se le hizo ver la parcialidad con que había actuado la prensa, especialmente la que era directamente controlada por el gobierno. Se le pidió la oportunidad de responder a través de la propia Televisión Nacional, ante lo cual respondió que lo estudiaría.

Seguramente lo hizo, pero jamás nos contó el resultado de sus reflexiones. Quien sí lo hizo, tiempo después, fue el ministro del Interior, el general César Benavides, que me entregó un cable enviado por el embajador ante la Santa Sede, Héctor Riesle, dando cuenta de una conversación con el obispo González, el vicario Cristián Precht y el diácono Agustín Vial, en Roma. El cable los “acusaba” de haber sido “extremadamente críticos” del gobierno, de haber hablado mal de la DINA y de afirmar que tras el almuerzo con el Jefe del Estado, “la relación está rota”. El informe distorsionaba deliberadamente las

opiniones de obispo, vicario y diácono, pero sobre todo, venía a echar leña en una hoguera ya bastante encendida por los sucesivos incidentes.

El obispo González se enojó de tal modo con estas imputaciones, que envió una carta al general Pinochet, aclarando punto por punto. El general le dijo que Riesle tendría que dejar la embajada dentro de ese año; pero tampoco en esto fue muy exacto: el embajador vino a cambiar justamente... ¡diez años después!

Por su lado, y antes de todo esto, Precht también había pedido una audiencia con el general, para presentarle los antecedentes sobre detenidos desaparecidos, que serían entregados a la Corte Suprema. Se trataba de cinco tomos a los que llamábamos “La Naranja Mecánica” o “Los Penecas Naranjas”, por el color de sus tapas. Alrededor de 900 casos, debidamente documentados, clamaban desde esas páginas. El general concedió la audiencia, pero luego la canceló con motivo de los sucesos de Pudahuel. Como no hubo nueva comunicación, la Vicaría presentó los tomos a los tribunales, subrayando que casi un centenar de casos se registraba durante el año 76.

En septiembre, aun sabiendo que el estado de las relaciones no era nada bueno, quise exponer con detalle los motivos de la Iglesia en su acción presente. Fue en la homilía *Los caminos de la paz*, en el Te Deum de Fiestas Patria. Dije: “La paz, según San Agustín, es la tranquilidad en el orden. Y no puede haber orden ni tranquilidad sin libertad. Los miembros de un cuerpo social gozan de tranquilidad cuando saben que sus derechos fundamentales están jurídicamente protegidos contra toda arbitrariedad... Un orden que se obtuviera a costa de la libertad sería un contrasentido. Y el pueblo objeto de ese orden ya no sería pueblo, sino masa”.

Supe rápidamente que mis palabras habían sido recibidas con disgusto en el gobierno. Les atribuían una intención crítica directa, justo cuando la situación externa de Chile se veía comprometida. Las asociaban, además, a la presentación de “Los Penecas Naranjas” ante los tribunales, en fecha igualmente delicada. Me ratificó esta opinión el general Jorge Court, quien se había constituido, por su propia buena voluntad y desde fines del 75, en un intermediario que nos permitía llegar directamente al general Pinochet. Court, del arma de intendencia, había ascendido recién ese año y participaba muy activamente en la Vicaría Castrense; pero sobre todo era un católico fiel, cercano a la Iglesia desde mucho tiempo antes, que comenzó a realizar espontáneamente gestiones entre eclesiásticos y funcionarios de gobierno con el solo afán de ayudar. En

1977, cuando pasó a retiro, el general Pinochet le pidió que se constituyera en su asesor oficial para las relaciones con todas las Iglesias, aunque nunca le dio un cargo ni un título. Estuvo en esa tarea hasta 1980.



El cardenal preside el Te Deum del 18 de septiembre de 1976 en la Catedral de Santiago.

Ha pasado mucho tiempo, y creo que se puede evaluar ahora la gestión de Court con la ecuanimidad necesaria. Discutí muchas veces con él, y creo que a veces fui exageradamente duro. Lo culpaba de lo que hacía el gobierno, y le exigía soluciones y respuestas que no estaba en condiciones de dar. Poco a poco me fui enterando de que lo mismo le pasaba con los militares en el gobierno. Nosotros lo veíamos como el vocero del régimen; éste le achacaba ser un abogado de la Iglesia. En ciertos momentos críticos, unos y otros le retirábamos con brusquedad su calidad de intermediario; y se la reponíamos si necesitábamos sus pacientes oficios.

El buen general Court pasó estos años duros como el jamón del sandwich. Soportó esa tarea con valentía y, por lo que he sabido, con una lealtad admirable. Hoy sigue siendo un buen hijo de la Iglesia, que participa en ella con vitalidad y entusiasmo.

Court me contó que algunos altos militares me culpaban en aquel año de haber influido en una drástica enmienda votada en el Congreso

de Estados Unidos, que en octubre determinó no vender más armas a Chile mientras subsistieran las violaciones a los derechos humanos.

Si lo hubiera hecho, no temería reconocerlo. Pero no sólo no fue así, sino que muchos meses antes, cuando durante una visita a EE.UU. fui consultado por los efectos que tendría una medida semejante, expresé mi opinión contraria, explicando que la carrera armamentista desatada en el sur de América ponía en peligro nuestras fronteras y, más aún, la paz regional entera.

En esa ocasión también el ex Presidente Eduardo Frei opinó como yo, agregando que la situación era especialmente delicada, por el aumento del irredentismo territorial en Perú y Bolivia, donde también gobernaban sendos regímenes militares. Si se discriminaba a Chile en esta materia, los militares vecinos podrían sentirse tentados de iniciar una aventura cuyo fin sería desastroso.

Recuerdo haberle dicho a Court y a otros militares que la imputación que se me hacía era injusta. Sólo unos días antes, el ex canciller Orlando Letelier había sido asesinado en un bárbaro atentado en el centro de Washington, y mucha gente sospechaba del gobierno chileno; y tenía sus razones, si éste lo había denigrado públicamente y poco antes hasta le había quitado por decreto su nacionalidad; si los agentes de la DINA eran ya conocidos por su temeridad y falta de límites; si frente a testigos y en plena calle se había arrestado arbitrariamente a numerosos ciudadanos.

Lo importante, les insistí, no eran las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, a las cuales la Iglesia jamás renunciaría; lo importante era terminar con las situaciones que originaban esas denuncias. La Iglesia se sentiría feliz de poder decir que todo esto se había terminado en Chile; pero nadie en el mundo lo creería si las cosas continuaban igual y nosotros simplemente optábamos por callar.

El retorno hacia la Iglesia

He dicho antes que las tendencias centrífugas que asediaron a la Iglesia chilena después del Concilio comenzaron a revertirse ya en 1972, a pesar del clima de polarización política que se vivía entonces.

Se trató, inicialmente, de pequeños síntomas: sobre todo, de un regreso paulatino y silencioso de los jóvenes a los ambientes de la Iglesia.

Creo que el testimonio evangélico dado por sacerdotes y obispos en situaciones muy difíciles, primero durante la Unidad Popular y luego bajo el régimen militar, contribuyó decisivamente a mantener en alza este movimiento de retorno a la espiritualidad. A mediados de la década del 70, la revitalización de la Iglesia tenía ya una clara traducción: el aumento de las vocaciones.

En octubre del 76, cuando inauguré el nuevo Seminario Mayor, en La Florida, cuya construcción fue posible gracias a la venta de las antiguas instalaciones, teníamos cerca de 50 alumnos en formación, y 30 más por entrar el año siguiente. Si se tiene en cuenta que sólo cinco años antes habíamos llegado a la triste cifra de cero, se comprende mejor lo extraordinario de este nuevo impulso.

Aquel mes inicié una extensa gira por Europa, que duró más de un mes, en el transcurso de la cual pude tener una audiencia con el Papa Pablo VI. Le conté el fenómeno que estábamos viviendo, e inmediatamente él inquirió detalles sobre los nuevos seminaristas y la expansión de las vocaciones.

-¡Bendita enfermedad! -exclamó-. Dios quiera que los jóvenes chilenos se sigan enfermando de ella.

Claro que este florecimiento no se agotaba en las vocaciones. Y así lo reflejó, en esos días, una iniciativa desarrollada por los padres Miguel Ortega y Cristián Caro, que me asistían a cargo de las vicarías Pastoral Juvenil y Pastoral Universitaria. Se trató de la primera Semana Juvenil, que culminó con un festival musical titulado *Una canción para*

Jesús. En esta última parte de las actividades se presentaron casi 200 composiciones, apasionadamente inspiradas en el mensaje de Cristo, que los jóvenes parecían reconocer con particular profundidad.

No estuve presente en la noche de clausura de aquel año, pero supe que llenó el Teatro Caupolicán y constituyó uno de los éxitos más significativos de ese año difícil. Asistí a muchas más en los años siguientes, y cada vez vi un entusiasmo mayor y más sólido.

Los jóvenes eran un terreno fértil otra vez para la Iglesia. ¿Lo serían también otros sectores? Ciertamente.



El Papa Pablo VI recibe en audiencia al cardenal y a los padres Cristián Precht, vicario de la Solidaridad, y Gustavo Ferraris, vicario de la zona sur.

En los dos años anteriores habíamos visto aumentar casi geométricamente la cantidad de trabajadores que se acercaban a nuestros sacerdotes y a la Vicaría de la Solidaridad para pedir ayuda y consejo en sus problemas laborales. Por supuesto, en una mayoría de los casos se trataba de gente que había perdido el empleo y quería defensa.

Nosotros habíamos desarrollado en los años anteriores, bajo el alero de la Fundación Para el Desarrollo, el Instituto de Autogestión, que promovía la creación de cooperativas de trabajadores. En el 75, cuando comenzó la licitación masiva de empresas estatales, el instituto contribuyó

a que grupos de obreros compraran algunas de esas industrias; tal fue el caso de Socometal y Bellavista-Tomé, que iniciaron sus operaciones con grandes esperanzas, pero que tiempo después no pudieron ser sostenidas por las cooperativas.



El cardenal saluda a los jóvenes en la ceremonia de clausura de uno de los festivales "Una Canción para Jesús". Atrás, lo acompaña el vicario Miguel Ortega.

Dado que el volumen de problemas en este campo era tan grande, el 76 lanzamos un nuevo programa, centrado en la obtención de crédito para el movimiento cooperativo. Se llamó Ahorro y Crédito Laboral (ACL) y pudo apoyar el funcionamiento de más de 30 organizaciones, con una gestión sumamente eficiente.

Pero había también otros signos que indicaban el acercamiento del mundo laboral a la Iglesia: hasta 1973, yo realizaba la Misa de San José Obrero cada día 1° de Mayo, y creo que rara vez pude tener más de 300 asistentes; había sacerdotes que opinaban que con tan pocos feligreses no valía la pena insistir en esto. Recuerdo que unos asesores del MOAC me lo dijeron entre risas: "Don Raúl, si ni nosotros vamos a esas misas"; aunque la broma no me hizo mucha gracia, les dije: "No importa; quizás en el futuro se llenen tanto, que ni ustedes van a poder entrar". Efectivamente, a partir del 74 esas misas se abarrotaron, en parte porque los templos eran los únicos recintos donde se podía celebrar la fiesta de los trabajadores sin peligro.

La Iglesia chilena había desarrollado durante varias décadas una Acción Católica especializada en el mundo obrero. El padre Alberto Hurtado llegó a promover la formación de sindicatos cristianos, con un éxito apreciable. La Acción Católica obrera llegó a tener una gran fuerza,

que alcanzó sus momentos culminantes a fines de los años 40, cuando era realmente masiva. Hasta entonces seguía el modelo holandés, que bajo la conducción del padre Joseph Cardijn había conseguido una amplísima implantación en grandes grupos obreros. Después, la orientación giró hacia la modalidad francesa, que apuntaba más hacia los pequeños núcleos de dirigentes, a los que se daba una formación de alta calidad; esto, sumado al crecimiento de las ciudades y a los conflictos políticos, redujeron la extensión de los movimientos apostólicos durante la década del 50.



El cardenal conversa con un trabajador en la inauguración de ACL, el 28 de abril de 1976.

Bajo esa nueva concepción, esta Acción Católica encontraba a sus interlocutores principales en los dirigentes, a quienes quería desarrollar como líderes; pero todo esto venía en declinación cuando yo llegué a Santiago. Sé que digo algo polémico, porque muchos opinarán que en la década del 60 hubo un nuevo impulso, y mucho trabajo y sacrificio que se invirtió en esta causa. Pero los resultados estaban muy lejos de lo que yo esperaba: de esto estoy seguro.

En esos años creamos la Fundación Cardijn, que prestaba asesoría a los líderes laborales y que desarrolló numerosos programas de tremenda eficacia en el mundo del sindicalismo cristiano. Sin embargo, yo sentía que aun con estas cosas nos movíamos por arriba, en un nivel académico, formando gente muy valiosa, pero sin entrar en el terreno propio de los trabajadores.

Estas entidades ayudaron sin duda a cambiar la mentalidad de la Iglesia para hacerse parte de estos problemas. En la Iglesia tradicional, los conflictos del trabajo eran algo ajeno y distante, que a menudo se reprobaba sin conocer. Los obreros veían a la Iglesia como una aliada de los patronos; y éstos reaccionaban como si así fuera por mandato divino.

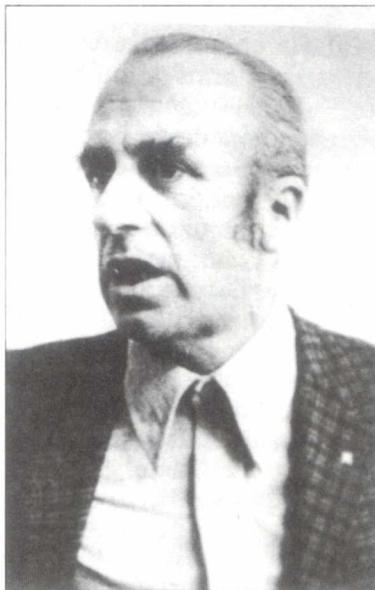
En esto la situación de la Iglesia no era más que un reflejo de un estado estructural de retraso y subdesarrollo, en el cual el trabajo y la persona del trabajador eran gravemente subvalorados. Hay que recordar que la primera huelga de tranvías que se hizo en Chile fue porque los conductores no tenían nada que los protegiera de la lluvia; ¡y se tuvo que llegar a la paralización porque nadie había atendido a esta petición tan obvia, tan increíblemente lógica!

Con todo, en la Iglesia chilena la sensibilidad hacia estos temas despertó mucho antes que en la mayor parte de América Latina. En forma esporádica primero (a comienzos de siglo), y de manera bastante sistemática poco después, hubo sacerdotes que trabajaron con el mundo obrero cuando esto parecía una audacia vanguardista. Yo me siento orgulloso de esa tradición.

Durante los años 60, el Movimiento Obrero de Acción Católica dio algunos pasos -considerados muy avanzados en su época- para acercarse a los problemas más concretos del mundo del trabajo. Recuerdo que unos padres que eran asesores del MOAC me fueron a decir un día que había una huelga en Yarur, y se había creado una olla común; los sacerdotes querían saber qué hacer, porque estaban muy cerca de esos dirigentes sindicales. Les dije que se acercaran a la olla común, que los ayudaran, que atendieran sus necesidades. Recibimos muchas críticas por esto -especialmente del empresariado-, y cada vez que se me planteó el tema les pregunté a mis contradictores: ¿Y qué quieren que hagamos? ¿Que los dejemos solos, que los castigemos por hacer una huelga, que los abandonemos en otras manos que sí estarán dispuestas a apoyarlos, con fines inconfesables? Nunca tuve buenas respuestas.

Cuando la polarización política alcanzó a la Iglesia, a fines de los años 60, muchos de los asesores de la Acción Católica Obrera fueron tragados por el vértigo ideológico. La mayoría se metió en el MAPU, y al poco

tiempo, sin saber bien de qué hablaban, se declaraban marxistas-leninistas. Las excepciones a este fenómeno fueron no sólo escasas, sino también muy duramente combatidas por el grupo mayoritario.



Alfonso Baeza, primer vicario de Pastoral Obrera.

Cuatro años después del fin de la UP, sobrepasada esta convulsión, quise retomar el diagnóstico y la idea original. En primer lugar, a mi modo de ver no teníamos a los obreros; ellos no sentían que la Iglesia los acompañara en sus aspiraciones, no pensaban en ella como parte de su vida normal. En segundo lugar, la experiencia de formar gente, con todos sus buenos resultados, se mostraba insuficiente; siguiendo al Concilio, nuestra tarea debía ser la de meternos en ese mundo, y no esperar que él llegara hasta nosotros. En tercer lugar, bajo las condiciones impuestas por el régimen militar, a menudo tan duras para los trabajadores, la Iglesia tenía la oportunidad de constituirse en un lugar de encuentro, un hogar.

Pensé mucho sobre estos asuntos. Los discutí también con los vicarios. Y, en acuerdo con ellos, a comienzos de 1977 dimos el paso.

Crearíamos la Vicaría de Pastoral Obrera, una entidad también inédita, que situaría a los trabajadores al más alto nivel especializado de la Iglesia de Santiago. Le pedí al padre Alfonso Baeza, que había sido asesor del MOAC, que asumiera como primer vicario, aunque también

lo previene de que debía avanzar con cuidado, pues organizaciones muy antiguas y bien consolidadas estaban ya en el área.

Baeza trabajó con su antiguo amigo, también asesor del MOAC, José Aguilera, para estructurar este organismo sin precedentes, que fue el primero de su tipo en el mundo, y que muy pronto comenzó a ser imitado en otros países. Ambos tuvieron la ayuda del padre Segundo Galilea, el padre David Farrell de Holy Cross, Felipe Tomic y Alberto González. Y lo hicieron muy bien. Su laborioso esfuerzo en el mundo sindical comenzó a nutrir la credibilidad de la Iglesia chilena con resultados que se hicieron visibles en muy poco tiempo. En enero del año siguiente, 80 sindicalistas concurren a la Primera Escuela de Verano, que se realizó en Punta de Tralca bajo cierto clima de temor; unos años después, más de 200 dirigentes asistían regularmente a estos cursos. Hoy, estos buenos muchachos han tenido la generosidad de bautizar con mi nombre a su escuela sindical, a la que concurren decenas y decenas de trabajadores.

En marzo de ese año 77, el Comité Permanente tomó la determinación de hacer oír su voz acerca de los más acuciantes problemas nacionales. Hacía ya un tiempo que esto no se efectuaba, y ciertas medidas recientes parecían estar señalando un curso nuevo en la institucionalidad del país.

Meses antes se habían dictado cuatro Actas Constitucionales, que en cierta manera insinuaban la reconstrucción de las garantías jurídicas después de un largo período; pero poco después, dos de estas Actas, justamente las que protegían derechos civiles, fueron suspendidas en su aplicación.

En el mismo marzo, un decreto ley vino a declarar la disolución definitiva de todos los partidos (incluso los que hasta entonces sólo estaban “en receso”), con el complemento de una intensa propaganda que demonizaba el ejercicio político. La libertad de prensa había sufrido un fuerte retroceso y los métodos de censura abiertos o encubiertos se dejaban sentir en la cultura; nuestros propios aportes a un periodismo más amplio -el boletín *Solidaridad*, de la Vicaría, y posteriormente la revista *Análisis*, de la Academia de Humanismo Cristiano- eran puestos bajo sospecha por el gobierno y se nos reclamaba una y otra vez por ellos; en Santiago se aplicó una clausura definitiva a la radio *Balmaceda*, del PDC, y presiones crecientes sobre la radio *Chilena*, del Arzobispado. Quizás uno de los casos más agresivos fue el de un libro que preparó el padre Luis Antonio Díaz con extractos de homilías, mensajes y discursos

míos; se titulaba *El pensamiento social del cardenal Silva Henríquez*, y al comienzo pudo circular sin trabas aparentes; al poco tiempo supimos que estaba siendo requisado en las librerías, sin dejar otro rastro que el paso de los agentes.

El problema de los desaparecidos continuaba sin solución ni respuesta, a pesar de nuestras presentaciones ante los tribunales. En la economía, el cambio del ministro Jorge Cauas -con quien dialogábamos a menudo, en su condición de hijo de la iglesia- por el economista Sergio de Castro -ex decano de la UC- había instaurado un nuevo estilo, caracterizado por la inflexibilidad y por la energía con que se aplicaban medidas de corte liberal, sin escuchar a los enormes sectores afectados. La cesantía alcanzaba niveles históricamente desconocidos, pero el ministro descalificaba toda opinión distinta con argumentos de competencia técnica.

El debate sobre el texto de la declaración fue extenso e intenso. Cuando finalmente hubo acuerdo, se publicó el 23 de marzo de 1977, con el título *Nuestra convivencia nacional*.

Explicaba que, dada la "situación de cambio" que vivía el país, la Iglesia sentía la necesidad de hablar "desde nuestra perspectiva y competencia, exclusivamente moral y pastoral".

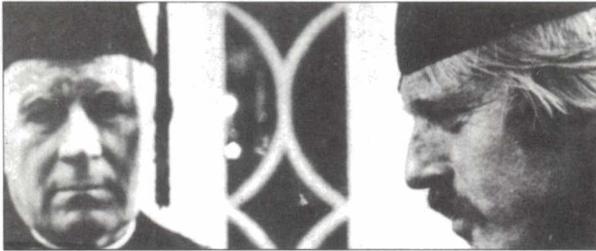
En tal condición, quería reafirmar que la base del humanismo cristiano -en el cual decía inspirarse el gobierno- es el respeto a la dignidad humana, lo que implica la preeminencia del hombre por sobre el Estado. Luego pasaba a los aspectos puntuales: una petición directa al Presidente de la República para ayudar a esclarecer de una vez el destino de los desaparecidos; una reflexión acerca de los partidos políticos, proponiendo que se consideraran no sólo sus males, sino también sus frutos; la reivindicación de la dignidad de la política como forma de participación; la exigencia de que la unidad nacional se construyera sobre la base de la pluralidad de las opciones; la advertencia acerca de las medidas que restringían la libertad de prensa, cerrando paso a un consenso informado y auténtico; la necesidad de promulgar una Constitución ratificada por el voto popular, y una prevención sobre la difícil situación económica que vivían muchos chilenos.

La publicación desató una tempestad de reproches por parte de sectores cercanos al gobierno. La prensa se descargó con rara unanimidad para criticar punto por punto la declaración, y hubo declaraciones con fuertes alusiones a los obispos.

La reacción más sonora vino, sin embargo, del propio gabinete, cuando el ministro de Justicia recién designado, Renato Damián, hizo su discurso de inauguración del año académico en la entonces Sede Valparaíso de la Universidad de Chile. El ministro se extendió en un violento ataque contra “los de ropajes con ribetes morados”, que “abandonan su sagrado ministerio para tomar el puesto que dejaron aquellos partidos que en una u otra forma contribuyeron a destruir el país”, y que “se lanzan en un político e hipócrita ataque al gobierno”.

El obispo Bernardino Piñera, a la sazón secretario del Comité Permanente, dirigió una protesta al ministro y otra al Presidente Pinochet. Este último respondió que las afirmaciones de Damián “no comprometen, ni en su contenido ni en su forma, al gobierno que presido”. Un día después, el ministro ratificó sus opiniones y agregó otras más en una entrevista con un diario. Entonces el propio gobierno advirtió que la situación se volvía insostenible, y destituyó a Damián de su cargo. En su lugar asumió Mónica Madariaga, la primera mujer en el gabinete del régimen militar.

Después de la celebración de San José Obrero -que aquel año alcanzó un nivel de apoteosis-, inicié un extenso viaje por Europa y América Latina, en el curso del cual noté, ahora con gran fuerza, que nuestra tarea era inmensamente valorada fuera de las fronteras.



El cardenal con el actor Robert Redford, al recibir sus doctorados honoris causa en el Williams College de Massachusetts, el 5 de junio de 1977.

Como símbolo claro de este aprecio, aquel año fui distinguido con dos doctorados *honoris causa*, uno de la Universidad de Panamá y otro del Williams College, de Massachusetts. En este último había un grupo de muy importantes galardonados, entre los cuales yo me sentía algo extraño y un poco desorientado; de hecho, conversé algunas veces con un joven rubio, actor de cine, sobre el cual me explicaron después que era poco menos que un honor acercarse; se llamaba Robert Redford y la verdad es que a mí me pareció muy simpático.



El obispo Marcos McGrath impone el doctorado honoris causa de la Universidad de Panamá al cardenal Silva Henríquez.

Mientras realizaba la gira, a fines de mayo recibí varias cartas del obispo Valech -que normalmente se quedaba a cargo de la diócesis en mis ausencias-, contándome de un truculento incidente en el cual los servicios de seguridad habían envuelto a funcionarios de la Fundación Cardijn. El propio Luis Antonio Díaz, que dirigía la entidad, había sido hostigado, y entre los trabajadores se vivía un gran nerviosismo.

El caso había comenzado con el secuestro de un niño de apellido Veloso, hijo de un funcionario de la Cardijn, a manos de la DINA, que le obligaba a inculpar a otros como autores del delito en su contra. Entre estas personas había algunos de izquierda, otros DC y otro empleado de la Fundación. Valech investigó el caso concienzudamente, y llegó a determinar que el niño Veloso había sido forzado a mentir, y que la familia entera estaba vigilada por la DINA. Incluso los visitó, se encontró con los *dinámicos* (como se les decía a los agentes) y levantó un acta con ayuda de Bernardo Herrera, el fiel y eficiente secretario del Arzobispado. Los incidentes extraños se sucedieron hasta tal punto, que incluso el director de una revista que apoyaba al gobierno, nuestro buen amigo Jaime Martínez Williams, sufrió un intento de secuestro por las publicaciones sobre el caso.

Con esos antecedentes, y acompañado por el obispo Enrique Alvear, Valech visitó al Presidente Pinochet y le intentó demostrar cómo la DINA le mentía. El general escuchó con atención y se mostró molesto;

en cierto momento dijo que en verdad la DINA se le arrancaba a veces de control, y que recientemente había tenido que hacer una reorganización. Quedó de arreglar el problema.

Y parece que lo hizo, porque un tiempo después la DINA debió dejar a los Veloso, que partieron al exilio, y liberar a los otros acusados; pero uno de ellos pasó después a engrosar la angustiada lista de los desaparecidos.

¿Qué buscaban los agentes con todo este aparatoso montaje? Al parecer, un solo objetivo: destruir las organizaciones sindicales que, todavía débilmente, habían comenzado a recomponerse. A fines de abril, estos grupos habían dirigido el primer "pliego de peticiones" al gobierno militar; su texto fue redactado justamente en las oficinas de la Fundación, y el mismo Veloso lo mecanografió. Si lograban envolver a esta institución de la Iglesia en una intriga de secuestro, quitarían el techo protector a los sindicalistas.

En verdad, la Fundación Cardijn había ido disminuyendo ya su ritmo de actividades, muchas de las cuales se transfirieron, como era natural, a la Vicaría de Pastoral Obrera. Toda la truculencia invertida en estos ataques era innecesaria; y así lo detectaron poco después los agentes de seguridad, que pasaron a presionar a la Vicaría. El hijo de José Aguilera, secretario ejecutivo de la Vicaría, fue golpeado e interrogado por las actividades de su padre y del vicario Baeza, mientras que la institución era vigilada estrechamente.

A fines de agosto, la DINA fue formalmente disuelta y en su lugar se creó la Central Nacional de Informaciones (CNI).

En un comienzo, este cambio representó una gran esperanza, porque el gobierno aseguraba que el nuevo organismo se dedicaría a centralizar y analizar la información, con lo cual sugería que no tendría facultades operativas. Creo que algunos nos apresuramos a celebrar la novedad; pero unos días después los abogados de la Vicaría de la Solidaridad nos demostraron que no había cambios prácticos ni jurídicos; desde luego, el jefe de la DINA pasó a ser jefe de la CNI durante un período inicial.

Cristián Precht quería publicar en la revista *Solidaridad* los textos de los decretos leyes de la DINA y de la CNI, sin comentarios, sólo para que se pudiesen comparar objetivamente. Lo iba a hacer, cuando el general Court se enteró del proyecto y comenzó a insistirnos en que tal cosa sería sumamente perjudicial, que la ONU estaba a punto de votar

una nueva resolución acerca de los derechos humanos en Chile, que con esto se desalentaban todos los esfuerzos por mejorar la situación... en fin: me convenció a mí, y también a Cristián, quien accedió a no publicar los textos comparados.

Así vivíamos en aquellos días. Cada concesión que hiciéramos podía significar un refuerzo para los puentes que era necesario tender y mantener.

Mis vicarios y sacerdotes, muchas veces atenazados por el peso de las experiencias que les tocaba sufrir, me reprochaban estas “debilidades” que a su juicio no hacían bien a la Iglesia. Pero yo estaba convencido firmemente -y no he dejado de estarlo- de que no es misión de la Iglesia derrocar ni sustentar gobiernos; los pastores tenemos que cumplir con nuestros deberes al margen de los gobiernos, los partidos o las ideologías, aunque ello a veces desgare nuestras humanas tentaciones de favorecer las causas que creemos justas.

Traté siempre de transmitir igual mensaje a mis amigos militares: la Iglesia no puede dejar de denunciar los atropellos a la dignidad del hombre, porque en ello se le va la vida; no actúa en esto por cálculo ni conveniencia: sirviendo a una Palabra superior, no sigue otra estrategia que la de la verdad, la caridad y el amor; por tanto, quien quisiera ver en ella al enemigo o al opositor, comete un error tan grande como el de aquél que intenta instrumentalizarla.

En el caso de un régimen como el que entonces vivíamos, nuestro deber estaba del lado de los más débiles, los más pobres y los más necesitados; no habíamos sido hechos para las tibiezas cortesanas. Debíamos ser “la voz de los que no tienen voz”, para reclamar la supremacía del hombre por sobre la razón de Estado. Pero eso no nos erigía en una fuerza política ni nos permitía suplantar a las organizaciones perseguidas.

En la Vicaría de Pastoral Obrera se decía, con humor, que la Iglesia de Santiago estaba siendo también “el roneo de los que no tienen roneo”, aludiendo a las decenas de organizaciones que procuraban reconstituirse con los medios que les podían proporcionar esos esforzados padres. Lo cierto es que la relación entre lo sindical y lo político fue uno de los puntos críticos en aquel año 77, porque el régimen militar sospechaba -a veces con razón- que a través de las entidades laborales los partidos tratarían de mantener su vigencia.

El 16 de noviembre ocurrió un hecho que nos puso de lleno en este tema. Ese día, las fuerzas de seguridad allanaron violentamente la Casa de Ejercicios San Francisco Javier, situada en la comuna de Ñuñoa. Los agentes entraron fuertemente armados y sorprendieron lo que el gobierno calificó como “reunión político-sindical”. Durante la operación se tomaron fotos a los participantes, las que después fueron profusamente difundidas en la prensa: Andrés Zaldívar, Tomás Reyes, Eduardo Ríos, Ernesto Vogel y varios otros.

Al día siguiente envié una carta de protesta al Presidente Pinochet por el hecho inaudito de que un recinto bajo tuición del Arzobispado hubiese sido sometido a semejante violencia. También se emitió una declaración deplorando los hechos.

El Presidente respondió que no había habido allanamiento alguno, por cuanto el contingente había entrado con previa autorización de las Hermanas Dominicanas de Pichermont, tutoras del lugar, y que en el interior se había sorprendido una reunión que atentaba contra la legalidad vigente. Agregaba que no hubiese querido dar publicidad al asunto, pero que la declaración del Arzobispado precipitaba las cosas. Recuerdo que hablé con el general Court para explicarle punto por punto dónde nos parecía que el Presidente había sido mal informado, o incluso engañado por sus propios funcionarios.

Pero una semana después, en vista de que la campaña de prensa arreciaba, decidí emitir una declaración más extensa, poniendo los hechos en su lugar y explicando que muchas instituciones, de muy diverso signo, solicitaban la Casa de Ejercicios en el marco de la ley. Si había una reunión del tipo supuesto por el gobierno, esto no tenía por qué ser negativo: la Iglesia chilena cree en el derecho de los trabajadores a debatir los problemas que los afectan; y para la Iglesia chilena, ser alero de ellos “constituye un honor”, como poco antes nos lo había dicho el cardenal Villot. Agregué que lamentábamos que se prolongaran, y aun aumentaran, las restricciones contra el mundo obrero, mientras las personas poderosas disponían de amplias tribunas para expresarse.

No había pasado todavía un mes de este incidente, cuando la comisión de derechos humanos de la ONU propuso una resolución condenatoria al gobierno chileno, la que fue aprobada por una mayoría todavía superior a la del año pasado, con 98 votos, incluido el de EE.UU.

Esto se conoció el 7 de diciembre de 1977. El 21, el Presidente Pinochet apareció en cadena nacional de radio y televisión, convocando a los chilenos a una "Consulta Nacional" en contra del voto de la ONU, la que tendría lugar apenas quince días más tarde. Fue todo un impacto. Un intenso ajetreo político subterráneo y semi secreto se inició alrededor del intempestivo anuncio del general, mientras los equipos del gobierno ponían en marcha faenas aceleradas para realizar el comicio.

Supe que dos de las ramas de las Fuerzas Armadas -la Fuerza Aérea y la Armada- se manifestaron en contra de esta Consulta, lo mismo que el contralor general de la República. Pero la decisión del general Pinochet era tan fuerte, que pasó por encima de estos gravísimos obstáculos -incluso jubiló al contralor- e hizo una velocísima campaña de propaganda. Cuando conocimos el texto del voto -que en síntesis apelaba al patriotismo en contra de la ONU y confería al gobernante la confianza para continuar-, el Comité Permanente decidió escribir una carta a los miembros de la Junta de Gobierno, lo que se informó públicamente. La misiva valoraba la convocatoria al pueblo, como una demostración de confianza en su madurez cívica; pero inmediatamente hacía notar las deficiencias de la situación: insuficiente información ciudadana, formulación polivalente del voto, propaganda unilateral, restricciones a la opinión en virtud del estado de emergencia; ¡ni siquiera mencionábamos la total ausencia de registros electorales!; dadas tales circunstancias, pedíamos que la Consulta fuese suspendida o postergada, al menos hasta que hubiese condiciones para conferirle validez moral.

Los miembros de la Junta nos respondieron individualmente. Salvo en la Fuerza Aérea, cuya posición discrepante se había hecho ya muy notoria, y en la Marina (que se limitó a acusar recibo de la comunicación), en los otros cuerpos armados nuestro llamado resultó mal acogido y se nos imputó, con mayor o menor elegancia, inmiscuirnos en asuntos que no nos competían.

Una vez más no éramos escuchados. La Consulta tuvo lugar el 4 de enero de 1978, y esa noche el gobierno dijo que había triunfado con el 75%. Grupos exaltados, en ánimo triunfalista, llegaron alrededor de la medianoche hasta mi casa, profiriendo gritos e insultos. Pero nada de esto era muy relevante; porque con tan anómalas reglas el acto electoral no tuvo ninguna credibilidad externa, y sirvió escasamente para dirimir algunos conflictos que habían comenzado a plantearse dentro del propio gobierno.

Una historia de lealtades

A fines de 1977 supimos que las dolencias que aquejaban al nuncio Sótero Sanz de Villalba eran ya irreversibles. En noviembre, el Papa lo relevó de su misión en Santiago y lo destinó como delegado apostólico a México. Pero don Sótero ni siquiera pudo irse, y tuvo que renunciar al cargo sin jamás haberlo asumido.

Enero del 78 significó para él una prolongada y dolorosa agonía. Sufrió una enormidad cada uno de esos días, y, como dijo el padre Raúl Hasbún en un hermoso testimonio posterior, quiso ansiosamente “sufrir con alegría, plegarse sin reservas al designio de amor del Padre que lo asociaba íntimamente al dolor de su Hijo crucificado”. El 17 de enero, lejos de su patria natal española, pero rodeado por la amistad de muchos sacerdotes chilenos, don Sótero se entregó finalmente a la muerte.

Fue un duro golpe para todos los que habíamos estado cerca suyo, en tiempos tan arduos y bajo tan severas tensiones. No niego que tuve diferencias con él. El papel de un nuncio no está destinado a ser apacible ni grato, mucho menos cuando las circunstancias del país son turbulentas. Don Sótero estuvo en Chile los siete años más difíciles de la segunda mitad del siglo: desde 1970 hasta 1977. Debí entenderse con dos regímenes de signos opuestos, presenciar una revolución violenta y asistir a las más complejas convulsiones de la Iglesia.

Discrepamos muchas veces, y algunas de ellas con dureza. Pero yo aprecié el cariño que don Sótero desarrolló hacia Chile, su deseo ferviente de ver a nuestra tierra en paz y reconciliada, su inclinación personal hacia el mundo de los pobres. Hasta los últimos meses que pudo, usaba los fines de semana para trasladarse hacia zonas rurales o periféricas, a decir misa, y actuaba allí como un sacerdote más. Fue este cariño espontáneo hacia un país que no era el suyo lo que demostró, sin derecho a duda, cuánta bondad lo animaba, cuánto afán de servicio, cuánta sed de comprender.



El nuncio Angelo Sodano y el cardenal Silva Henríquez se reúnen con el clero de Santiago el 23 de marzo de 1978.

El Papa, consciente de que el vacío en la Nunciatura de Santiago era inconveniente, apresuró lo que más pudo el nombramiento del sucesor de don Sótero. Y eligió a Angelo Sodano, que había sido secretario de la Nunciatura en el año 67, y a quien todos los obispos conocíamos bien. Ordenado obispo por el cardenal Antonio Samoré pocas semanas antes de partir a Santiago, presentó sus cartas credenciales en marzo del 78.

En cuanto llegó tuvimos un espléndido encuentro con el clero de Santiago, y casi de inmediato asistió a las primeras conversaciones del Episcopado sobre el documento preparatorio de la Tercera Conferencia del Celam, que se realizaría a comienzos de 1979 en Puebla, México.

Para entonces, el gobierno chileno había comenzado a entrar en una etapa nueva, en la que asomaba un deseo de institucionalizar el proceso político. El Presidente había anunciado en julio de 1977 un plan político de largo plazo, que significaría la restauración, primero, de algunas instituciones democráticas, y luego del poder civil, durante la década siguiente.

La desaparición de la DINA había disminuido considerablemente los casos de tratos inhumanos y el gravísimo problema de los detenidos desaparecidos, que había merecido incluso una reflexión del Papa ante el cuerpo diplomático, a comienzos de año, en términos severos: “¿Cómo no sentirnos turbados cuando se sabe que muchas familias angustiadas hacen en vano súplicas por sus seres queridos, y que incluso sus peticiones de información se acumulan sin recibir respuesta?”. Pese a los progresos, ciertos episodios hacían temer aún que tales fenómenos podían resurgir en cualquier momento. Avanzando a grandes trancos en

la investigación del asesinato del ex canciller Orlando Letelier, Estados Unidos había comenzado a revelar una intrincada trama en cuyo centro figuraba también la DINA.

En abril, este conjunto de signos se plasmó en el nombramiento de un nuevo ministro del Interior, Sergio Fernández, que fue el primer civil en asumir tal cargo, y que lo hizo con facultades de virtual primer ministro.

Seis días después de ocupar el Ministerio, Fernández promulgó el decreto ley 2.191, por el cual se declararon amnistiados todos los delitos contra las personas y la propiedad cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, con el expreso fin de “dejar atrás odiosidades hoy carentes de sentido”.

Muchos sacerdotes, y ciertamente una mayoría de los obispos, recibimos esta noticia con especial alegría. El Episcopado venía pidiendo una fórmula jurídica que favoreciera la reconciliación, y en algunos documentos y cartas privadas la palabra amnistía había sido explícitamente citada. Entendíamos que el país requería de un perdón amplio, que abarcara a muchos sectores enfrentados, y que permitiera encarar el futuro con una visión despejada de rencores históricos.

Había otras circunstancias favorables: la nominación del ministro del Interior permitía suponer que se cumpliría finalmente la promesa de desmilitarizar el régimen político. Así me lo aseguraron, por lo demás, algunos altos funcionarios del gobierno en aquellos días.

Sin embargo, mis vicarios tuvieron una reunión, a la que no pude asistir, en la cual llegaron a la conclusión de que la amnistía beneficiaría solamente a los agentes del Estado que hubiesen cometido delitos contra los derechos humanos, e incluso comunes. Ellos habían deducido esto a partir del análisis del texto legal, del hecho de que la amnistía en nada beneficiaba a los exiliados (muchos de los cuales sufrían pena de extrañamiento), y de la inclusión de numerosos delitos comunes en el campo de exención penal.

De modo que designaron al vicario de la Solidaridad, Cristián Precht, a quien días antes yo había nombrado además secretario general de Pastoral, para decirme que la Iglesia no debía aceptar esto.

Me opuse rotundamente. Cristián estaba tan convencido, que discutió de manera tenaz. Creo que fue una de las muy escasas ocasiones en que nos levantamos la voz con enojo, aunque al final él, leal y obediente como siempre ha sido, acató la decisión de su pastor. Así es que ordené que se emitiera una declaración a nombre del Arzobispado,

y de la propia Vicaría de la Solidaridad, valorizando “el espíritu de concordia y reconciliación invocado en la adopción de esta medida y celebrándola como signo alentador de un reencuentro fraterno”.

Hubo prisioneros políticos que fueron liberados, y un ambiente de bonanza que se extendió por algunos días.

Pero debo admitir que las aprensiones de mis vicarios no eran del todo infundadas: junto con estos gestos positivos, el drama de las víctimas se fue también ahondando; en especial, el de los desaparecidos. En cosa de semanas, los juzgados del crimen comenzaron a cerrar los procesos iniciados para dar con el paradero de estas personas, en nombre de la amnistía. Aunque la Corte exigió después la reapertura de muchos de ellos, las causas sufrieron un daño virtualmente irreparable.

Esto se detectó mientras yo salía del país, para una gira por Europa y Estados Unidos, donde la Universidad de Yale había tenido la bondad de conferirme un nuevo doctorado *honoris causa*, una vez más debido al trabajo de la Iglesia chilena en el campo de los derechos humanos. Los vicarios volvieron a reunirse y emitieron ahora una declaración pública denunciando estos hechos. A mi regreso, la situación se había deteriorado lo suficiente como para que los familiares de los detenidos desaparecidos iniciaran una huelga de hambre, en el interior de tres parroquias y de la sede de la Unicef en Santiago.

Se trataba de una acción desesperada, y creo que algunos funcionarios prominentes del gobierno también lo entendieron así. Después de algunos esfuerzos, que resultaron infructuosos, por lograr que los familiares detuvieran su acción, planteé el tema ante el Comité Permanente, con el objeto de realizar una gestión conjunta, y por tanto con más fuerza, ante el gobierno.

Se concretó una cita con el ministro Fernández, a la que asistimos el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Francisco de Borja Valenzuela, y yo. Llevamos a ella una proposición: puesto que el caso de los desaparecidos conllevaba una dramática carga de problemas humanos y sociales, sería fundamental que el gobierno declarase por instrumento legal la suerte de los desaparecidos; para ello no sería aceptable una declaración general de muerte presunta, porque los casos tenían distintas connotaciones. Por mi parte, y a recomendación de los vicarios, le propuse también la creación de una comisión investigadora, de alto nivel y solvencia moral, que con la ayuda del gobierno pudiera dar respuestas sobre cada caso.

El ministro tuvo una actitud muy abierta. Nos explicó que su misión era institucionalizar el proceso iniciado con el régimen militar, y que para ello quería resolver los problemas que heredaba del pasado reciente. Tal como nosotros, él tenía la intuición de que los desaparecidos habían muerto, y quería buscar la manera de resolver el problema de sus familias. No es que contara con antecedentes distintos de los nuestros: le parecía que, por las circunstancias y el tiempo transcurrido, el destino de estas personas ya estaría sellado. A diferencia de algunos de sus colegas, no intentaba negar la existencia del drama; quería hallar manera de resolverlo.

Yo creí en la rectitud de las intenciones del ministro Fernández. Si él tenía la oportunidad de dar un cauce jurídico al gobierno militar, me parecía terrible contribuir a que la perdiera. Pero, por supuesto, sabía bien que otras fuerzas se movían en el interior del régimen, y que las intenciones de un solo funcionario, por elevado que fuese, no bastarían.

Además, en otras áreas, como la economía, observaba con dolor la aplicación de políticas de un liberalismo crudo y ortodoxo, que estaban aumentando aceleradamente la brecha entre los más ricos y los más pobres. Cuando el Comité Permanente emitió una declaración para prevenir sobre los efectos de un plan elaborado por Odeplan contra el desempleo, y que significaba de hecho que los trabajadores perderían las últimas conquistas que quedaban en pie, se nos atacó duramente y se nos acusó de “demagogia”.

Evidencia adicional de que el gobierno estaba dispuesto a ser inflexible en este terreno, era el hecho de que le molestaba sobremanera la defensa que la Iglesia hacía de los trabajadores y el papel que en ello tenía la Vicaría de Pastoral Obrera.

Para el 1° de mayo de aquel año, esta Vicaría había preparado una serie de programas radiales que -siguiendo el método de la Gran Misión- serían objeto de reflexión en comunidades de base; apenas salió el primero por la radio *Chilena*, el director de Dinacos, mayor (R) Hugo Morales, me llamó para pedir la suspensión de la serie, en aras de la paz pública. Aprecié que se trataba de una decisión ya tomada, y ordené acatar la instrucción oficial, aunque en la propia radio debía aclararse que se trataba de esto. Sé que los vicarios y algunos sacerdotes se molestaron por lo que consideraron otra inadmisibles “debilidad” mía. Pero creo que a la larga entendieron que, así como la Iglesia no tiene la

misión de legitimar gobiernos, tampoco puede constituirse en resistencia a ellos, cualquiera sea la opinión que les merezcan a los eclesiásticos.

Entretanto, en el tema de los desaparecidos, Fernández rechazó la idea de la comisión investigadora, pero reafirmó la decisión oficial de avanzar en una solución del problema. Con estos argumentos, finalmente, el 7 de junio decidí visitar personalmente a los huelguistas de hambre y pedirles que abandonaran su peligrosa acción testimonial, que ya los había debilitado severamente. Ellos accedieron esa misma mañana, cuando cumplían 17 días en el movimiento.



El patriarca Elías IV visita al cardenal Silva Henríquez en su residencia, en junio de 1978. A la izquierda del cardenal aparece el obispo Sergio Valech; en el extremo de la mesa, el padre Santiago Tapia.

Tuvimos nuevas conversaciones con el ministro Fernández, en las que pudimos notar sus dificultades para avanzar. El 15 de junio declaró que la verdad, “cualquiera que sea”, podía ser investigada por los tribunales (lo que era una importante aclaración sobre la amnistía), y que de todos modos, el gobierno “explorará cualquier camino serio que, respecto de algún caso particular, pueda presentársele”. Evidentemente, esto parecía ser una luz.

La Vicaría de la Solidaridad comenzó entonces a preparar un *dossier* de casos pormenorizados, donde las evidencias fuesen claras e irrefutables; al mismo tiempo, pedimos a otros obispos que hicieran lo mismo en sus diócesis.

Durante junio, julio y agosto del 78, decenas de expedientes fueron enviados al Ministerio. Como el tiempo pasaba y no había respuesta, decidimos enviar una selección de aquellos casos donde había constancia de que las detenciones habían sido realizadas por agentes policiales o militares identificados. Pero tampoco esto bastó: el silencio oficial continuó inmutable.

Estoy convencido de que el gobierno militar cometió en esto su más grave error. Al no extremar el celo que se requería para investigar las denuncias que le presentamos, no sólo arrojó sobre sí mismo la sombra perpetua de la sospecha, sino que permitió que un desgarró profundo en la convivencia nacional continuara vigente más de una década después.

Cuando leí, en abril de 1991, el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación -¡tan parecida a la que proponíamos en 1978!-, pensé con tristeza y estremecimiento en estas cosas. ¡Cuánto tiempo soportando el dolor indecible de esta situación, sólo para que tres lustros más tarde, hombres intachables confirmaran que agentes del Estado, y en cierta medida el Estado mismo, estuvieron comprometidos en la destrucción física y moral de centenares de compatriotas! ¡Cuántos años de angustia se pudieron evitar con una decisión valiente y clara!

En aquellos días la mayoría de los obispos de Chile teníamos la convicción de que, sin superar estos problemas que algunos querían ver como secundarios, el país no recuperaría su desarrollo armónico ni su capacidad de entendimiento. Destaco una frase escrita en octubre de 1978, cuya demostración histórica hoy resulta impactante: "La nueva institucionalidad democrática es el nombre de la paz en Chile. El fin de los odios desatados, de las pasiones sin control, de las exclusiones fraticidas. Es el principio de la gran tarea de reconstruir una comunidad que, madurada por el dolor y la experiencia, sea capaz de retomar la gran tradición espiritual y cívica de los chilenos".

Este texto pertenece al documento de trabajo *Humanismo cristiano y nueva institucionalidad*, que fue elaborado por el Comité Permanente y publicado el 4 de octubre. Había sido concebido, por encargo de la Asamblea Plenaria, para puntualizar la visión cristiana del problema institucional en los momentos en que el gobierno discutía, casi a puertas cerradas, una nueva Constitución para el país.



El Comité Permanente del Episcopado en octubre de 1978: el obispo Bernardino Piñera (secretario), el obispo Orozimbo Fuenzalida, el arzobispo Francisco de Borja Valenzuela (presidente), el cardenal Raúl Silva Henríquez, el arzobispo Juan Francisco Fresno (vicepresidente), el obispo Carlos Oviedo y el obispo Sergio Contreras.

En vista de la diversidad de temas que era necesario abordar, decidimos dividirlo en dos partes: la primera, recordaría los principios de la ética social según la perspectiva cristiana; la segunda, intentaría aplicar esta doctrina a problemas concretos del Chile de esos días.

Así, la primera parte recordaba la presencia activa de la Iglesia en los grandes momentos de la historia nacional, y su tarea de inspiración moral y libertadora. A la luz de este papel, llamaba a los cristianos a proponer "un tipo de sociedad basada en la fraternidad, la solidaridad, en los cuatro pilares de la paz: la verdad, la justicia, el amor y la libertad; es decir, animada con tales valores morales superiores que pueda reconocerse en ella una *christianitas*, una sociedad vitalmente fecundada por el Evangelio".

Creo que este documento fue uno de los mejores trabajos doctrinarios de aquellos años. Su consistencia, mejor juzgada a la vuelta del tiempo, representa bien la profunda vocación de unidad que consumió los esfuerzos de los pastores chilenos en tiempos violentos.

Sin embargo, como otros textos, recibió el rechazo y los más duros ataques de quienes creyeron verse aludidos en los llamados a respetar al hombre. Una circunstancia aún más desafortunada, que fue la pública afirmación del arzobispo-obispo Emilio Tagle acerca de que el texto no había sido conocido ni aprobado por varios pastores, sirvió a estos sectores para buscar la descalificación total del documento y los autores, acudiendo incluso a la Santa Sede. No hubo resultado en estas gestiones absurdas, pero creo que la virulenta polémica dañó el análisis y la meditación de este trabajo notable.

Un mes más tarde, cuando los ecos de las imputaciones por el documento aún no se apagaban, el Comité Permanente decidió poner punto final a la espera de las respuestas oficiales en el caso de los desaparecidos. Las miles de carillas presentadas ante el ministro del Interior desde todas las diócesis de Chile no habían servido para cerrar la herida abierta. El pesado silencio no debía recaer en la Iglesia: "Lamentamos tener que decir que hemos llegado también a la persuasión de que muchos, si no todos los detenidos desaparecidos, han muerto, al margen de toda ley. Más no podemos hacer. Esperamos que los familiares de los desaparecidos y la opinión pública lo comprendan. Corresponde al gobierno, y no a la Iglesia, dar una solución a este problema". Y luego: "Nosotros, que hemos estado y seguimos estando con los familiares de los desaparecidos a lo largo de su calvario, les pedimos en nombre de Jesucristo y del pueblo chileno que perdonen en su corazón..."

Cuando pocos días después la Vicaría de la Solidaridad reveló la denuncia de que 15 campesinos del pueblo de Lonquén habían sido fusilados y enterrados en unos hornos de cal, y sobre esto vinieron evidencias semejantes desde Laja, Yumbel, Cuesta Barriga y otros lugares, nuestra convicción y nuestro llamado adquirieron una pavorosa concreción. Creo honradamente que sin la súplica de la Iglesia, que caló hondo en el alma generosa de los deudos, la violencia vengativa habría tenido amplios espacios por donde infiltrarse.

Aquel año concordaban varios aniversarios importantes: los quince años de la encíclica *Pacem in Terris*, los treinta de la declaración universal de Derechos del Hombre, y los treinta de la declaración americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Pensando en la triple coincidencia, y en la necesidad de dar una presencia más activa al tema de los derechos humanos en Chile, la Vicaría de la Solidaridad me propuso organizar un simposio internacional, que se realizaría a fines de año en Santiago.

El programa se preparó durante meses, y no niego que los sobresaltos que vivimos en el período me hicieron dudar acerca de su conveniencia. Ciertas tensiones con el propio equipo de mis vicarios, por quienes he sentido siempre un entrañable afecto, me hacían pensar que

tal vez la dureza de los temas con que estábamos lidiando -los derechos humanos, la pobreza, la inflexible política económica, las restricciones a las libertades públicas- nos conducía a ciertos apasionamientos exagerados, a juicios poco matizados, a distorsiones serias en la vocación pastoral: algo así como una alienación en el dolor.

Sé que todos los vicarios tuvieron conmigo una lealtad emocionante. La demostraron en julio, cuando me acompañaron a celebrar en la Catedral de Santiago, que ellos mismos se encargaron de repletar por sus cuatro costados, mis 40 años de sacerdocio, y yo no hallé otra forma que la de un poema para expresar mis atolondrados sentimientos de entonces. La demostraron día a día, en las pesadas decisiones que teníamos que compartir. Y la demostraron incluso en nuestras peores desavenencias.



El cardenal preside la misa de celebración de 40 años de sacerdocio, en la Catedral de Santiago, acompañado por el clero de la Arquidiócesis, el 3 de junio de 1978.

Una de ellas ocurrió justamente a propósito de la huelga de hambre de mayo, cuando fui informado de que una de las parroquias no había sido ocupada por familiares de desaparecidos, sino por militantes comunistas que solamente adherían a ellos. Me pareció que este era un abuso inaceptable, y ordené que el vicario de la zona llamara a la policía para realizar el desalojo de la parroquia. Pero el vicario, que consideraba que actuar de esta manera sería imitar los métodos que estábamos denunciando y que todo ello produciría un grave perjuicio a la Iglesia, desoyó mi instrucción. Al otro día llegó a mi oficina, donde le reproché vivamente su actitud; él presentó su renuncia.

Aquella tarde me llamó el ex Presidente Eduardo Frei, quien anunció que me visitaría por un rato. Llegó acompañado de mi amigo Domingo Santa María, pero ninguno de los dos dijo cuál era el motivo concreto de tan grata reunión. Pronto me vi discutiendo acerca de la ocupación de las parroquias. Frei y Santa María insistieron en que el uso de la fuerza pública para un desalojo sería un hecho nefasto, con consecuencias quizás trágicas. Abundaron en este punto, y debo decir que sus argumentos me convencieron. Nunca pude probarlo, pero siempre sospeché que esta visita tan “casual” se la debía a mis vicarios. Así que cuando me reuní con ellos, al día siguiente, anuncié que rechazaba la renuncia del vicario cuestionado, los reté a todos por no haber sabido explicarme su posición, y les dije que era el colmo que dos laicos tuvieran que hacerlo por ellos. Vi, o creo haber visto, que algunos se sonreían mientras les hablaba. Eran unos hombres muy buenos.

Otro incidente ocurrió en julio, cuando, preocupado por esas pequeñas tensiones, aproveché la circunstancia de unos apuntes preparados en la zona oeste, que a mí me parecieron políticamente cargados, para emitir una carta dirigida a los vicarios, en la que les subrayaba la necesidad de mantener la unidad pastoral y seguir la línea decidida por el arzobispo. La carta fue bien recibida en general, pero tuvo un inesperado efecto negativo: el obispo auxiliar Enrique Alvear, también vicario, se sintió aludido por la referencia a los apuntes, y me envió una dolida protesta, junto con su virtual renuncia. Jamás hubiese querido provocar un sentimiento semejante, de modo que lo llamé y aclaramos el asunto; por cierto, para esto le llevaba ventaja: donde él conocía mi aspereza, yo podía contar con su bondad.

Cuando llegó la hora de materializar el Simposio Internacional, los problemas arreciaron. El 11 de noviembre se reunieron los canónigos del Cabildo Metropolitano, para analizar mi anuncio de que el Simposio tendría lugar en la Catedral. Hubo una sesión bastante polémica, y parece ser que no tuve más que dos solitarios votos de respaldo.

No es una coincidencia tan rara que en los mismos días recibiera una carta del Presidente Pinochet, ofreciéndome los salones del edificio de gobierno, el Diego Portales, para efectuar el Simposio. Decliné esta gentileza subrayando que el sentido del acto era plenamente eclesial, por lo cual deseábamos realizarlo en nuestros propios recintos.

Pero la presión para evitar el uso de la Catedral continuó creciendo, hasta un grado que me pareció peligroso. Propuse entonces a la gente de

la Vicaría que cambiásemos el lugar, para no causar más polémica. Sin embargo, ellos entenderían que en la situación delicada que se vivía, un cambio de última hora podía ser visto como una desautorización; por eso, a pesar de que en un principio no les había gustado la idea de hacerlo en la Catedral, ahora la defendían firmemente.

Después de muchas agotadoras conversaciones, acordamos una modificación: en el templo sólo se realizaría la acción litúrgica inaugural, y todas las sesiones tendrían lugar en las salas de la Vicaría.



Inauguración del Simposio de los derechos humanos en la Catedral de Santiago, el 22 de noviembre de 1978.

Así se hizo. El Simposio resultó exitoso y dejó recuerdos imborrables en la Iglesia de Santiago. Selló, por decirlo así, su compromiso permanente con los derechos humanos y mostró la fuerza de su convocatoria alrededor de estos valores. Mostró también -y esta fue una de sus grandes lecciones para el futuro- que no se trataba de valores de la coyuntura política, ni puramente jurídicos, ni puramente sociales, sino también místicos, ligados al destino que el Señor ha trazado para sus hijos sobre la tierra.

Recuerdo que, como seguramente muchos otros curas de Santiago, fui inundado por la emoción cuando en 1987 el Papa Juan Pablo II bendijo el cirio que en la Catedral recuerda aquel compromiso.

Claro que nosotros teníamos una idea, ya en esos años, del impacto que esta tarea estaba provocando. Lo notamos muy inequívocamente a fines

de 1978, cuando se nos anunció que las Naciones Unidas habían concedido a la Vicaría de la Solidaridad su premio de los derechos humanos.

Viajé a Nueva York con Cristián Precht para recibir ese galardón de manos del secretario general, Kurt Waldheim. Y fuimos, por unos días, la “novia” de esa fiesta: los periodistas nos pedían conferencias, los embajadores nos enviaban saludos, los gobiernos nos hacían llegar sus felicitaciones.

Pero yo iba atormentado por nuestras circunstancias locales. La Vicaría alcanzaba su momento de máximo reconocimiento justo cuando en Chile se habían hecho más evidentes sus debilidades y las críticas internas arreciaban.

Había crecido mucho, sin duda. De las zonas de Santiago llegaban quejas porque los sacerdotes sentían que no había coordinación en la acción pastoral de la Vicaría con la que ellos llevaban en sus terrenos. Se hablaba, dolorosamente, de un “paralelismo” en el trabajo.



El cardenal Silva Henríquez recibe de manos del secretario general, Kurt Waldheim, la medalla de la ONU para la Vicaría de la Solidaridad, por su defensa de los derechos humanos.

En otro nivel, algunos obispos se habían quejado privadamente del “protagonismo” que veían en la Vicaría; algunos opinaban que era una entidad “políticamente teñida”, y que esto era ya un mal endémico.

Varios otros sentían que Cristián Precht se estaba “quemando” en esta tarea tan ardua, y que con ello se le estaban cerrando prematuramente las puertas al episcopado. Cristián era apreciado como uno de nuestros mejores sacerdotes, y a todos nos parecía dramático que, expuesto como estaba a los embates de uno y otro lado, terminara convertido en una figura polémica y controvertida.

No faltó a la verdad si digo que esto último fue lo que más peso tuvo para mí.

Obsesionado por la idea de estar perjudicando a Cristián, fui madurando en los meses finales de 1978 la idea de sacarlo de ese cargo. Conversé este tema con varios de mis amigos sacerdotes de Santiago, y cierto día en que me invitó a su departamento recién adquirido, se lo planteé también a Juan de Castro, a la sazón vicario de la zona oriente y una de las personas que había hecho valer con más fuerza su crítica al estilo de la Vicaría.



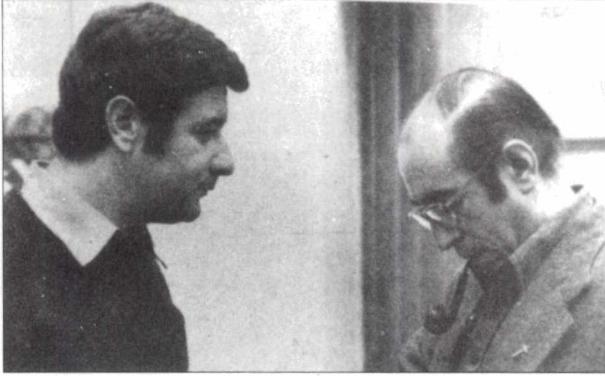
En el aeropuerto de Pudahuel conversan con el cardenal su secretario privado, Luis Eugenio Silva, y los vicarios Cristián Precht y Gustavo Ferraris.

Yo sabía que Juan y Cristián eran muy amigos; y sabía que a Cristián le gustaría asumir en la zona oriente. Un cambio de posiciones sería, pues, posible. Juan de Castro aceptó a condición de que también lo hiciera Cristián, y advirtiéndome que sus opiniones sobre la línea de la Vicaría eran tan críticas, que él no podría hacer otra cosa que introducirle cambios.

En verdad, yo también quería esos cambios. Habiendo cumplido ya los 71 años, me quedaban sólo cuatro antes de “jubilar” como arzobispo de Santiago, y una sola idea me desvelaba en torno a tan inminente asunto: no dejar cargas ni aparatos inmanejables a mi sucesor.

La Vicaría era uno de esos casos; se había hecho grande y fuerte, como parte de su propia estrategia de supervivencia en un medio tremendamente hostil. A mi parecer, había llegado la hora de detener ese proceso e irlo atenuando progresivamente, de modo que el nuevo

arzobispo hiciera lo que las circunstancias y su correcto entender aconsejaran. Era obvio que tal cambio no podrían realizarlo las mismas personas que habían dado su configuración y su prestigio a la organización.

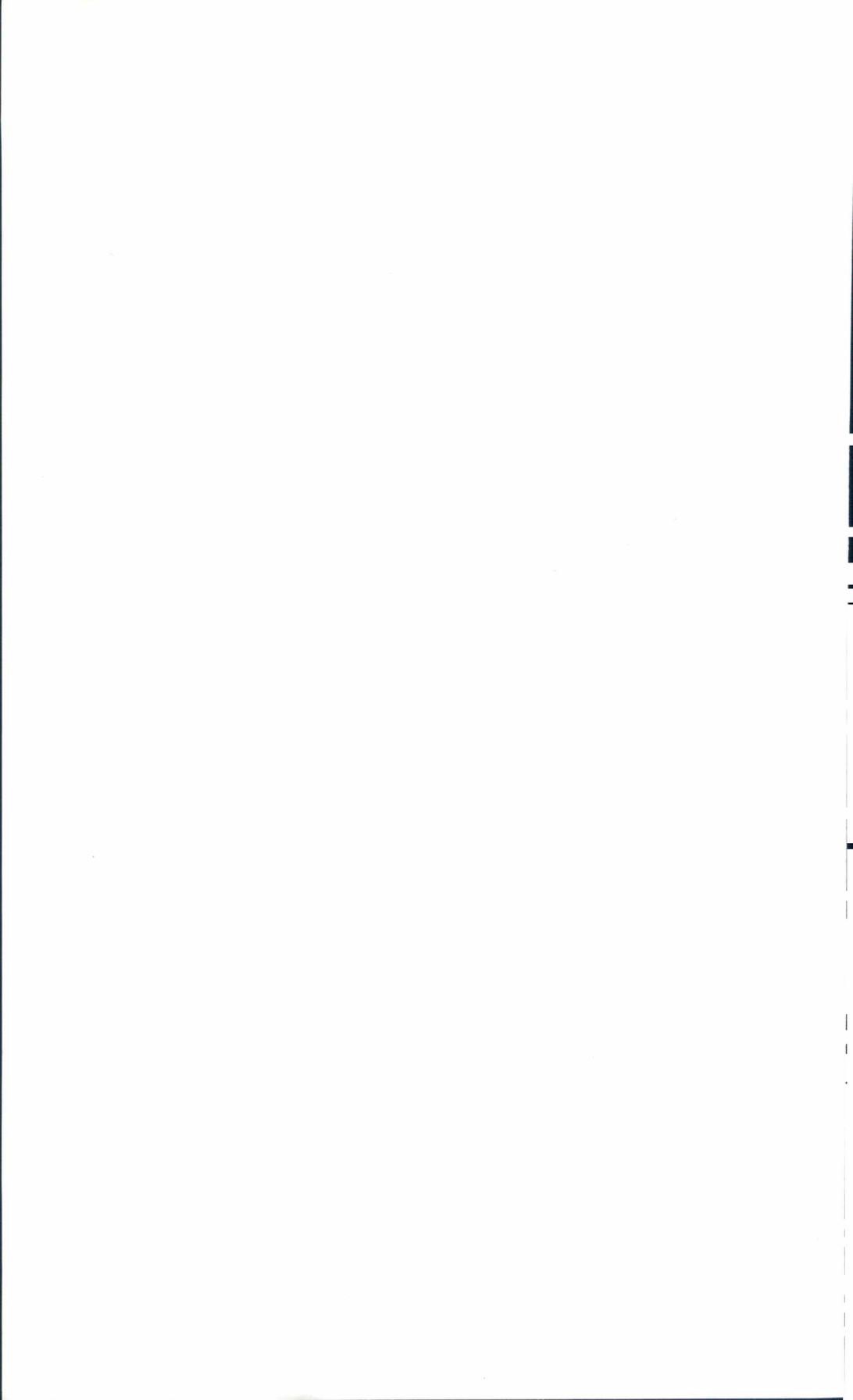


Los vicarios Cristián Precht y Juan de Castro, a comienzos de 1979.

Pero yo sabía bien que esta decisión sería tremendamente dolorosa para Cristián. Conocía su entrega absoluta a esta causa difícil, y la lealtad a toda prueba que había mostrado para defenderla. Yo no quería perder su amistad, su confianza, su fidelidad; pero sobre todo, no quería herirlo.

Demoré la conversación crucial hasta después de que recibimos juntos el premio de la ONU, que en muchos sentidos era su propio premio. Escogí cierta mañana apacible, en la casa de los Salesianos de Nueva York. Entonces, con muchos prolegómenos, se lo dije. Fue un instante terrible, y todavía me asombra la generosidad con que Cristián lo aceptó.

Después regresamos a Chile.



El año de los tres Papas

El Papa Pablo VI contempló, con la lucidez que le fue siempre tan característica, el deterioro rápido de su propia salud a medida que transcurría el decenio de los años 70. La frecuencia de sus viajes disminuyó desde entonces, y sobre todo desde aquel extenuante periplo de fines de 1970, durante el cual se produjo, en Filipinas, el primer atentado contra un Papa en la historia moderna.

Ocurrió cuando el pintor Amor Mendoza lo atacó con un puñal escondido en un crucifijo, y le causó un rasguño sangrante en el pecho. Aunque después se especuló mucho sobre la autenticidad del atentado - se sospechaba de una manipulación política por parte del régimen de Ferdinand Marcos-, lo cierto es que Pablo VI quedó muy impresionado con este ataque inaudito. Su temperamento introvertido y analítico lo llevó a considerar el acto violento como un signo de los tiempos duros, sombríos e irracionales que la humanidad venía viviendo; se preguntaba a menudo qué secreto e inadvertido rencor podía despertar el sucesor de Pedro para suscitar un hecho de esta clase. Y -me consta- se negaba a las respuestas fáciles o meramente consoladoras.

Su estado físico decayó aceleradamente en 1978. Muchas cosas lo afectaron en ese año; creo que tuvo un especial efecto el asesinato de su amigo, el primer ministro italiano Aldo Moro, a manos de las Brigadas Rojas. Poco antes, él había escrito una carta a los secuestradores, suplicando la liberación de Moro; pasaron unos días antes de que el cadáver del primer ministro apareciera en la maleta de un auto, en una calle romana, como toda respuesta a la más alta imploración de la tierra. Pablo VI celebró un angustioso oficio en memoria de su amigo, donde se le vio ya muy débil.

El sabía que no eran sólo achaques de la edad, sino enfermedades irremediables, que en cualquier momento lo llevarían al encuentro con el Señor.

Lo vi por última vez en mayo de aquel año, y noté en él un cansancio inusual, un cierto abandono ante los dolores de la vejez. Yo quería entrañablemente a Pablo VI; sentía por él no sólo la natural admiración al Papa, sino también un cariño de amigo, como se puede ser amigo de un hombre superior a cuyo lado uno siente el privilegio de caminar.

Circunstancias misteriosas me habían bendecido con esta cercanía; la suya fue una de las primeras tarjetas de felicitación que recibí cuando su antecesor, el Papa Juan XXIII, me creó cardenal; más tarde fuimos interlocutores frecuentes durante el Concilio, y no olvido que con él tuve las más largas e iluminadoras conversaciones al entrar al cónclave en que resultó elegido Pontífice.

Admiro aún profundamente sus quince años de pontificado, que a mi juicio fueron uno de los períodos más luminosos de la Iglesia, incluso a pesar de las convulsiones y las polémicas postconciliares. Pablo VI fue el primer Papa de la historia que recorrió los cinco continentes, el primero que interpeló a los hombres más poderosos del planeta en sus propios domicilios. Sus temas recurrentes del desarme, el nuevo orden mundial y el desarrollo marcan, a mi modo de ver, la historia de la segunda mitad del siglo, y ciertamente prefiguraron los tiempos de paz y perspectivas de progreso con que estamos cerrando el segundo milenio.

Sus grandes encíclicas y exhortaciones -*Populorum Progressio*, *Evangelii Nuntiandi*, *Octogesima Adveniens*- interpretan la vocación de una Iglesia hermosamente renovada y de cara al mundo, pero bien anclada también en su misión fundamental y en sus fines trascendentes.

Junto con esta visión penetrante del catolicismo en la era contemporánea, Pablo VI dirigió también las principales modernizaciones de estos nuevos tiempos: la reforma de la Curia, la creación del Sínodo de Obispos, el desarrollo de la Comisión Justicia y Paz, y la apertura de la diplomacia de la Santa Sede a los países del Este europeo.

Todas estas cosas se agolpaban en mi mente cuando lo visité por última vez. Consciente de su avanzado estado de enfermedad, me habló en voz muy baja, como haciendo una confidencia paternal.

-Son los últimos días que me quedan-, dijo.

No pude contener la emoción. Me acerqué impulsivamente a él y le di un beso en la mejilla.

Me miró con esos ojos profundos, siempre vivaces, en los cuales

se advertía cierta pesadumbre, la carga de los problemas de la humanidad que lo marcó con un dejo de pesimismo, con ese aire que algún periodista ha llamado hamletiano. Se acercó a mí y me dio también un beso en la mejilla.

-Usted me ha pagado con una muestra de afecto -dijo-. Yo le retribuyo con la misma muestra...

El 2 de agosto de 1978 realizó una dramática alocución pública, en la que instó a discernir, de entre el estruendo común de aquellos días, las voces verdaderamente dignas de escuchar: era un llamado a la lucidez en un instante de confusión y agitación de la humanidad.

Luego se fue a reposar a Castelgandolfo. Allí, el 6 de agosto, Pablo VI sucumbió ante un ataque cardíaco, que se vio agravado por complicaciones pulmonares.

Conocí la noticia ese mismo día y, pese a lo previsible, sentí una gran congoja. Creo que apenas pude officiar la Misa que se organizó en la Catedral para rezar por su memoria.

Casi inmediatamente recibí el cablegrama del decano del Sacro Colegio, el cardenal Carlo Confalonieri, convocando al cónclave, el que por primera vez se haría según las nuevas normas dictadas por Pablo VI en 1975, a través de la Constitución Apostólica sobre Elección del Romano Pontífice.

En ella se establecía que el cónclave debía empezar entre 15 y 20 días después del deceso del Papa. E imponía una prohibición para votar a los cardenales mayores de 80 años, edad que se computaba el mismo día de inicio del cónclave; esta disposición se debía a una triste escena que todos presenciamos en el cónclave de 1963, cuando el secretario del Sacro Colegio le gritaba a un anciano cardenal para que votara, sin conseguir de éste ninguna reacción: estaba completamente abstraído, con la ausencia propia de la senilidad. En aquella ocasión, Pablo VI me dijo que la falta de limitación en la edad nos podía conducir a situaciones muy lamentables, y que se debía poner pronto fin a tal cosa; en el Concilio fue un activo promotor de las disposiciones en ese sentido y, una vez elegido, las puso en vigencia con gran celeridad.

Partí a Roma unos días después. El *Ferragosto*, del cual los romanos huyen a refugiarse en playas y montes, había sido revolucionado por el impacto de la trágica noticia, y el Vaticano era un hervidero. Inmediatamente me di cuenta de que tendría un papel de cierta importancia en aquel cónclave: muchos de los cardenales no habían asistido nunca

antes a ninguno, y había prelados que desconocían a los demás y se sentían desorientados ante la elección.

Los cardenales tenemos la prohibición de hablar de la sucesión del Papa mientras éste vive; pero tenemos la obligación de hacerlo cuando muere. Y esta obligación no es un juego de palabras, sino una inmensa responsabilidad frente a la cual se siente uno débil y pequeño. Sólo la oración intensa, la invocación al Espíritu Santo y a la Virgen, la plegaria elevada con verdadera ansiedad, pueden dar la fortaleza necesaria para emprender la tarea.

Por todo esto, es normal que entre los cardenales se converse mucho acerca de los candidatos posibles, que se analicen las opciones y que se estudien numerosos nombres. Estos diálogos informales ahorran tiempo en el cónclave, porque permiten entrar con un panorama definido acerca de las posibilidades. Hay, eso sí, una tradición restrictiva, que los cardenales tienden a acatar cerradamente, aun cuando no existe como norma escrita: cada vez que alguien actúa como eventual o aparente candidato, suele perder de inmediato sus opciones.

Recuerdo que en aquellos días conversé mucho con mis amigos del Concilio, los cardenales Léo Josef Suenens y Bernard Alfrink, por quienes supe que había cierta confusión en las opciones que se harían presentes en el cónclave. Ellos me sugirieron conocer la posición de los cardenales latinoamericanos. Para esto, y utilizando los salones de la casa de las Monjas de los Sagrados Corazones, que generosamente me alojaban, organicé varias reuniones con mis hermanos del continente. Uno de ellos, el brasileño Ivo Lorscheider, era mencionado en la prensa romana como *papabile*.

También tuve encuentros con los cardenales Eduardo Pironio, un argentino que ya trabajaba en la Curia, y con Vicente Enrique Tarancón, español, dos hombres con amplio conocimiento de la Iglesia italiana, que es de donde se preveía que saldría el nuevo Pontífice.

Con Pironio nos habíamos hecho muy amigos a lo largo de mis innumerables viajes a Roma; él había tenido conmigo delicadezas y gestos inolvidables, no sólo facilitándome muchas difíciles gestiones en esos viajes, sino llegando incluso al grado de prestarme trajes y paramentos cuando yo no los tenía a mano.

Con todos ellos revisamos los nombres del Sacro Colegio que podrían subir al trono de Pedro. Curiosamente, la norma restrictiva de los 80 años excluía *a priori* y de inmediato a 15 de los 129 miembros que

en ese momento tenía el Sacro Colegio. Entre ellos figuraban algunos que habían sido destacadas figuras en el Concilio, como el cardenal alemán Joseph Frings, los italianos Carlo Confalonieri, Paolo Marella, Alfredo Ottaviani y Pietro Parente, el ucraniano Yosyf Slipyi y el argentino Antonio Caggiano.

De los 114 restantes, además, tres estaban enfermos y no habían podido llegar hasta Roma: Gracias, de Filipinas, Wright, de Estados Unidos, y Filipiak, de Polonia. Así es que seríamos 111 cardenales, 56 de los cuales procedían de Europa y 31 de América.



De izquierda a derecha, los cardenales Giovanni Benelli, Sebastiano Baggio y Eduardo Pironio.

Los candidatos más fuertes eran bien conocidos por todos: el cardenal Giuseppe Siri, que a sus 70 años continuaba siendo una de las voces poderosas de la Conferencia Episcopal italiana, con la cual se identificaban las líneas más conservadoras, como ya había ocurrido durante el Concilio; el cardenal Sebastiano Baggio, nuestro buen amigo desde los tiempos de su paso por la Nunciatura en Chile, que dirigía la Congregación Para los Obispos y que era promovido por un sector importante de la Curia, y el cardenal Giovanni Benelli, durante mucho tiempo sustituto de la Secretaría de Estado, hombre muy cercano a Pablo VI y en ese momento arzobispo de Florencia, con el cual se identificaban otra parte de la Curia y muchos de los cardenales europeos, que lo sentían más cercano al esfuerzo de renovación conciliar.

Estas tres destacadísimas figuras de la Iglesia italiana aparecían en primer plano, cosa que a mi modo de ver terminó por perjudicar su justa apreciación, puesto que los sometió por anticipado al juicio apasionado de los demás. De modo que cuando entramos al cónclave, prácticamente ya se sabía que sería muy difícil elegir a cualquiera de los tres.

Yo había tenido la ocasión de saber, además, acerca de un cuarto candidato, gracias a mi amistad con los cardenales alemanes. Ellos me contaron que tenían la decisión de proponer a un polaco hasta entonces muy poco conocido, llamado Karol Wojtyła, que representaba a la valiente y combativa Iglesia de los países del Este. Después supe que incluso algunos purpurados norteamericanos apoyaban la idea de que el nuevo Papa fuese un polaco, aunque probablemente pensaban en Stefan Wysinski, la gran figura histórica de la iglesia de ese país; los alemanes ya habían detectado que el cardenal Wojtyła tenía tanta o más fuerza que esa figura.

Recuerdo haberles dicho a mis amigos que esa candidatura no tendría posibilidades y que parecía inspirada por el deseo de reparar el daño inferido por Alemania a Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Ellos me dijeron que no importaba, que lo harían de todos modos; y lo cierto es que a mí, como al resto de los cardenales, esta propuesta nos dio la oportunidad de estudiar y apreciar las extraordinarias virtudes del cardenal Wojtyła. La presentación "sin posibilidades" resultaría crucial poco después.

Como era previsible, en el cónclave se presentaron todas las candidaturas anunciadas, pero muy rápidamente se vio que ninguna de ellas concitaba las mayorías necesarias. Así, se produjo una muy rápida decantación de las opciones.

Las votaciones se iniciaron en la tarde del 25 de agosto. Esa noche ya circuló el nombre del cardenal Albino Luciani, patriarca de Venecia, quien tenía un sólido prestigio como pastor. Este aspecto era sin duda el que la mayoría quería privilegiar en la elección, porque el mundo pasaba por una circunstancia tensa y crítica, en medio de la cual la Iglesia debía implantar la semilla de la paz y la fraternidad. Casi no se podía concebir una misión más propia e inherente a la condición de pastor.

La aparición del nombre de Luciani suscitó una tan rápida simpatía de todos, que el cónclave fue el más corto realizado en el siglo hasta ese momento: concluyó al anochecer del día 26, con el patriarca de

Venecia convertido en el Papa número 263 de la historia de la Iglesia.

Yo no conocía bien a Luciani; él sí tenía referencias de mí, especialmente por mis actuaciones en el Concilio. Pero cuando dijo que sería llamado Juan Pablo, en homenaje a sus dos predecesores, entendí que una vez más el Espíritu Santo había estado en la sala del cónclave. Su aparición sobre la Plaza San Pedro, con esa sonrisa luminosa que inmediatamente lo hizo popular, nos estremeció a todos: era un verdadero y santo padre, como queríamos y pedíamos.



En esta fotografía del Sacro Colegio, tomada por una revista francesa poco antes del cónclave de agosto de 1978, se ve al cardenal Albino Luciani justo detrás del cardenal Silva Henríquez.

Luciani había nacido en el seno de una familia humilde, hijo de una señora que trabajó en un asilo de Venecia y de un albañil que militó en el Partido Socialista. Se ordenó sacerdote a los 23 años, en 1935, y siguió un doctorado en Teología en la Universidad Gregoriana. Atravesó por todas las etapas del sacerdocio, hasta que en 1959 Juan XXIII lo nombró obispo de Vittorio Veneto.

Esta vitalísima formación, combinada con una pasión silenciosa por el estudio, lo convirtieron en un pastor descolante, que se caracterizó por una primordial cercanía con el pueblo sencillo, con los humildes y los desamparados. No es que fuese hombre de teología avanzada; de hecho, su maestro personal en estas materias había sido el cardenal Alfredo Ottaviani. Es que tenía una vivencia moderna, activa y sin intermediación. En su diócesis solía transportarse en bicicleta, y se dice

que en cierta ocasión pidió a los sacerdotes que vendieran todos los adornos de oro de sus iglesias para participar en una campaña de ayuda a los pobres.



Juan Pablo I cautivó al mundo con su sonrisa desde su aparición en público.

Por eso no resultó extraño que su ceremonia de entronización fuese la más sencilla de cuantas conocíamos. El 3 de septiembre, de la manera más simple que era posible concebir, todos los cardenales prestamos nuestro juramento a sus pies. Narraré luego por qué en esa ocasión me quedé varios minutos hablándole, entre los nerviosos movimientos de los secretarios y la extrañeza de otros preladados.

Retorné a Chile unos días más tarde. Y no había concluido el mes cuando cierto día, saliendo de la capilla de la casa arzobispal, Cristián Precht me dijo: “Murió el Papa”. Pensé, atolondradamente, que era una noticia atrasada, porque Pablo VI había muerto en agosto. “No”, me dijeron, “ha muerto Juan Pablo I”. Sentí una desazón indescriptible. ¿Qué podía haber pasado? ¿Qué designios se estaban presentando ante la Santa Iglesia?

Recibí poco después el nuevo cable de convocatoria a cónclave. En Roma los cardenales fuimos informados de los detalles de la desgracia. Juan Pablo I se había quedado leyendo en su cama hasta tarde,

en la noche del 28 de septiembre, y sufrió un infarto. En la mañana lo vinieron a encontrar en la misma posición, muerto.



El cuerpo del Papa Luciani, a fines de septiembre de 1978.

Los médicos creían que su corazón no había resistido el pesado ritmo de la Santa Sede; explicaron que tenían certeza sobre la causa y que consideraban innecesaria la autopsia, porque serviría sólo para corroborar lo mismo, al alto precio de dañar el cuerpo del Santo Padre. Todos entendimos que las cosas debían hacerse como ellos decían.

Comenzó entonces la nueva ronda de nombres, reuniones, encuentros informales e infinitas especulaciones de la prensa. El desconcierto era todavía tan grande -Juan Pablo I había durado escasos 33 días en el Pontificado-, que cualquier nombre parecía posible si salía en las letras de molde de los numerosos periódicos italianos.

Otra vez, los candidatos “fuertes” eran los italianos, aunque la lista se había reducido prácticamente a dos: los cardenales Siri y Benelli.

El cardenal Siri tenía la ventaja de ser uno de los miembros más antiguos del Sacro Colegio. Había recibido el *capello* a una edad excepcionalmente temprana, por personal decisión del Papa Pío XII. Debido a esto, se lo identificaba con el temperamento ascético y riguroso de ese gran Pontífice, y se le atribuía un pensamiento conservador o, cuando menos, reactivo a las innovaciones. Pero al mismo tiempo, este era su tercer cónclave como candidato, por lo que a muchos no nos parecía posible que fuese elegido. Con todo, esta apreciación era muy discutible, porque en verdad el descolante cardenal continuaba teniendo una inigualada influencia entre obispos y miembros de la Curia.

Benelli, en cambio, era un caso curioso. Tenía 57 años y había dejado el año anterior la Secretaría de Estado para partir al Arzobispado florentino. Por muchos años había sido uno de los hombres más cercanos al Papa Pablo VI, de quien había sido secretario privado cuando Montini era sustituto en la Secretaría de Estado (un cargo al que también llegaría Benelli). Se decía que Pablo VI “moldeó” su carrera enviándolo a diversos países y continentes: Irlanda, América Latina, España, Francia, Africa. Se sabía que le dirigía largas cartas manuscritas, dándole consejos cuando estaba en esas misiones diplomáticas; siguió con particular atención su paso por España, de donde salió motejado de “antifranquista”.

Entusiasta partidario del Concilio, Benelli admiraba en Pablo VI su refinamiento y su impulso en favor del progreso. Lo separaba, en cambio, su carácter toscano, extravertido, optimista, tan distinto de la reconcentrada preocupación del Papa Montini. Pero era su hombre de confianza: como sustituto del secretario de Estado (a la sazón, el cardenal Jean Villot), era uno de los que veía diariamente al Papa, con quien se reunía para informarle de la marcha de los asuntos de la Iglesia.

Pero el mismo Papa le encargó algunas tareas sumamente difíciles en la Curia, que lo perfilaron como una figura un tanto polémica, con apasionados defensores y detractores. Contribuía a esto su propio carácter: enérgico, activo, pero también muy severo, enemigo de la desidia y la incompetencia, en el quehacer de la Curia. Sus detractores le dieron el apodo de *Manganello* (el que lleva el bastón de castigo) por esta manera de ser. En el 77, Pablo VI lo destinó a Florencia y le confirió el cardenalato. Hubo interpretaciones contrapuestas para este hecho; por un lado, se dijo que era una perfecta aplicación del refrán vaticano *promoveatur ut ad moveatur*: promover para remover; por otro, que Pablo VI lo convertía en cardenal para dejarlo en posición de asumir su sucesión.

Tuve una particular amistad con Benelli. Nos entendíamos muy bien, aunque no nos viéramos mucho, y creo que él sabía que yo lo admiraba. Recuerdo que al finalizar ese mismo cónclave de octubre de 1978, cuando íbamos saliendo de la clausura en la Santa Sede, en medio del patio de San Dámaso se devolvió para despedirse de mí. Fue la última vez que nos vimos.

El hecho es que los partidarios de Siri eran muy contrarios a Benelli, y viceversa. Cuando llegué a Roma, este “empate” ya se intuía,

y así me lo anunció el cardenal Pironio, que adelantaba algo más: “Tal como van las cosas, quizás sea elegido un Papa no italiano”.

Pironio acertó con exactitud. En el cónclave, los votos italianos se fueron alineando en una u otra posición, hasta que fue claro que había un virtual bloqueo entre los dos grupos. En ese momento irrumpió la proposición, ya ensayada seis semanas antes, de los cardenales alemanes y austríacos, pero ahora con el respaldo de muchos otros, incluidos algunos italianos: el cardenal Karol Wojtyla.

Dato curioso es que el cardenal Wojtyla había sido el último en entrar al cónclave, y se cuenta que el maestro de ceremonias, monseñor Noé, estaba ya cerrando las puertas cuando apareció este prelado polaco. Aquella mañana se había ido de excursión al santuario de Montarella, encargado a los Padres Resurreccionistas (mayoritariamente polacos), el que solía visitar por su consagración a la Virgen.

El 15 de octubre, cuando se cumplía la hora 13 del cónclave, a eso de las cinco de la tarde, la clara mayoría alcanzada por Wojtyla determinó su nominación como el nuevo Papa. Eligió el nombre en homenaje a su breve antecesor: Juan Pablo II.

Hubo bastante asombro en los medios de prensa del mundo. Después de todo, Wojtyla era el primer Papa no italiano en 455 años, desde que en 1573 fuera elegido el holandés Adriano VI.

Para muchos era un enigma esta decisión. ¿Qué podía significar un Papa polaco, justamente proveniente de la nación más católica de la Europa del Este, un hombre formado resistiendo el dominio, primero, de los nazis, y después, de los comunistas?

La propia biografía del Papa Wojtyla era “atípica”, según decían los comentaristas especializados, aunque por mi parte no estoy seguro de que haya alguna biografía “típica” de Papa.

Karol Wojtyla nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, hijo de un militar retirado y de una dueña de casa. La familia fue tempranamente marcada por la muerte: la de una hermana al nacer, la de un hermano en su adolescencia, y la de la propia madre, cuando Karol tenía sólo nueve años. En septiembre del año 39 contemplaron la invasión de los nazis a su país, que un año más tarde alcanzaría su más alto grado de inhumanidad con la construcción de los campos de concentración en Polonia, y en particular el de Auschwitz.

Una salud debilitada por las inclemencias de la vida bajo la ocupación hizo que Karol Wojtyla alcanzara a trabajar como obrero de

una industria durante un corto período, tras el cual se incorporó a una compañía de teatro. Según ha dicho, hasta entonces no sentía ningún interés particular por consagrarse al sacerdocio, aunque sí tenía una fuerte adhesión a la Iglesia Católica, que en Polonia ha sido, verdadera e históricamente, la espina dorsal de la identidad nacional y de las clases populares, muchas veces sometidas al dominio extranjero.

Todavía en plena ocupación nazi tomó finalmente la decisión de ingresar al seminario. Pero ésta era una institución clandestina, impulsada contra el peligro y la persecución del régimen por el arzobispo Adam Sapieha, de Cracovia, que más tarde sería creado cardenal. Después de la liberación -que tristemente se convertiría a muy poco andar en una nueva ocupación, esta vez comunista-, en 1946 Wojtyla fue ordenado sacerdote y enviado a Roma para proseguir sus estudios.



A la izquierda, el obispo Wojtyla pasea durante una peregrinación a Tierra Santa. A la derecha aparecen los dos cardenales de Polonia, Stefan Wyszinski y Karol Wojtyla.

La Iglesia polaca sufrió las dificultades de la nueva dominación política durante toda la década del 50, con el valiente y extraordinario liderazgo del entonces arzobispo de Varsovia, Stefan Wyszinski. Parte de esos rigores (después vendrían otros) se habían atenuado cuando, en 1958, el Papa Pío XII firmó el nombramiento de Wojtyla como obispo auxiliar de Cracovia. En esa condición fue luego un activo participante del Concilio Vaticano II.

De regreso en Cracovia, en 1964 Pablo VI lo nombró arzobispo

titular. Fue entonces cuando la personalidad fuerte y decidida de este prelado joven comenzó a descollar en la Iglesia del Este. Tres años más tarde, el mismo Papa Montini reconoció esas virtudes y lo creó cardenal, el más joven del Sacro Colegio en ese momento, con sólo 47 años.

No cabe duda de que Pablo VI sintió un especialísimo afecto por el arzobispo y cardenal Wojtyła; en 1976 lo invitó a predicar los ejercicios espirituales para toda la Curia vaticana, un privilegio que concedía a muy pocos.



La primera bendición en público del Papa Juan Pablo II, el 16 de octubre de 1978.

Había pocas semejanzas aparentes entre ellos, salvo dos que, si se examinan con cuidado, resultan fuertes y profundas.

Primero, la formación del intelectual, del hombre inquieto ante el pensamiento y la evolución, la del observador movedido que no se limita a contemplar, sino que también siente el impulso y la necesidad de crear. Wojtyła fue más lejos que Montini en este aspecto, porque incursionó incluso en la poesía y en el teatro, pero no cabe duda de que en Pablo VI latía con fuerza también la sensibilidad del artista, acaso refrenada por un talante más severo, disciplinado y tradicional. Wojtyła es ciertamente un intelectual, pero un intelectual moderno, que combina los espíritus del académico y del hombre de acción.

Lo segundo es una intensa y peculiarísima percepción de la contradicción y el dolor humanos, por medio de la cual tanto Wojtyła como Montini han sido capaces de comprender e interpretar las grandes

turbaciones del hombre moderno. A mi modo de ver, un elemento común en los dos Papados ha sido la decisión de encarar algunos de los temas más difíciles de nuestra época sin temor al debate y oyendo a la propia conciencia, por encima de los cálculos de conveniencia. También en esto Juan Pablo II se ha mostrado más activo (y combativo, incluso) que Pablo VI, pero yo creo que sus capacidades para asumir el sufrimiento ajeno han sido muy semejantes.

En la Iglesia castigada por el temporalismo y las definiciones políticas maniqueas, Juan Pablo II irrumpió en ese año 1978 como una figura compleja, entregada en cuerpo y alma a la evangelización y alejada de las torpes caracterizaciones en boga. Dicen los sacerdotes que cuando regresé de Roma, tras el cónclave, respondí a sus impacientes preguntas sobre cómo era y qué significaba el nuevo Papa con una definición anatómica: "Tiene la cabeza a la derecha y el corazón a la izquierda". No sé si realmente habré dicho una cosa como ésta, pero puede que refleje bien la doble condición de vibrante humanidad y complejidad espiritual que el Santo Padre representaba para nosotros en aquel momento.

El milagro del sur

Diciembre de 1978 fue un mes inolvidable para muchos chilenos. Por primera vez en cien años, el país estuvo verdaderamente al borde de un conflicto armado de fronteras, una guerra que hubiese destruido miles de hogares y marcado con sus secuelas a nuevas generaciones. Vi de cerca la angustia con que muchas madres siguieron los acontecimientos de aquellos días, quizás pensando en sus hijos, que estarían en las primeras filas de la lucha o esperando lo imponderable a bordo de naves cargadas de armamento.

Por eso sé que la idea de la guerra se grabó a fuego en la conciencia de muchos chilenos. Y creo que ése fue uno de los factores que ayudó a evitarla.

La fase crítica del conflicto comenzó a gestarse casi dos años antes, a mediados de 1977, cuando el gobierno de Gran Bretaña emitió un fallo favorable a Chile en la disputa con Argentina por la posesión de las tres islas situadas en el canal Beagle, en el extremo sur del continente.

El Reino británico había adquirido la condición de árbitro en esa discrepancia limítrofe en virtud de un acuerdo firmado por los dos países. Pero, una vez emitido su fallo, quedaba pendiente un problema subsecuente, que era el de la delimitación de las aguas entre las naciones vecinas.

Creo que no faltó a la verdad ni atento contra la objetividad si digo que el gobierno argentino, regido por una Junta militar, aceptó sólo en apariencia el dictamen británico, para inmediatamente después ir variando su posición en un ritmo francamente hostil. Sucesivamente fracasaron los encuentros de comisiones bilaterales, primero, y luego de los cancilleres. Quedaba todavía la instancia de acudir a la Corte Internacional de La Haya, según un tratado suscrito apenas seis años antes, en 1972. La letra de ese documento establecía que antes de llegar a la Corte debían agotarse las vías directas de negociación; a pesar del paulatino y

creciente desacuerdo entre los negociadores, Argentina advirtió que llevar el asunto a la Corte Internacional sería, a su juicio, *casus belli*. Para entonces ya no estaba discutiendo la delimitación de las aguas, sino que derechamente se proponía desconocer el laudo y extender el diferendo al canal Beagle y, de nuevo, a sus islas.

Nosotros contemplamos con angustia la evolución de estas conversaciones. Gracias a contactos diversos con el gobierno, y en particular con los militares, sabíamos bien el trágico curso que los acontecimientos estaban a punto de tomar. Entendíamos -este era un hecho muy difícil de discutir- que el aislamiento internacional del gobierno militar chileno había alentado, en cierto modo, las hostilidades y los rencores de los países vecinos.

Durante los años anteriores -entre 1974 y 1977- habíamos seguido muy de cerca las tensiones originadas también en el norte, con Perú y Bolivia. En estos dos países se había hecho fuerte la propaganda del "irredentismo", es decir, la reivindicación de los territorios de ambos países perdidos a manos de Chile durante la Guerra del Pacífico, en 1879. Nadie podía ignorar que ese clima de agitación tenía un horizonte muy definido: 1979, el año del centenario de la guerra. Muchos políticos y militares peruanos y bolivianos habían declarado que no permitirían que se cumpliera un siglo de dominio extranjero sobre sus territorios.

Tuvimos una activa, y hasta ahora poco conocida, participación en los esfuerzos por atenuar el ambiente fratricida que se estaba generando. Dos sacerdotes, Renato Poblete y mi nuevo secretario privado, Luis Eugenio Silva, viajaron en mi nombre a Bolivia y Perú para conocer la opinión de los Episcopados respectivos en torno a la necesidad de la paz.

La Conferencia Episcopal chilena había sugerido la idea de emitir una declaración conjunta entre todos los obispos de los tres países, llamando a la paz y la concordia.

Pronto se vio que esto no era posible. Las discrepancias internas en los propios Episcopados hacían que tal proyecto fuese inviable. Entonces se intentó que los arzobispos metropolitanos firmasen la declaración. Tampoco se pudo.

En el caso de Bolivia, mi amistad personal con dos de los arzobispos principales del país permitió incluso llegar a elaborar unos borradores preliminares. Pero el arzobispo de La Paz, Jorge Manrique, que estudió en el Seminario chileno y que fue un gran amigo de varios de nuestros obispos, y el de Cochabamba, Armando Gutiérrez, de quien

había sido compañero en el Colegio Alemán, carecían de fuerza dentro de sus Episcopados.

Entre los obispos bolivianos -varios de los titulares de las diócesis eran extranjeros, incluyendo al cardenal Clemente Maurer, alemán-, ellos dos eran una solitaria minoría en defensa de la paz; por razones diversas, y seguramente comprensibles, los demás adherían a las ideas del “irredentismo”, o por lo menos guardaban silencio ante ellas.

En el caso peruano la situación era aún más compleja. Pese a que mi buen amigo, el cardenal primado Juan Landázuri Ricketts, tenía una notable disposición al acercamiento entre las iglesias y los pueblos, también su opinión era minoritaria dentro de su Episcopado y, en todo caso, no podía sobreponerse al ambiente antichileno alimentado por la propaganda oficial.

En la Iglesia de Perú predominaban ciertos recelos hacia la Iglesia chilena, derivados de la situación creada tras la guerra, a fines del siglo XIX. Cuando se produjo el armisticio, las tropas chilenas, que habían llegado a ocupar buena parte del territorio peruano, retrocedieron hasta las ciudades de Tacna y Arica. De la jurisdicción eclesiástica de ambas se hizo cargo el Episcopado chileno, cosa que ciertamente motivó las protestas de los hermanos peruanos. Años más tarde, un tratado entre los dos países significó que Tacna quedase en manos peruanas, y Arica pasara a poder de Chile. Entre ambas ciudades se trazó la nueva frontera. Como por cierto los peruanos impugnaban esta línea (puesto que mantenían la reivindicación sobre los territorios del extremo norte de Chile), el hecho de que poco después Arica fuese elevada a la condición de Prelatura significó, para ellos, que los obispos chilenos avalaban lo que a su juicio era una política de “expansionismo”.

Desde entonces las relaciones mutuas quedaron muy debilitadas.

El padre Renato Poblete cumplió una gran tarea durante los años 70, acercando posiciones al nivel de los sacerdotes y los obispos. Pero, obviamente, no consiguió extinguir del todo la desconfianza. En 1977 se había llegado a un clima tal, que el padre Luis Eugenio Silva debió usar vestimentas de laico para poder circular con cierta tranquilidad en Bolivia y Perú.

El hecho es que no hubo declaración conjunta, aunque las gestiones nos permitieron percibir hasta qué punto era serio el deterioro de las relaciones.

Por eso, cuando los congresistas norteamericanos me preguntaron por la enmienda que se pensaba imponer para prohibir las adquisiciones militares de Chile, mi opinión contraria no era infundada ni desinformada. Los obispos chilenos sabíamos bien que en América del Sur se estaba desarrollando una carrera armamentista de tales proporciones, que aquél

que fuese manifiestamente perjudicado por sanciones externas podría ser la primera víctima, y a la vez el detonante, de un conflicto incalculable.

Sin embargo, nuestras relaciones con el Episcopado argentino tampoco eran especialmente estrechas. En su gran mayoría, los obispos de ese país seguían una línea más conservadora que la nuestra; así se había demostrado en el Concilio Vaticano II y, ciertamente, frente a los problemas sociales más o menos comunes en América Latina. Supongo que ellos nos considerarían, en cierto modo, más “politizados”; nuestra postura ante los derechos humanos y nuestra conducta ante la pérdida de la democracia distaban bastante de su estilo.

Con posterioridad alguno de ellos me dijo que también creían que los obispos chilenos alentábamos una supuesta política “expansionista”, que sería consustancial a la historia del Estado chileno. Esto les provocaba una doble desconfianza, por cierto infundada.

De entre nosotros, sólo el arzobispo José Manuel Santos había podido tener un contacto breve, aunque sorprendente, con el cardenal Juan Carlos Aramburu. Ocurrió en cierta ocasión en que, estando Santos en Roma, fue invitado a cenar en la embajada chilena, precisamente para provocar un encuentro con el cardenal Aramburu. Había cierta expectación por la manera en que este hombre, misterioso y parco para muchos, se relacionaría con los chilenos. Pero ocurrió que nada más traspasar las puertas, declaró, muy sonriente:

-En este lugar yo me siento como en mi casa -y, ante la sorpresa de los presentes, añadió-: Porque mi madre era chilena...

¡Ninguno de nosotros había oído acerca de tan importante detalle!

Nos conocíamos poco y mal. Era un defecto que compartíamos.

En enero de 1978, el gobierno de Buenos Aires se decidió finalmente a declarar “insanablemente nulo” el laudo arbitral británico, tras lo cual inició una masiva movilización de contingentes militares hacia la zona austral. Algunos detalles de ese ominoso desplazamiento -por ejemplo, el traslado de centenares de ataúdes- hicieron que la tensión subiera hasta extremos nunca antes vistos entre las dos naciones.

Fue entonces cuando la Iglesia chilena, en las numerosas conversaciones que sostuvimos en aquellos días de angustia, planteó la

posibilidad de que el Vaticano interviniera para detener la escalada de hostilidades. No puedo decir que pensáramos exactamente en una mediación, porque esa es una fórmula jurídica precisa y compleja; simplemente se nos ocurría que, ante el sucesivo fracaso de las negociaciones, sería útil que un tercer actor, reconocido por las dos partes, ofreciera una mesa para continuar el diálogo.

En unos breves sondeos que realizamos, apreciamos de inmediato que no había ambiente para esto. Tal como otros Estados, el Vaticano apreciaba las dificultades de la situación y se sentía maniatado para tomar cartas en el asunto.



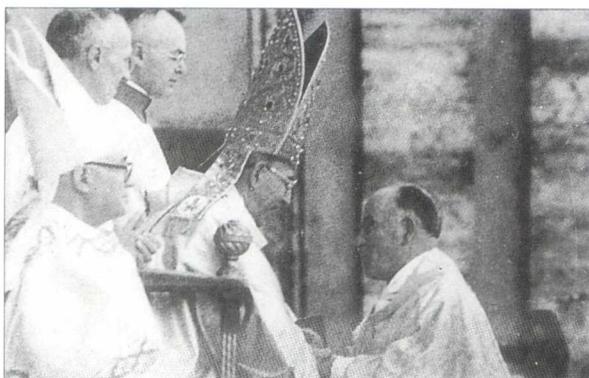
El cardenal Silva Henríquez acompaña al cardenal Primatesta, delegado papal ante el Congreso Eucarístico chileno, en 1980.

La tensión disminuyó hacia fines de ese mes, después de una reunión que sostuvieron en Mendoza los presidentes de los dos países, el general Rafael Videla y el general Augusto Pinochet. Una segunda reunión, en Puerto Montt, estableció nuevos mecanismos para generar medidas de distensión.

Durante todo el primer semestre las comisiones negociadoras retomaron sus trabajos suspendidos y hasta alcanzó a crearse la esperanza de una solución concordada. Pero a comienzos de agosto volvió a renacer la tensión.

En medio de esos avatares se produjo la muerte de Pablo VI y el cónclave para elegir a su sucesor.

La circunstancia de viajar acompañado de Luis Eugenio Silva, y de alojarnos en la casa de las Monjas de los Sagrados Corazones, a muy corta distancia del Vaticano, hizo posible que por fin nos pudiésemos encontrar con los cardenales argentinos, en un momento que todos sabíamos crítico. Luis Eugenio había conocido al cardenal Raúl Primatesta a comienzos de los años 70, cuando era alumno del Colegio Pío Latino junto con otros jóvenes argentinos. Por intermedio de ellos había conseguido mantener una cercana amistad con el cardenal. De modo que él nos presentó, lo que a su vez allanó el camino para conocer al otro cardenal, Juan Carlos Aramburu.



El cardenal Silva Henríquez aprovecha el instante de la obediencia para hablar al Papa Juan Pablo I sobre el conflicto con Argentina, el 3 de septiembre de 1978, en la Plaza de San Pedro.

Nos reunimos varias veces a la hora del té, para conversar acerca de la tensión entre nuestros países. Finalmente, acordamos dirigirnos al nuevo Papa para pedirle, no una acción muy determinada, sino su apoyo y su palabra para detener las hostilidades. Redactamos en conjunto una carta en la que le expresábamos nuestra angustia y la urgencia de su intervención.

Yo mismo fui a la Casa Pontificia, que administra la agenda del Papa, a pedir una audiencia para tener la oportunidad de conversar con

el Santo Padre y hacerle entrega de este documento. Pero el prefecto de la Casa, monseñor Martin, me hizo ver que Juan Pablo I, recién elegido, tenía un muy recargado calendario de actividades en esos primeros días de Pontificado. Me dijo que no podría recibirnos antes de 15 días.

Sin embargo, ninguno de nosotros podía quedarse tanto tiempo en el Vaticano. De modo que tomé la decisión de hablar con el Papa durante la ceremonia de entronización, que se realizaría el 3 de septiembre, una semana después del cónclave. Era un paso bastante audaz, porque lo normal es que en tan solemne circunstancia sólo se presente la obediencia de cada cardenal al nuevo Pontífice. Pero en vista del estado crítico que se había alcanzado, no vi otra alternativa; la paz bien valía una pequeña impertinencia.



El cardenal preside un encuentro de chilenos y argentinos en la frontera chileno-argentina, en la cordillera de Los Andes. Están presentes, entre otros, el obispo Carlos Oviedo y el sacerdote Cristián Precht.

Así lo hice. En italiano, lo más rápido que pude, en el inmenso escenario de la plaza de San Pedro, atestado de gente, le conté a Juan Pablo I sobre nuestra angustia, de rodillas ante el trono. Se sorprendió un poco, pero me escuchó con una gran atención y me dijo que le hiciera llegar nuestro documento cuanto antes a su Secretaría.

Ahorraré descripciones detalladas sobre cuánto me retaron después. Diré solamente que para los encargados de la ceremonia y del protocolo pasé a ser un sujeto peligroso, mientras otros cardenales encontraron formas muy ingeniosas de divertirse con mi inusual saludo

al Santo Padre. Según he sabido después, por los amigos que me acompañaban, estuve unos tres o cuatro minutos hablándole; pero para mí fueron los más largos de mi vida.

En efecto, el buen Juan Pablo I se hizo cargo de inmediato de nuestras angustias.

El 13 de septiembre, los Comités Permanentes de Argentina y Chile nos reunimos en Mendoza y emitimos un mensaje conjunto, llamando a los gobernantes a detener “el envolvente dinamismo armamentista” y a salvaguardar los derechos de soberanía con un criterio de diálogo y comprensión.

El 20 de septiembre -diecisiete días después de la conversación en San Pedro-, Juan Pablo I nos dirigió una carta a los Episcopados de Chile y Argentina, exhortando a continuar la obra de pacificación y llamando a todos los católicos a redoblar esfuerzos junto a sus pastores en pro de la concordia.

No era todavía un acto diplomático que pudiese incidir directamente sobre el conflicto, pero constituía una señal muy clara hacia los gobiernos y los mandos militares de ambos países: la Santa Sede seguía con preocupación los pasos de cada uno. Nadie podría ignorar ese hecho.

Increíblemente, la carta debía hacerse pública el 29 de septiembre. Aquella mañana encontraron a Juan Pablo I muerto en su lecho.

Antes de partir al nuevo cónclave, alcanzamos a coordinar con los obispos argentinos un encuentro de oración por la paz en el Cristo Redentor, en el límite entre los dos países, al que asistieron varias decenas de jóvenes argentinos y chilenos. Era un acto que buscaba comunicar un fuerte contenido simbólico: los jóvenes, que serían las más importantes víctimas en caso de guerra, se reunían para pedir por la paz ante el Señor, pero en una clara apelación a los gobiernos.

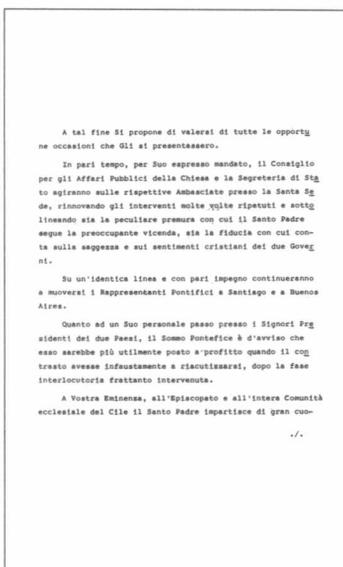
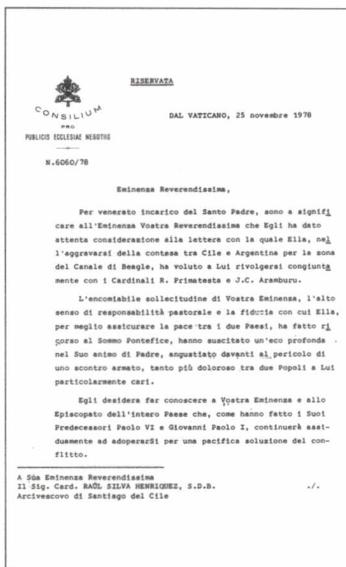
El éxito del acto, y la extensa repercusión que tuvo a los dos lados de la frontera, nos dieron nuevas fuerzas para insistir en la intervención del Vaticano.

Antes y durante el cónclave que resultó en la elección de Juan Pablo II como nuevo Papa, volvimos a reunirnos con los dos cardenales argentinos. También a él le escribimos una nota, semejante a la que

dirigimos a Juan Pablo I, pidiéndole consejo y ayuda frente a la difícil situación que vivíamos. Esta vez, con alguna precisión mayor, pedíamos que la palabra del Papa llegase también a nuestras autoridades.

La nota fue fechada el 19 de octubre de 1978.

Menos de dos semanas más tarde, la comisión bilateral chileno-argentina anunció que no había llegado a acuerdo en el diferendo. Esto significaba, en la práctica, que los caminos se cerraban. Ya no quedaban más instancias que el diálogo directo entre los cancilleres y entre los presidentes; pero era muy difícil que en ellos se pudiese producir el consenso que los expertos no conseguían. Los preparativos bélicos se aceleraron, particularmente en Argentina. Ejercicios de oscurecimiento en las ciudades, traslado de contingentes, llamado de reservistas, apertrechamiento: un clima enervado, lleno de asechanzas y amenazas.



Memorandum conjunto del cardenal chileno y los cardenales argentinos Juan Carlos Aramburu y Raúl Francisco Primatesta, dirigido al Papa Juan Pablo I, datado en Roma el 19 de octubre de 1978.

Otra vez en mérito de la verdad, he de decir que los argentinos fueron sometidos a esta tensión en una medida muy aguda. En Chile no hubo ejercicios que afectasen a la población, y los medios de comunicación no contribuyeron a aumentar las hostilidades, sino, al revés, buscaron apaciguarlas.

El 12 de noviembre, finalmente, se reunieron en Buenos Aires los cancilleres de Argentina y Chile, Carlos Washington Pastor y Hernán Cubillos. Allí Pastor planteó que, en vista de que la Corte de La Haya no satisfacía a Argentina y otras instancias eran rechazadas por Chile, podría solicitarse formalmente al Papa su mediación en el conflicto.

El hecho es que el canciller Cubillos aceptó aquel día la idea de Pastor. Pero en la noche, el canciller argentino debió retirar su proposición: había sido desautorizado expresamente por el Comité Militar que manejaba la crisis. La delegación chilena volvió hondamente pesimista desde Buenos Aires. Habían presenciado un episodio concreto que demostraba que en el gobierno argentino el control de la situación estaba en manos de los sectores más intransigentes y belicistas. Si el propio canciller no contaba con el respaldo de los jefes militares, ¿qué podía esperarse de una gestión diplomática cualquiera?

Nosotros supimos con detalle la situación a que se había llegado. Comenzamos a urgir entonces a la Santa Sede, con una insistencia que puede haber parecido excesiva a los diplomáticos de la Curia, pero que era indispensable para nosotros.

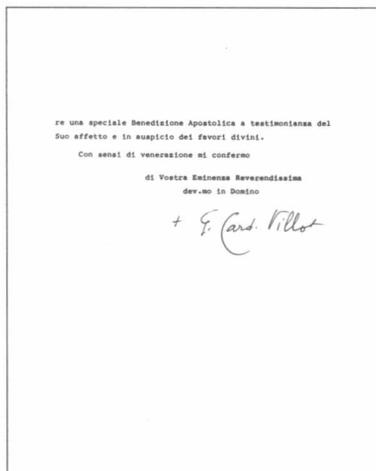
El 25 de noviembre, por fin, recibimos una carta del cardenal Jean Villot, en respuesta a la carta dirigida al Papa. Como medida inmediata, Villot nos anunciaba que tanto la Secretaría de Estado como el Consejo de Asuntos Públicos de la Santa Sede hablarían con los embajadores de ambos países para expresarles la preocupación del Santo Padre. Los nuncios serían instruidos con el fin de que idéntico mensaje llegase a ambas cancillerías.

“En cuanto a un paso personal (del Papa) hacia los señores presidentes de los dos países, el Sumo Pontífice está consciente de que sería más útil si el diferendo llegase infaustamente a agudizarse de nuevo, después de la fase de interlocución actualmente en curso”, añadía Villot.

Pero los hechos habían entrado ya en una pendiente. El 15 de diciembre, previendo que Chile acudiría a La Haya, Argentina se adelantó a denunciarlo por desarrollar “aprestos militares”, ante la OEA y la ONU. Esta agresiva gestión diplomática constituía una de las últimas señales de que la tragedia se avecinaba.

El 20 de diciembre, el gobierno de Chile envió una llamada “Nota de Navidad” a la Casa Rosada, instando a retomar el diálogo y superar las diferencias en un marco pacífico. Al día siguiente, 21, Argentina

respondió diciendo que mientras la posición intransigente de Chile no fuese modificada, nada cambiaría. Entonces el gobierno chileno tomó la decisión de recurrir al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en el marco de la OEA.



Carta de respuesta del cardenal Jean Villot, por encargo de Juan Pablo II, a las proposiciones de los cardenales de Chile y Argentina, fechada el 25 de noviembre de 1978.

Simultáneamente, en Roma, la Secretaría de Estado, que seguía atentamente la evolución de la crisis, citó a los embajadores de Chile y Argentina. Allí, el cardenal Agostino Casaroli explicó personalmente a los diplomáticos de los dos países que el Papa estaba “más que disponible, deseoso, de enviar una misión de paz y acercamiento a Santiago y a Buenos Aires”. Según se supo más tarde, el Papa encargó en aquella misma jornada al cardenal Antonio Samoré, uno de los mejores diplomáticos de la Santa Sede, que se embarcara con destino a las dos capitales sudamericanas para apreciar la situación en terreno, “y para examinar y volver a buscar juntos las posibilidades de un arreglo honroso a la cuestión”.

Sin embargo, esa noche fue la más tensa de cuantas vivimos. Las tropas argentinas y chilenas, que pasaron varios días contemplándose en distintos puntos de la larga frontera común, fueron puestas en estado de alerta. En Santiago estuvo lista la constitución de un gobierno de emergencia para afrontar el estallido bélico.

Aquella noche, la del 21 de diciembre de 1978, las escuadras navales de ambos países zarparon para lo que parecía que iba a ser el primer encuentro armado del conflicto. Según contaba después el cardenal Samoré, una tormenta hizo que los buques de guerra se cruzaran en medio del océano sin verse. El cardenal, con su estilo tan luminoso, decía que el Espíritu Santo era esa tormenta, que había tomado esa forma para interponerse entre los hermanos al borde del desastre.



El cardenal Antonio Samoré saluda al Presidente Augusto Pinochet y al canciller Hernán Cubillos, a su llegada a Chile para iniciar el proceso de mediación, en los últimos días de diciembre de 1978.

La fuerza aérea argentina estuvo en el aire para iniciar las acciones. Versiones que conocí más tarde dicen que el general Jorge Rafael Videla, Presidente de Argentina y miembro del Comité Militar, se negó a firmar el decreto que declaraba la guerra, lo cual impidió de hecho la apertura del fuego. También se dijo que el mismo general Videla recibió un llamado del Vaticano que vino a congelar las operaciones ya en curso.

Como sea, no cabe duda de que la intervención de la Santa Sede en tan dramático instante fue lo que permitió detener la guerra. El cardenal Samoré llegó cinco días después a Buenos Aires, acompañado de monseñor Faustino Sáinz y del padre Fiorello Cavalli, también brillantes y destacados diplomáticos. Luego se trasladaron a Santiago, y, tras intensísimas conversaciones a uno y otro lado de la cordillera, consiguieron la firma de un acuerdo formal aceptando la mediación papal.

Recibí dos días más tarde una gentil carta del general Pinochet, en la que nos agradecía las gestiones hechas en favor de la paz. Creo

ahora que la sola visión de la tragedia que se cernía sobre nosotros motivó lo que tal vez fuese el primer momento de verdadera unidad nacional en esos arduos años.

La mediación no fue nada fácil. Cinco años tardó en consumarse; el cardenal Samoré, llamado a la diestra del Señor, no alcanzó a ver la culminación de su maravillosa gestión de paz. En 1984, finalmente, bajo los auspicios del Papa Wojtyla, la mediación determinó la firma de un tratado de paz y amistad de los dos países, que vino a poner fin a las graves diferencias que casi desataron la guerra.

Se había producido el milagro de la paz.



Mediodía en Puebla

Creo que para todos los obispos fue una enorme alegría saber que el Papa Juan Pablo II inauguraría la reunión del Episcopado latinoamericano en Puebla de los Angeles, México. Llevaba sólo tres meses en el trono de Pedro, y su primera visita al exterior sería justamente al "continente de la esperanza": era un signo extraordinario de la preocupación que tendría su Pontificado por este rincón del mundo. Todos sabíamos que su antecesor, Juan Pablo I, había manifestado ciertas prevenciones respecto de la necesidad de que el Papa concurriera a la cita; pero a nosotros no nos cabía duda de que su presencia sería vital para afianzar la tarea de la Iglesia latinoamericana en el futuro cercano.

La Iglesia chilena laboró intensamente para esta gran ocasión. Conservo todavía las voluminosas carpetas con los trabajos de numerosos sacerdotes, teólogos y especialistas que llevamos hasta Puebla. En verdad, para muchos de nosotros la tarea había comenzado muchos años antes, porque Medellín era todavía una obra inconclusa, y porque en nuestras sociedades el zarpazo de la violencia había significado el retroceso de muchas de las conquistas sociales promovidas por la Iglesia. Ya unos pocos días después de los tristes acontecimientos de septiembre de 1973, el obispo Jorge Hourton, cuya lucidez analítica conocíamos bien desde su paso por el Seminario, se había preguntado en un artículo: ¿Qué vamos a hacer con Medellín?

La tercera reunión plenaria de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (Celam) había sido convocada por el Papa Pablo VI en 1976, por intermedio del cardenal Sebastiano Baggio, quien, en Puerto Rico, hablando en la XVI Asamblea Ordinaria de la Comisión para América Latina (de la cual era presidente), llamó a celebrar un nuevo encuentro de los pastores del continente al celebrarse diez años de la reunión de Medellín.

Medellín era, inevitablemente, la referencia central en Puebla. Para algunos significaba la posibilidad de profundizar algunas de las tesis más radicales de la reunión colombiana, las que tenían un impacto social más directo e incluso las que habían permitido la germinación de la "teología de la liberación". Para otros constituía la oportunidad de poner freno, o término, a esas tendencias "izquierdizantes", y sustituirlas por las concepciones más tradicionales del papel de la Iglesia en América Latina.

De hecho, llegamos a Puebla en medio de una atmósfera ominosa, aunque del todo artificial. Se decía que elementos del sector más retardatario tratarían de sepultar a Medellín; se llegó a sostener que la CIA estaba involucrada y hasta hubo quien se sintió proféticamente llamado a denunciar estos hechos, escribiendo una "Teología de la Conspiración".

Pero nosotros, como creo que también la inmensa mayoría de los obispos del continente, no estábamos interesados en ninguna de esas opciones. Las considerábamos extremas, y las creíamos minoritarias. Nosotros queríamos que Puebla nos ayudase a adaptarnos a las condiciones de los nuevos tiempos, que reafirmase la vocación social de la Iglesia latinoamericana, su inequívoca defensa de los pobres, y su ansioso deseo de ser instrumento de unidad entre pueblos desgarrados por el odio y la violencia.

Queríamos desentrañar qué énfasis se debía poner ahora en la tarea pastoral, qué herramientas eran más eficientes, dónde estaba la causa de nuestras fallas. El que trabaja con materias humanas está siempre expuesto a confundir la realidad con sus propias percepciones, deseos y hasta obsesiones.

Puebla nos iba a ayudar a encontrar esa realidad, modificada desde los años de Medellín, pero esclarecida siempre por la luz de Cristo.

El discurso que el Papa Juan Pablo II pronunció en el Seminario Palafoxiano de Puebla, el 28 de enero de 1979, inaugurando la Conferencia, fue el primer impacto que sacudió a todos los asistentes. Tomando como inspiración principal *Evangelii Nuntiandi*, el Santo Padre hizo un fuerte llamado a que nos constituyéramos todos bajo la invocación

de "maestros de la verdad", para proclamar y anunciar la triple verdad: sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre.



El Papa Juan Pablo II en su primera visita a México, con ocasión de la reunión del Celam en Puebla, el 28 de enero de 1979.

Esta decidida afirmación de fe cambió radicalmente el clima de la Conferencia: todos nos reconocimos en él como hermanos, ya no sólo unidos, sino exigidos a la unidad en nombre de la verdad. En el mediodía de Puebla, alumbrado por una luz segura y fuerte, madurado desde el amanecer de Medellín, uno podía sentir en el aire la llegada de algo nuevo, de un nuevo espíritu y un nuevo aliento para la sufrida Iglesia de América Latina. Al afirmar las tres verdades esenciales por las cuales muchos pastores del continente habían sido incomprendidos o malinterpretados durante tantos años, el Papa nos iba a permitir desarrollar una nueva lucidez acerca de nuestra tarea: la del que sabe que no son las comodidades, sino las dificultades las que forman la parte esencial de su camino, aquella que de todas maneras debe recorrer para ser un auténtico pastor.

Diría, sin temor a error, que desde ese instante las aprensiones y las dudas previas al encuentro comenzaron a disiparse. En el concienzudo trabajo de comisiones y reuniones plenarias que siguió, los obispos confrontaron opiniones bajo la certeza de que ya ninguna discrepancia sería más fuerte que la esencial fraternidad en la doctrina. No es que esto

atenuara los debates: al contrario, los hizo más seguros, más precisos y, en cierto sentido, más conscientes de la complejidad de la tarea que se emprendía.

El padre Boaventura Kloppenburg, destacado teólogo franciscano de Brasil, que asistió como invitado especial del Santo Padre, notó que ya en las objeciones iniciales contra el primer borrador del documento final, "se percibía que la preocupación dominante de los obispos (no así la de los otros) era la insistencia en la pureza de la doctrina ante la confusión y perplejidad reinantes".



El cardenal Silva Henríquez es rodeado por la prensa a su llegada a México.

En esta preocupación estaban vivos los últimos testimonios del querido Pablo VI, cuya fuerza vital nos había conmovido a todos por igual. De hecho, fue *Evangelii Nuntiandi* la que dio a Puebla el hilo conductor de la reflexión pastoral y teológica. Su afirmación de que la conversión personal es la base de toda liberación (y nunca al revés), permitía vincular la misión de evangelizar con los conceptos de participación y comunión a través de una línea muy nítida, desprovista de los grandes sofismas de los años 60.

Además, a diferencia de Medellín, en Puebla tuvo una presencia eminente y particular la devoción de los pueblos latinoamericanos por la Virgen, que tan bien expresaba la raíz popular de nuestra religiosidad como la evangelización cálida y maternal que su figura propone. Allí en México, hecha vivencia y emoción a través de Guadalupe, era más evidente que María constituía un mensaje propio en nuestra América, y que en ese mensaje no tenía el lugar subordinado o simbólico que las

corrientes más izquierdizantes le habían atribuido, sino uno de notable preponderancia, precisamente el de reconocer nuestra identidad y nuestras necesidades más hondas en Ella.



El cardenal y el superior salesiano, Egidio Viganó, durante la reunión de Puebla.

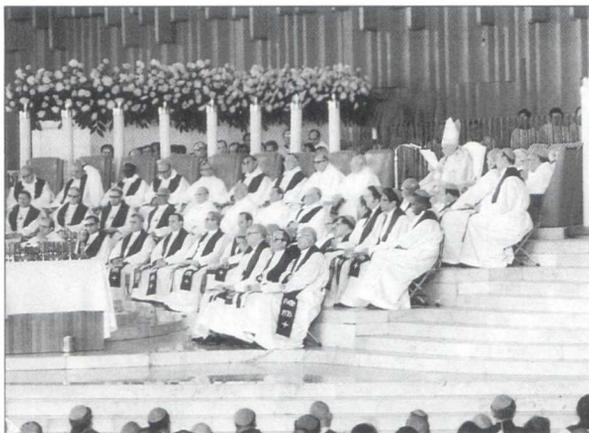
"Quizás si la ventaja de Puebla sobre Medellín", dije a la revista *Ercilla* en esos días, "ha sido la extraordinaria importancia que se le ha concedido a la devoción de María, y el valor de evangelización y unificación que la Virgen ha tenido en este último tiempo. Fue María quien realizó la unión de los cristianos en México".

Por supuesto, la tarea de clarificación no fue nada sencilla. Supuso un intenso trabajo de oración, reflexión y redacción, por el cual algunos textos llegaron a ser reelaborados hasta una decena de veces.

De entre tanta riqueza y necesidad, creo que cabe mencionar aquí -a la vista de las tensiones sufridas por las iglesias locales de América- la discusión sobre la "teología de la liberación", que fue muy compleja, aunque no muy explícita. Para el documento final, los arzobispos Helder Cámara y Alfonso López Trujillo, a los cuales se identificaba con líneas distintas, si no contrapuestas, habían redactado una breve referencia saludando los "aspectos constructivos" de esta reflexión teológica, "tal como surgió en Medellín". Pero 124 obispos, sobre un total de 187 que tenían derecho a voto, pidieron suprimir incluso esta alusión, entendiéndolo que ella podía cohonestar la totalidad de los actos de esa tendencia. En

el documento de Puebla, de casi 250 páginas, ni siquiera se menciona la expresión.

Y resultó muy importante que así fuese, porque ya entonces, y con mayor ímpetu poco después, las tendencias más radicales del *liberacionismo* vendrían a irrumpir con una fuerza desquiciadora en muchos de nuestros países, partiendo desde Centroamérica. Allí, en Nicaragua, la revolución triunfante contra la tiranía de Anastasio Somoza envolvió a sectores cristianos, incluidos algunos buenísimos amigos nuestros, en la vorágine del ideologismo y la politización, constituyendo una llamada "Iglesia popular" que venía a ser como una expresión contestataria, a menudo desafiante, de lo que las jerarquías del continente decían y proclamaban. En Nicaragua fue donde alcanzó un estatuto oficial (o, al menos, gubernamental) la sistemática distorsión del mensaje cristiano: misas en uniforme de combate, liturgias donde se bendecían las armas, predicaciones que exaltaban la violencia y el rencor de clases.



El Papa Juan Pablo II encabeza una liturgia solemne en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. El cardenal Silva Henríquez se ubica en la segunda fila, justo frente al Santo Padre.

Anticipándose proféticamente a estas violencias, Puebla recuperó para la fe de los católicos latinoamericanos una eclesiología centrada en el concepto de comunión, es decir, en la unidad, lo que significó quitar algunos acentos temporalistas derivados de Medellín, por los cuales se llegó a aplicar criterios de la sociología, y aun del análisis marxista, a la definición misma de Iglesia. La "teología de la liberación", en sus inicios, y luego la "Iglesia popular" en sus variantes más exacerbadas, perdieron su ya discutible legitimidad en la reunión de México.

Complemento necesario de esta afirmación fue el consistente llamado a tomar distancia de las ideologías; y no sólo de las de izquierda, más implicadas en una separación visible respecto de los pastores, sino también de las de derecha, envueltas frecuentemente en una separación respecto del mensaje cristiano. En Puebla se originó el concepto de la "hipoteca social", que tanto describe la función de la propiedad privada como denuncia el orden injusto creado por la complacencia del dinero o la fuerza. En Puebla se hizo la doble denuncia del totalitarismo marxista y de los regímenes amparados en la doctrina de la seguridad nacional; nadie hasta entonces había podido mostrar el paralelismo de los efectos de ambos sistemas con tanta claridad.

Durante alguna de las conferencias que con posterioridad dicté ante sacerdotes, universitarios y fieles sobre el significado de Puebla, escogí el párrafo 562 como síntesis y conclusión principal, al menos para nosotros, de aquel inolvidable encuentro:

"La misión de la Iglesia en medio de los conflictos que amenazan al género humano y al continente latinoamericano, frente a los atropellos contra la justicia y la libertad, frente a la injusticia institucionalizada de regímenes que se inspiran en ideologías opuestas y frente a la violencia terrorista, es inmensa y más que nunca necesaria. Para cumplir esta misión se requiere la acción de la Iglesia toda, pastores, ministros consagrados, religiosos y laicos, cada cual en su misión propia. Unos y otros, unidos a Cristo en la oración y en la abnegación, se comprometerán, sin odios ni violencias, hasta las *últimas consecuencias*, en el logro de una sociedad más justa, libre y pacífica, anhelo de los pueblos de América Latina y fruto indispensable de la Evangelización liberadora".

Los obispos chilenos volvimos, a mi juicio, fortalecidos y reconfortados desde México. En una situación tan compleja como la que vivíamos en el país en ese instante, la Tercera Conferencia del Celam había servido como una catarsis y una introspección; nos había devuelto, en cierto modo, a la certeza de que nuestros esfuerzos no eran solitarios ni nuestro camino equivocado. Teníamos que afirmar la verdad evangélica a todo costo; ninguna amenaza ni desaliento personal debía empañar esta misión. Creo que regresamos, al menos en esto, más unidos y más fraternos.

Regresamos también a nuestras dificultades. Nos esperaban muchas, y muy duras, en aquel año iluminado por el mediodía de Puebla.

La primera de ellas comenzó a gestarse, paradójicamente, en esa

hermosa ciudad mexicana. Tenía que ver con las condiciones en que vivían las universidades católicas tras la intervención de autoridades militares en todas ellas. Unos meses antes, el cardenal Gabriele Garrone, prefecto de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, había escrito a la Conferencia Episcopal una extensa carta en la que declaraba que la tuición sobre las universidades conferida en 1968 al Comité Permanente (que ya he narrado en el capítulo 27) era sólo una disposición entre muchas otras, y que en todo caso permitía a ese dicasterio intervenir directamente en los conflictos de las aulas.

La carta era una respuesta a unas prevenciones del Comité Permanente sobre problemas recientes suscitados en la Universidad Católica de Valparaíso, donde el Gran Canciller había procedido a efectuar nombramientos de autoridades sin ninguna consulta al colegio episcopal, saltándose las expresas instrucciones de las normas del 68; y advertía también acerca de la situación general que vivía la Universidad Católica de Chile.

En vista de que los juicios del cardenal Garrone eran nuevos para todos nosotros, el obispo Bernardino Piñera, a nombre del Episcopado, solicitó por segunda vez que la Santa Sede nombrase una persona para estudiar en terreno la situación que se estaba viviendo.

No hubo respuesta a esta petición. En cambio, cuando estábamos en Puebla, el secretario de la Sagrada Congregación, el arzobispo Antonio María Javierre, se reunió con el obispo Piñera y le contó que tenía en sus manos la carta de contestación, pero que prefería no entregarla por estimarla muy dura. Le dijo que las atribuciones conferidas al Comité Permanente fueron sólo circunstanciales y que, a su juicio, éste debía desligarse completamente de las universidades. Agregó que a ellos les parecía bien que la Universidad Católica retornara a su antiguo estatuto de 1961, y que la situación actual los tenía conformes. Si en cualquier caso las condiciones cambiasen, dijo, sería muy difícil que la UC volviese a quedar bajo la jurisdicción del arzobispo de Santiago, porque éste "hizo abandono de su cargo".

Cuando Bernardino informó sobre esta conversación al Comité Permanente, escribí inmediatamente al cardenal Garrone para clarificar algunos conceptos.

Recordándole que la UC fue fundada en 1888 por el obispo Joaquín Larraín Gandarillas, a la sazón vicario capitular de Santiago, y que sólo mucho más tarde la Santa Sede la declaró Pontificia, le hice ver

que la petición de que el Comité Permanente tomara su tuición se hizo por razones muy fundadas y que, por tanto, la suspensión de ese *status* debería tener motivos equivalentes. Subrayé la peligrosidad de quitar al arzobispo de Santiago facultades que le eran propias, y precisé que nunca dejé el cargo de Gran Canciller, sino que en forma expresa lo declaré temporalmente suspendido.

En el mes siguiente debía viajar a Roma, oportunidad que aproveché para conversar personalmente con el cardenal Garrone. Fue un diálogo extremadamente cordial; sin embargo, debo decir que con él ocurría que el tono de las conversaciones, y, extrañamente, también sus contenidos, diferían a menudo de los resultados prácticos y de lo que cada parte creía haber entendido. Alguna vez llegué a pensar que esto podría deberse a mi italiano, que yo consideraba imperfecto; lo raro del caso es que también sucedían estas cosas a otros obispos, más versados y letrados que yo.

En vista de los reiterados desacuerdos sobre el *status* de la UC y del efecto que éstos tenían en el conjunto de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, pedí otra audiencia con el secretario de Estado, cardenal Agostino Casaroli, a quien informé detalladamente de la situación.

El hecho es que pasaron unas cuantas semanas antes de que un amigo del gobierno me contara que el embajador de Chile ante la Santa Sede, Héctor Riesle, había viajado especialmente a Santiago para decir que yo había tenido un severo conflicto con el cardenal Garrone, y que había salido de él totalmente desautorizado, sin instrumentos ni legitimidad para intervenir en el problema universitario.

Riesle no tenía mejor información que la mía. Tampoco podía haber inventado semejante versión. Evidentemente, alguien se la había dado en el Vaticano. ¿Quién? Los testigos y los conocedores de esas conversaciones eran muy pocos; nada costaba intuir su origen.

Cuando regresé a Chile me encontré de inmediato con un problema de inesperadas proporciones. Poco antes, el 1° de mayo, un grupo de dirigentes sindicales, claramente opositores al gobierno, había querido celebrar un acto marginal a las ceremonias oficiales. Como se les negaron todos los permisos, estos hombres organizaron una marcha por el centro de Santiago, y se dirigieron hasta la Basílica del Salvador. Allí, en las puertas del templo, intervino la policía, con una violencia inusitada. Muchos asistentes, incluidos algunos sacerdotes, fueron golpeados, mientras 365 personas eran detenidas y encarceladas. Entre ellos se contaban estudiantes de Teología de la UC.



La policía disuelve una manifestación de trabajadores, el 1º de mayo de 1979, en las puertas de la Basílica del Salvador. A la izquierda se aprecia la detención del sacerdote Beltrán Villegas.

Siete días más tarde, los estudiantes de esa Facultad realizaron una manifestación silenciosa de protesta en los patios de la universidad. El rector delegado, almirante (R) Jorge Swett, identificó a 108 de los alumnos y los suspendió por uno o varios semestres de sus estudios.

Fue el estallido. En vista de la severidad de las sanciones, el Comité Permanente, a petición de académicos y alumnos, decidió intervenir. Los obispos conversaron con las partes interesadas, incluido el rector Swett, y consiguieron que los dirigentes de Teología emitieran una carta dando explicaciones.

Por alguna razón, creo haber intuido que el conflicto no se limitaba a esto; que algo más profundo se estaba expresando a través de un sencillo caso de indisciplina y castigo. Hacía tiempo que venía oyendo que las autoridades impuestas de la UC sostenían que no dependían de la opinión de los obispos chilenos, sino directamente del Vaticano; a mí me parecía desmesurada tal pretensión, pero los acontecimientos posteriores sugieren que estas personas tenían antecedentes que yo desconocía. El hecho es que, regresando de Roma, y enterado de la crisis, cablegrafié al cardenal Casaroli instándolo a no permitir la división de la autoridad de la Iglesia en Chile. Advertía que esto tendría gravísimas consecuencias locales e internacionales.

Contra lo que esperaban todos, el rector respondió a los estudiantes confirmando sus sanciones y amenazando con otras, nuevas. A sus

palabras se sumó, de inmediato, un agresivo discurso del presidente de la Federación de Estudiantes (impuesto, no elegido), José Miguel Olivares, en contra de la autoridad de la Iglesia en general, y en particular de mi gestión anterior en la UC. El Pro Gran Canciller, Jorge Medina, replicó condenando duramente al dirigente; pero contra él no hubo sanciones de la rectoría: sólo un silencio pesado y ostensible.



Un grupo de estudiantes de la Universidad Católica realiza un ayuno de protesta en la Parroquia Universitaria por la detención de compañeros el 1° de mayo. Varios serían posteriormente sancionados por la rectoría.

El 25 de mayo me decidí a escribirle al cardenal Garrone, detallándole la situación a que habíamos llegado. Supe que después hicieron lo mismo el decano de Teología, Antonio Moreno, y otros profesores de esa Facultad.

Entre tanto, el Comité Permanente no abandonó sus esfuerzos ante la rectoría; lo respaldaron la Confederación de Religiosos, los profesores de Teología, el decano, e incluso el Pro Gran Canciller. Pero el rector no oyó ninguna de estas voces. Hacia fines de mes ya era evidente que la firmeza de su decisión provenía de un respaldo muy amplio en las más altas esferas del gobierno.

En efecto, por esos mismos días, personas de inmejorable posición me confirmaron que el propio general Pinochet seguía paso a paso la situación de la UC y que, según habría dicho, "a los obispos no les cedería

en nada". De acuerdo con estas versiones, tal intransigencia era una forma de mostrarle al Episcopado su disconformidad con sus actuaciones más recientes.

Pero había también una razón de táctica jurídica: el gobierno preparaba en ese momento la ley de universidades, y evidentemente no quería dejar para ese debate ni el menor rastro de autonomía en los centros de estudio.

A comienzos de junio, el Comité Permanente consiguió restablecer el diálogo con el rector Swett. Se estaba trabajando en un proyecto de declaración conjunta que resolvería el problema -satisfaciendo el principio de autoridad que, según decía, tanto le preocupaba al rector- cuando la misma autoridad reafirmó la irreversibilidad de las sanciones y, a modo de concesión al Episcopado, abrió la posibilidad de que las clases fuesen recuperadas en el verano. Entonces, perplejo y herido por la falta de deferencia, el Comité Permanente concluyó su gestión. "El rector da por superado este asunto", anotó en su declaración final. "Nosotros no lo juzgamos así".

Recién un mes más tarde, cuando los hechos estaban ya consumados, recibí del cardenal Garrone una carta en la que se declaraba sorprendido por el tenor de mis comunicaciones, y afirmaba que jamás había querido privar al Episcopado de sus derechos y responsabilidades en las universidades. Simultáneamente, en carta al presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo Francisco de Borja Valenzuela, precisaba que los obispos locales, manteniendo sus derechos, no podrían representar a la Santa Sede en las relaciones con el gobierno, en aparente alusión al debate, ya incipiente, sobre la ley de universidades. Una tercera carta, esta vez dirigida al Pro Gran Canciller Jorge Medina, elogiaba ampliamente la gestión de la UC.

Verdaderamente, a pesar de esforzarnos con las mejores intenciones, no lográbamos entender los refinados matices que estaba aplicando la Congregación para la Educación Católica. No soy impreciso si digo que en aquellos días el desconcierto se generalizó entre los obispos, incluso en aquellos que, por razones de prudencia o de conciencia, preferían mantener el *statu quo*.

El hecho es que el rector delegado mantuvo sus sanciones, el Comité Permanente debió salir de escena, y la Sagrada Congregación quedó convencida de que su criterio había sido el mejor.

Indiscutiblemente, este "triumfo" alentó los deseos del gobierno.

de delimitar, por sí y ante sí, las esferas de competencia de la Iglesia. Durante el segundo semestre de aquel año 79, los ataques contra los obispos arreciaron a través de todos los medios conocidos.

Sin embargo, volveré sobre esto más adelante. Para clarificar el problema de la Universidad Católica, diré que cuatro meses después, cuando realizamos la visita *ad limina* a la Santa Sede, los obispos chilenos creamos una comisión para conversar sobre el caso de las universidades con el cardenal Garrone. La integramos el arzobispo Valenzuela, el obispo José Manuel Santos, y yo mismo. Sostuvimos dos reuniones -el 12 y el 16 de octubre- con el cardenal Garrone y con sus ayudantes, en un tono muy cordial y fraterno. Hubo, o nos pareció que hubo, un clima de mutua comprensión y llegamos a importantes acuerdos.



El cardenal, acompañado por los obispos auxiliares Enrique Alvear y Jorge Hourton, preside una misa solidaria ante el conflicto en la Universidad Católica.

Cuando ya estábamos de regreso en Chile, el 6 de diciembre recibimos del cardenal Garrone una nueva misiva, en la que, junto con agradecemos aquellos diálogos, nos comunicaba que "con ocasión de las tratativas (con el gobierno sobre la ley de universidades), y hasta nueva disposición, este Sagrado Dicasterio se reserva para sí todo lo relacionado con las universidades católicas de Chile". Agregaba que la petición de entregar la tuición de esas instituciones al Episcopado había surgido bajo condiciones especiales en 1968, y que para ello se había dictado un decreto cuya aplicación resultó dificultosa; tal "situación jurídica anacrónica" requería ahora una corrección, la que había sido conversada

con el Santo Padre; en adelante el Episcopado sólo colaboraría con la Nunciatura en las conversaciones con las autoridades del país.

Esta notificación causó asombro a todos cuando el obispo Santos la dio a conocer ante la Asamblea Plenaria, en diciembre del 79. El mismo recibió el encargo de responder al cardenal Garrone, puntualizando nuestras diferencias prácticamente en todos los puntos que el prefecto daba por sentados.

Dos semanas después, ante el silencio de la Santa Sede, escribí al cardenal Casaroli, confirmándole que las decisiones de la Congregación para la Educación Católica diferían completamente de cuanto habíamos conversado. Le repetí que, aunque no fuese nuestro deseo, la Universidad Católica tenía una gran importancia política en el país, y que ésta se había acrecentado al ser convertida en un instrumento ideológico de un grupo bien caracterizado, que quería devolverle su antigua condición de casa matriz de las clases pudientes. Para probar tal importancia, le podía adjuntar un titular de un diario vespertino, gobiernista, que había interpretado la instrucción del cardenal Garrone a su peculiar manera: "El Episcopado fuera de la UC".

El cardenal Casaroli demoró un par de meses en responder. Gentilmente, su carta me hacía ver que, según nuestro pedido, había informado de la situación al Santo Padre.

Sin embargo, explicaba su demora y nos pedía paciencia debido precisamente a que el cardenal Garrone había dejado su cargo en el intertanto, y la Congregación para la Educación Católica acababa de ser asumida por el cardenal William Baum. A juicio de Casaroli, era indispensable restablecer la confianza entre ese dicasterio y el Episcopado local.

Esta nota del perspicaz secretario de Estado cambió justamente el estado de la situación. Por primera vez se nos aparecía notorio que la Curia había comenzado a comprender la magnitud de las dificultades que estábamos enfrentando con la UC. Fue, en definitiva, sólo un chispazo, porque luego el dicasterio confirmó la marginación del Episcopado y aprobó, aunque *ad experimentum*, las nuevas normas emitidas por la universidad en el mismo sentido.

Guardo el mejor recuerdo de Casaroli; no porque nos diera la razón en un pleito difícil -de hecho, no lo hizo-, sino porque siempre vi en él a la más preclara inteligencia de la Curia, al hombre capaz de combinar la discreción con la sutileza y la precisión.

Siguiendo al peregrino

¿Cómo fue que las relaciones de la Iglesia chilena con el gobierno militar llegaron a fracturarse tanto hacia mediados de 1979? No puedo decirlo con exactitud. Supongo que, como siempre ocurre en estos casos, fue un proceso lento y algo misterioso, que acumuló desconfianzas, negativas y desplantes a lo largo de varios años, hasta lograr que la incomunicación fuese poco menos que total.

Pasado el primer quinquenio de régimen autoritario, teníamos ya algunas conclusiones que sacar acerca de nuestra particular experiencia. Desde luego, a diferencia de las dictaduras "clásicas" (las europeas, por ejemplo), el gobierno chileno no se fundaba en una doctrina del materialismo o del relativismo, ni menos se proclamaba ateo. Por el contrario, sus más importantes miembros eran católicos, declaraban su respeto a la Iglesia apostólica y romana, y se habían cuidado de mantener el *status* jurídico de la Iglesia local. Pero a la vez era un régimen dictatorial, que se había hecho cargo del Estado con el explícito fin de tener el "poder total". Estas dos características imprimían un signo de contradicción que marcaba la naturaleza misma de nuestras relaciones. Si el gobierno quería considerar que nuestros actos le eran adversos, no cambiaría él mismo: trataría de cambiarnos a nosotros.

Así lo sugirió el general Pinochet durante una breve conversación -más bien un intercambio de frases- que sostuvimos una vez. "Usted dice que no le gustan los gobiernos autoritarios, señor cardenal", me dijo. "Sí, señor Presidente, no me gustan", respondí. "Pero usted sabe que la autoridad viene de Dios", dijo él. "La autoridad, sí. El autoritarismo, de los hombres", dije. "Bueno", dijo, "usted hace unas distinciones muy extrañas. Lo que yo sé es que en la Biblia está escrito lo que le menciono. Para mí eso es suficiente".

Nada de la densa teología sobre la autoridad estaba envuelta en estos conceptos. Obviamente, el general estaba seguro, con la mejor fe posible, de que su ejercicio político tenía el aval de la doctrina, ya que no del magisterio.

Estaba entonces -y lo estoy ahora- persuadido de que, por ideología o por la fuerza de las circunstancias, o por ambas cosas en los casos de algunas personas, el gobierno había definido un campo de acción y unos límites que a su modo de ver serían los ideales para la tarea de la Iglesia Católica.

Tal como se buscaba hacer con la sociedad entera, se quería delimitar el conjunto de la acción de los católicos, para lo cual ciertamente era necesario controlar a la jerarquía. Un Episcopado dócil y pasivo ante los dictámenes del poder político hubiese sido el ambiente óptimo para este propósito. Creo que eso fue lo que el gobierno intentó producir en aquellos días. Y tengo la íntima certeza de que la resistencia de los obispos -en diverso grado, con la variedad de cualquier grupo humano- a esta delimitación unilateral de su competencia fue el tema central de las tensiones de aquellos días.

A través de todo el año 79 se pueden hallar las huellas de este esfuerzo sistemático, que, aunque pudo no ser conocido en sus detalles menores por la autoridad política, indiscutiblemente contaba con su aval.

Después de la prolongada crisis de la Universidad Católica, que ya he narrado, la Conferencia Episcopal emitió una carta pastoral dirigida a los campesinos del país, en la que se hacía notar la difícil situación que vivían los sectores más postergados en el agro, el debilitamiento general de sus organizaciones sociales y una tendencia, ya detectable, a revertir el proceso de reforma agraria que había reducido el latifundio en Chile. A pesar de su enfoque doctrinario y no técnico, el equipo económico del gobierno reaccionó con irritación; lo mismo ocurrió con personas de derecha que creyeron hallar en la declaración un golpe a sus bienes y privilegios.

Durante casi tres meses los ataques fueron incesantes; buscaban, principalmente, descalificar la competencia de los obispos para opinar en una materia que a juicio de los funcionarios del régimen era altamente especializada. Querían, en pocas palabras, que no se pusiera el acento en los problemas sociales, sino en los resultados económicos de largo plazo.

Eran unas impugnaciones paradójicas, porque en el fondo aspiraban a que respaldásemos un juicio técnico para el que ciertamente no tendríamos competencia, pero no querían conocer nuestras opiniones en aquello de lo que sí podíamos hablar, como eran los problemas sociales y humanos objetivos.

En agosto la tensión se trasladó, como era frecuente, al terreno de los derechos humanos. El 15 de ese mes, agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) detuvieron al profesor Federico Alvarez Santibáñez; aunque el recurso de amparo fue presentado el 16, pasaron cinco días más antes de que el profesor Alvarez Santibáñez apareciera en la Posta Central, donde murió como consecuencia de las torturas que se le habían infligido. La denuncia del caso fue realizada públicamente por la Vicaría de la Solidaridad; todavía conservo una nota en la que el vicario Juan de Castro me informa que ha recibido noticias de que la CNI, irritada con la revelación de sus ilegalidades, planea tomar represalias en contra de la Vicaría.

En efecto, éstas no tardaron en materializarse: hostigamientos contra funcionarios, amenazas veladas y abiertas, y una bien montada campaña de denuncias acerca de las conexiones "subversivas" de quienes trabajaban o eran amparados por la Vicaría. La prensa, controlada en su aplastante mayoría, llenó muchas páginas con las historias de supuestas asociaciones entre gente de la Vicaría y grupos políticos de izquierda.

Quiero decir ahora que nunca desechamos esas denuncias, aunque supiésemos que su origen era poco claro. A pesar del enojo que mis requerimientos causaban en algunos de los vicarios, siempre pedí que esas informaciones fueran verificadas en sus detalles; no quería que una verdad dolorosa se ocultase por el solo hecho de provenir de quienes se declaraban nuestros adversarios.

Por eso es que puedo afirmar, con toda responsabilidad, que la inmensa mayoría de tales denuncias carecían de fundamentos, como tuve oportunidad de confirmárselo personalmente, poco tiempo después, al Santo Padre.

El momento más angustioso de los episodios de aquellos días se produjo en torno a los cadáveres hallados un año antes en las minas de cal de Lonquén. Después de un año de investigaciones, que concluyeron con la amnistía de los policías que habían cometido los homicidios, conseguimos la promesa oficial de que los restos serían entregados a las familias para realizar un funeral cristiano.

En sí misma, la amnistía era todavía un agravio profundo para los deudos de las víctimas, que conocían ahora las atroces circunstancias del crimen, sus detalles y los nombres de los hechores. Me conmovió saber que, a pesar de todo eso, estaban dispuestos a perdonar y no aspiraban a otra satisfacción que la mínima del sepulcro cristiano.

El propio general Court estuvo coordinando los preparativos con el vicario De Castro; sería una ceremonia apuntada hacia el perdón, la reconciliación y la superación de los odios del pasado. Sin embargo, las osamentas fueron sacadas furtivamente de la morgue y trasladadas en secreto hasta una fosa común, donde se las sepultó sin testigos ni familiares. Esta ilimitada crueldad se ejecutó en nombre de un presunto bien superior: impedir que los funerales se convirtiesen en un pretexto para alterar el orden público, y evitar que las víctimas de Lonquén pasasen a ser los símbolos de la situación vivida en esos años. Fue lo que sus superiores le explicaron al buen general Court, desolado por lo que consideraba una auténtica traición.

¿Qué podíamos pensar? Con sus actos, el gobierno estaba creando las condiciones para que los sectores de extrema izquierda ganaran el prestigio de no equivocarse; si estaba dispuesto a llegar hasta estos límites con los muertos, ¿qué esperanza cabía a los opositores activos, los disidentes abiertos, los que llamaban al diálogo y la paz?

Escribí con el corazón la declaración del Arzobispado: "Reclamamos enérgicamente por esta situación de insensibilidad e inhumanidad ante el dolor del prójimo. Este hecho se suma a las innumerables humillaciones sufridas por los deudos a lo largo de estos años. Ha sido violentada hasta el extremo la dignidad humana".

A comienzos de septiembre, el prolongado silencio de las autoridades frente al drama de los detenidos desaparecidos, y las evidencias arrojadas en casos como Lonquén y Cuesta Barriga, movieron a los familiares a iniciar una nueva huelga de hambre. Esta vez, el Consejo de Presbiterio de Santiago, tras una difícil reunión, decidió emitir una declaración dando a conocer los estériles esfuerzos empeñados por la Iglesia para aclarar estas situaciones. El comunicado ponía de relieve la grave responsabilidad de los tribunales de justicia, que en un elevado número de casos no habían actuado con diligencia, ni para detener los abusos, ni para esclarecerlos. Concluía llamando a orar por los que sufrían tantas violencias, y a deponer los odios en nombre de Cristo.

Sabíamos que esta declaración iba a suscitar nuevos actos de virulencia en contra de la Iglesia de Santiago; precisamente por esas razones yo mantuve hasta el final mis dudas acerca de la conveniencia de emitirla en ese momento.

Creo que esa circunstancia, y nuestro verdadero deseo de que terminase el ya largo período de asperezas tuvieron mucho que ver

cuando declaré, pocos días después, que el discurso anual del Presidente Pinochet, pronunciado en el día del aniversario del golpe militar, me parecía "bien inspirado".

En verdad, quien leyera el discurso, que ponía particular énfasis en la superación de la pobreza y en el mejoramiento de las condiciones de vida de los chilenos, no podría haberlo considerado de otro modo. A pesar de sus fuertes contenidos en contra de la oposición, los políticos y los disidentes, la inspiración en favor del progreso era algo positivo. Por supuesto, ello no implicaba un juicio sobre los hechos, sino apenas sobre las intenciones. De todos modos, en los días siguientes recibí una verdadera andanada de críticas... esta vez, de los propios sacerdotes y laicos de Iglesia. Muchos de ellos me reprocharon por el solo hecho de haber asistido al aniversario del régimen; otros dijeron que mis breves palabras habían "legitimado" al general Pinochet; y aun unos terceros hablaron de un "golpe de timón" en la Iglesia.

No quiero creer que en ninguno de estos juicios pudiese haber mala fe. Pero estoy convencido de que revelaban una profunda distorsión. Pese a nuestra insistencia en que a la Iglesia no le correspondía conferir ni quitar legitimidad a ningún poder político, no cabe duda de que muchos hombres de Iglesia pensaban lo contrario. Creían que el pastor tenía una obligación moral respecto de la conducción de la sociedad, y veían difuso el límite entre su testimonio evangélico y el compromiso político.

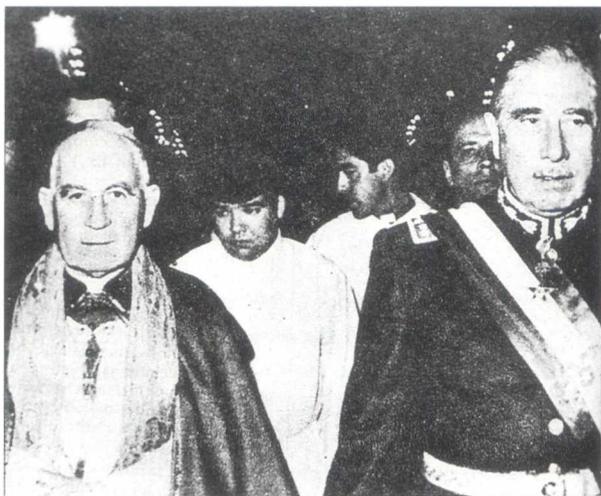
Debo decir que no siento que la responsabilidad por estas distorsiones me sea totalmente ajena. No puedo cargar con todas ellas, porque muchas se habían producido a pesar de la reiteración de nuestro mensaje; pero quizás algunas encontraron su origen en la firme defensa de los derechos civiles y humanos que debimos ejercer en esos años, y que pudieron hacer pensar que la Iglesia era algo así como otro poder, tal vez no del Estado, pero sí de la sociedad movilizada.

Tratamos de combatir ese error mediante un magisterio paciente y persistente, en el cual me acompañó una mayoría del clero. Pero los frutos de ese trabajo se vendrían a ver sólo años más tarde.

Sin embargo, en aras de la justicia es necesario agregar que ninguno de estos gestos fue tampoco apreciado por el gobierno.

Sólo unos días después de aquella ceremonia oficial, entregué a las autoridades, como solía hacerlo, una copia de la homilía que tenía previsto pronunciar durante el Te Deum del 18 de septiembre. Recordaba en ella nuestra declaración de septiembre de 1973, que tanto había lamentado el desenlace violento de la crisis institucional como pedido moderación con los vencidos. Decía que nuestros esfuerzos no podían comprenderse sin tener presente ese llamado.

"Humildemente", agregaba, "debemos confesar que no siempre hemos tenido éxito en nuestras peticiones, y nuestra voz no ha sido escuchada en muchas oportunidades". Citando a Juan Pablo II, recordaba que sin respeto a los derechos del hombre no hay paz posible en las naciones, y pedía orar por la patria, para hacer posible la tarea de la reconciliación.



El cardenal acompaña al Presidente Augusto Pinochet hasta las puertas de la Catedral de Santiago, al concluir el Te Deum del 18 de septiembre de 1979.

El general Court me visitó unas horas antes del Te Deum para decirme que la homilía había sido considerada inaceptable por el gobierno; me pareció entenderle que si yo la leía, la Junta no asistiría o abandonaría el templo. Acepté, con profundo dolor, mutilar la lectura. Pero le advertí al general que de todos modos distribuiría el texto

completo, porque los chilenos tenían derecho a saber lo que en verdad pensaba su pastor.

El Te Deum se realizó en medio de una enorme tensión. Las esposas de los miembros de la Junta no asistieron, la televisión omitió hasta la más mínima escena de la ceremonia y la radio *Chilena*, que transmitía en directo, fue objeto de misteriosas interferencias. Por eso, cuando una revista me preguntó poco después por la hostilidad de que estábamos siendo objeto, contesté crudamente: "Efectivamente, han arreciado los ataques en contra de la Iglesia y no creo que la situación de la Iglesia en este momento sea buena en sus relaciones con el gobierno".

Con ese difícil trasfondo debí salir de Chile a fines de septiembre del 79. Me esperaba una hermosa tarea. En el tercer viaje de su Pontificado, Juan Pablo II visitaría Irlanda, y los salesianos de ese país querían que yo acompañase al Papa durante su visita a la querida congregación.

Yo sentía en aquellos días una gran curiosidad por la manera tan dinámica con que el Papa Wojtyla llevaba su Pontificado cuando apenas cumplía un año en él. Después de asistir a Puebla (en un viaje que también incluyó las ciudades de Santo Domingo y Nassau), en marzo de 1979 se había dado a conocer su primera encíclica, *Redemptor hominis*, una honda y personalísima reflexión sobre la necesidad de poner a Cristo en el centro de la vida humana, como único modo de abrirse a la revelación de la justicia, la verdad y la libertad. La encíclica desmentía rotundamente las imputaciones de "pietismo espiritualista" que algunos habían comenzado a sembrar en torno de este Papa polaco, tan devoto de la Virgen y tan enfático en su llamado a la oración.

Por el contrario, *Redemptor hominis* venía a proponer lo que el padre jesuita Juan Ochagavía llamó "una cristología práctica", según la cual en la Iglesia no hay espacio para la inactividad ni el conformismo. Por ello exigía de los cristianos una atención profunda y real hacia los problemas concretos del hombre contemporáneo, un esfuerzo de comprensión e iluminación sobre "los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo". "El fijarse en el hombre", decía el Papa, "en sus problemas reales, en sus esperanzas y sufrimientos, conquistas y caídas, hace que la Iglesia misma como cuerpo, como organismo, como unidad social perciba los mismos impulsos divinos, las luces y las fuerzas del Espíritu que provienen de Cristo crucificado y resucitado, y así es como ella vive su vida".

Este programa de acción, tan exactamente inspirado en el Concilio

Vaticano II, se complementaba con un decidido espíritu misionero, una apelación que el Papa parecía haberse propuesto llevar hasta cada rincón de la tierra, cada aldea y cada hombre. "¡No temáis! Abrid las puertas a Cristo", había proclamado en su coronación. Ahora, esa frase lo precedía en cada nueva fase de su Pontificado peregrino.

En julio, el segundo viaje fuera de Roma lo había llevado hasta su Polonia natal, en una misión extraordinaria que había significado que por primera vez el Papa tocaba tierra en una nación dominada por el comunismo. Las inverosímiles multitudes que lo recibieron en Polonia iniciaron entonces un cambio histórico de proporciones planetarias.

Creo que es difícil no relacionar ahora, con la perspectiva del tiempo, el arrebatador influjo de aquella peregrinación con los veloces sucesos que en los años siguientes condujeron a la caída masiva del comunismo en Europa oriental y transformaron el mapa mundial. No se requería para ello, como tan torpemente se ha dicho con posterioridad, una "conspiración" del Vaticano con otras potencias; bastaba la presencia del Pontífice, abriendo con su palabra el camino de la verdadera libertad, para que grandes mitos se derrumbasen.

Muchas cosas nos habían sorprendido de este Papa en esos breves meses. Pocos días después de que fue elegido, algunos de los cardenales que asistíamos al cónclave le habíamos pedido una reunión especial del Sacro Colegio, en vista de que, con excepción de los sínodos y los cónclaves, no teníamos oportunidad de juntarnos con el Santo Padre en nuestra particular condición de Senado. Me correspondió a mí enviar la carta a nombre de los cardenales latinoamericanos, la que se juntó con las solicitudes de grupos de otros continentes. Francamente, y dado que no era la primera vez que formulábamos este planteamiento, no abrigábamos grandes expectativas sobre una respuesta rápida.

Pero he aquí que antes de seis meses la Santa Sede distribuyó la invitación del Papa para reunirnos en noviembre, con un temario que abordaba los grandes problemas de la Iglesia en la coyuntura histórica.

De modo que yo tenía muchas razones para intentar seguir al peregrino y procurar una visión más cercana de su peculiarísimo estilo. Irlanda fue una muy buena oportunidad para ello. A pesar de la brevedad del encuentro, no olvido el fervor explosivo y la devoción que el Papa sembraba a su paso, aun en una nación tan sensibilizada hacia diversas expresiones religiosas.



El cardenal Silva Henríquez obsequia varias bufandas artesanales al cardenal Léo Josef Suenens, en Bruselas, en octubre de 1979.

El 3 de octubre me trasladé a Bruselas, adonde me había invitado el cardenal Léo Josef Suenens. Mi admirado amigo cumplía 75 años en esos días, y, conforme a la norma, le correspondía renunciar al Arzobispado de Malinas, al que por tantos años había servido. Fuimos a verle con Cristián Precht, y puedo confesar ahora que sentí una estremecida tristeza constatando la propia pena de Suenens por su retiro: yo tenía bien presente que en menos de tres años habría de seguir el mismo destino.

También fuimos invitados a un almuerzo por los Reyes Balduino y Fabiola, dos buenísimas personas que no escatimaron elogios para la tarea de la Iglesia chilena bajo tan difíciles condiciones.

El 10 de octubre partí hacia Roma, adonde simultáneamente habían llegado 27 de los 31 obispos chilenos. Debíamos realizar la visita *ad limina*, usual cada cinco años. Pero esta tenía un carácter excepcional: por primera vez en la historia, el Papa nos recibiría en conjunto, después de sostener entrevistas individuales con cada uno.

Las audiencias comenzaron en la mañana del 11 de octubre, en Castelgandolfo, donde el Papa descansaba de su visita a la ONU, en Nueva York, a la que había partido tras la peregrinación por Irlanda. Con mis obispos auxiliares Enrique Alvear y Jorge Hourton, nos tocó el último turno de aquel día. Llevábamos un extenso informe sobre la Arquidiócesis, reunido en tres tomos; habían participado en su elaboración

todas las dependencias del Arzobispado. El Papa, sin embargo, estaba notablemente bien informado acerca de nuestra situación. Nos hizo preguntas precisas y directas, y después de unos 40 minutos, se despidió bendiciéndonos.



El Papa recibe en audiencia especial a los encargados de la Arquidiócesis de Santiago, el cardenal Raúl Silva Henríquez y los obispos auxiliares Jorge Hourton y Enrique Alvear, en Castelgandolfo, el 11 de octubre de 1979.

Durante aquellas audiencias me invitó a un almuerzo privado. Allí tuve la ocasión de exponerle mi impresión de que las recientes dificultades de la Iglesia chilena frente al régimen militar nacían de los intentos de éste por circunscribir su esfera de acción. Le expliqué la particular dificultad de defender la misión de la Iglesia bajo un gobierno cuyos componentes se definían como católicos, situación diferente -e incluso más compleja- que la de aquellos regímenes declaradamente antirreligiosos.

El Papa fue muy perspicaz para comprender este punto de vista. Aunque su estilo lo hace parecer distraído -rara vez mira a su interlocutor, y a menudo deja rondar la vista por los objetos cercanos-, está dotado de una penetrante percepción de los más sutiles matices de cada problema. Así lo pude constatar durante aquella larga conversación; pero creo que además es la impresión que han tenido muchos otros testigos.

El 13 de octubre, los 27 obispos chilenos que habíamos llegado a Roma fuimos convocados a una audiencia especial, en la que el Papa nos dirigiría un mensaje particular. En la reunión, que duró 45 minutos, Juan Pablo II leyó un hermoso mensaje en el que, junto con instarnos a seguir en nuestra tarea, nos agradeció el acompañarlo en sus esfuerzos por la paz entre Chile y Argentina.

Fue un momento especial para todos. Sentirnos respaldados en ese instante por una voz tan poderosa como la del Santo Padre, era un desmesurado premio para nuestros frágiles esfuerzos.

¿Qué fue, en apretada síntesis, lo que nos dijo el Papa? En primer lugar, que la evangelización es una tarea permanente y esencial del ministerio sacerdotal; que tal misión no puede dirigirse solamente a la inteligencia, sino, sobre todo, al corazón de los hombres; que a los pastores nos cabe ser maestros de la Verdad y dirigirnos a todos, sin excepción; que el problema de las vocaciones sacerdotales es vital para la Iglesia; que se requiere que la formación ponga énfasis en los deberes específicos del sacerdocio; y, finalmente, que es preciso velar por la unidad de la Iglesia, la que "no nace de formas externas, sino de una fuerza interior que arraiga en la verdad y en el bien".



El Papa con el cardenal Silva Henríquez, durante la visita ad limina de octubre de 1979.

Sin embargo, en Chile, la prensa de derecha aisló de contexto una de las frases de aquel discurso y pretendió hallar en ella una reprimenda contra los obispos. "No sois ni un simposio de expertos, ni un parlamento de políticos, ni un congreso de científicos o técnicos, sino que sois pastores de la Iglesia", citó el diario *El Mercurio*, cortando el sentido completo de la oración y haciéndola aparecer como una advertencia contra hechos y acciones actuales.

Era evidente que estábamos de nuevo frente a lo que ya he mencionado: un esfuerzo por demarcar la esfera de la jerarquía, esta vez

con la audacia mayúscula de pretender usar las palabras del Papa. Alrededor de la cita mutilada se construyó, no ya una opinión, sino una completa y extensa campaña por la cual se nos quería presentar como un Episcopado desautorizado; incluso un grupo de buenas señoras, naturalmente partidarias del régimen, llegó a constituir un "Comité pro unidad de los católicos", cuyo fin era... ¡difundir el mensaje del Papa a los obispos!

Por supuesto, esta utilización no tardó en ser conocida en Roma. El propio Papa tomó nota de ella, y quince días más tarde, el domingo 28 de octubre de 1979, en la Plaza San Pedro, se refirió al drama de los detenidos desaparecidos en Chile y Argentina. Una semana después, el 4 de noviembre, durante el Angelus, se detuvo más específicamente en la Iglesia chilena, saludando el "espíritu de hermandad" de los obispos y el "dinamismo" con que llevaban a cabo su tarea pastoral y catequística.



El Canciller de Austria, Bruno Kreisky, saluda al cardenal en el Palacio Pallavicini, momentos antes de comenzar la ceremonia donde la Fundación Kreisky entregaría sus premios a la defensa de los derechos humanos. 19 de octubre de 1979.

En el intertanto, y después de completar las gestiones que con diversos motivos habíamos decidido realizar en el Vaticano a nombre de la Conferencia Episcopal, viajé a Austria para recibir el Premio Fundación Bruno Kreisky, instituido para quienes destacan en la defensa de los derechos humanos. Era el segundo galardón que se me confería en aquel año difícil. Poco antes, siguiendo su tradición de incorporar a un eclesiástico a su cuerpo regular, la Academia Chilena, que a la sazón presidía el escritor y profesor Roque Esteban Scarpa, me había hecho el honor de considerar mi nombre.

En el caso austriaco, la bella ceremonia tuvo lugar en el Palacio Pallavicini de Viena, con la presencia del Presidente Rudolf Kirschlaeger; era la primera vez que el entonces canciller de esa nación, Kreisky, entregaba los premios, y estoy aún muy orgulloso por haber sido incluido en un grupo tan notable de personalidades: el arzobispo de Managua, Miguel Obando y Bravo, el profesor Arif Leva Eliav, el doctor Isam Sartawi, el matrimonio de Jean e Hildegard Goss-Mayr, Amnistía Internacional y la comisión de derechos humanos de la Federación Internacional de Sindicatos Libres.



El cardenal con el pastor Philip Potter, secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, en Ginebra, el 27 de octubre de 1979.

El 26 de octubre salí hacia Ginebra, Suiza, para participar en una reunión del Consejo Mundial de Iglesias, cuyo secretario general, el pastor Philip Potter, había proporcionado una ayuda tan consistente como desinteresada al financiamiento de proyectos humanitarios de la Iglesia Católica; lo acompañaban en nuestro itinerario otros dos hombres extraordinarios: el pastor Emilio Castro, director de la Misión de Evangelización, y Charles Harper, que había sido uno de los primeros valientes en ayudar a Pro Paz y que ahora dirigía la oficina de derechos humanos para América Latina. El CMI era uno de los más generosos benefactores de la Vicaría de la Solidaridad y de varios otros programas relacionados con los trabajadores y los pobres. En Ginebra di una conferencia de prensa acerca de la situación chilena, donde volví a subrayar que la misión de la Iglesia no es hacer política, aunque sí tenemos la obligación de juzgarla cuando ella va contra los principios cristianos.



El cardenal con Charles Harper, encargado de la oficina de derechos humanos para América Latina del Consejo Mundial de Iglesias, y el pastor Emilio Castro, director de la Misión de Evangelización, en Ginebra, octubre de 1979.

Estas declaraciones suscitaron nuevos ataques en Santiago. Algún ministro se sintió obligado a responder que la pobreza no era tan grave como yo la presentaba, y a mostrar cuánto había aumentado el gasto social bajo el gobierno de los militares. Tales respuestas, unidas a la campaña sobre los obispos amonestados, que seguía su curso, me hicieron presumir que en buena medida la agresión estaba centrada en mi persona. Creo que no exageraba.

Volví a Roma a comienzos de noviembre, para participar en la reunión especial del Sacro Colegio Cardenalicio.

El *Plenum* duró poco más de una semana, pero fue extraordinariamente ilustrativo acerca del modo en que Juan Pablo II ejercería el gobierno de la Iglesia. Su alocución inicial, dada el 5 de noviembre, dejó en claro que él seguiría personalmente, no ya la evolución general del mundo actual, sino la forma concreta en que el Vaticano tomaría su participación en él. El discurso puso énfasis en la "realización coherente" de las enseñanzas y directrices del Concilio, a la que confería el carácter de primer objetivo de su Papado. Luego subrayaba la necesidad de un "adecuado entedimiento" de la libertad en la Iglesia, proposición que por sí misma sugería la existencia de equívocos y desviaciones en el camino recorrido hasta entonces; y, en un mismo movimiento, afirmaba que no sería posible otra renovación que no fuese la más auténtica conversión a Dios.

En los días sucesivos las figuras más relevantes de la Curia hicieron detalladas relaciones sobre el temario fijado por el Papa. Así, el cardenal Casaroli explicó los cambios en la estructura de la Curia desde las reformas introducidas por el Concilio; el cardenal Garrone se extendió en las relaciones entre Iglesia y cultura, con particular énfasis en el papel de vanguardia de la Pontificia Academia de las Ciencias; y los cardenales Egidio Vagnozzi y Giuseppe Caprio describieron la situación financiera de la Santa Sede, que en el año anterior había arrojado un balance con el poco alentador déficit de 20 millones de dólares.

Hubo sesiones generales para oír a los relatores, y luego los cardenales fuimos reunidos en grupos idiomáticos para las discusiones particulares.

Después de eso, tendríamos todavía tres meses para hacer llegar nuevas observaciones. Las que yo envié a comienzos del año siguiente estaban centradas en los problemas que a menudo afrontábamos las iglesias de América Latina debido a la distancia con la Santa Sede: la voluntad de que la relación entre la Curia y los episcopados tuviese siempre presente la unidad como meta; la necesidad de que en las relaciones con el Estado se oyera también a los obispos, como complemento indispensable de la Nunciatura, y el gran deseo de que la Curia no fuese entendida como un camino para "hacer carrera" eclesiástica. Creo que era un conjunto de ideas ampliamente compartido entre los cardenales.

Regresé el 15 de noviembre. En vista de que el clima de hostilidad oficial y de manipulación extraoficial de las palabras del Papa continuaba, di una conferencia de prensa en la que subrayé el expreso y concreto respaldo que Juan Pablo II había dado a la actuación de la Iglesia chilena. Me sentía verdaderamente enojado -quizás decepcionado sería una palabra más exacta- por el modo en que la prensa estaba abordando el tema. Los periodistas rieron cuando cité, como expresión de este sentimiento, el poema de Campoamor: *En este mundo traidor / nada es verdad ni mentira / todo es según el color / del cristal con que se mira*. Sin embargo, estaba perfectamente consciente de que la prensa era sólo la expresión visible de una división más profunda, que había cobrado una entidad real entre los católicos chilenos, a pesar de nuestros esfuerzos por evitarla. Ya no cabía dudas había feligreses que no querían a su pastor

porque demasiado a menudo no concordaban con él. Era una constatación dolorosa, pero ineludible.



El cardenal da una conferencia de prensa para informar sobre la visita ad limina, el 15 de noviembre de 1979.

Por eso, unos días más tarde, cuando celebré mis 20 años de obispo en la Catedral de Santiago, quise poner el acento en la unidad de la Iglesia. Fue un acto precioso, que no olvidaré jamás: el templo se repletó de hombres y mujeres que querían expresar, en una hora difícil, el cariño hacia este viejo sacerdote, que, a pesar de todos sus defectos y debilidades, no encontraba otro camino que el de dar testimonio de su apasionado amor por el hombre, reflejo pequeño y magnífico del Padre.

La prueba de ser pastor

El Papa tuvo la generosidad de concederme un nuevo obispo auxiliar al culminar el verano de 1980. El elegido fue Manuel Camilo Vial, un hombre joven, al que yo había conocido muchos años antes, cuando dirigía Cáritas y aún no me nombraban obispo. El era un joven seminarista al que los padres pallotinos enviaron a buscarme cierto día de los años 50 a la estación de Coblenza, en Alemania.

Nos vimos pocas veces en los años siguientes, pero yo seguía muy atentamente los sucesos que conmovieron a la Congregación de los Pallotinos, con la separación del padre José Kentenich y la creación del vigoroso movimiento de Schoenstatt. Cuando el conflicto interno estalló con más fuerza, una espléndida generación de muchachos chilenos - Francisco Javier Errázuriz, Joaquín Alliende, Francisco José Cox, y ciertamente Manuel Camilo- se vio expuesta al peligro de quedar marginada de todo.

Dadas las características del problema que habían tenido, no cabía duda de que les sería muy difícil, si no imposible, retornar a su Congregación de origen. Hablé muchas veces con ellos acerca de la necesidad de que resolvieran este problema del mejor modo, hasta que en un cierto momento los vi francamente angustiados. Resolví entonces formar una Pía Unión, una entidad de derecho diocesano, canónicamente reconocida, que permitía a los sacerdotes agruparse para fines definidos.

Dado ese importante paso, se incorporaron al trabajo del Arzobispado como cualesquiera sacerdotes diocesanos. La fórmula fue exitosa y los propios padres de Schoenstatt la difundieron en otras diócesis del mundo, que la adoptaron como propia. Ello permitió que los schoenstattianos continuasen trabajando hasta la rehabilitación de su fundador, en la que, como he narrado en el capítulo 25, tuve también alguna modesta participación. Muchos años después, precisamente en 1982, cuando su superior general ya era un chileno, Francisco Javier

Errázuriz, consiguieron de la Santa Sede el reconocimiento como Instituto Secular Pontificio.

Después de la constitución de la Pía Unión, Manuel Camilo se fue a Chimbarongo, y luego a Temuco y Concepción, donde trabajó muy cerca de los obispos locales. De modo que cuando lo asignaron a Santiago yo sentí la doble alegría del reencuentro y del acto de justicia.

En verdad, este nombramiento había llegado a ser muy dificultoso, hasta el punto de constituirse en motivo de un serio y áspero intercambio con el cardenal Baggio. Mi querido amigo de juventud y promotor episcopal era ahora el prefecto de la Congregación para los Obispos, y en esa calidad presentaba al Papa los argumentos necesarios para las nuevas consagraciones.

En el curso de 1979 yo había tenido algunas dificultades con uno de mis obispos auxiliares, el que había decidido suspender el ejercicio de su cargo. Aunque es un hombre excelente, las discrepancias se habían vuelto insuperables por un motivo muy complejo: él consideraba necesario que el arzobispo estableciera una férrea disciplina sobre las actuaciones y los dichos de los otros dos obispos auxiliares, quienes aparecían comprometidos en una línea de oposición al gobierno y actuaban a veces en forma distinta a la del pastor; a mí me parecía que en alguna medida él podía tener razón, e incluso compartía algunas de sus apreciaciones, pero, tratándose de obispos, no debía yo imponer una sola opinión, ni mucho menos censurar la de mis hermanos. Esta diferencia nos condujo a un punto muerto, y yo perdí de hecho, aunque no de derecho, a uno de mis obispos auxiliares.

De modo que, apoyado en la circunstancia de que Santiago era ya una ciudad que tenía unos cuatro millones de habitantes, comencé a pedir el nombramiento de un nuevo auxiliar. Pese a que en la práctica estaba funcionando con dos, la Santa Sede insistía en considerar que tenía tres. Esta angustiosa diversidad de perspectivas fue prolongando una situación que para mí ya era muy difícil de sostener.

A comienzos de 1980, quise hacer valer mis puntos de vista con mayor energía ante el cardenal Baggio, a quien seguía -y sigo- considerando como un amigo entrañable.

Pero ocurrió que también él me había dirigido una extensa carta, que por desgracia no llegó a mis manos sino hasta mucho después de que mis peticiones habían partido al Vaticano. Su carta recordaba la visita *ad limina* del año anterior, y elogiaba la "intensa operosidad" de la Iglesia

de Santiago, que se reflejaba en los tres tomos de nuestro informe. Añadía que, sin embargo, en esos textos no se distinguía mi propia opinión de la que tenían mis colaboradores, porque no la consignaba expresamente. Finalmente, recordando las palabras del Papa, nos instaba a asumir plenamente la unidad de dirección, cuidar la inspiración evangélica de la acción arquidiocesana y velar por la fidelidad al magisterio, especialmente en el campo de la promoción humana.

El cruzamiento de la correspondencia resultó terrible. Debido a él, creí ver en la comunicación de mi amigo la reiteración del reproche sobre el supuesto dominio de los vicarios en la Arquidiócesis, además de una alusión hiriente a la dirección pastoral. Respondí, pues, que todo lo que decía el voluminoso *dossier* era de mi responsabilidad, y que todas estas imputaciones eran falsas hasta el grado de la paradoja: ocurría más a menudo que tuviese que medir mi energía con mis colaboradores, que lo contrario. Agregué, sobre lo segundo, que después de 50 años de sacerdocio, 20 de episcopado y 17 de cardenalato, "la afirmación de que en mi actuar no existe fidelidad al Evangelio ni al Magisterio de la Iglesia me hiere en lo más íntimo de mi ser. ¡Gracias, señor cardenal! ¡El Señor me ha hecho la gracia de saber, por su intermedio, que soy un siervo inútil!".

Debí arrepentirme de la dureza de estas palabras.

Gracias a una gestión directa del cardenal Casaroli, secretario de Estado, el nombramiento del nuevo obispo auxiliar llegó dos semanas después de mi última carta. Y quizás no recordaría ahora ese incidente, si no fuese porque los sucesos posteriores pusieron tan de relieve la necesidad de que el pastor cuente siempre con el apoyo de la Santa Sede, pues los argumentos que se emplean en su contra, por bienintencionados que sean, terminan convirtiéndose en instrumentos de sus críticos locales.

Antes de que transcurriese un mes partí a Roma. El 18 de abril me recibió el Papa Juan Pablo II. Aunque el primer objetivo de mi visita era agradecerle el nombramiento de Manuel Camilo, el Pontífice estaba vivamente preocupado por las dificultades que había atravesado la mediación, y en particular por la resistencia al acuerdo que a él le parecía ver en el lado argentino.

Por mi parte, le aseguré que la Iglesia chilena daría un firme respaldo a la gestión, sin fisuras de ninguna especie, y agregué que a mi modo de ver el gobierno chileno tendría un comportamiento semejante.



El Papa Juan Pablo II con el cardenal Raúl Silva Henríquez, el obispo Manuel Camilo Vial y el sacerdote Cristián Precht, durante una audiencia de 1985.

Con todo, la particular identidad de puntos de vista entre el gobierno y la Iglesia en el caso de la mediación no había servido para atenuar otros conflictos. La autoridad militar continuaba manteniendo una política de dureza hacia los eclesiásticos, y las condiciones restrictivas sobre la sociedad no habían cambiado en lo sustancial.

Sólo un par de meses antes, yo había solicitado que se permitiera reingresar, aunque fuese por algunos días, a tres personas exiliadas (entre las cuales estaba Laura Allende, la hermana del ex Presidente, afectada por un cáncer terminal), y la respuesta había sido negativa; los sacerdotes estaban resintiendo ya el efecto de las medidas represivas o intimidatorias que a veces se tomaban en su contra.

Después de la conversación, que excedió con largueza las dos horas, acompañé al Papa en su primera visita a Turín, la ciudad de don Bosco. Estuvimos junto a él con el rector mayor de los Salesianos, mi buen amigo Egidio Viganó, en el estrado en que, junto al monumento de nuestro santo y frente a la Basílica de María Auxiliadora, dirigió un hermoso y divertido discurso a más de 40 mil jóvenes reunidos por la congregación para oír su palabra.

La ceremonia fue extraordinaria, a pesar de que Turín, ciudad industrial y obrera, era desde los años 70 el principal centro de operaciones de los terroristas de las Brigadas Rojas; la fuerza viva del mensaje cristiano, encarnada por el mensaje del Papa y el robusto ejemplo de don Bosco, pasaba por encima de estas condiciones adversas para capturar el corazón y la imaginación de todos. Turín vivía a Jesús como en sus mejores días.



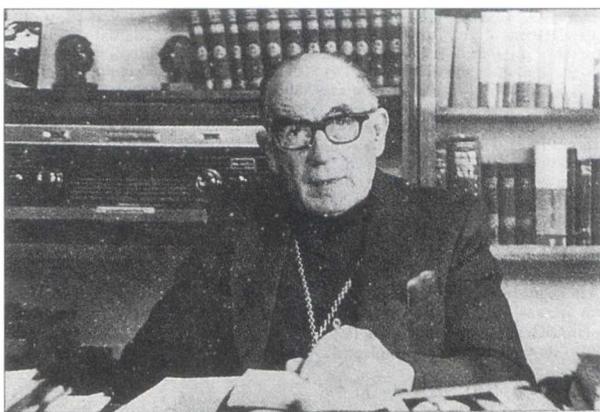
El Papa en su primera visita a Turín, frente al templo de María Auxiliadora. Junto a la estatua de San Juan Bosco aparecen el superior salesiano Egidio Viganó y el cardenal Silva Henríquez.

Estuve en Italia casi hasta fines de abril. Pero en mi ausencia, el diario *Las Ultimas Noticias* publicó en Santiago extractos de un discurso privado pronunciado dos años antes por el Gran Maestre de la Masonería chilena, Horacio González Contesse, en el que acusaba a la Iglesia de estar gastando ingentes cantidades de dineros para hacer proselitismo religioso y me imputaba directamente haberle propuesto, a través de un grupo de señoras, una acción mancomunada para derrocar a la Junta Militar.

A pesar del evidente absurdo de semejante versión, el diario montó una verdadera campaña en torno al asunto, manteniéndolo por varias días en sus primeras planas. No bastó la carta de desmentido de la principal acusada en esta imposible conspiración, la esposa de Luis Corvalán, Lily Castillo, ni tampoco la excusa que me presentó poco después, por escrito, la periodista que había redactado las crónicas. No: alguien estaba muy interesado en convertir una calumnia en un nuevo instrumento contra el cardenal.

Aunque sé perfectamente que ninguna de estas expresiones interpretaba a los masones, tal como muchos de ellos me lo dijeron después, debo decir que me dolió el silencio que mantuvo el Gran Maestro González Contesse en el episodio. Las buenas relaciones sostenidas entre la Masonería y la Iglesia chilena (esta última, precursora en una materia hasta entonces difícil para los católicos) en los años recientes, en un ambiente de tolerancia que nos enaltecía, no justificaban este tácito asentimiento a la campaña.

En todo caso, a mi regreso, el 28 de abril, desarmé el burdo montaje en una conferencia de prensa, en la que además aproveché de invitar a los católicos a la misa de San José Obrero, que se celebraría, como era tradicional en mi gestión, en la Catedral Metropolitana.



El cardenal revisa una declaración pública, en una fotografía tomada el 1º de mayo de 1980.

Esa misma tarde me fue a ver el general Court, con un asunto urgente. Según se le había informado en La Moneda, grupos extremistas tenían la decisión de provocar sangrientos incidentes en la Catedral, con el fin de culpar al gobierno. De acuerdo a esos datos, hasta se conocía la impresión anticipada de medallas sin nombre para los "mártires" del 1º de mayo. La conversación fue poco agradable, porque a mí me pareció, en principio, que esta denuncia podía ser un artilugio ideado precisamente para impedir la celebración religiosa, y Court estimó inaceptable que yo manifestase semejante desconfianza del gobierno militar.



El cardenal conversa con el general (R) Jorge Court (a la derecha), durante una reunión en el edificio Diego Portales con el Presidente Pinochet (al centro). Asiste también el obispo castrense Francisco Javier Gillmore (a la izquierda).

El hecho es que aquella tarde llamamos al mando superior de la policía y al ministro del Interior para confirmar la gravedad de las presunciones; pero ninguno de esos altos funcionarios estaba disponible. De modo que al día siguiente anunciamos la suspensión de la misa, lamentando que "por primera vez, después de 19 años, hayamos tenido que renunciar a conmemorar este nuevo aniversario, para nosotros tan querido".

Por lo demás, el clima se había enrarecido objetivamente, y no era falso que algunos grupos extremistas, sin duda escuálidos pero audaces, estaban ejecutando acciones inusitadamente violentas contra el gobierno.

En particular el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) se había mostrado activo a través de atentados explosivos y asaltos. El 30 de abril, un intento por dinamitar la llamada "Llama de la libertad" que el gobierno había instalado inicialmente en el cerro Santa Lucía, terminó con el asesinato de un carabinero que custodiaba el lugar. Aunque a la distancia parezca inconcebible, en los días posteriores cierta prensa publicó unos análisis de origen incierto que intentaban comprometer a la Iglesia en estos hechos, ya como refugio de prófugos violentos, ya como cómplice de núcleos subversivos.

Al fin, el 1º de mayo se celebró con tres actos: el oficial, al que

asistió el gobierno en pleno, con sus correspondientes dirigentes sindicales; el de un sector de dirigentes distantes del gobierno y cercanos a la DC, y el de la Coordinadora Nacional Sindical, el grupo más combatido por el régimen, al que asistieron unas mil personas.

Dado que este último era presidido por un trabajador cristiano, como Manuel Bustos, asistieron el obispo Alvear y tres de mis vicarios, Miguel Ortega, Cristián Precht y Alfonso Baeza. En cuanto salieron, acompañados del sacerdote Fernando Tapia, fueron interceptados por un grupo de civiles en una camioneta, que los mantuvieron encañonados en plena calle, hasta que alguien dio la contraorden y les permitió continuar su camino.

A contar de entonces, las acciones directas en contra de recintos y personas de Iglesia se sucedieron con un ritmo diario. Numerosas parroquias de barrios populares fueron "visitadas" o allanadas por la policía, mientras algunas fueron atacadas a balazos durante la noche; hubo vigilancia en dependencias importantes de la Arquidiócesis, e incluso fueron detenidos seminaristas, sacerdotes, y nuevamente el vicario Miguel Ortega. Hasta el 20 de mayo podíamos contar casi 40 de estos episodios.

El caso de Ortega estuvo a punto de convertirse en un episodio mayor. El gobierno se mostraba empeñado en acusarlo por diversas razones, y algún tiempo después el ministro del Interior le dijo a Juan de Castro que pensaban encarcelarlo porque había escrito una carta dirigida a los jóvenes que hacían el servicio militar, que a su juicio contenía llamados a la desobediencia e incurría en el delito de sedición. Sabiendo que contaría para esto con todo mi respaldo, De Castro se apresuró a responderle al ministro que la Iglesia de Santiago no aceptaría esto, que Ortega estaba fuera de toda duda para todos, y que lo defenderíamos con dientes y uñas si era necesario. No sé si habrá impresionado al ministro, pero lo cierto es que Ortega no fue procesado.

Más o menos en la misma fecha, Manuel Camilo Vial, cuya consagración se celebraría en la Catedral el 18 de mayo (día del cumpleaños del Papa), recibió del gobierno la invitación para almorzar con el general Pinochet, un gesto que éste había hecho tradicional cada vez que se nombraba a un nuevo obispo. Manuel Camilo aceptó, pero pidió conocer la lista de invitados. Cuando se la leyeron, notó que la integraba casi todo el Comité Permanente, menos yo. Dijo entonces que si su arzobispo no estaba, él no podría asistir.

Hubo, al parecer, algunas deliberaciones en el gobierno, pero finalmente le confirmaron que la lista era la original, sin ningún añadido. Manuel Camilo declinó su asistencia. El hecho fue conocido en la Arquidiócesis, y Manuel Camilo está hasta hoy convencido de que le

abrió las puertas de la zona sur, a donde lo destiné, que se caracterizaba por su conflictividad y por el instintivo recelo de los sacerdotes (muchos de ellos extranjeros) a cualquier cambio ordenado por la autoridad.

Nunca se lo dije, pero quedé profundamente emocionado con el gesto de Manuel Camilo. Me pareció quizás un poco exagerado, porque le iba a significar molestias injustas; pero comportaba una valentía y una lealtad que la Iglesia de Santiago necesitaba más que nunca para mantener su unidad. Más que decir algo sobre el gobierno, el episodio decía mucho acerca del corazón inmenso de Manuel Camilo.

En vista de tan serio deterioro, el Comité Permanente acordó pedir una audiencia con el Presidente, para clarificar la posición de la Iglesia y plantearle nuestros puntos de vista en los temas sustantivos.

Se preparó un cuidadoso memorando que, precisando nuestra decisión de mostrar el camino de Jesús, definía la situación. Al diagnosticar el origen de las tensiones, señalaba que a nuestro juicio había una interpretación errónea acerca de la misión de la Iglesia, y también un esquema gubernamental que subordinaba la libertad, la dignidad y el bien común a otro tipo de consideraciones. Y luego reseñaba los puntos neurálgicos: la tortura, las relegaciones, las detenciones arbitrarias, la actuación de la Central Nacional de Informaciones, los exiliados y el esquema económico. La última proposición era la de buscar un mecanismo para tratar estos problemas en el más alto nivel, sin intermediarios que pudiesen ser desautorizados.

Para llevar adelante esta conversación se comisionó al vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Francisco de Borja Valenzuela (que recién había dejado la presidencia en manos del obispo José Manuel Santos), y a los obispos Carlos González y Francisco José Cox.

Los tres concurrieron a la audiencia el 18 de junio de 1980. El general Pinochet ingresó a la sala para saludarlos, y se excusó porque otros deberes le hacían imposible estar en el encuentro, en vista de lo cual su ministro jefe del Estado Mayor Presidencial, general Santiago Sinclair, los atendería. Los obispos pudieron cruzar sólo unas palabras con el Presidente, apresurándose para entregarle el memorando. Pero éste lo tomó y, sin mirarlo, lo entregó a su ministro.

El resultado de la gestión fue pobrísimo. Aunque las acciones contra recintos de Iglesia se morigeraron, vino a ocurrir un hecho desgraciado que revirtió incluso ese pequeño avance: el 15 de julio, un

grupo del MIR asesinó en plena calle al coronel Roger Vergara, jefe de inteligencia del Ejército. En cosa de horas, una nueva arremetida contra la Iglesia se hizo evidente; esta vez, personas del clero y de la jerarquía (incluyéndome) recibieron amenazas anónimas, mientras las parroquias volvían a ser el blanco de la hostilidad.

Por añadidura, quince días más tarde perdimos a nuestro interlocutor más valioso. El general (R) Court fue despojado por el gobierno de su calidad de intermediario, en una acción que aparentemente aprovechó nuestra propia petición de una comunicación fluida al más alto nivel. Un oficio del general Sinclair nos notificó que a partir de ese instante la función de "enlace" sería asumida por el general Roberto Guillard, jefe del Comité Asesor de la Junta.

Fue un durísimo golpe para Court. Y como, a pesar de nuestras cuantiosas diferencias, nosotros lo sabíamos, quisimos ofrecerle una manifestación de aprecio y gratitud. La ocasión sería un almuerzo en los salones del Círculo Español, al que asistiría un grupo de obispos.

La reunión fue cordial y estuvo finamente matizada por el humor. Court estaba contento, y se emocionó cuando recibió de manos del obispo José Manuel Santos cinco hermosos volúmenes de Historia de la Iglesia, con una carta de agradecimiento firmada por todos los obispos.

Hasta que, por la infidencia de un mozo del lugar, un obispo recibió la noticia de que sujetos desconocidos, que dijeron ser de la policía, habían instalado micrófonos en la sala antes de nuestra llegada. El obispo Santos hizo una completa averiguación y llegó a la conclusión de que efectivamente el encuentro había sido espiado; se lo representó al general Sinclair, quien, después de varios días, dijo que la CNI nada tenía que ver con el asunto. Nunca pudimos saber exactamente quién era el autor de semejante tontería, pero no nos cupo duda acerca de su origen. Lo lamentamos, eso sí, por el general (R) Court, verdadera e injusta víctima, quien se sintió zaherido con el incidente.

Cuando llegó agosto, los obispos estábamos enterados de que el gobierno se encontraba concluyendo la redacción del texto de una nueva Constitución.

Durante siete años diversos juristas y políticos habían participado en las discusiones para elaborar ese proyecto; en un comienzo la gama ideológica que representaban incluía a las posiciones de centro, pero con el correr de los años el trabajo se había hecho paulatinamente excluyente, marginando a quienes no fuesen de derecha. En la última fase, incluso esta categoría había sido sesgada en favor de un pequeñísimo grupo de funcionarios de gobierno; sabíamos de connotados políticos de derecha que no estaban conformes con el texto constitucional, incluyendo al ex Presidente Jorge Alessandri, quien había encabezado el trabajo del Consejo de Estado en la redacción de un proyecto que en muchos de sus puntos principales fue desechado.

Una vez que el gobierno dio a conocer el texto, en la noche del 10 de agosto, anunciando que justo un mes después se realizaría un plebiscito para obtener la ratificación de la ciudadanía, se hizo evidente que la principal razón de tales discrepancias no estaba en la Constitución misma, sino en un conjunto de disposiciones transitorias que consagraban, mediante el derecho, la vigencia de hecho del régimen dictatorial.

En la Constitución se preveían nuevas formas de ordenamiento institucional que podían ser objeto de polémica, porque, después de todo, en estos campos todo es opinable y no se conoce un modelo perfecto. Pero las disposiciones transitorias permitían suspender parte de los derechos civiles y concentraban todo el poder en el mismo sistema militar que nos venía rigiendo por tantos años; además, confirmaba al general Pinochet como Jefe de Estado por ocho años más, después de los cuales aún podría aspirar a permanecer otros ocho en el poder.

Además, el anuncio de un plebiscito con tan escaso plazo suponía que nos veríamos enfrentados otra vez a condiciones similares a las de la "consulta" de comienzos de 1978: inexistencia de registros electorales, restricciones para la expresión de ideas discrepantes, propaganda unilateral, falta de garantías objetivas para que los votantes pudiesen confiar en el secreto de su opción, y, especialmente, yuxtaposición de decisiones en un mismo voto. En este caso se buscaba que, eligiendo entre un Sí y un No, los chilenos decidieran sobre la Constitución, sobre los artículos transitorios y sobre la permanencia del general Pinochet. Es decir, tres definiciones en una sola.

La alternativa del No fue definida por el propio gobierno con un imposible político y jurídico: "Volver a la situación vigente al 10 de septiembre de 1973". En el voto, la opción Sí fue señalada con una estrella; el No quedó marcado con un círculo negro.



El ex Presidente Eduardo Frei se dirige a la multitud reunida en el Teatro Caupolicán para dar inicio a la campaña por el No en el plebiscito de 1980.

La mayoría de los políticos consideró irregulares tales condiciones. Recuerdo que el ex Presidente Frei me dijo que en su opinión se trataba de un acto tan espurio, que ni siquiera estaba decidido a promover la opción del No, y que preferiría marginarse completamente del limitado debate. Parece que sus propios compañeros de partido lo persuadieron poco después, porque en un par de semanas Frei pasó a encabezar los llamados a votar por el No.

El 18 de agosto partí a Alemania, adonde estaba invitado, desde mucho tiempo antes, por el cardenal de Colonia. Los hermanos alemanes celebraban en esos días la inauguración oficial de la hermosa Catedral gótica de esa ciudad, que había sido terminada justo cien años antes, en 1880, pero que debido a las convulsiones del período del *Kulturkampf* no pudo contar con la presencia del arzobispo local, a la sazón preso por la autoridad estatal.

La Catedral se había comenzado a construir nada menos que seis siglos antes, en 1246, y durante las posteriores guerras europeas había sido incluso caballeriza de las tropas de Napoleón Bonaparte. De modo que esta re-inauguración era también un acto de restauración, y de afirmación de la permanencia de la Iglesia por encima de los avatares humanos.

En esta misma visita los obispos alemanes habían preparado algunas reuniones para analizar los problemas del Tercer Mundo, al que tanto ayudaban con aportes materiales y con inestimables recursos humanos.

Fue entonces cuando me di cuenta de que el plebiscito convocado en Chile concitaba la atención de gran parte del mundo. Los hermanos no cesaron de preguntarme cómo sería el acto electoral, qué implicancias tendría para el futuro de Chile y cuál sería la posición de la Iglesia.

Impresionado aún por esta inusitada atención en nuestras modestas vicisitudes, llegué a Roma a fines de agosto, para concurrir a una audiencia con el Papa que había solicitado antes de viajar.

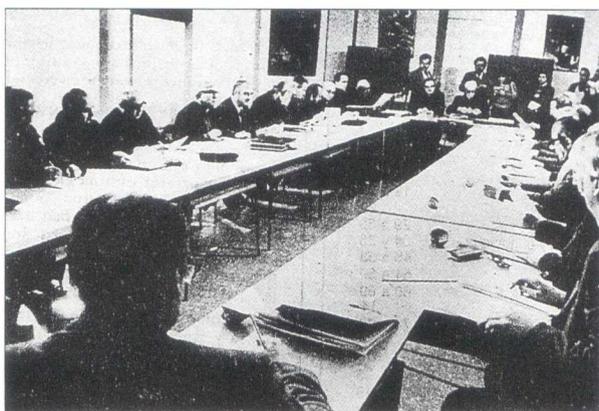
Juan Pablo II estaba perfectamente informado de lo que ocurría en Chile, y comenzó haciéndome preguntas específicas sobre ello. Le dije exactamente cuanto pensaba: que el régimen aspiraba a mantenerse por tiempo indefinido, y que con ese fin había planificado este plebiscito; que los métodos anunciados no daban garantías a la mayoría de la población, y que la actitud hacia la Iglesia era la de una guerrilla "con guante blanco", atravesada por una hostilidad que se debía, a mi juicio, a nuestra defensa de los derechos humanos, civiles y sociales.

El Papa escuchó atentamente estas cosas y luego expresó una vez más su preocupación por el curso de la mediación. Como yo ya sabía, el cardenal Samoré se había encontrado con un clima muy poco propicio en el gobierno argentino, y advertía cierto peligro de fracasar en su gestión. Estaba cerca de concluir el análisis de las diferencias y se preparaba para presentar una propuesta a fines de ese año.

La tensión fronteriza había vuelto a surgir, aunque sin los dramáticos ribetes anteriores. El Papa se había llegado a plantear la alternativa de realizar una visita a los dos países, como modo de reforzar la vigencia de la mediación. Argumentamos unos minutos acerca de las ambiguas consecuencias de ello.

Después hablamos sobre el problema de las relaciones entre los obispos. Este era un tema relevante, porque en Roma se había difundido la idea -por cierto, exagerada- de que el Episcopado chileno estaba dividido. Le expliqué que a mi modo de ver las discrepancias (en ningún caso división) se debían al régimen político, que se cuidaba de ahondarlas, y que el mayor daño se producía cuando uno o dos obispos contradecían públicamente los pronunciamientos de la Conferencia Episcopal. Incluso le planteé que podrían aplicarse disposiciones como la de un reciente Sínodo de Holanda, que había establecido que las opiniones que el Episcopado emitía como tal eran "irrebatibles" por el solo hecho de constituir una mayoría solvente, lo que en cierto modo era una aplicación de los métodos que la misma Iglesia emplea para, por ejemplo, decidir el Papado.

Mientras me trasladaba de Alemania al Vaticano, en Santiago el Comité Permanente convocaba a una plenaria episcopal de urgencia, para adoptar una posición ante el plebiscito. Subrayo mi ausencia -como lo hice a mi regreso- porque en esos días circulaba la versión maledicente de que yo "manejava" las opiniones de la Conferencia Episcopal e inclinaba las mayorías de manera que estuviesen contra el gobierno. Lo cierto es que no necesitaba yo expresar mis opiniones para que fuesen conocidas por todos; pero tampoco necesitaban los obispos de mi palabra para tener sus propios juicios. Imaginar otra cosa era una simple injuria, que nada tenía que ver con la larga tradición de inteligencia y justicia de nuestro Episcopado.



La Conferencia Episcopal, presidida por el obispo José Manuel Santos, delibera sobre la declaración que emitirá en torno al plebiscito de 1980.

El resultado de aquella asamblea fue una declaración, aprobada por mayoría, que prevenía acerca de las condiciones necesarias para la transparencia de un acto electoral.

Como casi ninguna de ellas se cumplía, ni se pensaba cumplir, el gobierno reaccionó airadamente ante este mensaje. En una gira por el norte, el general Pinochet llegó a decir que la Iglesia había ofendido a las Fuerzas Armadas al poner en duda la pureza del acto. El Comité Permanente fue acusado de adherir a la campaña por el No, y de mí se dijo que era "el primer opositor".

Cuando por fin retorné a Santiago, a comienzos de septiembre y a pocos días del plebiscito, di mi completo respaldo a la opinión episcopal. Tenía muchas más razones que la simple percepción de un acto político peligroso.

A lo largo de todo agosto, el hostigamiento contra gente de Iglesia se había multiplicado, con objetivos que ahora parecían bien precisos: numerosos laicos habían sido detenidos y, bajo apremios, obligados a firmar declaraciones en las que inculpaban a sacerdotes, e incluso vicarios, en supuestas actividades subversivas.

En un caso, la CNI había intentado envolver a un buen sacerdote belga de la zona sur, Guido Flamey, en la distribución de panfletos, para, con esa excusa, proceder a su expulsión del país. Manuel Camilo Vial escondió al padre y consiguió, ya no sólo que se frenase la expulsión, sino que el propio subdirector de la CNI le mostrase en sus oficinas las "pruebas" exhibidas por los agentes, que consistían en unos panfletos supuestamente hallados en un maletín del párroco...

¿Por qué se habían producido estos hechos a sólo días de un acto electoral? Nuestra conclusión fue que el gobierno temía a la opinión de la Iglesia; de otro modo no podía explicarse tanta reciedumbre empleada contra gente tan indefensa. Se nos quería amedrentar y desprestigiar; las detenciones arbitrarias tendían a configurar un conjunto de acusaciones contra personas e instituciones de Iglesia, que debían finalmente envolvernos a todos.

Un par de años más tarde vinimos a conocer una investigación del sacerdote jesuita William O'Malley (publicada bajo el título *de La voz de la sangre*), que había descubierto un esquema de castigo selectivo a la Iglesia denominado "Plan Banzer", en referencia a su creador, el general Hugo Banzer, Presidente *de facto* de Bolivia.

El plan se desarrollaba en once puntos, el primero de los cuales recomendaba no atacar nunca a la Iglesia como institución, y centrarse en cambio en el clero extranjero, ciertas órdenes religiosas y las instituciones auxiliares. El punto séptimo aconsejaba enfrentar siempre a la jerarquía con hechos consumados, e intentar dividirla manteniendo la amistad del gobierno hacia algunos obispos seleccionados. La función de publicitar y desacreditar era otro aspecto clave.

Yo no puedo decir si en verdad el "Plan Banzer" existió como formulación teórica, o no. Pero sin duda que sus recomendaciones calzaban admirablemente con la actitud que tenía hacia nosotros alguna

gente del gobierno chileno. Si no existía, ¡hay que ver cómo se le parecía la realidad!

El 11 de septiembre de 1980 el régimen militar realizó su plebiscito. Naturalmente, ganó por un amplísimo margen. La Constitución, su articulado transitorio y la permanencia del general Pinochet quedaron refrendados por el acto electoral.

Por mucho que las circunstancias de su realización suscitasen dudas y reparos, no cabía duda de que a contar de entonces se abría una nueva etapa. Como quiera que se lo mirase, una Constitución era mejor que ninguna; al menos ella fijaba un horizonte institucional, a pesar de que el articulado transitorio lo mantuviera pendiente y en cierto modo librado a la autoridad.

Estos y otros temas se discutieron largamente en el seno de la Conferencia Episcopal durante septiembre y octubre.

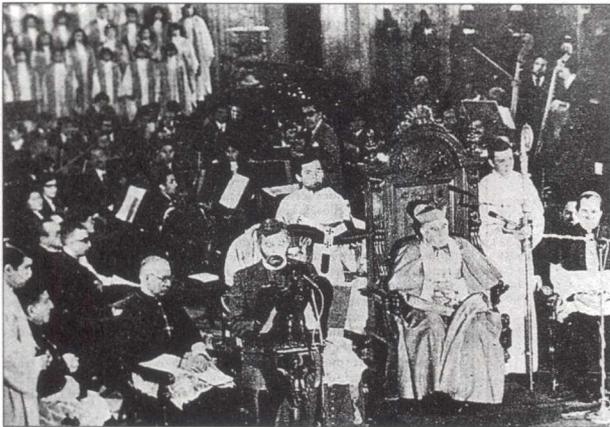
Debíamos tomar una decisión muy difícil: en noviembre se clausuraba el Congreso Eucarístico, con un gran encuentro popular al que asistirían cristianos de todo el país y en el que estarían presentes autoridades de toda la nación. Dadas la magnitud y la solemnidad de la ceremonia, la presencia o ausencia de las autoridades políticas, es decir, del gobierno militar, serían signos de la máxima notoriedad.

Fui partidario desde un comienzo de invitar al general Pinochet y a los miembros de la Junta de Gobierno; me pareció que marginarlos, por malas que estuviesen las relaciones en ese instante, agraviaría innecesariamente, ya no sólo al gobierno, sino a aquella porción del país que apoyaba con entusiasmo su gestión. La discusión entre los obispos fue extensa y laberíntica: había poderosos argumentos para hacer una u otra cosa. Finalmente, y gracias a Dios, primó la idea de extender la invitación oficial a los gobernantes. De esta decisión se me culpó durante mucho tiempo; pero diré ahora que continúo convencido de que hicimos lo correcto, a pesar de las críticas que se desatarían en contra nuestra.

Esta vez las sufrimos todos, y creo que ello sirvió para templar nuestro espíritu de colegialidad. El obispo Bernardino Piñera, que viajó a Europa en su calidad de presidente del Congreso, acompañado del secretario ejecutivo, el padre Joaquín Alliende, llegó a levantarse de una reunión con instituciones benéficas holandesas cuando una señora le dijo que la actitud de los obispos chilenos le parecía "repugnante", por sólo relacionarse con el gobierno.

Me correspondió ir con el nuncio Sodano a visitar al general Pinochet para formalizar la invitación. Hacia el final del encuentro - bastante protocolar, por lo demás-, el nuncio quiso hablarle al Presidente acerca de la situación de Andrés Zaldívar, presidente del Partido Demócrata Cristiano, al que el gobierno le había impedido regresar al país después del plebiscito. El Papa había conocido el caso y, siendo un decidido enemigo de esta "práctica inhumana" (como la llamó muy poco después), había expresado su preocupación a la Nunciatura.

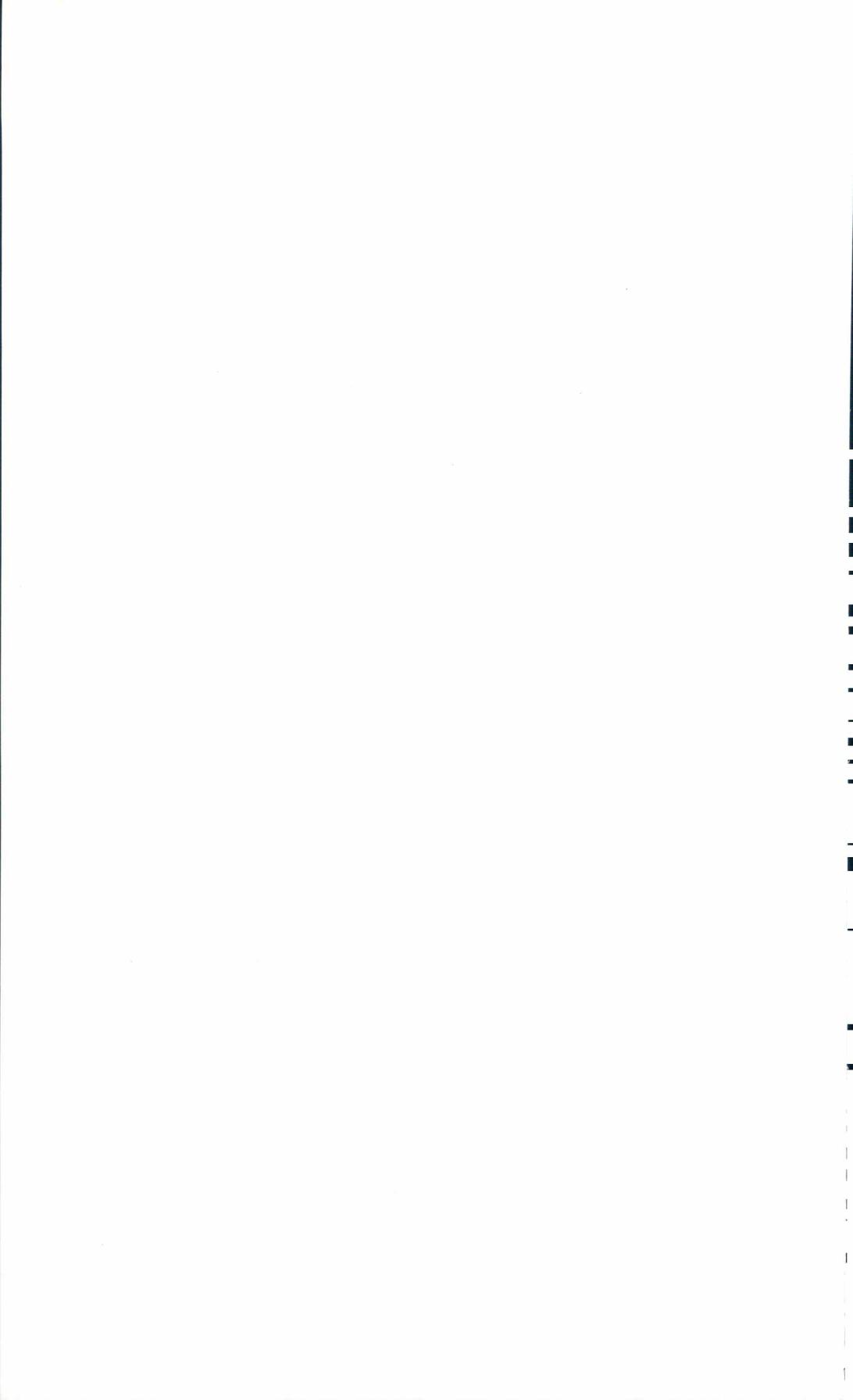
Pero el general Pinochet adivinó lo que le iba a decir Sodano, y se anticipó a responderle que ya había recibido bastantes mensajes abogando por Zaldívar; sin embargo, agregó, el gobierno mantendría su decisión porque la había tomado sobre antecedentes serios. El nuncio salió desalentado de esta reunión y supongo que informó de ella a la Santa Sede.



El cardenal preside en la Catedral de Santiago el Te Deum del 18 de septiembre de 1980.

Por mi parte, la sola gestión de la invitación al Congreso Eucarístico (el otro episodio no fue conocido públicamente) acarreó nuevos y encendidos reproches. He olvidado ya cuántas cartas recibí desde las comunidades de base para rechazar el gesto que el Episcopado quería realizar a través de esa comunión de todos ante el Señor. Mejor aún, he olvidado también las imputaciones de que fui objeto por esta razón.

Era, en ese momento, la prueba de que ser pastor suponía recorrer el camino de Cristo, una y otra vez.



Signo de contradicción, signo de unidad

El Congreso Eucarístico fue un acontecimiento extraordinario en la vida de la Iglesia chilena. Durante todo el año 1980, su espíritu movilizó a los creyentes de un extremo a otro del país. La impecable organización aportada por el obispo Bernardino Piñera y el padre Joaquín Alliende, hizo posible que el Congreso alcanzara hasta los más apartados rincones, en una tarea de evangelización que nunca antes en nuestra historia había tenido tan extensa cobertura.

El lema fue tomado del discurso programático de Juan Pablo II ("No teman, ¡abran sus puertas a Cristo!") y se imprimieron cientos de miles de ejemplares de un tríptico en el que el rostro de Cristo Peregrino invitaba a las familias a unirse a él. Hacia fines de año se había repartido medio millón de afiches y 250 mil manuales eucarísticos, que permitían seguir las cuatro etapas del Congreso: Evangelización, Conversión, Eucaristía y Fraternidad.

Para maravilla de todos nosotros, la movilización "prendió" inmediatamente en las bases cristianas, incluso por encima de los sacerdotes encargados de parroquias y capillas. Como siempre ocurre en estos casos de misiones nacionales, los presbíteros se mostraron al comienzo un poco renuentes, quizás escépticos ante instrucciones originadas "desde arriba". Pero muy pronto el fervor popular les exigió ponerse al día, y para octubre de 1980, cuando se celebraron los congresos diocesanos, la Iglesia toda estaba ya empapada de la enorme mística generada por el proceso.

En esas condiciones llegamos a la ceremonia de clausura, que debía realizarse en el Templo Votivo de Maipú. Sabíamos que una multitud nunca antes vista se congregaría para aquella celebración, y no ignorábamos que tal circunstancia originaba ciertos peligros, considerando el clima político que se vivía y los reproches vertidos sobre los obispos por la invitación al general Pinochet y a la Junta de Gobierno.



Inauguración del Congreso Eucarístico en el Templo Votivo de Maipú en 1980.

Sin embargo, estos temores se disiparon de inmediato, gracias al talento que los organizadores tuvieron para hacer que la presencia de los gobernantes no despertara reacciones en el público y pasara virtualmente inadvertida. Entre los vivas a la Iglesia y los cantos religiosos, el ingreso del general Pinochet no fue distinto del de cualquiera otra figura pública.

Unos días después de aquella multitudinaria manifestación, el general Roberto Guillard respondió a nuestras quejas sobre detenciones de personas vinculadas a la Iglesia de Santiago. Adjuntó a su carta un extenso informe con declaraciones de los arrestados, la mayoría de las cuales envolvían a sacerdotes y vicarios en actividades políticas. Hacia el final de su documento agregaba un concepto que parecía una sutil advertencia: que en numerosas "situaciones comprobadas" el gobierno "no ha querido actuar".

En vista de la gravedad de esas afirmaciones, pedí a los principales abogados de la Vicaría de la Solidaridad, Alejandro González y Roberto Garretón, que me ayudasen a establecer cuánto de cierto podía haber en el *dossier* del general Guillard. Cuando tuvimos las conclusiones, decidí enviárselas directamente al general Santiago Sinclair, que según nuestro entender era el superior de Guillard.

Le hicimos ver que las declaraciones inculpatorias no habían sido obtenidas en forma voluntaria, sino bajo apremios físicos; que todos los detenidos habían quedado en libertad, lo cual demostraba su inocencia; y que había graves errores de información en los datos usados como "pruebas".

Por tanto, escribí, "mantenemos en pie la creencia de que los servicios de seguridad se encuentran en una tarea sistemática para intentar hacer aparecer a personas u organizaciones de la Iglesia Católica comprometidas en supuestas actividades calificadas de subversivas".

La verdad es que cabían serías dudas acerca del origen de esta hostilidad. Unos pocos meses antes, yo había vuelto a conversar con Juan de Castro acerca del problema que significaba el gran volumen de la Vicaría de la Solidaridad. Aunque nos habíamos propuesto cambiar esa situación a fines del 78, las circunstancias objetivas lo habían hecho imposible y yo estaba consciente de ello, aunque me disgustaba. Para el 81, la Vicaría seguía soportando una carga de personal y de programas que la convertían en un ente más voluminoso que cualquier otra iniciativa de la Iglesia.

Juan me dijo muy francamente que, así como en un comienzo se había visto obligado por los hechos a postergar los planes, ahora encontraba una cierta resistencia dentro de la institución. Había quienes sostenían que la Vicaría no debía reducirse, sino, por el contrario, hacerse más y más fuerte; estas personas estimaban que cualquier debilitamiento tentaría a sus adversarios para barrer con ella. Tal vez los hechos históricos daban razón a esta idea, pero ni Juan de Castro ni yo concebíamos a la Vicaría como una entidad de poder, que tuviese que resistir o enfrentarse a otros poderes. Esta perspectiva era precisamente la que se debía abandonar para hacer efectiva la reducción.

Ahora, sin embargo, se agregaban nuevas razones. Por un lado, yo entregaría en poco más de un año el Arzobispado de Santiago, y no creía apropiado trasladar a mi sucesor un problema tan gravoso. Para entonces, la Vicaría tenía más de 200 personas en su planta y gastaba -mayoritariamente en sueldos- cuatro millones de dólares al año. Por otro, las funciones que se habían añadido a su tarea original -la defensa de los derechos de los perseguidos-, teniendo una indiscutible justificación en las condiciones del país, podían ser descentralizadas ahora que tenían la entidad necesaria como para funcionar por sí mismas. Finalmente, el país había entrado en un camino institucional que, aunque no fuese el óptimo, debía significar un cambio cualitativo.

Así, nos dimos a la tarea de idear un mecanismo para poner en marcha nuestra decisión. Después de muchas conversaciones, acordamos que se encargaría de ello una comisión *ad hoc*, que integrarían el obispo auxiliar Manuel Camilo Vial, los vicarios Cristián Precht y Juan de Castro, el economista Sergio Molina, el académico Duncan Livingston y el secretario ejecutivo de la Vicaría, Javier Luis Egaña.

Muchas personas, sobre todo del exterior, recibieron con alarma la noticia de que la Vicaría entraría en un proceso de reducción de su tamaño. Algunos entendieron -o quisieron hacerlo- que se iba a dismantelar todo, y que la Iglesia abandonararía la defensa de los derechos humanos. Expliqué cuantas veces me fue posible los propósitos de la reestructuración.

Pero nunca pude saber con certeza si estas noticias llegaron hasta los servicios de seguridad, quienes habrían estado interesados en vincular una medida administrativa de la Iglesia -la reducción- con causas políticas totalmente ajenas. Sin embargo, era notable que el ritmo de acciones hostiles contra funcionarios de la Vicaría se incrementara justamente cuando entre nosotros se llevaba a cabo este debate.

A comienzos de febrero recibí la visita de un emisario del gobierno. Su misión era decirme que las autoridades desearían que la puesta en vigencia de la nueva Constitución, el 11 de marzo de 1981, fuese acompañada por la Iglesia a través de un Te Deum en la Catedral de Santiago. Respondí de inmediato que sí.

No ignoraba las dificultades que esto podría entrañar. Junto con la nueva Carta Fundamental, el 11 de marzo también se iniciaría el período constitucional de ocho años más de gobierno del general Pinochet, cuya generación misma había sido objetada por los obispos.

Apenas les conté de mi decisión a algunos sacerdotes percibí que la resistencia sería mucho mayor que en cualquier episodio anterior.

Pero, ¿qué podía hacer? En una carta que dirigí a los obispos para prevenirlos de las seguras impugnaciones que vendrían, recordé que en los últimos decenios se nos había pedido un Te Deum cada vez que un nuevo gobierno iniciaba su período constitucional, por lo cual negarle a éste un acto idéntico sería lisa y llanamente una arbitrariedad; que esto no implicaba juicio alguno sobre la autoridad; y que, en último término, "el señor Presidente de la República ha sido elegido por el pueblo chileno y no nos toca a nosotros, los obispos, constituirnos en Tribunal Constitucional y dar nuestro veredicto sobre la legitimidad de su

mandato".

Ay, Señor, qué de sufrimientos.

Entre las más amables cosas que se me dijeron está la carta de un obispo al que conocía desde muchacho: "No quisiera estar en su lugar... Esta decisión le atraerá una crítica mundial, y desgraciadamente no faltarán razones para ella". Este leal amigo no creía que el caso de Pinochet pudiese ser comparado con el de los anteriores presidentes, dado el origen de su poder. Le parecía que el Te Deum daría legitimidad a un proceso muy dudoso, y que incluso "marcará un hito en la conducta pastoral futura".

La versión de que la ceremonia religiosa significaba un "cambio" en la posición de la Iglesia de Santiago contaminó todo el debate con las ideas de que se había producido una "derrota", una "rendición", una "capitulación". ¡Como si hubiésemos estado en guerra, nosotros, justamente los llamados a ser maestros de la paz!

Por supuesto, no había tal "cambio" de actitud. Como bien le consta a la Junta Militar, y por cierto a la anterior Unidad Popular, jamás me negué a realizar una Acción de Gracias con las autoridades del país; sí rechacé sacarla de los templos, introducirle artificios, reglamentarla según las conveniencias políticas de cada quien.

Hubo muchas discusiones, anteriores o posteriores, con el régimen militar acerca de las normas que se nos querían imponer. Por ejemplo, el general Pinochet tenía la teoría de que un Te Deum era un acto privado, de "propiedad" del que lo solicitaba; en consecuencia, decía, tenía el derecho de establecer quiénes eran los invitados, como en una boda o un bautizo. Nosotros sostuvimos siempre que un Te Deum solemne es un acto que la patria, y por tanto el pueblo de Dios, ofrece al Señor, por lo que no puede jamás circunscribirse a los intereses de quien lo propone. En esta posición se ha mantenido siempre la Iglesia de Santiago, y mi sucesor, el cardenal Juan Francisco Fresno, la llevó hasta su expresión más alta unos años después, cuando invitó al gobierno junto con los dirigentes de la oposición a compartir lugares en la Catedral.

Todas estas cosas fueron siempre objeto de debate y hasta de disgustos. Pero negar un Te Deum no constituyó nunca una alternativa para nosotros. En esto diferimos incluso de un hermano tan querido como el arzobispo José Manuel Santos, que poco tiempo después suspendió la Acción de Gracias de septiembre en Concepción. Sé bien que él tenía sus motivos, y no quisiera hacer un juicio acerca de su decisión; pero puedo decir que, cualesquiera fuesen los argumentos, su situación era por completo diversa de la nuestra, puesto que, siendo Santiago la diócesis central y la más grande del país, no nos correspondía relacionarnos con poderes delegados, sino con el conjunto de los poderes

del Estado, en su máxima representación. Una señal nuestra en tal sentido tenía una repercusión decisiva.

Pero, en su gran mayoría, estas razones no lograron penetrar la coraza impuesta por las condiciones políticas sobre numerosos católicos. La avalancha de críticas que temía se produjo efectivamente. Y tanto, que a comienzos de marzo, cuando hube de salir de Chile por unos días, debí dejar instrucciones para que en ese período se evitasen por todos los medios las tensiones con el gobierno.

Se me impugnó también por esta breve ausencia. Se dijo, ya con cierta maledicencia, que estaba "esquivando el bulto" a la generalizada discusión entre sacerdotes y laicos.

Lo cierto es que aquel viaje era muy importante para mí. La Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa (Uniapac) celebraba su 16° Congreso Mundial en Abidjan, capital de Costa de Marfil, y yo estaba invitado como orador para hablar sobre el *Perfil del dirigente de empresa cristiano*. Entre otros expositores figuraban el Presidente de Costa de Marfil, Félix Houphouët-Boigny, uno de los principales líderes africanos; Amador Mahtar M'Bow, el director ejecutivo de la Unesco que estaba jugando un protagónico papel en la promoción social en el Tercer Mundo; y Claude Cheysson, comisario europeo para el desarrollo, que a la sazón preparaba el liderazgo que ejercería Francia en la relación con los países subdesarrollados.

A mí me parecía que nuestra palabra en ese escenario era demasiado urgente como para desechar la ocasión. El intenso trabajo desarrollado por la Iglesia chilena con los pobres, los trabajadores y los campesinos estaría siempre incompleto mientras no fuese acompañado de un esfuerzo semejante por evangelizar el mundo de la empresa, del capital y de la inversión. Personalmente, había venido preocupándome de ello hacía ya bastantes años, a través de la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC), donde participaba gente de excepción. Pero además había intentado entrar en la práctica de la promoción empresarial, primero mediante el Instituto de Autogestión, que luego dio lugar a Fintesa, una financiera orientada hacia los pequeños productores. En Fintesa, y con la inestimable ayuda de mis amigos Sergio Molina y Domingo Santa María, se radicaron los estudios para crear el Banco del Desarrollo, la más grande entidad de fomento y el esfuerzo más fructífero que haya podido constituir la Iglesia en el país en torno a la pequeña y mediana empresa.

Yo estaba decidido a evitar que los hombres de empresa nos viesan como enemigos reales o potenciales. La Iglesia tiene una palabra que decir acerca de la función social de la propiedad privada, de la riqueza que se crea a partir del capital y el trabajo, de las absurdas desigualdades sociales; pero esa palabra no es para condenar, sino para ofrecer un camino de redención individual y colectiva.



El cardenal durante la sesión de Uniapac en Abidjan, el 3 de marzo de 1981.

Para los profetas del liberalismo, evidentemente esta misión era peligrosa. No por nada, en esa misma época, el líder de la llamada "escuela de Chicago", Friedrich A. von Hayek, declaraba en una visita a Venezuela que sus discípulos, especialmente los de Chile, debían olvidarse de la lucha contra los comunistas y "cuidarse especialmente" de la Iglesia. Cito textualmente: "Analicen los postulados de Maritain, Mounier, Chonchol, y lean, sobre todo, las encíclicas papales. En pocas palabras, la gran pelea del futuro, a nivel de la economía, será entre los Chicago *boys* y el pensamiento social de la Iglesia, y si se da, es posible que los Chicago *boys* pierdan".

Así, pues: ¿no era relevante nuestra presencia en Abidjan?

"En estos momentos", dije en ese foro, "creo indispensable que reflexionemos sobre este desafío que nos atañe: o formamos una sociedad basada en el respeto a las personas y sus derechos; basada en la comprensión, en el intercambio, el diálogo, y por lo tanto en la participación total de los componentes de la sociedad -en nuestro caso, de la empresa- o establecemos una sociedad y una empresa basadas en la fuerza y en el predominio de los más fuertes sobre los más débiles.

"En el primer caso, organizamos una sociedad humana, y en el

segundo caso -como lo expresa la doctrina de la Iglesia- esta sociedad se vuelve inhumana. La alternativa, mis queridos amigos, es ineludible. O basamos las relaciones humanas en la razón y en el respeto a los valores del hombre, o no creamos ninguna sociedad humana, sino que establecemos un conglomerado en el que exista la dominación de un grupo de hombres sobre otro grupo de hombres esclavos. En un futuro próximo tenemos que enfrentar esta alternativa; tenemos que elegir entre la comprensión, la libertad y la participación, o la esclavitud, el odio y la violencia". Muy pocos lo supieron entonces, pero durante aquel viaje tuve ocasión de que el Papa me concediera una breve audiencia. Acosado por el tema del Te Deum, le pregunté cómo actuaba él en casos semejantes. Dijo que su principio era respetar siempre a la autoridad constituida. Recordó que en su reciente visita a Filipinas había saludado al dictador Ferdinand Marcos con todo el respeto que el protocolo establecía, y después había dicho a su pueblo todo lo que debía. Sentí que esta opinión del Santo Padre venía a respaldar mi punto de vista en nuestra difícil discusión local, y así lo dije a quienes me acompañaban.



El Presidente Augusto Pinochet, durante el juramento de la nueva Constitución, en el edificio Diego Portales, el 11 de marzo de 1981.

A mi regreso, finalmente, se realizó el polémico Te Deum en la Catedral. El padre Vicente Ahumada leyó la homilía y, como era previsible, los periódicos oficialistas, aprovechando las opiniones que circulaban dentro de la propia Iglesia, hablaron profusamente del "cambio de actitud" en el Arzobispado.

No habían transcurrido aun dos semanas de esto cuando el encargado de negocios de Italia, mi buen amigo Armando Sanguini, me llamó para decirme que un periodista de la agencia *Ansa* estaba en Santiago y tenía particular interés en entrevistarme. Asumo que la situación creada por el Te Deum estaba muy viva en el momento en que acepté la conversación.

El periodista se trasladó hasta Punta de Tralca, donde yo pasaba el fin de semana, y conversamos sobre los temas que le interesaban y que, según yo presumía, serían los que preocupaban a los públicos europeos.

Cuando expliqué la peculiar dificultad que entrañaba la relación de la Iglesia con los regímenes totalitarios, el periodista me preguntó si sería posible que una dictadura fuese cristiana, como se confesaba el gobierno chileno. "No", dije, "ningún totalitarismo puede ser un modelo de vida cristiano. Dicen que son cristianos, pero no creemos que lo sean". Agregué que en Chile no habíamos logrado convencer al poder político acerca de la necesidad de respetar los derechos humanos. "Vemos que el camino de la violencia nos puede llevar a un desastre. Lo decimos, y no nos creen". Sobre el futuro, fui parco: "No sé. Espero que sea bueno, me temo que puede ser malo".

Las reacciones que estas pocas frases suscitaron entre los partidarios del gobierno fueron verdaderamente encarnizadas. En menos de una semana habíamos reunido una carpeta completa de recortes de políticos oficialistas, opinando en mi contra. La virulencia de los términos empleados, el tono destemplado y personal, me hicieron ver que afrontaría esta vez la más feroz campaña de mi vida.

No me quedé corto. Un editorialista anónimo del diario *El Mercurio* marcó la tónica: "En fin", escribió, tratando de interpretar mis sentimientos, "ha de ser doloroso llegar a la ancianidad comprobando la quiebra de los valores en que se ha creído y observando la resurrección de las ideas y principios que despectivamente se consideraban enterrados para siempre en el pasado. La entrevista concedida por el Cardenal a periodistas extranjeros... refleja esta amarga dolencia, este hondo fracaso, lo que obliga a mirar con respeto el naufragio de una personalidad profundamente estimable". Poco después, el principal ideólogo del régimen militar, Jaime Guzmán, ahondó en la misma línea, citando "el magistral análisis" del diario: "Sólo la frustración de un fracaso político semejante -contemplado ya desde la ancianidad- explica el agresivo desahogo reciente del Cardenal. En todo caso, si el Cardenal ha querido presionar la conciencia de los católicos que apoyamos al actual gobierno, no lo ha conseguido. Acostumbrados ya a semejantes violencias morales, seguiremos siendo católicos y gobiernistas".

Como se ve, para estos analistas la ancianidad había pasado a ser

una importante categoría política. Por mi parte, de entre los muchos defectos que me reconocía, hasta entonces no había considerado como tal mi vejez, por lo que esta parte de la argumentación me pareció irrisoria. Sin embargo, fue uno de los aspectos que más indignó al clero de Santiago y a los numerosos laicos que me escribieron para expresarme su apoyo.

En cuanto a lo del "fracaso", me pareció -y ahora me parece mucho más- que se respondía por sí mismo. Comprendía que el ánimo triunfalista en que estas personas vivían, rodeadas por las tibiezas del poder, les hiciera pensar poco menos que en la eternidad de su proyecto. Pero yo, como todos los que trabajábamos día a día junto a la inmensa mayoría de los chilenos, sabíamos que en el subsuelo de tanta aparente prosperidad se estaba incubando el flagelo del resentimiento. Pasaría muy poco antes de que se hiciera inocultable.

Haré todavía una digresión que puede mostrar muy bien hasta qué punto el clima de esos días impedía percibir siquiera la posibilidad de una reconciliación sobre la base del reconocimiento de la diversidad. A propósito de las opiniones que publicó por aquellos días Jaime Guzmán, numerosos padres, e incluso algunos vicarios, querían que abriésemos en su contra un proceso de excomuniación, bajo el cargo de "fautor de desobediencia", que está expresamente contemplado en el Código de Derecho Canónico. No era la primera vez que se proponían semejantes medidas contra Guzmán, principalmente porque en reiteradas ocasiones se había opuesto a la palabra de los obispos. La versión de que la sanción podría ejecutarse circuló ampliamente por Santiago y llegó a oídos de Willy Arthur.

Arthur era un hombre de derecha y un seguidor irrestricto del régimen militar, pero era también un cultivador de la tolerancia, el respeto y la amistad. En los años más cerrados del régimen, organizaba en su casa unas tertulias donde podían juntarse, sin más compromiso que la caballerosidad, partidarios y defensores del gobierno. En una de esas ocasiones, Arthur, que era un buen católico pero que desconfiaba en forma casi instintiva del arzobispo de Santiago, decidió invitarme a mí. Supe que durante muchos días pensó que yo no concurriría. Y la sorpresa aumentó quizás su agrado: pasamos varias horas conversando. Cuando nos despedimos me declaró sus respetos, y yo supe que había ganado un buen amigo.

Recordando estas reuniones, Arthur se comunicó con mi secretario,

el padre Luis Eugenio Silva, para que éste averiguase si yo estaría dispuesto a reunirme con Guzmán, con el fin de evitar la ruptura que se rumoreaba. Acepté de buena gana, con algo de curiosidad. Guzmán estaba preocupado de que nuestra reunión no fuese publicitada, de modo que solicitó que lo visitase en su casa. Tuvimos una cena muy agradable, al cabo de la cual conversamos largamente acerca de la experiencia mística. Me impresionó la profundidad de su fe, su entrega devota y auténtica al cristianismo, cargada con un poderoso contenido escatológico: en su velador había una calavera que, según dijo, estaba ahí para recordar el polvo del que viene el hombre.

Creo que aquella charla directa despejó muchos de los equívocos entre ambos. Por mi parte, abandoné completamente cualquier duda acerca de la integridad de su fe; por la suya, espero que él haya podido dejar de lado sus sospechas sobre mis intenciones. Cuando un grupo terrorista lo asesinó a sangre fría el 1º de abril de 1991, siendo ya senador, sentí una congoja profunda y un solo impulso inmediato: orar por su encuentro final con el Señor.

Han transcurrido más de diez años desde los sucesos que rodearon la entrevista con *Ansa* en el momento en que escribo estas líneas. Creo que la historia dio ya su veredicto sobre las razones de cada cual.

No intento convertir en victoria lo que sin duda, y por razones muy distintas de las que invocaron mis contradictores, fue un momento amargo: simplemente quiero rescatar del episodio -y ahora desde una mucho mayor ancianidad- la noción de que los juicios apresurados sobre la palabra de un pastor corren siempre el riesgo de la puerilidad. Los que hemos sido bendecidos por la dignidad de la Iglesia sabemos bien que el decir humano es imperfecto y veleidoso: por eso no pensamos sólo en el presente, sino en el futuro más lejano. La mejor lucha contra nuestros defectos y debilidades se libra precisamente en esas dimensiones, las de los valores permanentes. Por eso es que la incomprensión del poder político, desde Cristo hasta nuestros días, ha sido casi una señal de identidad en la Iglesia.

Pero la conmoción suscitada por mis declaraciones no se limitó a estas expresiones. No hubo ningún diario de Santiago en el que no se publicaran virulentos juicios en contra del cardenal. No hubo ningún medio -a propósito de "violencia moral"- que no fuese empleado para adherir a esta avalancha de denostaciones. Curiosamente, la única excepción fue el general Pinochet, que, a pesar de la ávida insistencia de la prensa, prefirió guardar silencio.

Los ataques se agravaron cuando el arzobispo-obispo de Valparaíso, Emilio Tagle, emitió una declaración en la que, sin nombrarme, impugnaba cuanto yo había dicho sobre el régimen. Quizás fue esta circunstancia la que impulsó a algunos católicos destacados - como el ex Presidente Frei- a intervenir en el debate en mi defensa. Los obispos me expresaron también su perplejidad por el tono vengativo de las críticas, y los vicarios de Santiago emitieron una carta que fue leída en las misas dominicales de todos los templos de la Arquidiócesis. Esta última decisión suscitó nuevas polémicas; mientras en las parroquias populares se producían ardorosas (y no siempre prudentes) manifestaciones de respaldo, en los barrios acomodados hubo gente que se retiró de las ceremonias.

Y ahí estaba yo, ¡convertido en "signo de contradicción", y sin embargo luchando por ser también y sobre todo "signo de unidad"!

Como podía suponerse, las versiones sobre este incidente no tardaron en llegar a Roma. Un prelado de mucha confianza me contó que la Secretaría de Estado había manifestado su preocupación por lo que estaba ocurriendo, y que era posible que se me pidiese explicaciones.

Preferí adelantarme. Escribí al cardenal Casaroli explicándole el origen de la entrevista, los términos en que se había dado y el antecedente del Te Deum, que había originado iguales o peores debates en la Iglesia de Santiago. Dado que esta percepción se había extendido en sectores populares, la entrevista con *Ansa* venía a ser un esfuerzo por dar respuestas inequívocas a las numerosas especulaciones surgidas en torno al arzobispo de Santiago. Mencioné que después de ella había recibido amenazas de muerte y que un destacado jurista, Jorge Rogers Sotomayor, había escrito un ensayo expresando su preocupación por el hecho de que los ataques tendían a convertir al cardenal en el "enemigo número uno", es decir, en la primera víctima de cualquier eventual violencia; sin embargo, estos episodios se depreciaban en el contraste con las abrumadoras muestras de unión con el pastor entregadas en toda la Arquidiócesis.

Aquel 1º de Mayo nos permitió probarlo. En lugar de la eucaristía solemne en la Catedral, que tantos dolores de cabeza nos había traído en años anteriores, esta vez celebramos la fiesta del trabajo en la parroquia San José Obrero, en la Población José María Caro, que se repletó de fieles humildes y de obreros del área industrial de Santiago. Retengo todavía las dificultades que tuve para salir de aquel modesto y estrecho templo, en medio de los abrazos y los saludos que toda esa gente

maltratada por la pobreza nos daba; brillaban en esos ojos no sólo la esperanza de un futuro mejor, sino una comunión intensa y apasionada con la Iglesia.

Querían decirnos, tal vez, que si debíamos sufrir por su causa, ellos lo sabían y lo apreciaban.

El 13 de mayo de aquel año, día de la fiesta de Fátima, la noticia más inaudita del siglo estremeció al mundo entero: en la Plaza de San Pedro, en medio de una muchedumbre que atestaba la ancha explanada, un terrorista había disparado contra el Papa Juan Pablo II, hiriéndolo de gravedad.

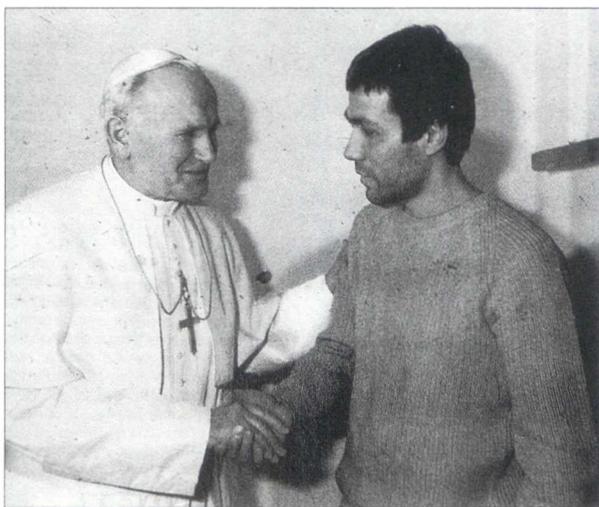


El Papa Juan Pablo II cae herido de bala en la Plaza de San Pedro, el 13 de mayo de 1981.

A pesar de la confusión y el estupor, el pistolero había sido detenido y muy pronto se le identificaría como el terrorista turco Alí Agca, un experto tirador que había llegado a la Plaza junto con otros cómplices, uno de los cuales, también pistolero de oficio, había abandonado inexplicablemente su misión de consumar el atentado disparando desde otro ángulo.

Agca era un terrorista neto, un hombre que bajo la ceguera de una ideología radical, y acusando al Papa de ser un "amigo del imperialismo", había cometido la más extrema intentona de la historia moderna. La policía italiana, que asumió la investigación del caso, y la Curia vaticana, que la siguió de cerca, sospecharon muy pronto que detrás de la mano de Agca se ocultaba una grave conspiración procedente de Europa del este, cuyos regímenes totalitarios se habían sentido amenazados por el carisma de este Papa eslavo. Después de todo, el joven turco no era más que un pobre hombre, mal instruido y peor mantenido, inepto para concebir y ejecutar un magnicidio como éste por sí solo.

Pocos años después, cuando el Santo Padre había sacudido las conciencias de todos con su extraordinario gesto de visitar a Agca en prisión y perdonarlo, se descubriría que había sido un sicario contratado por los servicios de inteligencia de la Bulgaria comunista, a su turno estimulados por la jerarquía soviética.



El Papa saluda al autor del atentado en su contra, el "lobo gris" turco Ali Agca, en prisión.

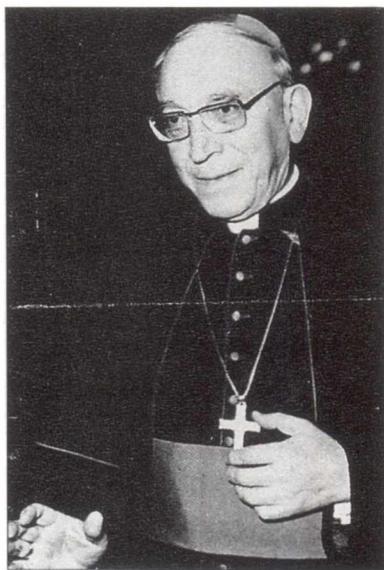
En cierto modo, aquel atentado terminaría por ser uno de los últimos actos audaces del imperio comunista; el año anterior, con la invasión a Afganistán, el fracaso de algunas aventuras insurgentes en Africa y el aliento dado al fundamentalismo islámico en la zona petrolera del Golfo Pérsico, la tensión mundial había llegado a puntos altísimos, y continuaría agudizándose todavía por un tiempo más. Hasta que, al cabo de menos de un lustro, las cerradas sociedades del este dejaran ver las profundas grietas que herían su convivencia y se iniciase, con la

perestroika, el más asombroso y acelerado proceso de cambios políticos nunca antes visto.

Pero en aquellos días, la desazón producida por el atentado contra el Santo Padre nos alcanzó a todos.

Debí viajar muy poco después a Europa, y aproveché para pasar a Roma, para conocer más detalles de lo que estaba sucediendo. En la Curia había una inmensa confusión, y la ausencia del Papa (internado todavía en la Clínica Gemelli) sometía a una tensión irresistible a los órganos de gobierno y administración de la Iglesia.

Desde la difícil posición en que había quedado, el cardenal Casaroli procuraba contener la tendencia a la dispersión y hacía ingentes esfuerzos por mostrar la solidez del gobierno central de la Iglesia. Recuerdo que en una conversación que sostuve con él me dijo, con una extraña mezcla de cansancio y esperanza, que en aquellos días la Iglesia dependía más que nunca de los pastores repartidos por el mundo, de todos y cada uno de nosotros; lo recuerdo porque me emocionó esta confianza madura y profunda en el testimonio que pudiésemos ofrecer



El cardenal Agostino Casaroli.

Quizás no podíamos vencer a la opresión, ni a las amenazas, ni aun al miedo; quizás nos podían abatir las balas, las violencias de toda clase, el odio. Pero nada de eso podía destruir la esencial fortaleza de una Iglesia templada, ya no únicamente en el sufrimiento ajeno, sino en sus más hondos e íntimos dolores. Eramos fuertes, no cabía duda.

Juan Pablo II no sólo sobrevivió a las balas de Agca, sino que se recuperó con una rapidez tan sorprendente, que dos meses más tarde recibíamos los primeros adelantos de una nueva encíclica que publicaría en septiembre, dedicada al tema del trabajo e inscrita en la rica vertiente de la doctrina social.

Una ofensiva de la paz

Laborem Exercens, escrita con ocasión de cumplirse los 90 años de *Rerum Novarum*, no fue sólo la primera encíclica social de Juan Pablo II, que sirviese para clarificar el pensamiento de este Pontífice enigmático en un tema tan sensitivo, sino que fue, también y sobre todo, un renovador aporte a la doctrina clásica de la Iglesia en materia social. No era extraño que un Papa que en su juventud fue obrero dedicara un texto como éste al mundo del trabajo, al que calificaba como "una clave, quizás la clave esencial de toda la cuestión social"

En *Laborem Exercens*, el Papa Wojtyla partía por confirmar la tradición de la Iglesia, que considera al trabajo como la vinculación particular del hombre con la obra del Creador, por lo cual, decía, "el primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo, su sujeto. Un trabajador vale, no por lo que produce, que puede ser de gran o poco precio, según los talentos, la educación adquirida, el capital a su disposición, sino por lo que es, una persona, igual en derecho a cualquier otra persona".

Pero a partir de esa doctrina, a la que además consideraba fundada en la Sagrada Escritura, desarrollaba conceptos completamente novedosos, como la idea de que la primacía del trabajo frente al capital no es otra cosa que el reflejo de la primacía del hombre frente a las cosas. Así, los medios de producción "no pueden ser poseídos contra el trabajo, no pueden ni siquiera ser poseídos para poseer, porque el único título legítimo para su posesión... es que sirvan al trabajo".

El padre jesuita Pierre Bigo, que desde su oficio de profesor en nuestro Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (Ilades) había dedicado numerosos documentos a estos temas, apuntaba con razón que la mayor originalidad de *Laborem Exercens* radicaba en su observación de que la ruptura entre el capital y el trabajo "ha tenido lugar en la mente humana", a través de las distorsiones del liberalismo

(como ideología del capitalismo) y el marxismo (como ideología del comunismo). "Del capital", decía, "podemos solamente afirmar que condiciona el trabajo del hombre; no podemos, en cambio, afirmar que constituya casi el "sujeto" anónimo que hace dependiente al hombre y su trabajo". La contraposición de ambas cosas es, pues, un artificio de las ideologías: "Justo, es decir conforme a la esencia misma del problema, justo, es decir intrínsecamente verdadero y a su vez moralmente legítimo, puede ser aquel sistema de trabajo que en su raíz supera la antinomia entre el trabajo y el capital".

De esta visión renovadora del problema laboral, la encíclica deducía una serie casi exhaustiva de recomendaciones prácticas, que abarcaba desde el derecho a la huelga hasta la estrategia sindical.

Era, sin duda, una obra notable, todo un manantial de reflexión para quienes vivíamos subrayando la impostergable necesidad de profundizar en los problemas sociales, y de evangelizar en y a través de ellos.

Por eso entre los católicos chilenos se produjo una nueva gran polémica cuando el general Pinochet, tras difundirse la encíclica, declaró que luego de un golpe de vista, *Laborem Exercens* era para él "como una confirmación" de cuán bien lo estaba haciendo su gobierno en Chile. Hubo debates enconados en torno a estas breves palabras, y hasta se intentó que los obispos las descalificáramos públicamente; no estuve de acuerdo con esto, porque me parecía entonces que todo católico tenía derecho a sentirse identificado con las palabras del Santo Padre, y que esa convicción siempre sería mejor que el desaliento o la separación.

Quizás estaba equivocado, pero sigo creyendo que nadie puede arrogarse el derecho, exclusivo del Señor, de calificar las intenciones de los demás, por elevados o minúsculos que sean los personajes. El general Pinochet podía entender en *Laborem Exercens* una forma de respaldo a sus opiniones, tal como otros podían entender exactamente lo contrario. Aquello decía poco acerca de las voluntades que animaban a cada parte; en cambio, decía mucho acerca de la grandeza de la Iglesia para dispersar por el mundo, de extremo a extremo, la semilla de su doctrina.

Sin embargo, debo añadir que las acciones concretas que en aquellos días veíamos en Chile en el mundo de los trabajadores distaban muchísimo de la enérgica convicción expresada por la doctrina social de la Iglesia. Sólo días antes de las declaraciones del general, el gobierno había encarcelado a los principales dirigentes de la Coordinadora

Nacional Sindical, quizás el más importante organismo obrero en ese momento. Su presidente, Manuel Bustos, cuya fidelidad cristiana era motivo de orgullo entre nosotros, y su vicepresidente, Alamiro Guzmán, de filiación comunista, estaban presos por el delito de presentar un pliego de peticiones que en cualquier rincón del mundo no hubiese sido más que una tímida aproximación a las reivindicaciones clásicas. En un segundo episodio semejante, el gobierno se había quejado formalmente, mediante el ministro de Odeplan, Alvaro Donoso, por el diagnóstico presentado en el documento episcopal *Vamos a la civilización del amor*, que él entendía crítico de la legislación laboral recién dictada.



El cardenal sale del anexo Capuchinos de la cárcel, tras visitar a los dirigentes de la Coordinadora Nacional Sindical, Manuel Bustos y Alamiro Guzmán, en agosto de 1981.

Mucho más crítica era, aunque no contuviese referencias específicas, la reciente encíclica papal. En la legislación dictada por los técnicos neoliberales bajo el amparo del régimen militar, muchos de los derechos defendidos y proclamados por el Santo Padre -el de asociación libre, el de reunión, el de huelga- aparecían fuertemente restringidos, cuando no anulados.

Pero de esto habría sido imposible convencer a aquel gobierno. Había entre sus funcionarios una tan fuerte certidumbre acerca de su propio poder, y una convicción tan indiferente al pensamiento ajeno, que parecía imposible expresarse en un mismo lenguaje. Creo que, en cierto modo, muchos de ellos se habían ilusionado con la perennidad de un sistema político que podía durar todavía por tiempo indefinido, que había derrotado o dejado atrás a todos sus enemigos, y que administraba la totalidad del poder sin contrapeso.

En relación con la Iglesia, la expresión de esta mentalidad eran no sólo los actos agresivos y el asedio de los servicios de seguridad, sino también el esfuerzo por encuadrar a los obispos en un determinado modelo de conducta, e incluso en una interlocución disciplinada. El desplazamiento del general (R) Court había sido signo de ello, agudizado por la designación del general Guillard y la subsecuente pérdida de diálogo que ese cambio significó. Guillard dejó esa función antes de cumplir un año en ella, pero su reemplazante, civil y hombre de Iglesia, Sergio Rillón, no hizo sino refinar en algunos aspectos, y empeorar en otros, este trato áspero.

Ciertamente, fue el gobierno quien decidió relevar al general Guillard de la responsabilidad de relacionarse con la Iglesia; nadie podría haberlo forzado a tomar esa medida. Pero no cabe duda de que alguna influencia tuvieron las continuas quejas planteadas por el Episcopado, en especial por los hermanos obispos que se sentían más cercanos a algunas personas del Poder Ejecutivo.

Por eso, cuando se planteó el nombre de Sergio Rillón, muchos obispos expresamos nuestra alegría; creíamos que, tratándose de un hombre vinculado desde hacía muchos años a la tarea de la Iglesia, podría servir de efectivo puente en los momentos difíciles. Yo lo conocía desde mis tiempos en Valparaíso, y lo consideraba un tan leal colaborador, que había propiciado con entusiasmo su incorporación al directorio de Invica, nuestra efficacísima institución para la vivienda popular.

La verdad es que algunas cosas habían cambiado, incluso en Invica. A propósito de una discusión que sostuvimos acerca de la venta de los terrenos del Monasterio Trapense de La Dehesa, perteneciente a la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia, a mediados del 81 descubrí que los estatutos de esa querida institución habían sido modificados de manera tal, que su directorio prácticamente se autogeneraba y no respondía ya al arzobispo de Santiago ni a su

institución madre, Cáritas.

Las innovaciones habían sido introducidas nada menos que en 1974, pero yo vine a notarlas sólo siete años después, cuando ya se habían asentado como una costumbre. Los directores de Invica sostuvieron entonces que los estatutos fueron cambiados con mi anuencia, tras una reunión en mi casa. Si es que existió esa conversación -que no recuerdo-, ciertamente no podría yo haber aprobado un acto que a la postre iba a constituir un problema para la Iglesia; como en cualquier norma, el "espíritu del legislador" no podía ir contra su propia razón.

El conflicto de La Dehesa -que envolvía dineros calculados entre 300 y 500 millones de dólares- no fue resuelto en forma satisfactoria para el Arzobispado, y yo quedé con la convicción de que estas personas, que coincidentemente eran resueltas partidarias del gobierno, habían tomado una opción política.

Aunque estos hechos ocurrían en ese mismo momento, creí positivo que Rillón asumiese el cargo que le conferían.

Y, por cierto, en las relaciones con los obispos, fue siempre gentil y hasta afectuoso. Algunos preladados consumieron horas de conversación con él, pensando quizás que podrían atemperar las tensiones entre el gobierno y la Iglesia. Con el paso de los años, se vio que, más que ejercer una tarea de intermediario, Rillón había venido a tratar de cambiar la constitución del Episcopado, e incluso sus relaciones con la Santa Sede.

Mi sucesor en Santiago, el cardenal Juan Francisco Fresno, llegó a exigirle al general Pinochet que las audiencias se le concediesen sin la presencia del asesor. Y en 1984, el conjunto de los obispos puso distancia de él cuando se supo que, ignorando a la Conferencia Episcopal y a la Nunciatura, viajó a Roma con otro funcionario para proponer a la Secretaría de Estado una fórmula "bilateral" de nominación de los obispos, por la cual el gobierno militar podía intervenir en las consultas que se realizan cada vez que se busca llenar un nuevo cargo. Esta propuesta se parecía en el hecho al Patronato, una institución que tuvo vigencia durante el siglo XIX y que consistía en que el Vaticano permitía que los gobiernos opinasen en la designación de los ordinarios. En aquella época tal mecanismo contribuyó a dar estabilidad a las relaciones entre la Santa Sede y los gobiernos americanos independizados de España, que no querían ver ni un asomo de influencia de la corona en sus asuntos internos. Pero precisamente la consolidación de los estados nacionales durante esa centuria, y la posterior separación de poderes entre los estados y la Iglesia, hicieron obsoleto el sistema del Patronato. En nuestros tiempos modernos, sólo habría servido para politizar los nombramientos episcopales, y para ponerlos al servicio de las ideologías y los gobiernos de turno.

Rillón estaba incommoviblemente convencido de que la Iglesia chilena había sido infiltrada por el marxismo, y supongo -no sin algunos testimonios- que de ello me culpaba principalmente a mí. Es igualmente evidente que esa opinión se concentró en el clero que trabajaba en los sectores pobres de Santiago, y en especial en el clero extranjero.

Fue justamente el período en que las expulsiones de sacerdotes, una técnica política sumaria, se convirtieron en práctica frecuente. No digo que Rillón haya creado este método - por el contrario, en muchos casos nos ayudó a evitar esas sanciones -, pero es innegable que fue en ese período cuando las sufrimos con mayor intensidad.

El primer caso fue el de los padres asuncionistas Andrés Mutlet, párroco suplente de Nuestra Señora del Carmen de Maipú, y Jean Michel Bouteil, encargado de la casa de formación de su congregación, a quienes se acusaba de realizar actos litúrgicos "políticos" y de tomar contacto con Sergio Wilson, dirigente de la Acción Vecinal y Comunitaria y hombre de plena confianza de la Iglesia de Santiago. Le dije a Rillón aquella vez que estos cargos suponían un juicio acerca de la catolicidad de los sacerdotes, que ni yo ni los obispos estábamos dispuestos a aceptar. Ningún funcionario de gobierno, por elevado que fuese, podía arrogarse el derecho de decidir cuándo el comportamiento de un religioso era o no pastoral; si había violación a la ley, entonces debían denunciarlo a los tribunales de justicia.

Pero el gobierno creía haber encontrado en el castigo a los sacerdotes un instrumento eficaz. En adelante, no dejaría de usarlo.

Además, había conseguido, quizás por vez primera, hallar oídos dispuestos a escuchar sus acusaciones contra la Iglesia. Aquel año viajaron a Chile tres profesores alemanes, a nombre de una comisión de la Conferencia Episcopal de su país, para presentar un informe sobre el trabajo de nuestra Iglesia. Sus conclusiones fueron parciales, entre otras cosas porque jamás hablaron con nosotros; prefirieron acudir directamente a partidarios y funcionarios de gobierno. No dejaron de criticar a ninguna de nuestras instituciones: dijeron que la Vicaría de la Solidaridad no ayudaba a los pobladores, que la educación católica estaba descuidada, que la radio *Chilena* se dedicaba a hacer oposición, y que el cardenal era tan intransigente, que no quería reconocer ningún progreso en la situación de derechos humanos ni en el estado de la economía.

Escribí al cardenal de Colonia, Joseph Höffner, para denunciar la magnitud de estas falsedades. Le dije claramente que, a mi juicio, había

en el informe una "tendencia nacistá". Esta opinión molestó mucho en Alemania, y el propio cardenal Höffner me dijo que debía rechazarla, porque en su país este calificativo "es uno de los más graves reproches".

"La Iglesia chilena y no yo", le respondí poco después, "hemos defendido los derechos humanos en Chile con gravísimo peligro, aun de nuestras vidas, y que unos profesores sin consultarnos nos juzguen como enemigos de un buen gobierno, no siéndolo así, me ha llevado a un juicio equivocado que usted me manifiesta. En mi tierra esto es naciismo".

Muchos buenos amigos y sacerdotes de la Arquidiócesis trataron de atemperar esta inesperada polémica, pensando sobre todo en la gran ayuda que la Iglesia alemana nos prestaba. Se me dijo en las más diversas formas que no debía insistir, y que lo más conveniente era no dar importancia al asunto. Pero yo he vivido bajo la certidumbre de que no hay fraternidad posible sin la mediación de la verdad. Bajo el imperio de la mentira no se puede construir la caridad, ni la solidaridad, ni mucho menos la fraternidad. Ninguna ayuda que se nos ofreciese, por vital que nos resultase, podía recibirse al costo de silenciar o distorsionar nuestra realidad.

En contraste con estos casos ingratos, y ciertamente ocasionales, creo que la Iglesia chilena conservaba el inmenso prestigio ganado en todo el mundo por su actitud. Así lo demostró, ese mismo año, la visita de otra comisión, esta vez de la National Conference of Catholic Bishops, de Estados Unidos, integrada por el arzobispo Ignacio J. Strecker (de Kansas City) y los obispos Mark J. Hurley (de Santa Rosa) y Joseph M. Sullivan (de Brooklyn). Ellos recorrieron una extensa gama de opiniones; como yo estaba ausente, no pude recibirlos, de modo que nadie podría decir que tuve alguna influencia en el informe que presentaron luego a la NCCB.

Cito un pasaje: "A un nivel más personal, nos impresionó la profunda fe, compromiso y sentido de misión que encontramos en todas partes; el sentido de caridad y respeto mutuo existente entre los obispos, que reconoce y acepta las a veces agudas diferencias entre ellos; y el sentido de profunda crisis de la vida nacional que nos comunicaron casi todas las personas con las que conversamos, situación que con toda seguridad perdurará y se agravará".

Hacia la mitad de aquel año 81 se había hecho ya evidente que un grave conflicto social bullía bajo la tranquilidad de los satisfechos. A pesar del ánimo triunfalista con que los funcionarios de gobierno miraban las

cifras de la economía, la pobreza se había expandido y la cesantía no dejaba de estrangular a los hogares más humildes.

Nosotros veíamos crecer el rencor y la violencia cada día; y sentíamos, con angustia, que no se nos quería oír. Si advertíamos sobre la crisis que golpeaba a las puertas de nuestra convivencia, el gobierno creía que se trataba de un acto opositor. Si decíamos que era urgente restablecer el diálogo y las libertades públicas, creía que estábamos defendiendo a los políticos.



El cardenal, rodeado de los sacerdotes de Santiago, preside la misa de conmemoración de sus 20 años en la Arquidiócesis, el 24 de junio de 1981.

"Tienen que rezar por mí", pedí en la eucaristía con que celebramos mis 20 años como arzobispo de Santiago. Releyendo esos textos, ahora que ha pasado más de una década, llego a pensar que quizás pocos entendían la verdadera magnitud de mi pesadumbre. "Terminó mi carrera. Sé a quién he servido. He luchado denodadamente, tal vez más de lo que debiera. Me remuerde el corazón de no haber logrado que los pobres sean evangelizados con la buena nueva de la justicia, del respeto de sus derechos, del amor de sus hermanos. ¡Siento pena por esto! Siento pena, mis queridos hijos, porque hay una parte de mi grey que no me comprende y porque no ha comprendido al Señor,

porque no ha sabido lo hermoso que es dar, inmensamente mejor que recibir, inmensamente mejor que atesorar, porque no ha sabido hacer feliz a tantos hermanos nuestros".



El cardenal conversa con el ministro del Interior, Sergio Fernández, en el edificio Diego Portales, poco antes de comenzar la ceremonia de conmemoración del gobierno, el 11 de septiembre de 1981.

En el Te Deum del 18 de septiembre, que se realizó en medio de un clima expectante, repetí estas ideas ante las autoridades: "Es el futuro de nuestra patria lo que nos preocupa y nos urge, es el Chile del mañana el que está en el centro de nuestro corazón y de nuestra esperanza, y es por él por quien sufrimos y por quien oramos... Al proponer este mensaje de justicia y amor, la Iglesia es fiel a su Maestro. No considera que sea su tarea entrar en materias políticas, pero sabe que está al servicio de la humanidad entera... Hoy como ayer traemos al Altar, como ofrenda sagrada, esta tierra de Chile, con sus hombres, nuestro pueblo, sin distinción ni excepción alguna; con esa vocación de todos a ser libres; ese derecho de todos a sentirse hijos, ese deber de todos de ser padres de un nuevo Chile. Un Chile que siga siendo, hasta que Cristo vuelva, la tierra mejor que hay en el mundo".



El cardenal eleva las plegarias durante el Te Deum del 18 de septiembre de 1981.

El 5 de octubre de 1981 viajé una vez más a Roma. El Papa se había recuperado casi completamente del atentado que sólo cinco meses antes había puesto en peligro su vida, y retomaba el gobierno de la Iglesia Universal con su ritmo enérgico de siempre. Había convocado a una reunión especial porque los trabajos del nuevo Código de Derecho Canónico estaban llegando a su fase culminante, y la comisión redactora quería recoger opiniones de parte de la comisión ampliada, que integrábamos varias decenas de obispos de todo el mundo.

Pero además, el Santo Padre tenía urgencia por revisar lo que estaba ocurriendo con la mediación, para lo cual aprovechó mi presencia y la del cardenal argentino Raúl Primatesta en el Vaticano. Nos invitó a almorzar con monseñor Achille Silvestrini, de la Secretaría de Estado, y con el cardenal Samoré, quien hizo una breve exposición de su punto de vista.

La Santa Sede había entregado una propuesta formal a los gobiernos de Chile y Argentina, a fines del año anterior. Mientras Santiago se había adelantado a acoger inmediatamente las sugerencias del Vaticano, aceptándolas en todos sus términos, Buenos Aires guardaba silencio. No sólo esto: muy poco después de entregado el protocolo, habían estallado recíprocas denuncias acerca de "espionaje" entre ambos países; detonadas, eso sí, en Argentina. Debido a que en las denuncias existía personal militar involucrado, la tensión había vuelto a brotar, hasta el grado de provocar el cierre de las fronteras. El buen cardenal Samoré, que nada tenía que ver con esta clase de problemas, vio en ellos

tal peligro, que se dedicó a resolverlos con sus buenos oficios. Pasó medio año en esa tarea, y, aunque parecía imposible, su paciencia dio buenos frutos: logró restablecer la confianza.

Aun así, para octubre se completaban ya once meses sin que el gobierno argentino diese una respuesta al mediador. Era evidente que en la Casa Rosada las discrepancias entre distintas posiciones militares no lograban resolverse. Además, se acercaba un momento peligroso: en 1982 caducaría un tratado de solución jurídica de controversias entre los dos países. Si las partes no se ponían de acuerdo para renovarlo, quedarían sin ningún instrumento legal en el indeseable evento de que la mediación no llegase a buen término. En ese caso nos veríamos a las puertas de un conflicto armado.

Con el cardenal Primatesta estuvimos de acuerdo en que las iglesias locales debían dar un enérgico respaldo a la gestión del Papa. Pocos meses antes, cuando el estado de crispación se había elevado más allá de lo conveniente, el obispo Santos y yo habíamos ido a visitar a Primatesta a Córdoba, y el tenor de nuestras conversaciones había sido semejante. El era un decidido promotor de la paz y se sentía muy responsable del papel que la Iglesia argentina jugase en una hora tan crítica; por nuestra parte, el obispo Santos había conversado antes de viajar con el general Pinochet, de modo que tenía una idea clara acerca de la voluntad y la decisión de nuestro gobierno.

En la reunión con el Papa y con el cardenal Samoré quedó claro que la Iglesia debía poner en juego la totalidad de su carisma y movilizar a los católicos tras la convicción de la paz.

Era necesario, a partir de entonces, convertir la guerra en un camino imposible, moralmente vedado y políticamente impracticable.

Durante aquella permanencia en Roma, recibí del embajador francés una invitación oficial para ir a París cuando concluyesen las reuniones en la Curia. El Presidente François Mitterrand, que había accedido recientemente al poder con el Partido Socialista, y que era un conocedor de la situación chilena, había pedido que se me transmitiera su deseo de conversar conmigo y conocer directamente el estado de las cosas en el país y el punto de vista de la Iglesia.

El encuentro en el Elíseo fue muy cordial. Mitterrand logró impresionarme con el grado de conocimiento que tenía acerca de nuestra realidad, agudo en los detalles y profundo en los alcances.



El cardenal dialoga con el Presidente de Francia, François Mitterrand, en el Palacio del Elíseo, en octubre de 1981.

Una de las cosas que más le preocupaban eran los contratos que su gobierno había heredado del anterior para el abastecimiento de armamento al régimen chileno. A su modo de ver, ni la opinión pública de su país ni sus votantes, que mayoritariamente expresaban un sentimiento de izquierda, soportarían que el Estado francés cumpliera con esos compromisos.

Noté su sorpresa cuando le respondí que, desde mi perspectiva, la cancelación de los contratos no sólo sería un gravísimo error, sino que también una amenaza concreta para la paz. Francia abastecía de armamentos a otros países de América Latina y, más en concreto, del Cono Sur, cuyos regímenes no eran muy distintos. En la situación de tensiones fronterizas que vivíamos, la debilidad de unos y la fortaleza de otros podía ser un aliciente para la guerra. Y una tragedia como ésa, le dije, caería a la postre sobre todo el mundo occidental.

Si los abastecimientos franceses eran una ventaja para unos, sería mejor que lo fuesen para todos. Esa contribución de una nación avanzada podría ser luego reforzada por una diplomacia activa en favor de la paz; pero dicha diplomacia sería imposible *a posteriori*, cuando los hechos de hostilidad ya se hubiesen consumado.

Mitterrand fue notablemente sensible a este punto de vista, aunque era notorio que no le agradaba. Antes de despedirnos me dijo que él, a pesar de no haber sido nunca un hombre cercano a la Iglesia, sentía un gran respeto por la labor que ésta desarrollaba en Chile, y que sólo podía desear que prosperara y contribuyera a ayudar eficazmente al país.

El gobierno chileno se enteró inmediatamente del tenor de esta

conversación. Debido a eso, y por primera vez desde la instalación del régimen militar, a mi regreso fui objeto de una recepción oficial por parte de la Cancillería -hasta puedo decir que conocí un tratamiento excepcional en los salones VIP del aeropuerto-, y poco después el ministro de Relaciones Exteriores, René Rojas, me invitó a una extensa charla acerca de mis impresiones de la Europa de esos días.

El temor a la guerra y la inmensa responsabilidad de la paz, habían conseguido unirnos más allá de todas las diferencias ocasionales. Se lo dije a Rojas: "Somos hermanos de una sola causa, ministro". Y él, laico militante, masón, diplomático de carrera, funcionario en la etapa más conflictiva de las relaciones entre la Iglesia y el gobierno, me miró con sus ojos algo cansados, esbozó una gran sonrisa y dijo: "Así es, señor cardenal, así es. Quizás sea un buen motivo de orgullo".

Quiero agregar sólo unas palabras acerca de este tema.

Tal como se temía, a comienzos del año siguiente, 1982, Argentina denunció el tratado de solución jurídica de controversias, reduciendo los márgenes de negociación a la angustiosa búsqueda de un acuerdo en los hasta entonces estrechos ámbitos de la mediación.



El cardenal Antonio Samoré, en una fotografía de octubre de 1981.

El valiente cardenal Samoré no se detuvo, sin embargo, ante este obstáculo que a todos nos parecía tan dramático. Con la paciencia de un orfebre, siguió trabajando con los dos gobiernos, procurando acercar posiciones, buscando puntos de consenso allí donde los hubiese, por pequeños que pudiesen parecer.

Argentina se vio envuelta en una desgracia mayor en cosa de meses. Tras ocupar el archipiélago de las islas Malvinas, en el Atlántico sur, que reivindicaba como parte de su territorio, debió enfrentar la declaración de hostilidades por parte de Inglaterra. Creo que muchos chilenos sintieron un estremecimiento ante estos hechos: el régimen militar argentino, deteriorado en su situación interna, había hallado un conflicto irredentista para alinear a la nación. ¿Era la postergación de otro, que no se había atrevido a iniciar por obra de la intervención del Papa, o era sólo el preludio de una escalada más amplia?

El Vaticano prefirió no especular sobre esto. Con la sabiduría de muchas centurias, y en medio de las traumáticas consecuencias de esa guerra, el cardenal Samoré prosiguió incansablemente su tarea de pacificación fronteriza. Estaba ya enfermo, y las huellas del mal se hacían tan visibles que por momentos parecían ensombrecer la inmensa bondad depositada en su físico frágil y esmirriado.

Aquel año, Samoré consiguió prorrogar la vigencia del tratado impugnado por Argentina, y se empeñó en la redacción de un texto mayor: un nuevo acuerdo de paz y amistad que a la vez significase una expresa renuncia a la amenaza o al uso de la fuerza. El cardenal aspiraba, ya no solamente a detener la guerra, sino a proscribirla para siempre de nuestros territorios.

Sólo su inquebrantable fe en el Espíritu Santo explica que no haya cedido en ese empeño hasta el mismo día 3 de febrero de 1983. cuando, agotadas ya todas sus fuerzas, se entregó al Reino del Señor.

Su propia muerte constituyó uno de los más exigentes e imperativos momentos del proceso. Mientras Argentina sufría los estragos de la derrota militar y un nuevo gobierno se instauraba para recuperar la vigencia de la democracia, los más cercanos asesores de Samoré, los padres Fiorello Cavalli y Faustino Sáinz, tomaron las banderas del gran diplomático que había dejado su vida en la tarea, y consiguieron un acuerdo que vino a materializarse en octubre de 1984.

El 2 de mayo de 1985, siete años después de iniciarse la gestión mediadora, Chile y Argentina firmaron el Tratado de Amistad que garantizaría la solución armónica de las controversias y, en abierta ofensiva de la paz, crearía mecanismos para la cooperación y la integración de ambas naciones.

"Disponga, Santo Padre..."

El año 1982 comenzó con una gran ilusión.

A lo largo de los doce meses anteriores, en todos los niveles de la Arquidiócesis se había estado recogiendo opiniones y datos acerca de la realidad de los jóvenes, con el fin de abordar de una manera global este amplísimo sector por el cual Puebla había tomado una opción clara y firme.

Los vicarios me habían propuesto este trabajo en sucesivas reuniones, y yo me sentí extraordinariamente motivado por él. Los vicarios tenían un diagnóstico muy penetrante de la situación de nuestra juventud, para entonces. Veían que se estaba generando en el país una especie de cultura nueva, con valores que a veces podían desconcertar; que ante la desorientación y la falta de horizontes de numerosos muchachos, era urgente proponerles una forma cristiana de definir su vocación; que la catequesis y la labor pastoral cotidiana no llegaban con la profundidad necesaria, y que los movimientos y grupos de jóvenes católicos se hallaban dispersos.

El carisma de Don Bosco me enseñó a sentir un particular cariño por los niños y los jóvenes, de modo que para mí fue una inmensa alegría constatar que mis vicarios, pese a todas las dificultades que afrontábamos, marchaban en la misma dirección. De hecho, la Arquidiócesis venía ampliando su trabajo especializado en este campo desde hacía varios años. Desde el 74 en adelante, los padres Víctor Gambino (en la Vicaría de Educación), René Carrasco y Cristián Caro (Vicaría de Pastoral Universitaria), y Miguel Ortega (Vicaría de Pastoral Juvenil Extraescolar) habían potenciado la presencia de la Iglesia en el medio juvenil, con resultados verdaderamente notables. La solidez de esa estructura fue vital para afinar el diagnóstico que construimos durante 1981.

Cuando presenté algunas de sus conclusiones a la Conferencia Episcopal, ésta decidió acoger la iniciativa de realizar una misión

especializada, que llevara la palabra evangelizadora hasta todos los jóvenes de Chile. La convocatoria a esa tarea fue incluida en las *Orientaciones Pastorales 1982-1985*, y de inmediato comenzó la distribución de funciones entre los organismos pertinentes. Habría dos etapas: una de formación y promoción, durante todo el 82; y una de servicio concreto a los jóvenes, durante el 83.

Al comenzar el 82, Manuel Camilo Vial, a quien había designado a cargo de la organización en Santiago, tenía ya editado el proyecto de lo que pasaría a llamarse Misión Joven, y cuya convocatoria oficial realicé en una multitudinaria eucaristía celebrada a los pies de la gigantesca Virgen que corona nuestro cerro San Cristóbal.



El cardenal, junto a los sacerdotes Miguel Ortega y Cristián Precht, en una de las peregrinaciones juveniles al santuario del cerro San Cristóbal.

No tengo palabras para describir la hondura que la Misión Joven alcanzó en todas partes, ni la alegría que me producía el saber que este precioso trabajo sería el último que dirigiría como arzobispo de Santiago. Me emociona aún recordar el fervor y la pasión con que los jóvenes respondieron a nuestro llamado; movilizados en decenas de miles, desde las modestas comunidades de base creadas en el corazón de la pobreza hasta las fuertes agrupaciones de universitarios, estos muchachos eran la savia de la que se nutriría, ahora y en el ancho futuro, el mensaje de Cristo en Chile. Con sus inmensas peregrinaciones al santuario del San Cristóbal (que hoy se continúan realizando, y que han alcanzado proporciones multitudinarias), con su masiva presencia en el Domingo de Ramos, con su vibrante Semana Para Jesús, ellos eran la demostración viva de que nuestros esfuerzos no eran vanos ni nuestros dolores estériles. He rogado

muchas veces al Señor para que me bendiga con el recuerdo de esas imágenes hasta el último minuto de mi vida.

Sin embargo, nos esperaban también peculiares dolores aquel año. El 22 de enero, después de unas inesperadas complicaciones surgidas tras una intervención quirúrgica, murió mi gran amigo el ex Presidente Eduardo Frei. Su desaparición en un momento muy complejo de nuestra historia privó al país de una de sus inteligencias más preclaras, un hombre que había dado su vida en el servicio público bajo una leal y constante inspiración cristiana. Creo que fue debido a que la nación percibió la magnitud de esta pérdida que las manifestaciones de dolor popular superaron todo lo visto hasta entonces. Cuando oficié la misa de réquiem la Catedral se repletó por sus cuatro costados, y el desfile del último saludo ante el féretro se volvió interminable. El propio gobierno, que tan duramente había combatido a Frei, asistió en pleno a las exequias.



Una de las últimas fotografías del cardenal con el ex Presidente Eduardo Frei M., en 1979. Aparecen, además, los sacerdotes Bernardo Herrera y Lucio Migliacco, Santiago Brúron, el sacerdote Guillermo Arceu (de pie), y Manuel Balcárcel, el sacerdote Renato Poblete, Andrés Zaldívar y el sacerdote Bruno Dessi (inclinados).

Un mes después, el 25 de febrero, el dirigente sindical Tucapel Jiménez, presidente de la ya menguada Asociación Nacional de Empleados Fiscales y tal vez el líder más carismático de los trabajadores en ese momento, fue secuestrado en su propio taxi y bárbaramente asesinado en las afueras de Santiago. Este crimen conmocionó al país, y vino a mostrar que la violencia nos acechaba como una fiera descontrolada.

Pasarían dos meses hasta que una nueva pérdida viniese a sacudirnos de cerca. El 29 de abril, tras ser atacado por un doloroso cáncer linfático, mi obispo auxiliar Enrique Alvear fue llamado al encuentro del Señor. Tenía 66 años y se había ganado, con esfuerzo y privaciones, el cariño de las gentes humildes de la zona oeste. Había en él una bondad tan íntima, tan sincera y tan extensa, que a veces podía quebrantar todas las durezas de quienes estábamos en su entorno. En tiempos ásperos, en horas adversas, Enrique Alvear tenía el secreto de cómo no flaquear en la alegría del Señor, de cómo permanecer indemne al pesimismo o a la indignación. Se nutría de un Evangelio de hojas envejecidas que había subrayado una y otra vez, prácticamente en todas sus palabras; los vicarios bromeaban con esa costumbre: "Enrique no lee", decían, "sino que subraya". Pero, pensándolo bien, quizás éste era un rastro concreto de que había hallado en ese libro todo lo que necesitaba, o de que todo lo que había en él le era necesario.

Sus funerales fueron de muchedumbres; y pobres, como las hubiese querido. Mejor dicho, rodeadas de pobres, de obreros, de modestas dueñas de casa, de pobladores, de cesantes y de jóvenes: el mundo por el cual había dado los últimos y quizás los más fructíferos años de su vida.

Así, rodeados de dolores y preocupaciones, castigados a ratos por la incomprensión y la evidente división del país, bendecidos a veces por el afecto y la renovada vigencia de los valores cristianos en la sociedad, habríamos de enfrentar un año particular: el del cambio de mando en el Arzobispado de Santiago.

En septiembre cumpliría 75 años. Definitivamente, había llegado, ya no a la edad en que los amigos lo saludan a uno con una pregunta formal ("¿Cómo estás?"), sino a aquella en la que la afirmación se mezcla con cierta sorpresa: "¡Qué bien te ves!".

Así, cumpliendo con el decreto que, con mi modesto entusiasmo de aquellos años, había contribuido a promulgar al final del Concilio Vaticano II, debía ahora presentar mi renuncia como arzobispo. No era

fácil imaginarlo; mal que mal, había pasado 21 años en esta diócesis y me sentía parte de ella, como si en mi sangre corriera todavía la savia del obispo joven, recién llegado, afuerino y por lo mismo ilusionado con el cambio y el desafío.

Tres años antes había contemplado desde cerca la tristeza y la nostalgia con que el cardenal Suenens había dejado su cargo en Bélgica; había visto también su entereza, y sinceramente temía que yo no pudiera estar a la altura de un momento tan especial. Desde entonces venía viendo cómo muchos de los padres conciliares que había admirado o que habían sido mis amigos se estaban retirando o se apagaban lentamente, uno a uno, como débiles estrellas en la noche luminosa. Eramos, sin duda, una generación en retirada.

Conversé mucho con el presbiterio, con los vicarios y con los obispos auxiliares acerca del momento en que debía dar este paso. Concordamos en que la fecha indicada era la de mi cumpleaños; para cuando llegase ese día, el Papa debería tener ya mi renuncia en sus manos.

Entre tanto, todas las obras y las tareas pendientes del Arzobispado debían quedar clarificadas; la continuidad de los programas de bien social, el financiamiento y la proyección a futuro, debían ser resueltos antes de que se nombrara a mi sucesor, con el fin de que éste no se hallara con una estructura caótica, apoyada en la memoria de unos pocos o en las buenas intenciones de otros tantos.

Este fue uno de los motivos principales del viaje por Europa y Estados Unidos que emprendí con Manuel Camilo Vial al iniciarse mayo de 1982.

Nuestra primera escala fue Buenos Aires, donde nos encontramos con una situación tremendamente convulsionada. Como ya he narrado, después de las largas tensiones fronterizas con Chile, congeladas por la mediación del Papa, el gobierno militar argentino había decidido ocupar por la fuerza las islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, hasta entonces en posesión de Inglaterra. Esto ocurrió en los primeros días de abril; la corona británica declaró inmediatamente rotas las relaciones con Buenos Aires y anunció el envío de una fuerza naval para recuperar los territorios insulares del Atlántico Sur. Durante casi un mes el fantasma de la guerra deambuló por el Cono Sur de América con una irrealidad de pesadilla; parecía que lo que estaba ocurriendo -la inminencia de una guerra- no era verdadero.

Pero el espectro era efectivo. El día que aterrizamos en Ezeiza con Manuel Camilo, la aviación británica acababa de atacar la capital de las islas Malvinas; unas pocas horas después, un submarino hundiría al crucero *General Belgrano*, uno de los más poderosos de la flota argentina,

con más de dos mil hombres a bordo. El clima hacia los chilenos -a quienes se consideraba aliados virtuales de Gran Bretaña- era, si no hostil, al menos francamente desconfiado; la férvida pasión de la guerra parecía haber atrapado por completo a la nación.

Profundamente impactados por esta situación, llegamos a Roma, preparándonos para la audiencia que nos había concedido el Santo Padre. Tuvimos una larga conversación sobre lo que ocurría en este rincón del mundo. A la vez que preocupado por el estancamiento que había sufrido en los últimos meses el proceso de la mediación, Juan Pablo II estaba estremecido por la guerra entre Argentina e Inglaterra. Para él, la magnitud de esta conflagración sobrepasaba con mucho la condición de episodio bélico circunscrito y limitado; representaba sobre todo la reaparición de un tipo de conflicto que parecía anacrónico, y que amenazaba con expandir el prestigio de las soluciones de fuerza para todas las disputas sobre soberanía.

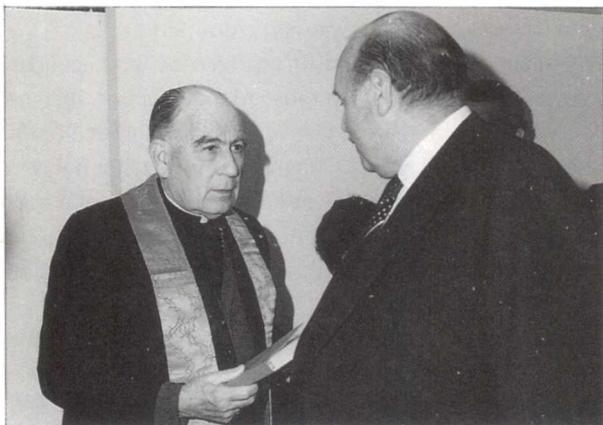
Era tan fuerte este sentimiento, que el Papa se había propuesto intervenir activamente para detener la guerra; tenía la decisión personal de viajar hasta Inglaterra y Argentina si era necesario, para llamar personalmente a los pueblos a frenar esta locura. No le importaba que pudiese ser tarde; aunque todos preveían que la guerra sería de corta duración, él estaba firmemente convencido de que la Iglesia debía hacer oír su voz en un instante que percibía como crucial para el destino de la humanidad.

Durante nuestra reunión me dijo que, a pesar de su certidumbre, quería oír a los episcopados más cercanos al conflicto. Y yo, que lo vi tan decidido, no pude menos que decirle que un viaje suyo en esas circunstancias, aun con todos los inconvenientes que pudiese presentar, sería un gesto de inmensas proporciones para la causa de la paz.

En la última parte de la audiencia se incorporó Manuel Camilo, quien quería explicarle las características de la Misión Joven y entregarle el documento que le daba base. El Papa se interesó vivamente en el proyecto, y consideró notable el alcance que le había dado el Episcopado chileno. Cuando nos despedimos, le deseó a Manuel Camilo el mejor de los éxitos en la compleja tarea que le esperaba.

En las semanas siguientes visitamos Alemania, Bélgica, Holanda y España. En esos países yo buscaba la ayuda necesaria para dos proyectos en los cuales el Arzobispado era aún muy débil: la creación de un Banco de Fomento a partir de Fintesa, y el fortalecimiento de la clínica Indisa, un proyecto que habíamos echado a andar con mi amigo el doctor Alberto Lucchini y con otros médicos y profesores exonerados de la UC, y que aspiraba a erigir en un centro de salud del mejor nivel, que pudiera cumplir también fines sociales.

Nos fue bien en ambas cosas. Fintesa sirvió en poco tiempo de fundamento al Banco del Desarrollo, e Indisa logró transformarse en uno de los centros clínicos más avanzados del continente.



El cardenal preside la inauguración de Indisa, en 1981.

En España tuve unas largas conversaciones con el cardenal Enrique Tarancón, que había sido figura central en la transición de España desde el Estado autoritario hasta la democracia. Tarancón estaba próximo a cumplir los 75 años y debía, como yo, retirarse del ejercicio episcopal. Recuerdo bien la conversación que tuvimos, porque buena parte de ella estuvo destinada al caso del Opus Dei, que se convertiría en prelatura personal en aquellos mismos días.

Tarancón tenía una visión más o menos dura del Opus Dei, pero opinaba que, más allá de las simpatías personales, la Iglesia debía velar por su propia integridad de conducción y por su unidad de criterio. Para el cardenal de Madrid-Alcalá, que había visto nacer a esa congregación y que conocía a su fundador, monseñor José María Escrivá de Balaguer, los hechos daban la razón a las aprensiones: una cierta "pastoral paralela" se instauraba allí donde los sacerdotes, o comunidades de sacerdotes, respondían al jefe del grupo, por encima de las directrices de la Iglesia local. A su juicio, la prelatura personal daría *status* oficial a una situación de hecho que era criticada en España y otros países. Durante el debate de la comisión ampliada de revisión del Código de Derecho Canónico, la figura de la prelatura personal había sido discutida y finalmente desaconsejada por amplia mayoría.

A pesar de estas prevenciones, compartidas por una mayoría del Episcopado español, a fines del 81 la Congregación para los Obispos había informado acerca de la decisión ya tomada por la Curia; a comienzos del 82, Tarancón se había trasladado hasta Roma para insistir en su punto de vista, pero ahora se sentía desoído.

Debo decir que algo parecido ocurrió con la Conferencia Episcopal chilena, cuyo presidente, el obispo José Manuel Santos, hizo notar que sólo un muy pequeño número de los obispos de América Latina había sido consultado. Si la Sagrada Congregación sostenía haber recibido puntos de vista favorables de dos mil obispos, significaba que uno de cada cinco en el mundo había podido opinar; pero entre Brasil, Argentina, Chile y Perú (es decir, mucho más de 100 prelados) no se reunían ni diez consultas.

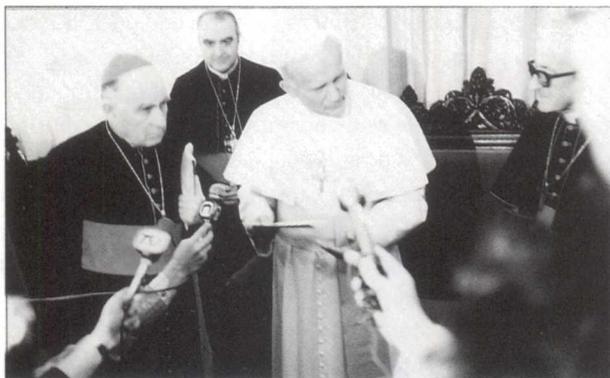
El hecho es que, por esta y otras situaciones recientes, el cardenal Tarancón pensaba que las renunciaciones de los obispos llamados "conciliares" serían acogidas con cierta rapidez por la Santa Sede.

Poco después de retornar a Santiago recibí un cablegrama del Vaticano anunciando que el Papa se proponía viajar a Gran Bretaña y Argentina en apenas cinco días.

La Secretaría de Estado consideraba esencial para la paz que en el caso de la visita de Buenos Aires estuviese presente una delegación importante de obispos chilenos, visto el resurgimiento de las desconfianzas y tensiones que había significado la guerra por las Malvinas.

No lo sabíamos entonces, pero en verdad las acciones bélicas en el Atlántico Sur se acercaban a su fin. Las tropas inglesas ya habían desembarcado en las islas, y ganaban posiciones día tras día. De hecho, el 12 de junio, cuando el Papa aterrizó en Buenos Aires, la capital de las Malvinas estaba bajo fuego y los soldados argentinos iniciaban una angustiada retirada que sólo 48 horas más tarde derivaría en su rendición y en el definitivo triunfo militar de Gran Bretaña.

En medio de muchedumbres fervientes y a veces descontroladas, los obispos chilenos nos reunimos brevemente con Juan Pablo II y recogimos de él un mensaje a la nación, en el que subrayaba que desde 1979 estaba pensando en viajar a los dos países, y dejaba entrever que lo haría en cuanto pudiese concluir la mediación.



El cardenal junto al Papa Juan Pablo II y los obispos Carlos Camus y José Manuel Santos, en la Nunciatura de Buenos Aires, durante la guerra de las Malvinas, el 12 de junio de 1982.

El Papa recordaba cada detalle de este "viaje de locos" -uso una expresión que oí en la Curia- dos meses después, cuando nos vimos por tercera vez en ese año 1982. La guerra había concluido en un desastre para Argentina, y subsecuentemente su gobierno militar tambaleaba; en Inglaterra, el triunfalismo inicial había dejado paso a un análisis más descarnado acerca de la futilidad de la aventura bélica.

En el Vaticano, en cambio, el balance era optimista, y con razón: por primera vez en muchas décadas, la Santa Sede se había hecho presente en una encrucijada mundial de alcances desconocidos. El éxito no podía medirse según cánones tradicionales; no se había detenido la guerra y no se había impedido que una nación fuese humillada por otra en los campos de batalla. Pero lo importante era que el Papa había sentado el principio de que la voz de la Iglesia había de oírse aun -y quizás sobre todo- en medio del dolor y la guerra. Esta posición era esencial para lo que pudiese venir en el futuro cercano; nadie ignoraba las gravísimas tensiones que se estaban multiplicando entre las superpotencias, y que por primera vez en muchos años habían llegado a hacer pensar en una guerra nuclear; no por nada aquellos fueron los años de mayor proliferación de los movimientos pacifistas y anti-nucleares en todo el mundo.

Pero en aquel agosto yo no iba a hablar sobre ninguno de estos temas trascendentales, sino sobre uno muchísimo más modesto: mi renuncia.

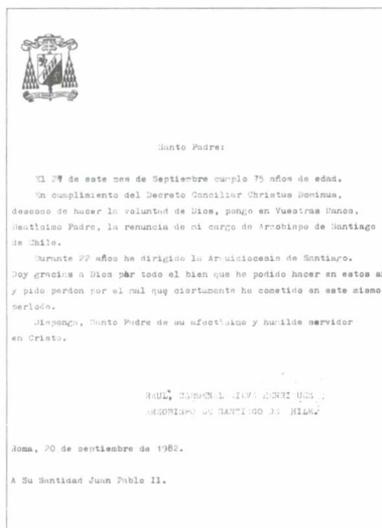
Antes de llegar a Roma, había estado en Lima, asistiendo a una reunión, inspirada por el Celam, de los arzobispos de las grandes ciudades de América Latina, para analizar los problemas pastorales creados con la urbanización a gran escala. En la cita se rendía también

homenaje al Tercer Concilio Limense, convocado en 1582, que había reunido a buena parte de los obispos de la región; a nombre de Santiago asistió, en esa remota época, Fray Diego de Medellín, el notable intelectual franciscano que se hizo cargo de la diócesis como su tercer obispo en 1574, trece años después de que el Papa Pío IV la erigiese.

Repasando esta hermosa historia, que nos revela una y otra vez la presencia práctica de la Iglesia junto a los pobres y a los desheredados, y contrastándola con los inmensos desafíos planteados por los tiempos modernos, sentí nostalgia de lo que debía dejar. Hubiese querido, quizás, que el buen Señor detuviese su reloj para alcanzar a verlo todo de nuevo, analizarlo, descubrir los errores y los aciertos, y reandar los caminos de 20 años; no sabía aún que me iba a dar esta oportunidad a través de la larga vida con que me ha bendecido.

Llevaba redactada la breve carta que presenté al Papa cuando me dio la audiencia de la despedida. Estaba fechada el 20 de septiembre:

"Santo Padre:



Borrador original de la renuncia del cardenal al Arzobispado de Santiago, presentada el 20 de septiembre de 1982.

"El 27 de este mes de septiembre cumplo 75 años de edad. En cumplimiento del decreto conciliar *Christus Dominus*, deseoso de hacer la voluntad de Dios, pongo en Vuestras Manos, Beatísimo Padre, la renuncia de mi cargo de Arzobispo de Santiago.

"Durante 22 años he dirigido la Arquidiócesis de Santiago. Doy gracias a Dios por todo el bien que he podido hacer en estos años y pido

perdón por el mal que ciertamente he cometido en este mismo período.

"Disponga, Santo Padre, de su afectísimo y humilde servidor en Cristo".

El Papa Wojtyla me recibió por más de 40 minutos, durante los cuales pude exponerle la situación de la Arquidiócesis, los problemas que vivíamos y los que yo visualizaba para el futuro cercano, la relación con los poderes públicos, y las fortalezas pastorales de una Iglesia que se había templado en las dificultades y que aún podía, con defectos y debilidades, dar un ejemplo de unidad y tolerancia en un país escindido.

Poco antes de despedirnos, Juan Pablo II me dijo que la opinión del arzobispo dimisionario sería importante para que la Santa Sede tomase la decisión más adecuada sobre su sucesor. Agregó que pasarían todavía algunos meses antes de que esto se produjera, dada la importancia del caso. De modo que salí de la audiencia convencido -quizás en esto exageré mi propio punto de vista- de que debía hacer un análisis concienzudo acerca de qué podía ser lo mejor para Santiago, y entregárselo al Vaticano.



El cardenal apaga velas en su 75 cumpleaños, el 27 de septiembre de 1982.

Por cierto, noté que esta idea personal sobre el futuro de la Arquidiócesis era un tanto desmedida, cuando vi que algunas de mis principales recomendaciones eran desestimadas. Así ocurrió, por ejemplo, con la tesis de la división de la diócesis, a lo que me había opuesto por más de dos décadas. En el Vaticano se había hecho fuerte la idea de que Santiago era un territorio demasiado grande para un solo obispo, y que la delegación de facultades ejercida a través de los obispos auxiliares resultaba insuficiente para el trabajo pastoral.

Como yo sabía bien que éste no era el primer intento por dividir la diócesis, reuní antecedentes históricos y técnicos, y respondí desaconsejando las varias particiones propuestas; por lo demás, ésta había sido una de las principales conclusiones de la reunión de obispos a la que había asistido poco antes en Lima. Rio de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Buenos Aires, eran buenos ejemplos de grandes capitales donde la unidad pastoral se había podido cautelar sólo en virtud de una cierta centralización de decisiones. Admití en esos informes que la zona donde podía imaginarse una división era la Rural-Costa, dada su extensión; pero previne acerca de las dificultades de recursos que ello implicaría. Lo mismo, con más dudas, anoté sobre el caso de San Bernardo, un pequeño pueblo aledaño a la capital cuyo crecimiento no terminaba de justificar la separación.

Sin embargo, no me fue muy bien con estos argumentos. Poco después de mi retiro fueron creadas las diócesis nuevas de Melipilla y de San Bernardo, en las cuales han tenido que desempeñarse, con notables dificultades y aún más notables éxitos, obispos independientes de Santiago.

Un par de meses después de mi reunión con el Santo Padre, el nuncio Sodano me pidió una relación escrita de la situación de la Arquidiócesis, parecida en el fondo a la que había entregado verbalmente en aquella visita.

Se trataba de un balance difícil de realizar. ¿Cómo incluir en él las penas y las alegrías de 20 años? ¿Cómo reunir el cariño de los hombres humildes con las ingratitudes del poder? ¿En qué renglón poner la recuperación de la fe popular, la confianza de los jóvenes, el cariño de los trabajadores, y en cuál otro situar la división de los chilenos, las heridas profundas de la convivencia, el lento deterioro de nuestro respeto nacional? ¿Dónde hablar de una Iglesia expandida por todos los ámbitos de la sociedad, en contraste con la Iglesia comprometida con un solo sector político, social o cultural?

No, nada de esto podía decirse en un documento tan sencillo. La tarea tendría que quedar para los historiadores, pero, sobre todo, para el insondable misterio del Señor, que conocía bien las fuerzas que se habían movido en nuestros corazones. Entretanto, el funcional informe al nuncio debía contentarse con registrar ciertos hechos del presente.

En primer lugar figuraba la situación del país. Pero... ¿qué decir de nuevo acerca de esto? Poco había cambiado, en verdad; con excepción

del deterioro económico acentuado, el estado de la sociedad y el ejercicio del poder "no ha variado en lo esencial en los últimos años". Debido a esa misma realidad, la Iglesia no había podido dejar la tarea de defender, con su mayor fuerza, los derechos humanos. A la vez, esta misión se había convertido en la principal fuente de discrepancias con el Poder Ejecutivo, y en el costo más alto que pagaba la Iglesia por ser fiel a su magisterio.

En el terreno de los agentes pastorales podíamos mostrar una posición consolidada. Una preocupación eminente por las vocaciones nos había llevado a la mejor situación del Seminario en los últimos 30 años, con un lleno total de las plazas previstas para estudiantes. A pesar del escepticismo sembrado años antes frente a la erección de un Seminario "tradicional" en la comuna de La Florida, esta experiencia venía demostrando una riqueza difícil de comparar. En cuanto al clero, sufríamos un problema de envejecimiento objetivo: una mayoría de los sacerdotes de Santiago tenía más de 50 años. En contraste con esto, existía una notable comunión en este clero, un respeto mutuo y una obediencia al pastor que constituían un auténtico orgullo para todos. El diaconado permanente se ofrecía todavía como un enorme terreno inexplorado, mientras que la masiva incorporación de laicos a la vida ministerial probaba la eficacia de una Iglesia prestigiada y en movilización.

En cuanto a las tareas pastorales, a mi juicio habíamos cumplido con el deber de "devolver la credibilidad a la Iglesia", tal y como nos urgía el recordado cardenal Benelli. En la Catequesis y en la Pastoral de Confirmación había progresos numéricos inestimables, mientras que la Vicaría de la Solidaridad y la Vicaría de Pastoral Obrera habían constituido herramientas de acercamiento real con mundos hasta entonces alejados de la Iglesia. Las instituciones de bien social se habían diversificado desde la siempre presente Cáritas diocesana hasta las multiformes Indisa, Fintesa, radio *Chilena*, Indiso y muchas otras. En la educación también estábamos más fuertes: teníamos ahora 265 colegios y 34 escuelas; sólo debíamos lamentar la dificultosa situación de la Universidad Católica.

Sobre el gobierno pastoral, sólo podía decir que había funcionado en una muy estimable coordinación, y contando con la más radical entrega de obispos auxiliares, vicarios territoriales y especializados, jefes de departamentos y encargados de unidades menores. Podíamos citar, con alegría, que uno solo de nuestros departamentos, el encargado de la CALI, financiaba el 60% de todos los gastos ordinarios de la Arquidiócesis.

A pesar de las muchas cosas que, por razones de extensión y estructura, debía omitir, creo que era una hermosa recapitulación.

Quizás no decía mucho sobre los verdaderos esfuerzos humanos, sobre el inmenso capital espiritual allí invertido, pero al menos reflejaba bien sus resultados. Y eso era bastante.

Días de hojas amarillas

Ya no puedo recordar cuántas veces dije, en los últimos meses de mi desempeño como arzobispo de Santiago, que el mejor regalo para mi despedida sería ver la construcción de la paz y el amor a la justicia entre los hombres de mi patria. Quizás, sin saberlo, estaba intuyendo algo próximo; quizás presentía que, después de todo, este final feliz no estaba tan lejos. Sé ahora, positivamente, que la sola ilusión de que esos caminos serían posibles fue lo que me ayudó a sobrellevar la inevitable tristeza de esos rápidos días.

Y creo que esta esperanza, compartida entre los obispos de Chile, fue también lo que inspiró las gestiones que la Conferencia Episcopal quiso realizar ante el gobierno a fines de 1982, cuando todos detectábamos que las tensiones habían resurgido y amenazaban con convertirse en una nueva fuente de desencuentros. Después de una sesión del Comité Permanente Ampliado (a la cual se incorporaban todos los prelados que pudiesen asistir), se tomó el acuerdo de que el obispo José Manuel Santos y el arzobispo-obispo Emilio Tagle pidiesen una audiencia con el Presidente de la República para analizar la situación en conjunto. Los obispos esperaron pacientemente una respuesta durante todo noviembre, hasta que un alto funcionario se avino a informarles que el ánimo del Ejecutivo no estaba propicio para tal reunión. "Por ahora, no", se les dijo.

Es indiscutible que ese fracaso marcó el clima con que se reunió la Asamblea Plenaria en diciembre del mismo año. Aunque las ideas difícilmente hubiesen cambiado en lo sustancial, el tono de los debates en la Asamblea se hizo más áspero y, a ratos, más difícil de conciliar.

La declaración que resultó de todo ello, titulada *El renacer de Chile*, tiene notables aspectos proféticos -como la advertencia de que la principal crisis nacional era de carácter moral, y la proposición de conseguir que el dolor nos permitiese hallar un camino nuevo de convivencia- y una cierta inclinación, inevitable entonces, a pormenorizar en algunas situaciones de coyuntura que muchos percibíamos como muy

graves, desde la caída de la producción hasta los rebrotes de violencia e inseguridad.

Estos últimos puntos motivaron a algunos obispos, que estaban ausentes o que se habían manifestado contrarios al abordaje de ciertos temas, a expresar públicamente su desacuerdo con la declaración. Estos prelados querían dar una particular interpretación a los consejos del cardenal Sebastiano Baggio que, modificando ligeramente la línea de privilegio de la unidad propuesta por el cardenal Villot años antes, nos había recomendado evitar las declaraciones que pudiesen molestar al gobierno, a menos que hubiese sobre ellas total unanimidad. Como esto era del todo imposible, cabía aún aplicar la regla de una mayoría especialmente alta; de otro modo una minoría, por pequeña que fuese, tendría siempre un poder de veto excesivo sobre las opiniones de los demás. La regla de mayoría se cumplió en este caso, pero ello no obstó para la controversia pública alrededor del texto.

El episodio hubiese sido del todo irrelevante si no fuese porque contribuyó a expandir la idea, propiciada por algunos sectores políticos de derecha, de que el Episcopado chileno se hallaba profundamente dividido. Creo que es hora de decir que, si bien hubo discrepancias entre nosotros, y en ocasiones hubo también polémicas agudas e ingratas, en pocos momentos de la historia de nuestra Iglesia se podría hallar una tan extendida comunión en los valores fundamentales, una conciencia tan generalizada del valor de la palabra de Cristo en la vida chilena, una mirada tan armónica acerca de nuestro deber de promover la paz y el reencuentro como los únicos derroteros posibles para el país.

Conozco bien nuestra historia episcopal, de modo que no digo esto con ningún afán de exageración. Personalmente, siento un enorme cariño y una peculiar admiración por el Episcopado en el que me tocó participar, incluyendo a quienes sentí afines con mis propias ideas y también a aquellos con los cuales discrepé, a veces con dureza.

En la hora de mi proximidad con el Señor, deseo testimoniar cuán cerca los tengo a todos ellos en mi corazón. Pero sobre todo, quiero rescatar el espíritu de unidad con que los obispos de esos años trabajaron, a pesar de las delicadas condiciones imperantes. Esta es la verdad: ese espíritu predominó incluso en los momentos más arduos, y no conozco ni un solo caso del que se pueda decir que se marginó de esa básica comunión. Sin ella, por lo demás, no creo que hubiese sido posible que la Iglesia chilena tuviese el prestigio y la presencia que logró en esa fase de nuestra historia.

En enero de 1983, el Papa Juan Pablo II promulgó la obra más relevante en la que me hubiese tocado participar después del Concilio: el nuevo Código de Derecho Canónico.

Los especialistas han dicho y tienen todavía mucho que decir acerca de esta honda innovación producida por la Iglesia en beneficio de su propia modernización. Por mi parte, sólo quiero anotar que quienes tuvimos alguna participación en los extensos y laberínticos trabajos del nuevo Código entramos a ellos para concretar y perfeccionar el espíritu del Concilio.

El Papa Juan Pablo II había verificado este espíritu cuando fue entronizado en la sede de Pedro, y lo había confirmado un par de meses antes, en noviembre de 1982, cuando convocó al segundo consistorio de cardenales y anunció la inminente promulgación del texto jurídico.

En esa ocasión, el Santo Padre reveló que se habían completado las consultas con todos los obispos del mundo, y que la oficialización del texto, que tomaría unas cuantas semanas, suponía un gigantesco salto de la Iglesia hacia una nueva era. Vinculó este hecho excepcional con su firme voluntad de reestructurar también la Curia, que fue precisamente el motivo por el cual convocó al consistorio.

El nuevo Código inauguró la celebración del Año Santo de 1983, jubileo que cumplía con la tradición al conmemorarse 1.950 años desde la muerte de Cristo; cada medio siglo exacto, la Iglesia recuerda este momento fundamental de la historia humana. En nuestro caso, la maravilla sería doble, porque el Año Santo coincidiría con la fase culminante de la Misión Joven, la tarea que más desvelos y horas nos consumía por entonces.

En síntesis, el Código quería, siguiendo a San Pablo, evitar que la ley multiplicase la falta; se trataba de impedir, en otras palabras, que un conjunto muy numeroso y agobiante de normas sometiera a los católicos al peligro de la infracción permanente. Se procuraba, en la línea conciliar, que la Iglesia estuviese junto a las angustias y las dificultades del hombre de nuestro tiempo, sin erigirse en una especie de tribunal permanente, dedicado sólo a juzgar sus yerros y sus desviaciones.

Por eso, el primer reflejo de esta renovación fue precisamente la disminución de los cánones de 2.414 a 1.752, asociada a una reestructuración de los capítulos mediante la cual se buscaba hacerlos más transparentes e inequívocos.

Dentro de esa formulación, creo que lo central fue el cambio desde una cierta actitud defensiva que el Código anterior traslucía (había sido redactado en una época de duro enfrentamiento con el protestantismo y con el laicismo) hacia un criterio de apertura y benevolencia de la Iglesia. El esfuerzo en favor de un movimiento ecuménico, a mi juicio, es evidente y notorio en el nuevo texto.

También se confirió más autonomía a los obispos diocesanos, aun cuando paralelamente la Santa Sede reforzó su exclusividad en el nombramiento de los ordinarios, algo que, por lo demás, todos deseábamos. La Curia adquirió igualmente más peso, con la facultad de dictar e interpretar las leyes de la Iglesia; en perfecto equilibrio con ese propósito, se ampliaron por primera vez los plenos derechos del catolicismo a todos los que participan en él, incluso con la posibilidad de reivindicarlos si los consideran amenazados o conculcados. Del mismo modo, fue el primer Código que invitó a los laicos a mantener una participación total y plena en la vida de la Iglesia.

Creo que estos solos datos justifican el honor que siento por haber participado en una obra tan notable. Los años -espero- no harán más que confirmar esta auténtica bendición.

Pasé aquel verano del 83 aguardando que de un momento a otro se produjese el nombramiento de mi sucesor y, en consecuencia, tuviese que dejar mi puesto.

Recuerdo bien que algunos de mis vicarios me habían ayudado a encontrar una nueva casa, situada en la comuna de Ñuñoa, en una calle magníficamente llamada Los Pescadores. Convencido de que era preciso ordenar con rapidez las cosas antes de hallarnos con la sorpresa de la sustitución, intenté varias veces adelantar mi traslado y desocupar la casa arzobispal. Los vicarios, sin embargo, se opusieron a estos intentos: sostenían, quizás con razón, que tal cambio físico daría una innecesaria señal de abandono de la autoridad y sembraría un sentimiento de acefalía pastoral que en nada beneficiaría a la Arquidiócesis.

Los vicarios ponían mucho énfasis en este aspecto del problema. Por ningún motivo, decían, debía debilitarse la tarea de la Iglesia en el período de transición, porque la situación era muy delicada y frágiles los equilibrios.

Creo que entre otras, tuvo también estas motivaciones la idea del padre Miguel Ortega de editar un libro con algunas de mis intervenciones, que tituló *El cardenal nos ha dicho*. La presentación de esa obra se

realizó en la Librería Manantial, con una sorprendente cantidad de buenos amigos. Anfitrión principalísimo fue el padre Juan Bagá, a quien yo había encargado sacar a la librería de la postración en que estaba.



El cardenal autografía para Patricio Aylwin un ejemplar del libro "El cardenal nos ha dicho", recopilado por el padre Miguel Ortega, durante su presentación en la Librería Manantial.

Transcurrió el verano sin novedades, y llegó bruscamente el reinicio de las actividades en marzo. Entonces fue cuando recomenzaron también las dificultades.

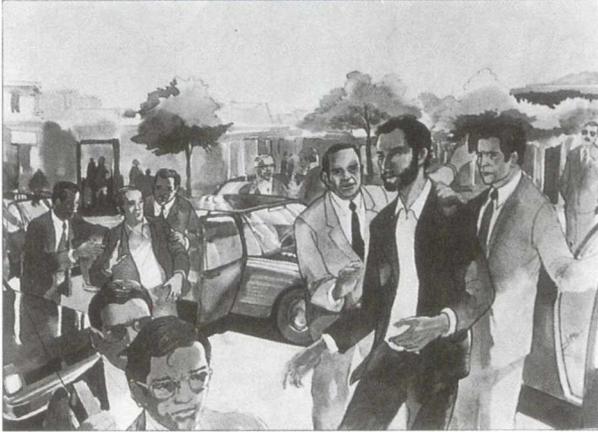
A comienzos de ese mes, argumentando que habían incurrido en actividades políticas ilícitas para los chilenos, e ilegales para los extranjeros, el gobierno decidió cancelar la visa de residencia a los sacerdotes irlandeses Brendan Forde, franciscano, y Desmond McGillicudy, de la orden de San José de Mill-Hill, y al australiano Brian McMahon, de los Padres de San Columbano. Los tres trabajaban en el sector de Pudahuel.

El vicario de la zona oeste, el padre Olivier d'Argouges, inició de inmediato las gestiones para detener esta medida injusta y violenta; a ellas se sumó, por expreso encargo mío, el obispo Jorge Hourton. Ellos fueron testigos, desde el primer momento, de que se había tomado una decisión fuerte y final en este caso. A d'Argouges lo atendieron descortésmente las autoridades con que pudo hablar, y Hourton no consiguió ni una sola explicación de parte del vínculo oficial con la Iglesia.

Ante esta evidencia, resolví que una carta mía, describiendo el incidente y la situación de asedio que se vivía en algunas comunidades cristianas poblacionales, fuese leída en las misas dominicales de toda la Arquidiócesis. Naturalmente, esta lectura suscitó toda clase de reacciones, a favor y en contra -incluso había un tipo de opiniones en contra del

cardenal por no defender con más fuerza a los sacerdotes acusados-, pero en nada modificó la férrea voluntad asumida por el gobierno.

Seis días después de la distribución de este mensaje, la policía siguió al vicario D'Argouges, rodeó su auto con contingentes armados y sacó violentamente a los padres McGillicudy y Forde, que en cosa de horas fueron literalmente expulsados del país. Estábamos, pues, frente a una situación por completo diferente a las anteriores; ahora ya no se nos quería asustar, sino darnos una concreta prueba de fuerza.



Dibujo de Hervi que reconstituye la detención de los padres irlandeses Brendan Forde y Desmond McGillicudy desde el auto del vicario Oliver d'Argouges, el 16 de marzo de 1983.

He pensado mucho en este incidente, y cada vez que lo recuerdo lo encuentro más inaudito. Pienso que el gobierno no hubiese actuado de ese modo si no hubiese tenido objetivos diferentes a los padres mismos. Planteado en el contexto de mi renuncia, presentada pero aún no aceptada, con un silencio vaticano que podía significar la prolongación de mi permanencia en la Arquidiócesis, contra todo lo que el régimen deseaba más fervientemente, el episodio adquiriría un cariz muy distinto.

La propia acusación esgrimida contra los padres sugería una refinada percepción de lo que estaba ocurriendo en la Iglesia. En esos mismos días, el Papa había visitado Nicaragua y, después de varios encuentros muy tensos con los sacerdotes que participaban del gobierno revolucionario instaurado tras la guerra civil (incluido nuestro buen amigo Miguel d'Escoto), los sandinistas habían montado agresivos actos de la llamada "Iglesia popular" para enturbiar los actos del Santo Padre. Era evidente que en el Vaticano se había desarrollado una particular sensibilidad hacia estos desbordes izquierdistas de la Iglesia

latinoamericana, por lo cual cualquier acusación hecha en tal sentido tenía buenas posibilidades de ganar prestigio ante la Curia.

Dada la complejidad que los hechos presentaban, encargué al vicario Juan de Castro que gestionara la posibilidad de leer mi breve mensaje a los católicos en el canal de televisión de la Universidad Católica. De Castro habló con el Pro Gran Canciller, Jorge Medina, quien a su vez transmitió la petición al rector Jorge Swett. Este respondió con una argucia legal: según su nota, la ley impedía al canal "ceder" espacios a nadie. Como era obvio que no estábamos solicitando la "cesión" de ningún derecho ni obligación, comprendí que esta respuesta debía percibirse como una negativa coordinada con el gobierno.

Pedí entonces una entrevista con la autoridad que aparecía suscribiendo esta medida, que era el ministro de Relaciones Exteriores. Me recibí con gran amabilidad y aceptó, con notable gentileza, que yo le expusiera mi punto de vista acerca del daño que se infligía a la política exterior, que él mismo encabezaba, mediante una medida tan injusta.

Después de escucharme hizo notar que no era el primer problema que se suscitaba con sacerdotes extranjeros, y que el gobierno, por respeto a la Iglesia, había tenido una paciencia superior a lo normal.

-Mire, señor cardenal -agregó-: estos señores vienen de lejos, vienen a una tierra que no es de ellos, y en esta tierra hay ciertas costumbres, y usted sabe que cuando a uno lo convidan a una casa y le dicen que tiene llevar chaqueta y corbata, tiene que llevarlas. Tiene que hacerlo, tiene que respetar las costumbres del dueño de casa, porque si no, le infiere un agravio.

Se detuvo un instante. Aproveché para responder.

-No, señor ministro, es que estos señores no están convidados a una casa extraña. Pertenecen a nuestra Iglesia, son el Reino de Jesucristo, son el reino que en el Antiguo Testamento -yo sabía que el ministro era judío- se decía que llevaba de un río a otro río y de un mar a otro mar.

-"Y su señorío" -citó él, de memoria- "será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra". Zacarías, señor cardenal...

-Así es. En este Reino nosotros no reconocemos a nadie como extranjero -continué-. Son nuestros hermanos, la Iglesia les ha pedido venir aquí, han sacrificado su vida por nosotros, y ninguno de nosotros, al menos los que tenemos cierta edad, podemos dejar de reconocer que ellos nos han educado. Todos nuestros profesores fueron extranjeros. Pero además, señor, no estamos pidiendo privilegios. No lo hemos hecho

nunca. Lo que decimos es que si cometemos delito, si se nos pasa la mano, y yo soy el primero en reconocer que a veces a algunos se les puede pasar la mano, se nos aplique la justicia. La justicia que vale para todos, no estas medidas administrativas ante las cuales no hay derecho a defensa.

-¿Usted cree que sería mejor que llevásemos un sacerdote a los tribunales? -dijo-. No, sería muchísimo peor. ¿Y si lo encontrasen culpable, y lo mandasen a la cárcel? No, mucho peor. Usted mismo reconoce que a veces se puede pasar la mano. Eso es lo que hay que evitar, cardenal. Y en este caso, evitar echarle más leña a la hoguera. Que no haya misas, que no haya procesiones.

Este comentario me disgustó. No pude disimularlo.

-Ah, no, señor, perdóneme -dije, de improviso-: nosotros tenemos una sola manera de expresar lo que queremos y lo que amamos. Esa manera es reuniéndonos al pie del sagrario y diciéndole a Cristo el Señor lo que sentimos, lo que sufrimos y lo que pedimos. Y, perdóneme de nuevo, eso ustedes no lo pueden impedir.

-Nadie se lo quiere impedir -dijo-. La Constitución garantiza la libertad religiosa, y usted lo sabe. Lo que se quiere impedir es que la Iglesia, y esa libertad de que dispone, sea utilizada por manos extrañas...

-Por eso -dije-, precisamente por eso pedimos que se nos juzgue en los tribunales, para poder exponer las pruebas que cada uno tiene. Nosotros estamos dispuestos a aceptar la condena que un tribunal nos imponga. Pero, créame, será imposible que aceptemos el arbitrio. Pero ya que usted habla de utilización, le quiero decir que todo esto que se hace de este modo recae en daño a nuestra patria. Yo he estado hace poco en Estados Unidos y en los diarios se describían las causas de las expulsiones: porque uno hizo una olla común para los pobres, porque otro fue a una misa... No puede ser que gente inteligente piense esto, que va en desmedro de nuestra patria.

No creo haber convencido al ministro con estos argumentos. En todo caso, sirvieron para aliviar mi propia frustración ante los hechos consumados. Las expulsiones no fueron revocadas, y desgraciadamente sirvieron de base para otros casos que se produjeron en años posteriores.

Al ver ya concluido este episodio tan ingrato, reuní a todos los vicarios y a los grupos de religiosos y laicos de la zona oeste, y les expuse con detalle la situación. Fue una reunión conmovedora, donde uno podía ver, en cuerpos frágiles y vestimentas humildes, la inmensa valentía de un pueblo galvanizado por su fe y por su vocación de unidad en el dolor. En varios momentos me costó contener la emoción, en parte porque sentí que sus aplausos reflejaban también una entrañable y profunda comunión conmigo.



El cardenal se dirige al clero de Santiago el 18 de marzo de 1983. A la izquierda aparece el obispo auxiliar Manuel Camilo Vial, y a la derecha el sacerdote Brian McMahon y el vicario Juan de Castro.

A fines de abril recibí la comunicación oficial de la Santa Sede de que mi sucesor había sido nombrado. Era el arzobispo de La Serena, Juan Francisco Fresno.

Decidí anunciar mi retiro definitivo el 1º de Mayo, día de San José Obrero, y acelerar los trámites de abandono de la casa y la sede arzobispal. Los vicarios Juan de Castro y Cristián Precht se hicieron cargo de los complejos trámites de la transferencia del cargo; y les debo aún reconocimiento por haber ejecutado todo con tanta delicadeza, prudencia y buen criterio.

El gobierno declaró públicamente su alivio por el hecho de que yo me fuera, y también por el nombre de mi sucesor. Aunque estas calificaciones pudieron tener una cierta intención hostil, lo cierto es que el tiempo mostró que la Iglesia estaba, en lo profundo, más unida de lo que parecía a simple vista. El arzobispo Fresno, que poco después fue creado también cardenal, estimaba sin duda al gobierno, y tal vez creía en él; pero no subordinaba a esas relativas simpatías, como ninguno de nosotros, ni la vocación pastoral ni la independencia de criterio.

Ocurrió, pues, que en menos de un año el cardenal Fresno estaba insistiendo en los mismos puntos por los cuales tanto se me había atacado en el pasado inmediato: la necesidad de reconciliación, la urgencia del

reencuentro nacional, el regreso rápido a las libertades públicas que eran consustanciales a la nación, la expansión del respeto y el derecho para todos.



El cardenal Raúl Silva Henríquez y el obispo Sergio Valech escuchan el primer saludo del arzobispo Juan Francisco Fresno como nuevo cardenal, en junio de 1985.

Además, en el mismo mes de mi retiro se vino a ratificar lo que habíamos previsto, con pesar, poco tiempo antes, en *El renacer de Chile*: el colapso social de un modelo económico que asfixiaba a las clases medias y depauperaba cada vez más a los trabajadores. La presión acumulada por una situación financiera que abruptamente se tornó crítica estalló bajo la forma de protestas populares que se extendieron por más de dos años, irrigando con violencia y muerte los sectores más pobres de las ciudades.

Atenazado por la angustia de contemplar cómo la violencia adquiría prestigio entre diversos sectores, y especialmente entre los jóvenes, en cuanto parecía ser un camino eficaz para dirimir los numerosos desencuentros de la nación, el cardenal Fresno invitó primero a los principales jefes de la oposición a conversar con el gobierno, representado por el ministro del Interior. Las sucesivas reuniones desembocaron en el

estancamiento, quizás porque aún las condiciones no estaban del todo maduras.

Fresno, sin embargo, no cejó. Mientras la violencia continuaba dejando su trágica estela en los sectores populares, poco más de un año después convocó a dirigentes de todos los partidos para intentar generar un consenso básico sobre la organización institucional. Para entonces los grupos políticos habían podido reaparecer a la luz pública y se estaban reestructurando en condiciones de relativa tolerancia.

Muchos de esos dirigentes me visitaron en aquellos días, esperando quizás que yo tomara un papel activo en este proceso. Sin embargo, yo no quería despertar ningún tipo de susceptibilidades entre los hermanos obispos que ahora estaban asumiendo esta tarea, ni menos en el Arzobispado de Santiago. De modo que me mantuve deliberada y firmemente al margen del debate, aunque lo seguía con esperanza y fe.

Creo que la única vez que intervine, de manera tangencial y previo aviso al cardenal Fresno, fue cuando mi amigo Federico Cummings, que conocía circunstancialmente al general Humberto Gordon, a la sazón director de la temida Central Nacional de Informaciones (CNI), solicitó mis oficios para una reunión en la que se buscarían caminos para facilitar un diálogo entre el gobierno y la oposición.

El general Gordon cenó en mi casa con Cummings y con los vicarios Cristián Precht y Miguel Ortega, y tuvo la oportunidad de oír, sin intermediarios, las razones de la Iglesia en su tozuda defensa de los derechos humanos. Esta reunión hizo posible que después Precht visitara el cuartel central de la CNI y que las conversaciones con Cummings progresaran en la definición de agendas y mecanismos para favorecer el entendimiento nacional.

No hubo resultados prácticos, porque en definitiva el régimen militar adoptó la decisión de continuar con su proyecto y no negociar nada.

Tampoco el diálogo propiciado por el cardenal Fresno, que desembocó en un texto llamado Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia, recibió acogida en el gobierno. Sin embargo, ese acuerdo vino a demostrar que la política chilena podía dejar atrás la fase de confrontación y pasar a una de conciliación. Creo no exagerar si digo que esta gestión del cardenal Fresno fue un elemento esencial en la salida democrática que unos años más tarde hallaría el país.

El otro factor esencial del proceso de reencuentro nacional fue, aunque se lo haya mencionado poco y a menudo en forma parcial y limitada, la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, en abril de 1987.



El Papa Juan Pablo II, tras saludar a los cardenales Juan Francisco Fresno y Raúl Silva Henríquez, a su llegada a Santiago, el 1º de abril de 1987.

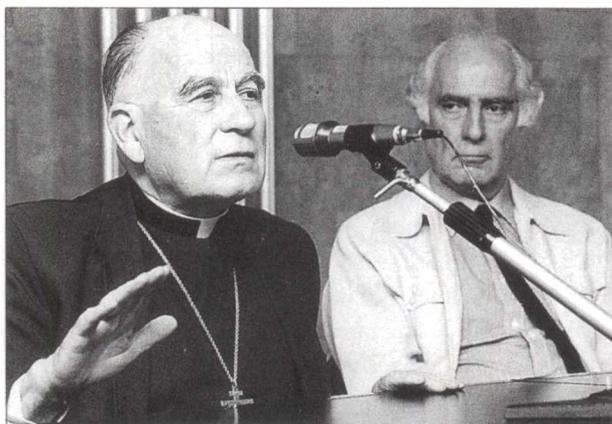
Cumpliendo lo que se había convertido en uno de sus objetivos más acariciados después del exitoso término de la mediación -refrendarla con una visita pastoral a Chile y Argentina-, el Santo Padre realizó una peregrinación al Cono Sur cuya magnitud e impacto superó todo lo imaginable.

A pesar de las muchas voces que desaconsejaban el viaje en nombre de las circunstancias políticas que vivía Chile, la diplomacia vaticana trabajó ardua y discretamente para impedir que la visita fuese instrumentalizada por los intereses políticos locales. En esto -y puedo decirlo porque conocí el trabajo muy de cerca- tuvo un apoyo irrestricto y sólido de parte de la Iglesia chilena.

Sin embargo, la principal dosis de universalidad vino del propio Papa, que no eludió ninguno de los arriesgados compromisos que la visita suponía, desde el contacto con las autoridades militares hasta la exposición a grandes muchedumbres cuya reacción era incierta; desde

la presencia en recintos sumamente oficiales hasta el recorrido por zonas modestísimas de nuestra geografía social. Creo que fuimos muchos los sacerdotes que apenas pudimos contener las lágrimas cuando santificó el Estadio Nacional, recordando que había sido un campo de dolor y sufrimiento, y muchos los que nos estremecimos cuando lo vimos aceptar con unción el té y el pan de los pobladores en la polvorienta explanada de La Granja.

La visita del Papa cambió sutilmente las circunstancias nacionales. En lo más visible, indudablemente contribuyó al término del exilio, la atenuación de las medidas de excepción y la disminución de los ataques a la Iglesia. En lo más hondo, sin embargo, creo que su paso por Chile, con esa arrebatadora convocatoria a multitudes heterogéneas e increíbles, mostró que era posible la nación de hermanos que la Iglesia venía predicando.



El cardenal habla en un encuentro de chilenos exiliados en Roma, el 20 de mayo de 1983; a su lado, el pintor Nemesio Antúnez.

Los llamados a los jóvenes, a los pobres, a los empresarios, a los pobladores, a los trabajadores de la tierra y de la industria, a los intelectuales y a los políticos, al gobierno y a la oposición, tuvieron esa forma gentil y clara de las estelas en el mar: señalaban el camino hacia un horizonte más limpio, no porque lo impusieran, sino porque lo mostraban posible. El Papa en Chile fue una bendición al modo en que lo son las auténticas bendiciones: tenuous, celestes, cargadas de verdad en una infinita transparencia, apenas notorias, aéreas a los pobres ojos de los hombres.

He visto caer una y otra vez las hojas amarillas del otoño en mi pequeño jardín de Los Pescadores, a lo largo de los diez años que han pasado desde que dejé el Arzobispado de Santiago. También las he visto reverdecer con prolija y paciente insistencia, rindiendo tributo a esa inacabable sabiduría del Creador gracias a la cual la vida triunfa siempre sobre la adversidad.

Vi reverdecer a mi patria en estos años. Contemplé su renacimiento en la libertad, su decidido avance hacia la reconciliación, el generoso perdón extendido por sus gentes arriba de tanto dolor, la sencillez con que los humildes se han dado a la tarea de construir el futuro de la patria.

No podría haber deseado más de la vida; ninguna gracia del Señor me habría sido más querida y más íntima.

He tenido algún tiempo, más allá de mis achaques, para dedicarlo a los niños, la especie más querida del corazón salesiano, incluso de uno viejo y algo cansado como debe ser el mío. He sentido cómo esa plenitud que me enseñó a conocer 60 años atrás el padre Valentín Panzarrasa, de vivir y vibrar con esas creaturas a las que Cristo pedía mantener a su lado, me rejuvenece en el espíritu y me devuelve el calor de los ya antiguos sueños.

Primero en el Colegio Saint Gaspar, donde el querido padre Barry Fisher tuvo la bondad de aceptarme como director espiritual; luego en el Seminario Menor, donde el padre Miguel Ortega me permitió hacer unas clases que eran mi delicia semanal; más tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, donde el vicario Cristián Precht me confirió el honorífico rango de vicario cooperador, y en la parroquia de Ñuñoa, donde el padre José Costa me recibió también en la misma condición, he vivido rodeado de alegrías incomparables: la risa de los niños, su honradez sin matices, su vocación de futuro, esa honda encarnación, en la pequeñez, de la grandeza del Señor...

Y he podido dedicarme a lo que para mí son tal vez los más niños de entre todos los niños: los niños pobres.

Unos años antes de mi retiro, durante la década del 70, había sentido que la conducción del Arzobispado, con toda su complejidad, me había alejado de hecho del mundo más personal, más entrañable y sencillo de mi ya veterana vocación salesiana. El Arzobispado tenía muchas obras de bien y era inmensamente fuerte en su defensa de los desamparados, pero yo sentía este pequeño vacío, esta inquietud en torno

a la cual Don Bosco construyó un camino de santidad: ¿qué hacer en favor de tantos niños abandonados y necesitados?

Una cierta casualidad me llevó en 1970 a Concepción. En esos años había allí un padre, André Schlosser, que encabezaba una de las iniciativas más originales que me hubiese tocado ver en este campo. Se trataba de niños desamparados a los cuales se reunía en pequeños grupos -ocho o nueve, como máximo- para comenzar una vida de familia, bajo la tutoría de una verdadera madre adoptiva, con un director residente que de hecho reemplazaba a la figura del padre. Cada grupo de niños vivía en una casa propia, dentro de un conjunto al que se daba el nombre de "aldea", y cuyos costos de mantención disminuían precisamente por el principio de agrupamiento. Los niños eran educados en una vida cristiana hasta ser adultos, y la experiencia -especialmente europea- había demostrado que aun en esa etapa los antiguos muchachos seguían retornando a su hogar, a su familia y a sus hermanos... ¡y además ayudando a los nuevos!



El cardenal en Punta de Tralca, con niños de la Aldea SOS.

Eran las Aldeas de Niños SOS. Nacieron en la Europa de posguerra, por iniciativa de un hombre ingenioso, pero sobre todo bondadoso: el doctor Hermann Gmeiner, que se sintió exigido por la cruel realidad de los miles de huérfanos producidos en la conflagración mundial. Tuve la suerte de conocerlo unos años después, durante una breve estadía en Austria, y la lógica de su creación me entusiasmó hasta

el punto de que -sin tener idea de dónde iba a sacarlos- le ofrecí los recursos para construir una nueva aldea en Chile, junto a la casa de ejercicios de Punta de Tralca. El doctor Gmeiner, quizás buen conocedor de estos entusiasmos, me alentó a cumplir mi promesa.

Y, no sé cómo, lo logramos. La Aldea comenzó a construirse en 1977 y concluyó en 1979. El doctor Gmeiner vino a inaugurarla. No estuve presente -debía viajar a Roma-, pero supe de la emoción del doctor al contemplar un eco de su obra a tantos miles de kilómetros. Creo entenderlo: la Aldea de Punta de Tralca venía a demostrarle que su creación de emergencia, para salir al paso de los desastres de la guerra, encontraba en nuestro Tercer Mundo pobre y atrasado la señal de algo permanente y superior: la presencia de una Bondad altísima.

No hace mucho, en 1990, inauguramos la residencia juvenil de Santiago, que es el hogar de los niños de la Aldea que, ya mayores, están cursando estudios universitarios o profesionales. En 1991 iniciamos la instalación de otra Aldea en La Pintana, una de las comunas más pobres de Santiago, que lleva el nombre del Cardenal Caro.

En estos años, las Aldeas SOS han sido mi remanso, el lugar de mi dicha más profunda. Cada fin de semana he vivido con la ilusión de ir a confesar a esos pequeños pillastres que me llaman tío y que me llenan el corazón de calor. Los veo correr hacia mí cada viernes, como un tropel -son cien- y cada domingo siento una tibia tristeza cuando se despiden con esas manos inocentes y pobres y cariñosas. Sesenta años se me quitan cada viernes: ochenta y tantos se me vienen encima cada domingo.

Sé que me quieren, con ese afecto público e incondicional de los niños. Yo los quiero de otra manera, quizás sin inocencia, quizás más íntimamente; ellos me recuerdan a cada momento al Señor, a la razón por la cual he vivido y he querido servir.

Mis hermanos en el sacerdocio no me han permitido otra cosa que la dicha de hacer el bien. En 1983, después de mi retiro, la Conferencia Episcopal me nombró a cargo de la comisión de ayuda para las nueve diócesis más pobres del país. En 1985, cuando un nuevo terremoto devastó la zona central, me confirieron la tarea de buscar ayuda en Europa y Estados Unidos para reconstruir nuestros deteriorados templos. Quizás en ambas cosas refrendaban mi fama de pedigüeño internacional: y no está tan mal, porque en mi vida aprendí que, así como "no se humilla quien pide por la patria" (como le gustaba decir a mi amigo Eduardo Frei), va perdiendo el rubor el que pide por Cristo.



Venerabili Fratri Nostro
 RADULFO S.R.E. Card. SILVA HENRIQUEZ
 Archiepiscopo emerito Sancti Iacobi in Chile

Caritas, qua te complectimur, Nos oblivisci non sinit te octogesimum propediem celebraturum esse annum, Nosque impellit ut tam fausti diei laetitiam ex animo participemus. Optima ergo, Venerabilis Frater Noster, occipe omnia quae proferimus, praeteritum temporis spatium respicientes, quo te novimus Ecclesiae Dei inseruisse. At est cur ampliore ratione gaudium sumas: etenim, in eo est ut celebranda recurrat etiam quinquagesima anniversaria memoria illius diei quo tu, florens iuventa et desideris sanctis, sacri presbyteratus gradu auctus fuisti, pauloque post primo altare Domini scandisti.

Binae laetabiles recordationes profecto tibi opportunitatem praebunt ut Deo, a quo bona cuncta procedunt, gratias deferas singulares; nam inito sacerdotio, non solum ad pie sanctaeque vivendum et operandum vocatus es, sed praesertim ad populum Dei regendum adque superna litora docendum. Et cum idoneus visus fueris ut ad catholici sacerdotii culmen tollereris, Episcopus constitutus es ante duodecimum annos. Tandem, ante quinque et viginti annos, a Decessore Nostro Ioanne XXIII bo.me. purpuratorum Patrum dignitas tibi est collata. Ne vera Servator Noster, gloria sacerdotum, fuit fortitudo tua (cfr. Ps. 42, 1-2).

Saludo del Papa Juan Pablo II al cardenal con motivo de cumplir 80 años, despachado del Vaticano el 31 de agosto de 1987.

En 1987, cuando cumplí 80 años y pasé a ser, ya definitivamente, cardenal emérito de la Iglesia, el Papa Juan Pablo II tuvo la bondad infinita de enviarme una bendición apostólica que no puedo dejar de citar:

"Hoy puedes decir, con toda verdad, que Nuestro Señor y Salvador, gloria de los sacerdotes, ha sido tu fortaleza (Salmo 42, 1-2). Y nosotros, que estamos unidos a ti por los vínculos del afecto y de la amistad sincera, deseamos participar con nuestra oración de todas estas solemnidades, rogando a Dios que te conserve con salud, te llene de consuelo y que en tu ancianidad te haga experimentar con más fuerza todavía el gozo del Señor.

"Deseamos de corazón que nuestra peregrinación terrena sea para ti colmada de buenas obras y te haga aspirar a la Jerusalén Celestial. Y pedimos a Dios clementísimo que una vez que se apague la esperanza de este tiempo, te conceda el premio que conserva a sus fieles servidores. Es decir, que te conceda los bienes inefables que ojo jamás vio ni oído oyó, y que ningún pensamiento puede llegar a comprender.

"Que la Santísima Virgen María, a quien desde tus más tiernos años aprendiste a invocar bajo el título de María Auxiliadora y a quien sabemos amas de corazón, te sonría desde el Cielo y bendiga todos tus afanes pastorales".

Fueron unos días inolvidables los de aquel cumpleaños.

Un grupo de amigos encabezado por Reinaldo Sapag, el compañero más fiel de mi vejez, quiso regalarme una celebración en el Círculo Español de Santiago. Yo pensaba que irían unas 50, tal vez unas

cien de esas personas a las que tanto quería y debía, y que tendríamos una velada de camaradería, algo íntima y algo melancólica.

Llegaron 1.200.

Yo creía y estaba seguro de no ser santo, como dije en esa ocasión, pero viendo esa muchedumbre, donde se mezclaban hombres de todas las ideologías, de todos los partidos políticos, de varias religiones, de todas las clases sociales y de los más diversos ámbitos de la cultura, me sentí obligado a dudarlo. Con un estremecimiento:

"Yo creo que es posible construir la patria y además es posible no renunciar a nuestras diversas maneras de pensar, porque cada uno de nosotros debe aportar algo a esta construcción tan bella que se llama Chile. Creo que esto es realidad, y si no, no estaríamos todos juntos aquí para celebrar a un hombre que sólo ha tenido la habilidad de decir que Chile vale más que nosotros".

nuestras diversas maneras de pensar, porque cada uno de nosotros debe aportar algo a esta construcción tan bella que se llama Chile. Creo que esto es realidad, y si no, no estaríamos todos juntos aquí para celebrar a un hombre que sólo ha tenido la habilidad de decir que Chile vale más que nosotros".



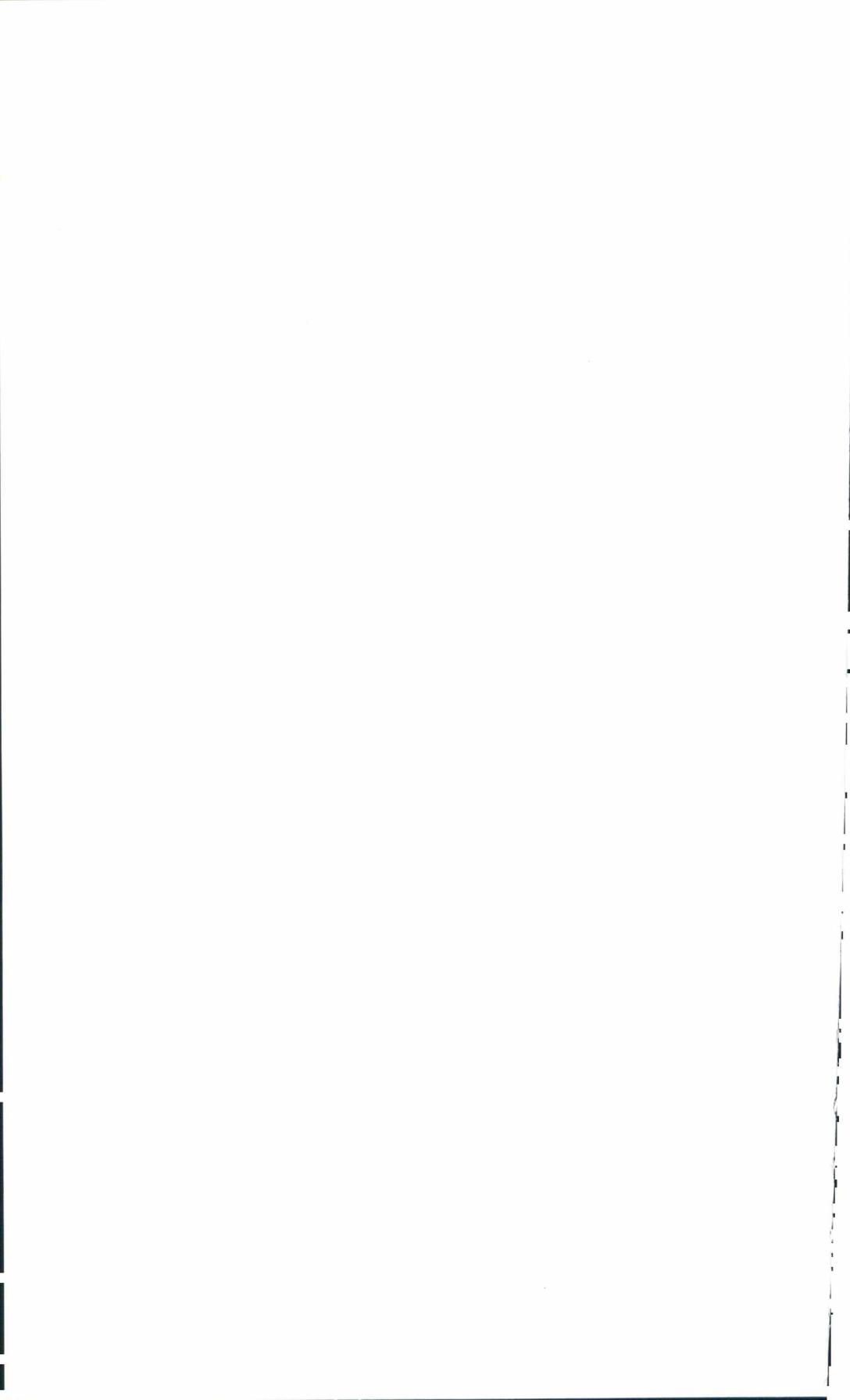
El cardenal durante la cena que le ofrecieron sus amigos -más de mil asistentes- al cumplir 80 años. A su lado aparecen su hermana Clementina y el padre jesuita Renato Hevia.

cuando el general Pinochet se sometió a un plebiscito que, libre e informado, puso fin a su gestión, algunos de esos amigos fueron a pedirme que aceptara ser candidato a la Presidencia. Parecía una broma, pero para ellos no lo era: estaban sinceramente convencidos de que un hombre de la Iglesia Católica, con la inmensa fuerza moral que ésta había

llegado a representar en el país, era el apropiado para reconstruir la vida institucional.

Mi obvia negativa ante semejante idea carece de valor. Lo que importa es que la Iglesia había llegado a ser percibida como fuente de unidad y camino de reconciliación. Los políticos pueden ser a veces irrealistas, pero no dejan de ser perceptivos. Y lo que ellos habían visto era que, no yo, sino la Iglesia, gozaban de un prestigio y un respeto únicos e indispensables.

Para mí, que no he sido candidato más que a comparecer ante el Señor, esto ha sido suficiente.



Epílogo

En la noche del 9 al 10 de abril de 1886, durante una breve estancia en Barcelona, Don Bosco tuvo un sueño que lo dejó tan hondamente impresionado, que su secretario, don Carlos Viglietti, se sintió impelido a registrarlo minuciosamente en unos apuntes que luego servirían para la *Memorie Biografiche* del Santo.

Don Bosco se halla, en el sueño, sobre una colina llamada Brico del Pino; a su alrededor, sobre colinas cercanas, ve a otros padres salesianos a quienes llama inútilmente: no le responden ni parecen oírlo. Desciende y camina hacia otra colina, desde cuya cima divisa un bosque, atravesado por senderos y caminos. En ese momento oye el ensordecedor ruido de una turba de niños; mira por todos lados, pero no logra descubrir de dónde procede la algarada; de pronto aparecen desde diversas direcciones decenas de niños que corren hacia él y lo emplazan: "¡Te hemos esperado, te hemos esperado tanto, pero finalmente estás aquí: estás con nosotros y no podrás escapar!".

De entre el grupo emerge una pastorcita, que le dice (sigo aquí los apuntes de don Viglietti):

-¿Ves cuánto te rodea?

-Sí que lo veo.

-Bien, ¿recuerdas el sueño que tuviste a los 10 años?

-Oh, es difícil que lo recuerde -dice don Bosco-... Tengo tan agotada la cabeza. No lo recuerdo bien, ahora.

La pequeña niña llama entonces a los demás para que se acerquen a don Bosco, y luego le pide a éste que atienda al horizonte:

-Mira hacia este lado, aguza la vista, y todos ustedes también, y lean lo que está escrito... Y bien, ¿qué ves?

-Veo... montañas, mar, colinas, nuevamente montañas y mares.

-Yo leo Valparaíso-, dice un niño.

-Yo, Santiago-, agrega otro.

-Yo leo los dos nombres, Santiago y Valparaíso-, acota un tercero.

-Bueno -dice la pastorcita-: parte ahora desde ese punto y tendrás una idea de cuánto los salesianos deberán hacer en el futuro. Vuélvete hacia este lado, y tira una línea a ojo y mira.

-Veo montañas, colinas y mares...

Los niños aguzan la vista y se adelantan:

-Leemos Pekín.

Entonces don Bosco divisa una ciudad atravesada por un anchísimo río. Y oye de nuevo la voz de la niña:

-Bien, tira una sola línea de un extremo a otro, de Pekín a Santiago, pasando por el centro de África, y tendrás una idea exacta de cuánto habrán de hacer los salesianos.



El sueño de San Juan Bosco del 9 al 10 de abril de 1886.

Esta visión extraordinaria muestra, a una distancia de más de un siglo, cuán cerca ha estado Chile del corazón de Don Bosco. Cierto es que en esos días el santo, de paso en Barcelona, se había reunido con la dama chilena Dorotea Chopitea de Serra -más tarde declarada "venerable" por Juan Pablo II-, quien le había pedido con insistencia que enviase salesianos a la ciudad de Talca. También es cierto que tres años antes, el padre Viglietti había registrado otro sueño, muy extenso, que tenía por escenario la zona de Magallanes, y que poco tiempo más tarde, en carta al obispo Cagliero, le recordaba que "Chile mira a los salesianos y los salesianos miran amigablemente a esa nación".

El padre Simón Kusmanich, nuestro riguroso y paciente historiador, ha hecho notar que la línea trazada por la pastorcita del sueño del santo se ha ido ocupando efectivamente con presencia salesiana.

Kusmanich ha hallado que en los lados de la recta imaginaria hay numerosas casas salesianas desde Chile hasta Brasil, pasando por la dirección Mendoza-Misiones, en Argentina; que el trazado entra a Africa por Gabón y sigue por Congo, Zaire y Sudán, para salir por Etiopía, todos países donde los salesianos tienen hoy una notable presencia gracias al "Proyecto Africa" iniciado en las últimas décadas. La línea continúa sobre India, donde hay más de 50 obras de la Congregación, y se interna luego en Nepal y China, donde la ausencia representa la tarea inconclusa.

De modo que se puede decir ahora, ya sin lugar a error, que el sueño de Don Bosco era propiamente una visión profética, un anticipo iluminado de la inmensa labor que esperaba a la Congregación.

En el final de su relato, el santo se angustiaba por la inmensidad de las distancias y la escasez de salesianos. La pequeña pastora lo tranquilizaba diciéndole que la tarea sería cumplida por "tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de éstos".

Por mi parte -la parte de quien ha querido ser uno de esos "hijos de los hijos"-, no dejo de maravillarme con ciertos alcances que imprecisamente presiento en ese sueño, y pido perdón por anticipado si esta intuición me hace incurrir en cualquier forma de vanidad. Sin embargo, algo misteriosamente cercano a mí hay en la visión de las dos ciudades en las que pude desempeñarme como pastor y que, junto con Magallanes (también escenario de un sueño) y Chiloé, han sido hasta hoy las únicas diócesis ocupadas por obispos salesianos.

Desearía creer, como lo soñaba mi amado maestro, que durante mi vida hice algo por extender la fe de su Iglesia y llevar el mensaje del Evangelio hasta aquellos que lo desconocían o eran sordos a él, contribuyendo a trazar, no una sola línea, sino muchas, en todas las direcciones posibles.

Serví con esa intención a las dos diócesis que el Señor me reservó en mi amada patria. Nada llena tanto mi espíritu, en esta hora de la vejez, como los recuerdos de tantas gentes que en una y otra me educaron en la grandeza del Señor.

A veces he añorado las tardes estivales de Turín, en la casa de Don Bosco; a veces, los agitados patios del Vaticano, trémulos de vida en el Concilio y en los cónclaves. Pero en mis nostalgias cotidianas prevalecen siempre los cerros del puerto, con su orgullosa pobreza ofrendada ante el mar; o las ásperas callejuelas de La Cisterna, entregadas a la buena de

Dios por encima de los fragores del progreso; o las alamedas santiaguinas, atiborradas con este pueblo sediento de paz y de justicia, que conquista cada día su reconciliación.

Todo lo que tengo está en esos recuerdos. Compareceré ante el Señor, como pedía San Pablo, con las manos vacías; pero mi corazón irá repleto con los tesoros que me ofreció mi gente, todos los que vieron en este viejo sacerdote la llama de Dios vivo.

Tengo un policlínico en Renca, una cooperativa en Punta Arenas y otra en Santiago, un centro de madres en una calle de tierra, un campamento en La Pintana, cinco o seis libros que me honran desmedidamente con sus títulos *-Aventura de una fe, Luchador por la justicia, Coherencia de un mensaje-*, tengo una barcaza en Chiloé y un lanchón que surca las bahías de San Antonio y Valparaíso, tengo un hogar de menores y un jardín infantil, un asentamiento campesino, una confitería en la calle Meiggs, un sindicato, una panadería, una avenida en la comuna de Lo Espejo, una comunidad cristiana y un equipo de fútbol pequeño y temible.



El cardenal, acompañado del padre salesiano Gustavo Ferraris, recorre la ex Avenida Central de la comuna de Lo Espejo, rebautizada Avenida Raúl Silva Henríquez, el 13 de agosto de 1992.

No son totalmente míos, por supuesto: apenas llevan mi nombre. Constituyen un testimonio que no puedo considerar personal, porque es demasiado generoso y demasiado solemne. Para mí, son un signo de que la Iglesia chilena ha podido hundir sus raíces en lo más hondo de su pueblo, de su tierra y de sus gentes. No es por azar que este bendito territorio está atravesado por lugares y locales con nombres de sacerdotes, entre los cuales el buen Dios quiso incluir también el mío.

No ignoro que en numerosas ocasiones pude ser una figura polémica. He pedido perdón muchas veces por esto, y lo haré todavía cuanto sea necesario.

Viví tiempos difíciles, y no sería justo decir que siempre supe que sería así. Me tocó contemplar, con angustiada impotencia, cómo mi patria se sumía en la conflagración fratricida y cómo se dividía de par en par, por años largos y dolorosos. Fui testigo y actor de unos sucesos que quizás hubiese preferido no ver, y la incapacidad para impedir que ellos dañaran a la gente más débil, a los humildes y a los desamparados, laceró muchas de mis noches.

No he sido un testigo pasivo. Lo sé.

Y no me puedo arrepentir de esto, porque en cada momento crítico sentí a mi lado la palabra de Cristo, el ejemplo de su propio holocausto, la exigencia de sus sufrimientos. He tenido que alzar la voz preguntándome a menudo cómo hacerlo sin herir a nadie, cómo invocar y clamar y protestar sin acusar injustamente a quienes creían estar haciendo lo mejor para todos.

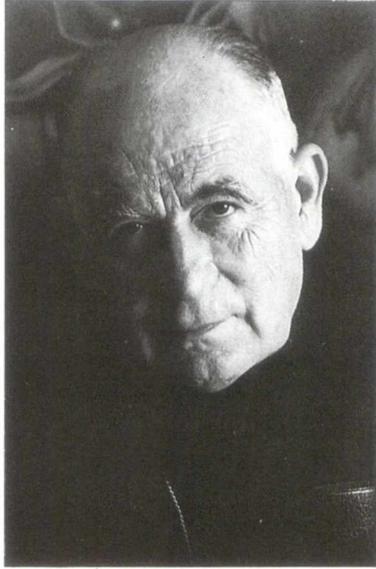
Ha habido en mí un gran espacio para el error -el error de una hechura humana mil veces bendecida por los bienes del Señor-, pero uno muy pequeño para la duda. Creo haber vivido bajo un imperio que yo mismo escogí en el ya remoto año de 1938, cuando fui consagrado como sacerdote: "La caridad de Cristo nos urge".

Y ha tenido que ser esta urgencia, que todavía consume mis fuerzas, la que me haya puesto a uno u otro lado de las preferencias: la caridad, el cariño, el amor de Cristo nos llaman imperativamente a actuar para el prójimo, a ser el consuelo de los caídos, el bastón de los perdidos, la mano amiga de los desamparados. Para mí en estas opciones no ha cabido la sombra de una vacilación.

Quizás no hubiese podido afrontar circunstancias menos difíciles que las que me fueron deparadas en esta tierra inigualable. En las muchas veces que supliqué por un descanso, una tregua, un alto en la refriega de todos los días, intuí a menudo que ello no era posible porque mis hermanos no necesitaban ausencia, sino luz, verdad, amor, solidaridad. Yo vengo de la tradición de una Iglesia que en América se ha entregado a lo largo de cinco siglos a la defensa de los más débiles: en el camino áspero me han acompañado los fantasmas de los misioneros protegiendo a los indígenas, de las congregaciones llegando a educar en los confines más inhóspitos, de sacerdotes y obispos dando la vida en el clamor de la

paz y la justicia, de centenares de párrocos viviendo privaciones para confirmar la plenitud del Evangelio.

Pediré perdón eternamente por los inconvenientes que pude causar a muchos hombres buenos en una patria numerosa en hombres buenos.



El cardenal, según un retrato del fotógrafo Pedro Sánchez.

Me acompañará, en ese acto de contrición, un consuelo no menos eterno: en el balance provisorio de las alegrías, yo he sentido que mi pueblo me comprendió. Lo he visto en esas parroquias marginales llenas de muchachos y de obreros, en las aulas universitarias y en las academias, en los bulliciosos mercados dominicales y en la intimidad de los hogares pobres, en la plaza de mi barrio y en el gran cenáculo público. Yo podría vivir otra vida con los puros honores que esta tierra única me ha prodigado; la podría construir de memoria, con el solo recuerdo de tantos cariños derramados sobre estos viejos huesos. Yo he sido el sembrador privilegiado: el hombre que tras la larga faena, doblado quizás por la fatiga de los años, ha recibido de Dios la bendición de ver cómo sus frutos germinan, cómo sus semillas son cosechadas, cómo echan raíces y se hacen fuertes los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias, cómo crecen y mejoran los hombres de nuestro tiempo y reciben, al fin, la buena nueva de la salvación.

Lo han oído mis hermanos y mis amigos, igual que yo (pero a mí me acosaban las lágrimas, la alegría, la gratitud), en esas multitudes que a la mención de mi nombre irrumpían en gritos: "¡Raúl, amigo, el pueblo está contigo!".

Contigo: con tu espíritu. Ninguna penuria, ninguna incompreensión, ningún reproche puede inclinar la balanza en contra de tanto cariño. Sé muy bien que no existe una de mis pobres virtudes que me haga merecedor de esta generosidad ebullente y desbordada; la recibo sólo como testimonio de amor hacia una Iglesia que ha querido ser justa, limpia y translúcida.

¿Comprenderán por qué, en el diccionario que lentamente se va apagando dentro de mí, sólo dos palabras me acompañarán hasta el último de mis momentos?

Sé bien cuáles serán: Gracias, Señor.



Agradecimientos

En este último volumen quiero confirmar mi permanente gratitud a todos aquellos que, sin interés ni retribución alguna, laboraron con un cariño que me emociona para que estas *Memorias* fuesen posibles. Deseo reiterar en esta oportunidad mi especial agradecimiento a mi amigo Reinaldo Sapag y al periodista Ascanio Cavallo, la tenacidad del primero y el profesionalismo del segundo han sido los verdaderos constructores de estas memorias.

Debo agradecer también, a los numerosos amigos que me han acompañado en estos ya largos años, mis excusas por si algún pasaje de estos textos les causa incomodidad o diferencias relevantes. Nada me sería más doloroso que producir involuntariamente dolor o daño con estos recuerdos. Todo este tiempo he estado pidiendo al Señor que ellos sirvan para el bien de mi pueblo y para favorecer la paz y la unidad entre mis hermanos, que es el único anhelo de esta vejez.

Como lo he dicho antes, mi corazón está comprometido con todos los que, en silencio, con prudencia y a menudo sin que yo mismo lo supiera, permitieron la redacción de este trabajo, su publicación en el diario *La Epoca* y su edición como libro.

En especial manifiesto mi más honda gratitud por sus bondadosos aportes en este tercer tomo a: mis hermanas, las señoras Clementina Silva Henríquez de Hudson y Anita Silva Henríquez de Valenzuela; los arzobispos Bernardino Piñera Carvallo, José Manuel Santos Ascarza y Francisco de Borja Valenzuela Ríos; los obispos Fernando Ariztía Ruiz, Carlos Camus Larenas, Cristián Caro Cordero, Carlos González Cruchaga, Tomás González Morales, Jorge Hourton Poisson, Sergio Valech Aldunate y Manuel Camilo Vial Risopatrón; el rector mayor de los Salesianos, Egidio Viganó; don Gabriel Larraín Valdivieso; don Ernesto Corona Bozzo, director de la Editorial Salesiana; el historiador Nicolás

Cruz Barros; el profesor Eduardo König Carrillo; los abogados Carlos Briones Olivos, Gastón Cruzat Paul, Sergio Fernández Fernández, Alberto Jerez Horta, Fernando Molina Vallejo, Hernán Montealegre Klenner, José Antonio Viera-Gallo Quesney y Eduardo Vio Grossi; el arquitecto Fernando Castillo Velasco; los generales de Ejército Jorge Court Moock y Ernesto Videla Cifuentes; el ingeniero comercial Jorge Awad Mehech; el economista Nicolás Flaño Calderón; don Sergio Muñoz Leiva; don José Aguilera Belmar; los periodistas Emilio Filippi Muratto y Abraham Santibáñez Martínez; los académicos Oscar González Clarke, Duncan Livingston y Ricardo Jordán Esquella (Q.E.P.D.); el empresario Federico Cumming Godoy y su esposa, Patricia Melaj de Cumming; el padre Bernardo Herrera Salas, secretario del Arzobispado de Santiago; los provinciales de los Salesianos en Chile, padres Ricardo Ezzati Andreello y Alfredo Videla Torres; los sacerdotes Alfonso Baeza Donoso, Juan Bagá Ballús, Juan de Castro Reyes, Luis Antonio Díaz Herrera, Miguel Ortega Riquelme, Ignacio Ortúzar Rojas, Cristián Precht Bañados, Jorge Sapunar Dubravcic y Luis Eugenio Silva Cuevas; los sacerdotes salesianos Carlos Alonso Duro y Fernando Cifuentes Stockebrand; el sacerdote de la Orden de la Madre de Dios Baldo Santi Lucherini; los sacerdotes jesuitas Patricio Cariola Barroilhet, Renato Poblete Barth y Fernando Salas Cruchaga; don Rodolfo Valdés Phillips y don Augusto Pinochet Acosta, presidente y director administrativo de la Aldea de Niños SOS Punta de Tralca; la señorita Nora Alvarado Rojas, secretaria del diario *La Epoca*; la señorita Carmen Segura Cavia, secretaria del Arzobispado de Santiago, y la señora Carmen Muñoz Rojas y la señorita Camila Lira Barrios, mis secretarías privadas.

En forma muy especial debo destacar el significativo aporte de mi sobrino político don Francisco Sepúlveda Morales, quién con paciencia y dedicación desarrolló las funciones de revisor y corrector de los originales.

Asimismo, debo expresar un reconocimiento muy particular a quienes han tenido la bondad de presentar los dos primeros tomos de esta obra, haciéndose, en cierto modo, parte viva de ella: el Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle; el arzobispo de Santiago, Carlos Oviedo Cavada; el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan de Dios Vial Correa; el ex Presidente de la República Patricio Aylwin Azócar, y mi gran amigo salesiano, el padre Gustavo Ferraris del Conte.

Naturalmente, las opiniones y juicios aquí vertidos no comprometen a ninguno de ellos.

Índice onomástico general

El número romano señala el tomo; el número arábigo, la página; y el número arábigo en cursiva, la página donde aparece fotografía.

- A**cuña, Américo: (II) 245
 Acuña Peña SDB, Manuel: (I) 157
 Adjubei, Alexei: (I) 276. (II) 214
 Adriano VI (Adrian Florensz Boeyens): (III) 143
 Aga Khan: (III) 74
 Agagianian, + Gregorio Pietro Cardenal: (I) 159, 305, 306. (II) 33, 62, 63
 Agca, Ali: (III) 221, 222, 222, 224
 Aguiar, RP Lorenzo: (I) 189
 Aguilar, Abraham: (I) 207
 Aguilera Belmar, José: (II) 201. (III) 109, 113
 Aguilera Narbona, + Pedro: (I) 140, 239, 278
 Aguirre Cerda, Pedro: (I) 71, 73, 74, 75, 76, 84, 94
 Ahumada Prieto, RP Vicente: (I) 96, 216. (III) 8, 216
 Albareda, + Anselmo Cardenal: (I) 234
 Aldunate Errázuriz, Fernando: (I) 122, 230, 231, 245. (II) 10, 11
 Alessandri Morandé ISPSch, Hernán: (II) 207
 Alessandri Palma, Arturo: (I) 42
 Alessandri Rodríguez, Fernando: (I) 94
 Alessandri Rodríguez, Jorge: (I) 173, 176, 180, 181, 182, 183, 209, 230, 240, 245, 251, 253, 257. (II) 13, 64, 92, 156, 157, 158, 174, 175, 183, 185, 187, 188, 190, 192, 194, 197, 290. (III) 201
 Alfonso Barrios, Pedro Enrique: (I) 111
 Alfrink, + Bernard Cardenal: (I) 268, 268, 297, 307. (II) 35, 133, 135. (III) 136
 Aliberti Giustetti SDB, Bartolomé: (I) 110, 157
 Alibrandi, + Gaetano: (I) 239, 240, 286, 286
 Allamand Madaune, Juan: (I) 22
 Allamand Madaune, Maité: (I) 22
 Allard Neumann, Sergio: (II) 94
 Allende, Ezequías: (I) 28
 Allende Gossens, Laura: (III) 194
 Allende Gossens, Salvador: (I) 111, 173. (II) 14, 19, 20, 21, 22, 160, 174, 181, 183, 184, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 194, 195, 195, 196, 196, 197, 198, 199, 201, 205, 206, 206, 209, 210, 211, 219, 222, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 244, 245, 247, 249, 250, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 276, 277, 278, 279, 280, 284, 284, 287, 288, 291. (III) 10, 19, 30, 31
 Alliende Luco ISPSch, Joaquín: (II) 130. (III) 30, 30, 49, 191, 206, 209
 Almeyda Medina, Clodomiro: (II) 262
 Alonso Duro, Carlos: 282
 Alsina Hurtós, RP Joan: (II) 293
 Altamirano Orrego, Carlos: (II) 199, 260, 270, 276, 277, 279

- Alvarez Goldsack, Ramón: (I) 240
 Alvarez Santibáñez, Federico: (III) 177
 Alvear Urrutia, + Enrique: (I) 216,
 233, 234, 280, 284. (II) 128,
 186. (III) 25, 52, 53, 60, 61, 77,
 93, 97, 98, 112, 127, 173, 183,
 184, 198, 200, 242
 Ambrosio Brieva, Rodrigo: (II) 150,
 202
 Ansieta Núñez, Alfonso: (I) 206
 Antonutti, + Ildebrando Cardenal: (I)
 235
 Antúnez Zañartu, Nemesio: (III) 265
 Anwandter, Jorge: (III) 30, 30
 Aramburu, + Juan Carlos Cardenal:
 (III) 150, 152, 155
 Araya Peters, Arturo: (II) 245, 261
 Arceu J. OMD, Guillermo: (III) 241
 Arechavala Marín, Enrique: (I) 122
 Arellano Stark, Sergio: (II) 289
 Ariztía Ruiz, + Fernando: (II) 82, 109,
 111, 112, 117, 139, 141, 165,
 181, 186, 292, 293. (III) 7, 8,
 9, 31, 36, 52, 53, 73, 73, 97,
 98
 Arriarán Barros, Carmen: (I) 80, 81,
 82
 Arriarán Barros, Manuel: (I) 81
 Arroyo Correa SJ, Gonzalo: (II) 202,
 203, 203, 221, 222, 223, 226,
 227
 Arrupe Gondra SJ, Pedro: (II) 64, 64
 Arthur Aránguiz, Willy: (III) 218
 Assad, Julio: (III) 9
 Assmann, Hugo: (II) 236.
 Astaburuaga Silva, Mónica: (I) 207
 Astaburuaga Silva, Paulina: (I) 72
 Atatürk, Kemal: (I) 164
 Atenágoras I: (I) 309, 318
 Auriol, Vincent: (I) 167
 Avendaño Silva, Ernesto: (I) 189
 Awad Mehech, Jorge: (III) 11, 42, 43,
 45
 Aylwin Azócar, Andrés: (III) 96
 Aylwin Azócar, Patricio: (II) 19, 122,
 159, 250, 260, 261, 262, 263,
 267, 268, 269, 270, 271, 272,
 273, 274, 275, 276, 279, 259 (III)
 257
 Azócar, RP José Angel: (I) 189
- B**
 Badiola Broberg, Sergio: (II) 245
 Baeza, RP Luis Alfonso: (I) 179
 Baeza Gajardo, Mario: (I) 134
 Baeza Donoso, RP Alfonso: (I) 294,
 (II) 202, 203, 204, 225, 226,
 (III) 108, 108, 109, 113, 198
 Bagá Ballús, RP Juan: (III) 257
 Baggio, + Sebastiano Cardenal: (I)
 116, 117, 118, 120, 121, 122,
 128, 129, 130, 136, 140, 153,
 171, 175, 176, 180, 182, 183,
 184, 185, 186, 195, 199. (II)
 8, 19, 217. (III) 64, 65, 137,
 137, 161, 192, 254
 Balcárcel, Manuel: (III) 241
 Baldelli, + Ferdinando: (I) 257, 258
 Balduino, Rey: (III) 183
 Balic, + Carlo: (I) 310
 Ballesteros Reyes, Eugenio: (I) 206.
 (II) 44
 Balmaceda Fernández, José Manuel:
 (I) 17, 131
 Balmes, Jaime: (I) 35
 Baltra Cortés, Alberto: (II) 160
 Baltra Montaner, Lidia: (II) 11
 Baltra Moreno, Mireya: (II) 211
 Banzer, Hugo: (III) 205
 Baraniak, + Antoni: (I) 61
 Baraona, RP Víctor: (I) 189
 Barilari Galleguillos, RP Enrique: (II)
 195, 196
 Barra Carmona, RP Wenceslao: (I)
 196, 216, 294. (II) 73
 Barros Pérez-Cotapos, Jaime: (II) 18
 Barros Luco, Ramón: (I) 17
 Barros Ortiz, Diego: (I) 125
 Bascuñán, RP Javier: (I) 153, 154.
 (II) 112
 Batista, Fulgencio: (I) 219
 Baum, + William Cardenal: (III) 174
 Bayer, + Carlo: (I) 129, 130, 130, 136
 Bea, + Agostino Cardenal: (I) 315,
 (II) 26, 34, 34, 35
 Belaúnde Terry, Fernando: (II) 181
 Bellalta, Jaime: (III) 92
 Benavides Escobar, César: (III) 34,
 58, 78, 99
 Benedicto XV (Giacomo della
 Chiesa): (I) 163
 Benelli, + Giovanni Cardenal: (II) 127,
 137. (III) 137, 137, 141, 142,
 251
 Beran, + Josef Cardenal: (II) 45, 61,
 63
 Beras, + Octavio Antonio: (II) 53
 Bernardi, Andrés: (I) 140
 Bernstein Carabantes, Enrique: (I) 137

- Berrutti Barale SDB, Pedro: (I) 37, 50, 64, 64, 102
- Bertola Stura SDB, José: (I) 157
- Bevilacqua, + Giulio Cardenal: (II) 45
- Bigo SJ, Pierre: (III) 225
- Blaitt, Jorge: (I) 223
- Blanco Martínez, Guillermo: (I) 104. (II) 11
- Blest Riffo, Clotario: (II) 155
- Bobenrieth Astete, Roberto: (II) 98
- Boeninger Kausel, Edgardo: (III) 10
- Boeyens, + Adrian Florensz: ver Adriano VI
- Boizard Bastías, Ricardo: (II) 217
- Bolton García, RP Roberto: (I) 226
- Bonaparte, Napoleón: (III) 202
- Bonilla Bradanovic, Oscar: (II) 286. (III) 16, 17, 19, 26, 28, 31, 34
- Boric Crnosija, + Vladimiro: (I) 95, 190, 278. (II) 69, 186
- Boris I: (I) 163
- Boris III: (I) 163, 164
- Borremans Cook, RP Luis: (II) 283, 284
- Bosch, Juan: (II) 54
- Bosco, San Juan: (I) 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 49, 50, 54, 66, 71, 72, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 89, 99, 100, 101, 102, 109, 110, 116, 155, 156. (III) 239, 267, 273, 274, 274, 275
- Bossay Leiva, Luis: (I) 173. (II) 277
- Boulard, RP Ferdinand: (I) 213
- Boursotty SDB, José: (I) 104
- Bouteil Boudineau AA, Jean Michel: (III) 230
- Briones Olivos, Carlos: (II) 259, 259, 260, 262, 272, 273, 275, 276, 278, 279, 280
- Brouillard SJ, Henri: (I) 166
- Browne, Eugenio: (I) 136, 151
- Browne, + Michael Cardenal: (I) 234. (II) 34, 34
- Brurón Subiabre, RP Santiago: (I) 216. (III) 32, 241
- Buchman, Frank: (I) 224
- Bueno y Monreal, + José Cardenal: (II) 67
- Bush, George: (II) 235
- Bussi de Allende, Hortensia: (II) 196, 231
- Bustos Huerta, Manuel: (III) 198, 227, 227
- Cabrera, Alfonso: (I) 28
- Cáceres Castro, Leonardo: (II) 11, 144
- Cademártori, José: (II) 262
- Caggiano, + Antonio Cardenal: (I) 265. (II) 51. (III) 137
- Cagliero, + Giovanni Cardenal: (I) 238. (III) 274
- Calvo Castro, Gonzalo: (II) 96
- Calvo del Canto, RP Angel: (I) 206
- Camara, + Helder: (II) 37, 139, 146, 155. (III) 165
- Campillo Infante, + José Horacio: (I) 73, 76, 182
- Cámpora: (I) 115
- Camus Larenas, + Carlos: (I) 196. (II) 186. (III) 25, 26, 28, 29, 30, 49, 73, 74, 75, 75, 84, 84, 98, 99, 247
- Canali, + Cardenal: (I) 161
- Cancino Téllez, Fernando: (II) 44
- Canessa, Ismael: (I) 97
- Cañas Calvo, RP Blas: (I) 99, 100
- Caprio, + Giuseppe Cardenal: (III) 189
- Carafa, Gian Pietro: ver Pablo IV
- Cardijn, + Joseph Cardenal: (I) 68. (II) 45, 228. (III) 106
- Cariola Barroilhet SJ, Patricio: (III) 8, 9, 60, 61, 77, 78, 79, 81, 82, 85
- Carmona Peralta, Juan de Dios: (II) 51, 234
- Caro Cordero, + Cristián: (III) 103, 239
- Caro Rodríguez, + José María Cardenal: (I) 76, 76, 77, 80, 84, 96, 115, 124, 136, 150, 175, 176, 176, 177, 178, 179, 184, 216. (II) 11, 19, 85, 187, 228. (III) 48, 63
- Carrasco Rojas, RP René: (III) 239
- Casanueva Opazo, RP Carlos: (I) 29, 30
- Casaroli, + Agostino Cardenal: (I) 231. (III) 157, 169, 170, 174, 189, 193, 220, 223
- Cassidy, Sheila: (III) 77, 78
- Castellino SDB, Jorge: (I) 51
- Castex, RP Pedro: (I) 285. (II) 82, 123, 127
- Castiglioni, Francesco Saverio: ver Pío VIII
- Castillo Aránguiz, Sergio: (II) 166, 167, 168
- Castillo de Corvalán, Lily: (III) 195

- Castillo Morales, Francisco: (II) 11
 Castillo Velasco, Fernando: (II) 100, 101, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 163, 178, 179, 179, 180, 237, 240, 261. (III) 10, 11, 12
 Castillo Velasco, Jaime: (II) 159. (III) 96, 96, 99
 Castorina SDB: (I) 43, 44, 45
 Castro Díaz, Emilio: (III) 187, 188
 Castro Jiménez, Hugo: (III) 11
 Castro Ruz, Fidel: (I) 219. (II) 212, 213, 213, 214, 215, 216, 223
 Cauas Lama, Jorge: (III) 47, 110
 Cavalli, RP Fiorello: (III) 158, 238
 Cazzaro Bertollo, + Bernardo: (II) 186. (III) 29
 Cecchini SDB, Francisco: (I) 157
 Cerulario, + Miguel: (II) 69
 Chenu OP, Marie Dominique: (I) 166
 Cheyre Toutin, Emilio: (II) 166, 167
 Cheysson, Claude: (III) 214
 Chonchol Chait, Jacques: (II) 160, 164, 199. (III) 215
 Chopitea de Serra, Dorotea: (III) 274
 Cicognani, + Amleto Cardenal: (I) 219, 220, 220, 231, 284, 293, 307. (II) 9, 134
 Cicognani, + Gaetano Cardenal: (I) 159
 Cienfuegos Arteaga, + José Ignacio: (I) 18
 Cifuentes Gómez, Abdón: (I) 33
 Cifuentes Gómez, + Alfredo: (I) 124. (II) 18, 139
 Cipriota, Jacinto: (II) 51
 Ciriaci, + Pietro Cardenal: (II) 115, 116
 Clarizio, + Emanuele: (II) 53, 54
 Claro Valdés, Ricardo: (II) 148
 Colombo, + Carlo: (II) 34, 63
 Comber MM, John: (I) 129
 Comblin, RP Joseph: (II) 64, 146, 236
 Concha, + Luis Cardenal: (II) 78
 Confalonieri, + Carlo Cardenal: (III) 135, 137
 Congar OP, Yves: (I) 166, 271, 268, 318
 Contardo Egaña, Sergio: (I) 103, 134
 Contreras Azócar SDB, Raúl: (I) 157
 Contreras Navia, + Sergio: (I) 196. (II) 186, 282, 285. (III) 25, 124
 Contreras Sepúlveda, Manuel: (III) 24, 59, 61, 78
 Correa de Oliveira, Plinio: (II) 139
 Correa Gac, RP Sergio: (I) 234. (III) 35, 36
 Correa Letelier, Héctor: (I) 222
 Correa Ríos, Enrique: (II) 150
 Corvalán Lepe, Luis: (II) 211, 260. (III) 195
 Costa Torebadela, RP José: (III) 266
 Court Mookck, Jorge: (III) 100, 101, 102, 113, 115, 178, 180, 196, 197, 200, 228
 Cousiño Aragón, Ignacio: (I) 206
 Coussa, + Acacius Cardenal: (I) 234, 234
 Cowley Vargas SSCC, Percival: (II) 262
 Cox de Silva, Florencia: (I) 207
 Cox Huneus, + Francisco José: (III) 191, 199
 Cristi, RP Moisés: (I) 189, 206
 Cruz-Coke Lassabe, Eduardo: (I) 94. (II) 20
 Cruzat Paul, Gastón: (II) 11, 12, 36
 Cubillos Leiva, Hernán: (I) 206
 Cubillos Sallato, Hernán: (III) 155, 156, 158
 Cullmann, Oscar: (II) 37
 Cumming Godoy, Federico: (III) 263
 Curtí Cannobbio, Enrique: (II) 44
d'Argouges de Robleroa AA, Olivier: (III) 257, 258, 258
 d'Escoto, + Miguel: (III) 258
 d'Etigny Lyon, Enrique: (III) 92
 da Costa Nunes, + José Cardenal: (I) 234, 234
 da Silveira, Fabio Vidigal Xavier: (II) 139
 Damilano Bonfante, Renato: (III) 111
 Daniélou, + Jean Cardenal: (I) 166, 305
 Dante, + Enrico: (I) 235
 Dávila Izquierdo, Fernando: (I) 136
 de Arriba y Castro, + Benjamín Cardenal: (I) 306
 de Castro Reyes, RP Juan: (II) 64, 133. (III) 110, 130, 131, 177, 178, 198, 211, 212, 259, 261, 261
 de Castro Spikula, Sergio: (II) 106. (III) 110

- de Chardin, Teilhard: (I) 37
 de Gaulle, Charles: (I) 165, 166, 166, 167. (II) 121
 de Lubac, + Henri Cardenal: (I) 166
 de Medellín, + Diego: (III) 248
 de Proenca Sigaud, + Geraldo: (II) 32, 66, 139
 de Roo, + Remy: (II) 62
 de Smedt, + Emile: (I) 272, 315. (II) 32, 39
 de Velasco, Manso: (I) 14
 del Corro SJ, Alejandro: (I) 147, 150
 del Pedregal Encina, Adolfo: (I) 77, 207
 del Río Gundián, Sótero: (I) 197
 del Solar Tagle, Carlos: (II) 105
 del Valle Allende, Jaime: (II) 237
 Dell'Acqua, + Angelo Cardenal: (I) 231, 285. (II) 92
 Dell Gallo Roccagiovane: (I) 237
 Dessi Bellu OMD, Bruno: (III) 241
 Devés Jullian, Raúl: (II) 102
 Dezza SJ, Paolo: (II) 180
 di Girólamo Quesney, Claudio: (I) 110, 129. (II) 238
 Díaz SDB, Abilio: (I) 157
 Díaz, Fernán: (II) 92
 Díaz Armijo, Gladys: (III) 59
 Díaz Arrieta, Hernán: (II) 19
 Díaz Carrasco, Eduardo: (II) 284
 Díaz Herrera, RP Luis Antonio: (II) 144, 206, 223, 224, 227, 228, 269, 282, 283, 283, 284, 286, 287, 293, 294, 295. (III) 8, 25, 57, 109, 112
 Diocleciano: (I) 238
 Dior, Christian: (I) 167
 Domínguez Correa, RP Oscar: (II) 11
 Donoso Bravo, Alvaro: (III) 227
 Donoso de Silva, Mónica: (I) 207
 Donoso Espic CSC, Fermín: (III) 77, 78
 Döpfner, + Julius Cardenal: (I) 270, 273, 305, 306. (II) 33, 35, 69, 75, 133
 Duarte, Lucía: (I) 136
 Duhalde Vásquez, Alfredo: (I) 94
 Durán Moreira, + Alejandro: (II) 186
 Durán Neumann, Julio: (II) 10, 13, 19
 Duval, + Leon Esteban Cardenal: (II) 69
Eastman Montt, Tomás: (I) 206
 Edwards SSCC, Manuel: (I) 133, 135, 216
 Egaña Baraona, Javier Luis: (III) 30, 30, 31, 91, 98, 212
 Elías IV: (III) 122
 Elías Aboid, José: (III) 9, 71
 Eluchans Malherbe, Edmundo: (I) 206
 Encina Romero, Delfina: (I) 14, 16
 Encina y Echeverría, Francisco: (I) 14
 Encina y Echeverría, Javiera: (I) 15
 Engels, Federico: (II) 198
 Enríquez Espinosa, Miguel: (III) 76
 Errázuriz Ossa, + Francisco Javier: (III) 191, 192
 Errázuriz, Lucía: (I) 129
 Errázuriz de Larraín, Regina: (II) 83
 Errázuriz Gandarillas, + Ismael: (II) 81, 112, 154, 154, 155, 156, 165, 186, 211, 212, 216, 281, 282. (III) 52
 Errázuriz Valdívieso, + Crescente: (I) 212
 Escrivá de Balaguer y Albas, + José María: (III) 245
 Etcheberry Orthusteguy, Alfredo: (III) 10, 11
 Eugenin Barrientos, + Teodoro: (II) 110
 Eusebio: (I) 237
 Evans de la Cuadra, Enrique: (II) 105
Fabri, Tito: (I) 22
 Fanfani, Amintore: (II) 70
 Fariña Fariña, + Pfo Alberto: (I) 179, 179, 184, 216
 Farrell CSC, David: (III) 109
 Felici, + Pericle Cardenal: (I) 269, 308, 308, 311. (II) 34, 38
 Felipe II: (I) 11
 Fell Hoyl, RP Guillermo: (I) 189

- Feltin, + Maurice Cardenal: (I) 277
- Fernández OP, Alfonso: (II) 34
- Fernández Aguayo, Sergio: (II) 122
- Fernández Arlt, Augusto: (III) 9
- Fernández Correa, Raúl: (I) 190
- Fernández Fernández, Sergio: (III) 119, 120, 121, 122, 233
- Fernández Sanfuentes, RP Jaime: (I) 197
- Ferraris del Conte SDB, Gustavo: (I) 170, 260. (II) 19, 21. (III) 104, 130, 276
- Figueroa Mazuela, Luis: (II) 205, 206, 234
- Figueroa de Valdés, María: (I) 122
- Filipiak, + Cardenal: (III) 137
- Fiore, Erani: (II) 90
- Fisher Schultz, RP Barry: (III) 266
- Flamey van Puyembroek OMI, Guido: (III) 205
- Fontaine Aldunate SSCC, Pablo: (II) 225
- Fontecilla y Fontecilla, Mariano: (I) 232
- Forde OFM, Brendan: (III) 257, 258, 258
- Forni, + Efrén Cardenal: (I) 234, 234
- Fossatti, + Maurilio Cardenal: (I) 66, 168, 238
- Foxley Rioseco, Alejandro: (II) 94. (III) 47
- Franco Bahamonde, Francisco: (I) 125, 240. (II) 138
- Franic, + Franjo: (II) 30
- Frankenstein, Barón: (I) 203
- Frei Montalva, Eduardo: (I) 94, 97, 173, 222, 256. (II) 13, 16, 17, 19, 22, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 49, 55, 78, 79, 86, 100, 121, 122, 122, 139, 147, 149, 150, 157, 158, 159, 166, 171, 172, 172, 173, 174, 177, 178, 178, 187, 189, 235, 251, 252, 253, 254, 260, 267, 290. (III) 102, 127, 202, 202, 220, 241, 241, 268
- Frei Ruiz-Tagle, Carmen: (II) 201
- Frenz, Helmut: (III) 7, 8, 9, 35, 36, 60, 71, 73, 74, 74, 75, 76
- Fresno de Leighton, Anita: (III) 75, 92
- Fresno Larraín, + Juan Francisco Cardenal: (I) 140, 145, 278. (II) 8, 161, 186. (III) 20, 20, 84, 84, 92, 98, 124, 213, 229, 261, 262, 262, 263, 264, 264
- Frías Hurtado, + Hernán: (I) 153
- Frings, + Joseph Cardenal: (I) 260, 261, 265, 265, 268, 306, 312. (II) 34, 35, 35, 70, 75. (III) 137
- Frontaura Gómez, Juan: (I) 103, 134
- Fuentealba Moena, Renán: (II) 149, 159, 254, 256
- Fuenzalida y Fuenzalida, + Orozimbo: (II) 186, 285. (III) 124
- G**aete Rojas, Sergio: (III) 24
- Galilea Diez, RP Segundo: (III) 109
- Gambino Castellano, RP Víctor: (III) 239
- Gandolfi, SOR Inés: (I) 116
- Garaudy, Roger: (II) 76
- García, Martín: (I) 97
- García, RP Paulino: (II) 138
- García Suárez, Joaquín: (II) 192
- García y García, + Rafael: (II) 26
- Garretón Merino, Roberto: (III) 210
- Garrone, + Gabriele Cardenal: (II) 92, 95, 107, 108, 163, 180. (III) 168, 169, 171, 172, 173, 174, 189
- Gavirati SDB, Crisóstomo: (I) 157
- Gay, Claudio: (I) 89
- Gellona, Carlos: (II) 172
- Giacomo della Chiesa: ver Benedicto XV
- Gillmore Stock, + Francisco: (I) 278. (II) 285, 288, 289. (III) 20, 20, 197
- Gilroy, + Thomas Cardenal: (I) 265
- Gimpert Paut, + Eduardo: (I) 178
- Gmeiner, Hermann: (III) 267, 268
- Goldenberg, Isaac: (II) 218
- Gomez de Souza, Luis Alberto: (II) 90
- Gómez Millas, Juan: (II) 47, 48
- Gómez Ugarte, RP Jorge: (I) 95, 96, 103, 104, 106, 111, 112,

- 112, 133, 134, 135, 280.
 (II) 44, 52, 140, 140, 141,
 142, 195, 196, 228, 229
- Gomulka, Wladislaw: (II) 206
- González, Alberto: (III) 109
- González Contesse, Horacio: (III)
 195, 196
- González Cruchaga, + Carlos: (I)
 213, 226, 291. (II) 123,
 125, 128, 142, 186, 236.
 (III) 97, 98, 99, 100, 199
- González Förster SJ, Jorge: (I) 106,
 206
- González González, RP Mario: (II)
 165, 199, 200
- González Morales, RP Ciro: (I)
 189
- González Morales, + Tomás: (I)
 202, 206, 233, 65. (III) 64
- González Poblete, Alejandro: (III)
 210
- González Videla, Gabriel: (I) 94,
 97, 111. (II) 187, 290
- Gordon Rubio, Humberto: (III)
 263
- Goss-Mayr, Jean: (III) 187
- Goss-Mayr, Hildegard: (III) 187
- Gracias, + Cardenal: (III) 137
- Grasso SDB, Valentín: (I) 37, 38
- Gregorio VII (Hildebrando de
 Soana): (I) 215
- Gregorio X (Teobaldo Visconti):
 (I) 317
- Grossi OCSO, Plácido: (I) 237,
 238
- Grove Vallejo, Marmaduque: (I)
 42, 94
- Guano, + Emilio: (II) 69
- Guerrero Yoacham, RP Patricio:
 (II) 224
- Guillard Marinot, Roberto: (III)
 200, 210, 228
- Guitton, Jean: (II) 154
- Gumucio Vives SSCC, Esteban:
 (I) 106. (II) 202, 204
- Gumucio Vives, Rafael Agustín:
 (II) 121, 149, 159, 175
- Gutiérrez, + Armando: (III) 148
- Gutiérrez Merino, RP Gustavo: (II)
 181, 204, 236
- Gutiérrez Yáñez, Nelson: (III) 76,
 77, 78, 79
- Guzmán, Fernando: (III) 96
- Guzmán Errázuriz, Jaime: (II) 108.
- (III) 28, 41, 217, 218, 219
- Guzmán Ordenes, Alamiro: (III)
 227, 227
- H**aile Selassié I: (I) 62
- Hales Jamarme, Alejandro: (II) 159
- Harding, RP Rodolfo Agustín: (I)
 189
- Harper, Charles: (III) 187, 188
- Hartl de Laufen, + Guillermo: (I)
 278. (II) 186
- Hasbún Zaror, RP Raúl: (I) 260.
 (II) 238, 239, 240. (III) 24,
 41, 92, 117
- Haselman, Oldrich: (III) 7
- Haya de la Torre, Víctor Raúl: (I)
 44
- Henríquez Cienfuegos, Diego: (I)
 14, 16
- Henríquez Encina, Carmen Rosa:
 (I) 16
- Henríquez Encina, Mercedes: (I)
 14, 15, 15, 16, 17, 19, 20,
 21, 24, 26, 54, 72, 77, 151,
 151, 152
- Henríquez Miguel: (III) 76
- Herrera Latoja, Francisco: (II) 295
- Herrera Salas, RP Bernardo: (III)
 112, 241
- Hevia Rivas SJ, Renato: (III) 270
- Hicks, Nathaniel: (I) 153
- Hildebrando de Soana: ver
 Gregorio VII
- Hitler, Adolfo: (I) 62, 67
- Höffner, + Joseph Cardenal: (III)
 230, 231
- Hornickel, Otto: (I) 153
- Houpouët-Boigny, Félix: (III) 214
- Hourton Poisson, + Jorge: (II) 125,
 126, 127, 186, 187. (III) 8,
 15, 52, 53, 57, 161, 173,
 183, 184, 257
- Houtart SJ, Francois: (II) 187, 188
- Hudson Silva, Henry: (I) 77
- Hudson Silva, Kitty: (I) 77
- Hudson Silva, Lilian: (I) 207
- Huerta Celis, Vicente: (II) 192
- Huerta Díaz, Ismael: (II) 234, 243.
 (III) 14
- Huidobro Domínguez, Ramón: (II)
 256, 258
- Humeres Magnan, Héctor: (II) 231,
 245
- Humphrey, Hubert: (I) 292

- Hurley, + Denis: (II) 37
 Hurley, + Mark J.: (III) 231
 Hurtado Cruchaga SJ, Alberto: (I)
 95, 96. (II) 84, 114, 206. (III) 105
 Huss, Juan: (II) 61
 Hussein: (I) 316, 318
- I**báñez, Bernardo: (I) 94
 Ibáñez del Campo, Carlos: (I) 28,
 41, 84, 111, 112, 112, 123,
 123, 141, 142, 150, 172,
 173, 245. (II) 48, 85, 187
 Ibáñez Ojeda, Pedro: (I) 206
 Icaza Barros, Carlos: (I) 26
 Icaza de Silva, Alicia: (I) 207
 Icaza Silva, Alfredo: (I) 72, 207
 Icaza Silva, Carlos: (I) 26, 207
 Icaza Silva, Cecilia: (I) 72, 207
 Icaza Silva, Eugenio: (I) 207
 Icaza Silva, Fernando: (I) 77
 Icaza Silva, Inés: (I) 26, 72
 Icaza Silva, Lastenia: (I) 26, 77, 207
 Icaza Silva, Matilde: (I) 26, 54, 207
 Icaza Silva, Olga: (I) 26, 72
 Icaza Silva, Roberto: (I) 77
 Illanes SSCC, Manuel: (II) 219
 Illia, Arturo: (II) 51, 52
 Infante Díaz, RP Florencio: (I) 285
 Infante Covarrubias, Carlos: (II) 105
 Insulza Salinas, José Miguel: (II) 94
 Ireneo, + San: (II) 60
 Irigoien Oyarzún, Daniel: (II) 158
 Izquierdo, Adriana: (I) 119, 122
 Izquierdo, Rebeca: (I) 131
- J**anssens SJ, Giovanni: (II) 64
 Jara, RP Fernando: (I) 216. (II) 8
 Jara Cruz, Juan: (II) 274
 Jara Ruz, + Ramón Angel: (I) 31.
 (II) 52
 Jarpa Reyes, Sergio Onofre: (II) 192,
 201
 Javierre Ortas, + Antonio María: (III)
 168
 Jeffs Munizaga, Leonardo: (II) 155,
 155
 Jerez Horta, Alberto: (II) 159, 276
 Jiménez Berguuccio SJ, Julio: (II) 64
 Jiménez Alfaro, Tucapel: (III) 242
 Johnson, Lyndon B.: (I) 292. (II) 54,
 71, 173
 Jordán Esquella, Ricardo: (II) 101
 Journet, + Charles Cardenal: (II) 45,
 60
- Juan XIII (Angelo Roncalli): (I)
 160, 160, 161, 162, 162, 163,
 163, 164, 164, 165, 166, 166,
 167, 167, 168, 168, 169,
 176, 192, 201, 215, 218, 227,
 228, 229, 230, 231, 232, 235,
 235, 236, 237, 238, 243, 259,
 262, 263, 263, 266, 270, 271,
 272, 275, 276, 276, 277, 286,
 292, 293, 293, 295, 297, 300,
 302, 305, 309. (II) 19, 42, 69,
 120, 131, 164, 214. (III) 134,
 139
 Juan Pablo I (Albino Luciani): (III)
 138, 139, 139, 140, 140, 141,
 141, 152, 152, 153, 154, 161
 Juan Pablo II (Karol Wojtyła): (II)
 116. (III) 128, 138, 143, 144,
 144, 145, 145, 146, 154, 156,
 157, 157, 159, 161, 162, 163,
 163, 166, 173, 177, 180, 181,
 182, 184, 184, 185, 186, 186,
 187, 187, 188, 190, 191, 193,
 194, 203, 209, 216, 221, 221,
 222, 222, 223, 224, 225, 226,
 227, 234, 235, 246, 246,
 247, 247, 248, 249, 250,
 255, 258, 259, 264, 264,
 265, 269, 274
 Justo, Agustín P.: (I) 62
- K**ennedy, Jacqueline Bouvier: (I) 231
 Kennedy, John Fitzgerald: (I) 217,
 266, 296, 317
 Kennedy, Robert: (II) 121
 Kantenich ISPSch, José: (II) 73, 74,
 74, 75, 76. (III) 191
 Kerensky, Alexander: (II) 139
 King, Martin Luther: (II) 121
 Kinney, Mr.: (I) 250
 Kirberg Baltiansky, Enrique: (II) 197
 Kirschlaeger, Rudolf: (III) 187
 Kissinger, Henry: (III) 95
 Klener OCSO, Zigurd: (I) 238
 Kloppenburg, + Boaventura: (III) 164
 Koch, Osvaldo: (I) 129
 Koenig, + Franz Cardenal: (I) 308, 309,
 310. (II) 35
 Korry, Edward: (II) 191
 Kozak, Roberto: (III) 7
 Krebs Wilckens, Ricardo: (II) 108,
 177, 179, 179
 Kreiman Brill, Angel: (III) 9, 36, 61,
 72, 72

- Kreisky, Bruno: (III) 186, 186, 187
 Kroll, + John Cardenal: (III) 34, 34
 Kruschev, Nikita: (I) 276. (II) 164, 214
 Kruschev, Rada: (I) 276
 Kuhl Mergen ISPSch, José: (III) 78
 Kunstmann, Gustavo: (II) 166
 Kupareo Beritic OP, Raimundo: (I) 134. (II) 98
 Kusmanich Buvenich SDB, Simón: (III) 274, 275
- L**
 Labarca Benítez, Ricardo: (I) 151
 Laborda Villarroel, RP Manuel: (I) 189
 Lagarrigue Arlegui, Javier: (I) 97
 Landázuri Ricketts, + Juan Cardenal: (I) 234, 234., 297, 301. (II) 35. (III) 149
 Larraín Cordovez, + Eduardo: (I) 143, 278
 Larraín E., RP Rafael: (I) 216. (II) 82
 Larraín Errázuriz, José Luis: (II) 83
 Larraín Errázuriz, + Manuel: (I) 95, 96, 97, 127, 128, 129, 136, 140, 145, 180, 185, 209, 210, 245, 246, 246, 247, 247, 249, 266, 268, 278, 284, 290, 291, 299. (II) 8, 18, 19, 36, 64, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 87, 228
 Larraín Fernández, Hernán: (II) 178
 Larraín Gandarillas, + Joaquín: (III) 168
 Larraín Valdivieso, + Gabriel: (I) 212, 214, 216, 226. (II) 48, 82, 83, 95, 110, 111, 112, 117, 123, 124, 125, 127
 Lattuada, RP Alberto José: (II) 51
 Laurin Primeau OMI, Pablo: (II) 165
 Lavandero Illanes, Jorge: (II) 44
 Lavín, RP Alvaro: (I) 139
 Lázaro Urrizola SDB, Felipe: (I) 48, 157
 Lazcano, RP Eladio: (I) 189
 Le Fort Jacques, RP Enrique: (II) 224
 Le Naour Le Noc HEC, Félix: (I) 22
 Lebegue Curé, RP Roberto: (II) 181
 Lecaros Zegers, Raúl: (II) 178. (III) 24, 42, 43
 Lecaros Izquierdo, RP Ruperto: (I) 139, 140
 Lefebvre, + Joseph Cardenal: (II) 35, 63, 65
 Lefebvre, + Marcel: (II) 34, 66. (III) 89, 90
 Léger, + Paul Emile Cardenal: (II) 26, 35, 35, 62
 Leguía, Augusto: (I) 44
 Leigh Guzmán, Gustavo: (II) 266, 289. (III) 49
 Leigh Guzmán, Hernán: (III) 15
 Leighton Guzmán, Bernardo: (II) 44, 79, 83, 87. (III) 75, 92
 León XIII (Vicente Gioachino Pecci): (I) 68, 69, 162, 218. (II) 61, 70
 León Bourgeois SSSC, Eugenio: (I) 134
 Lercaro, + Giacomo Cardenal: (I) 159, 297, 305, 306. (II) 33, 35, 55
 Letelier de Ibáñez, Graciela: (I) 139, 141
 Letelier del Solar, Orlando: (III) 102, 119
 Letelier Icaza, Luis Felipe: (I) 29, 29, 31, 32, 72. (II) 44, 98
 Leva Eliav, Arif: (III) 187
 Liénart, + Achille Cardenal: (I) 265, 265, 269. (II) 35
 Lira Infante, + Rafael: (I) 109, 177, 178, 178
 Lira Urquieta, Pedro: (I) 122. (II) 98
 Livingston Bianchi, Duncan: (III) 92, 212
 Livingstone Pohlhammer, Sergio: (II) 11
 Lizana, RP José Luis: (I) 189
 Lizana, RP Luis: (I) 239
 Llidó Mengual, RP Antonio: (III) 15
 Lluch Soler, Salvador: (II) 105
 López Day SDB, Baltazar: (I) 115, 115, 157
 López Trujillo, + Alfonso: (III) 165
 Lorca Rojas, Gustavo: (I) 206
 Lorscheider, + Ivo Cardenal: (III) 136
 Luchini Albertalli, Alberto: (III) 61, 244
 Luciani, + Albino Cardenal: ver Juan Pablo I
 Ludwig I: (I) 202
 Lyon Subercaseaux SJ, Francisco: (I) 134
- M**
 Bow, Amador Mahtar: (III) 214
 Madariaga Gutiérrez, Mónica: (III) 111
 Magliochetti Barahona, Humberto: (II) 266

- Maglione, + Luigi Cardenal: (I) 299
 Magnet Pagueguy, Alejandro: (II) 11 (III) 8
 Magnoni, RP Antonio: (I) 95
 Mahn Mackenthun, Alfredo: (II) 166, 167
 Maira Aguirre, Luis: (II) 202
 Manachino SDB, Gaudencio: (I) 79, 80
 Mancardi SDB, José: (I) 157
 Manrique, + Jorge: (III) 148
 Manzor Vergara, RP Leopoldo: (I) 177
 Marambio, RP Luis: (I) 189
 Marambio, RP Nemesio: (I) 178, 179, 189, 191
 Marambio Marchant, Tulio: (II) 167
 Marcos, Ferdinand: (III) 133, 216
 Marcotti, RP Darío: (II) 181
 Marella, + Paolo Cardenal: (III) 137
 Maritain, Jacques: (I) 94. (II) 68. (III) 215
 Maroto Pérez, RP Rafael: (II) 82, 165, 208. (III) 77, 78, 85
 Martín, monseñor : (III) 153
 Martínez Sotomayor, Carlos: (I) 230, 240
 Martínez Williams, Jaime: (III) 112
 Martini, + Carlo: (II) 127, 134, 135, 143
 Marx, Carlos: (I) 42. (II) 182
 Marzorati SDB, Francisco: (I) 157
 Masella, + Aloisi Benedetto Cardenal: (I) 230, 293, 307
 Massad Abud, Fernando: (II) 147
 Matetic, Jorge: (I) 223
 Matte, RP Jorge: (I) 294
 Matte Gormaz, Jorge: (I) 75
 Matte Larraín, Arturo: (I) 111
 Maturana Icaza, Marcos: (I) 207
 Maturana Pino, Augusto: (I) 157
 Maturana Yávar, Marcos: (I) 207
 Maurer, + Clemente Cardenal: (III) 149
 Maurras, Charles: (I) 69
 McGillicuddy CSJ, Desmond: (III) 257, 258, 258
 McGrath, + Marcos: (I) 216, 260. (II) 36, 69, 89, 90. (III) 112
 McMahon SSC, Brian: (III) 257, 261
 Medina Estévez, + Jorge: (I) 260, 318. (II) 64, 105. (III) 46, 46, 171, 172, 259,
 Meins, RP Eduardo: (I) 189
 Mella, RP Manuel: (I) 103
 Menchaca Lira, + Alejandro: (I) 239
 Mendes, Cándido: (II) 90
 Méndez Arceo, + Sergio: (II) 26, 225, 227
 Mendoza, Amor: (III) 133
 Mendoza Durán, César: (II) 289. (III) 49
 Menelik II: (I) 62
 Merino, RP Guillermo: (I) 189
 Merino Correa, Hernán: (II) 52
 Merino Castro, José Toribio: (II) 277, 278, 289. (III) 12, 49
 Mery Beckdorf, + Arturo: (I) 278
 Mery Fuenzalida, Hernán: (II) 180
 Meuochi, + Pedro Pablo Cardenal: (II) 45
 Meyer, + Albert Gregory Cardenal: (II) 35, 35, 37
 Mezzacasa SDB: (I) 52
 Migliacco OMD, Lucio: (III) 241
 Millán Escobar, RP Luis: (I) 189
 Mindszenty, + Josef Cardenal: (I) 219. (II) 206
 Miranda Carrington, Sergio: (II) 256
 Mistral, Gabriela: (II) 128
 Mitterrand, Francois: (III) 235, 236, 236
 Moatte, RP Humberto: (I) 189
 Moeller, RP Charles: (I) 260. (II) 64
 Molina Silva, Sergio: (II) 274, 275. (III) 212, 214
 Molina Vallejo, Fernando: (II) 73, 92, 93, 96, 179, 180
 Monckeberg Barros, Fernando: (III) 92
 Montealegre Klenner, Hernán: (III) 93, 95
 Montero Cornejo, Raúl: (II) 245, 263, 266, 277, 278
 Montero Rodríguez, Juan Esteban: (II) 197
 Montes Brunet, Hugo: (I) 96, 96, 97, 103, 104, 134
 Montes Cisternas, Carlos: (II) 178
 Montini, Giovanni Batista: ver Pablo VI
 Montt Alvarez, Jorge: (I) 17
 Mor Roig, Arturo: (II) 51
 Morales Courbis, Hugo: (III) 121
 Morales Adriasola, Raúl: (II) 44
 Moreira Cifuentes, Carlos: (I) 207
 Moreno Casamitjana, + Antonio: (III)

- 171
 Moro, Aldo: (III) 133
 Motte, RP Jean Francois: (I) 213
 Mounier, Emmanuel: (III) 215
 Muench, + Aloisius Cardenal: (I) 237
 Munita Eyzaguirre, + Ramón: (I) 121
 Muñoz Castro SDB, Isidoro: (I) 157
 Muñoz Darrigrandi SDB, Alberto: (I) 29, 37, 42, 43, 45, 50, 51, 57, 61, 65
 Muñoz Leiva, Sergio: (II) 252
 Muñoz Vega, + Pablo Cardenal: (III) 97
 Murillo Hernández, RP Jorge: (II) 295
 Mussolini, Benito: (I) 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 69
 Mutlet Mutlet AA, Andrés: (III) 230
- N**alegach Pons, Samuel: (III) 8
 Naranjo Arias, Oscar: (II) 12
 Naranjo Jara, Oscar: (II) 12
 Nenni, Pietro: (I) 267
 Neruda, Pablo: (I) 256. (II) 130, 160, 162, 163, 163, 164, 281
 Nixon, Richard: (II) 191, 235
 Noé, + Monseñor: (III) 143
 Noguero Armengol, José: (II) 51
 Norris, James: (I) 127, 128, 299
 Nuti, + Orestes: (II) 15
- O**'Higgins Riquelme, Bernardo: (III) 47
 O'Malley, William SJ: (III) 205
 Obando y Bravo, + Miguel: (III) 187
 Ochagavía Larraín SJ, Juan: (I) 260. (II) 64, 133. (III) 72, 181
 Olaechea, + Marcelino: (I) 204
 Olate, Wenceslao: (I) 206
 Olave SDB, Juan: (I) 157
 Olguín Zapata, Osvaldo: (II) 262, 269
 Olivares, José Miguel (FEUC): (III) 171
 Orfila, Alejandro: (III) 95
 Orlando Muggetti SDB, Carlos: (I) 78, 157
 Ortea, RP José: (I) 131, 136
 Ortega Riquelme, RP Miguel: (III) 103, 105, 198, 239, 240, 256, 263, 266
 Ortúzar Montt SDB, Camilo: (I) 37
 Ortúzar Rojas, RP Ignacio: (I) 239. (II) 127
 Ossa Pretot, Sergio: (II) 48, 167, 252
 Ossa Sainte Marie, Gastón: (I) 206
 Ottaviani, + Alfredo Cardenal: (I) 267, 268, 268, 269, 272, 282, 283, 284, 296, 298, 312. (II) 64, 70. (III) 137, 139
 Oviedo Cavada, + Carlos: (II) 94, 183, 186, 195, 196, 212, 216, 224, 225, 233, 242, 259. (III) 20, 20 29, 29, 30, 124, 153
 Oyarzún de Aylwin, Leonor: (II) 19
- P**ablo IV (Gian Pietro Carafa): (II) 70
 Pablo VI (Giovanni Batista Montini): (I) 116, 159, 167, 202, 268, 273, 290, 297, 298, 299, 299, 300, 301, 301, 302, 305, 308, 309, 309, 314, 315, 316, 317, 318. (II) 7, 9, 23, 24, 37, 38, 39, 40, 40, 43, 45, 49, 53, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 66, 67, 68, 68, 69, 70, 71, 75, 109, 115, 120, 124, 131, 132, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 144, 145, 146, 151, 153, 154, 160, 161, 183, 210, 212, 216, 226, 255. (III) 12, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18, 19, 26, 64, 65, 66, 82, 88, 89, 90, 103, 104, 117, 118, 133, 134, 135, 137, 140, 142, 144, 145, 146, 152, 161, 164
 Pablo Elorza, Tomás: (II) 194. (III) 95, 103, 104
 Pacelli, Eugenio: ver Pío XII
 Padim, + Cándido: (II) 89
 Paiva Casali, Raúl: (III) 32
 Palet Claramunt, Enrique: (III) 32
 Palloti, San Vicente: (II) 75
 Palma Cousiño, Ignacio: (II) 102, 104
 Palza Corvacho, Humberto: (II) 220
 Panico, + Giovanni Cardenal: (I) 235
 Panzarasa Negri SDB, Valentín: (I) 31, 31, 32, 34, 35, 36, 43, 71, 73. (III) 266
 Parente, + Pietro Cardenal: (II) 30. (III) 137
 Pareto González, Luis: (II) 220
 Parra Alderete, Bosco: (II) 202
 Parragué Singer, Roberto: (I) 125
 Pascal Allende, Andrés: (III) 76, 77, 79
 Pastor, Carlos Washington: (III) 155, 156
 Pecci, Vicente Gioachino: ver León XIII
 Peragallo, Roberto: (I) 28

- Peresín, RP Mario: (I) 226
 Peretti, Felice: ver Sixto V
 Pérez, Clemente: (II) 95
 Pérez, RP Luis: (I) 189
 Pérez de Arce, Camilo: (II) 10
 Pérez Suárez, Nicolás: (II) 205
 Pérez Yoma, José Luis: (II) 210
 Pérez Zujovic, Edmundo: (II) 140, 158, 174, 209, 210
 Pérez Zurita, Vicente: (II) 11
 Perón, Juan Domingo: (I) 62
 Pétaín, Philippe: (I) 165
 Pey, Víctor: (II) 275
 Peyton CSC, Patrick: (II) 17
 Philippi Izquierdo, Julio: (I) 119, 122, 129, 134, 134. (II) 105, 108
 Philips, RP: (I) 260, 305
 Piergiovanni Ferranti OM, Alceste: (I) 250
 Pinochet Ugarte, Augusto: (II) 245, 258, 276, 277, 289, 292. (III) 10, 11, 16, 23, 26, 27, 28, 34, 36, 39, 49, 58, 60, 61, 62, 79, 80, 81, 82, 84, 92, 95, 99, 100, 101, 111, 112, 115, 116, 127, 151, 158, 158, 171, 175, 179, 180, 197, 198, 201, 204, 206, 207, 209, 210, 212, 214, 215, 216, 219, 226, 229, 235, 270
 Piñera Carvallo, + Bernardino: (I) 129, 180, 245, 278. (II) 19, 94, 95, 208, 211, 285. (III) 111, 124, 168, 206, 209
 Pío IV (Juan Angel de Médicis): (III) 248
 Pío VIII (Francesco Saverio Castiglioni): (I) 292
 Pío X (Giuseppe Sarto): (I) 68, 168, 238, 296
 Pío XI (Achille Ratti): (I) 59, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 104, 159, 255, 263, 293. (II) 131
 Pío XII (Eugenio Pacelli): (I) 67, 76, 113, 114, 116, 135, 158, 159, 161, 165, 166, 167, 168, 175, 215, 221, 244, 263, 293, 299, 300. (III) 49, 141, 144
 Pironio, + Eduardo Cardenal: (III) 136, 137, 143
 Pizzardo, + Giuseppe Cardenal: (I) 298, 307. (II) 91
 Pla y Deniel, + Enrique Cardenal: (I) 265
 Poblete Barth SJ, Renato: (I) 213, 216, (II) 48, 205, 206, 224, 256, 259. (III) 92, 148, 149, 241
 Poblete Varas, Hernán: (II) 11
 Poblete Fernández SDB, Gerardo: (III) 15, 16
 Potter, Philip: (III) 187, 187
 Pozo, Luis: (III) 9
 Prado Casas, Benjamín: (II) 191
 Prat Echaurren, Jorge: (I) 96. (II) 13
 Prat Echaurren, Roberto: (I) 96
 Prats González, Carlos: (II) 194, 231, 234, 234, 243, 257, 258, 258, 263, 266, 277. (III) 75
 Precht Bañados, RP Cristián: (II) 129. (III) 72, 73, 77, 85, 86, 86, 91, 99, 100, 104, 113, 114, 119, 129, 130, 130, 131, 131, 140, 153, 183, 194, 198, 212, 240, 261, 263, 266
 Primatesta, + Raúl Francisco Cardenal: (III) 151, 152, 155, 234, 235
 Proaño, + Leonidas: (III) 97, 99
 Puertas SDB, José: (I) 53
 Puga Cappa, Alvaro: (II) 287. (III) 25
 Puga Concha SSCC, Mariano: (II) 111, 225
 Puga Vega, Mariano: (I) 151
 Pujadas, Ignacio: (II) 202, 203
Quadrelli SDB, José: (I) 157
 Quintana Burgos, Alfonso: (I) 79
 Quintana Ross, Manuel: (I) 206
 Quintero, + Humberto Cardenal: (II) 25, 35
 Quiroga y Palacios, + Fernando Cardenal: (II) 67
 Quiroz Lara SDB, Guillermo: (I) 48, 157
Rada Donath, RP Alejandro: (I) 294
 Radini-Tedeschi, + Giacomo: (I) 162, 163
 Rahner, Karl: (I) 268, 270, 271. (II) 76
 Ramírez, RP Adamiro: (II) 95, 97
 Ramírez, Pedro Felipe: (II) 202
 Ratti, Achille: ver Pío XI
 Ratzinger, + Joseph Cardenal: (II) 70
 Ravadero, + Cornejo: (II) 123
 Redford, Robert: (III) 111, 111
 Rencoret Donoso, + Alberto: (I) 278. (II) 97, 126, 127, 128

- Retamal López, Rafael: (I) 22, 22
 Reyes Cerda, Alejandro: (I) 36, 38
 Reyes Vicuña, Tomás: (II) 144. (III) 115
 Richaud, + Paul Cardenal: (II) 35
 Riesle Contreras, Héctor: (III) 21, 99, 100, 169
 Righi-Lambertini, + Egano: (I) 251. (II) 19, 20, 44, 95, 98
 Rillón Romani, Sergio: (III) 228, 229, 230
 Rioja Medel, Fernando: (I) 24
 Ríos Arias, Eduardo: (III) 115
 Ríos Ide, Juan Antonio: (I) 84, 94
 Ríos Igualt, Héctor: (I) 97
 Ríos Valdivia, Alejandro: (I) 102
 Riquelme SDB, Luis: (I) 157
 Risopatrón, Víctor: (I) 97
 Risopatrón de Silva, Ana: (I) 26, 77
 Ritter, + Joseph Elmer Cardenal: (II) 35
 Rodrigo, Luciano: (II) 96, 96
 Rodríguez, RP Angel Custodio: (I) 178, 189, 195, 197
 Rodríguez Galisteo, Martín: (I) 16
 Rogers Sotomayor, Jorge: (III) 220
 Rojas, Darío: (II) 11
 Rojas, Javier: (II) 11
 Rojas de Silva, Lila: (I) 77
 Rojas Galdames, René: (I) 294. (III) 237
 Rojas Saavedra, Patricio: (II) 48, 189
 Román Rodríguez, Juan Pablo: (III) 24
 Romo Pérez, Waldo: (II) 118
 Roncalli, Angelo: ver Juan XXIII
 Ross Santa María, Gustavo: (I) 74
 Rossi, + Opilio: (I) 185, 185, 186, 189, 190, 209, 210, 286, 314. (II) 91
 Rossit SDB, José: (I) 157
 Rouquette SJ, Robert: (I) 270
 Rua SDB, Michele: (I) 66
 Ruffini, + Ernesto Cardenal: (I) 307. (II) 31, 35
 Rugambwa, + Laureano Cardenal: (II) 35, 75
 Ruiz Danyau, César: (II) 245, 253, 265, 266, 266, 267, 268, 276
 Ruiz de Escudero, RP Félix: (I) 196, 199, 204, 205, 205, 206
 Ruiz Tagle, Alfredo: (I) 129, 131
 Rychlowsky Palezinski SDB, Bruno: (I) 133
- Saigh, + Máximos IV Cardenal: (II) 45, 64
 Sáinz, RP Faustino: (III) 158, 238
 Salas Cruchaga SJ, Fernando: (III) 9, 9, 10, 31, 35, 72, 77, 78, 79, 81, 82, 85
 Salas Valdés, + Ramón: (II) 186
 Salinas Fuenzalida, + Augusto: (I) 95, 96, 97, 103, 119. (II) 86, 87, 186, 187
 Samoré, + Antonio Cardenal: (I) 175. (III) 118, 157, 158, 158, 159, 203, 234, 235, 237, 237, 238
 San Martín, José de: (III) 47
 Sanchez, Pedro: (III) 278
 Sánchez, Roberto: (II) 245
 Sánchez Ugarte, Jorge: (I) 136
 Sánchez Vargas, + Rafael: (I) 51, 155, 157
 Sánchez Beguiristain, + Manuel: (I) 278, 287. (II) 186. (III) 20, 20
 Sandoval, RP Mario: (I) 112
 Sanguini, Armando: (III) 217
 Sanhueza Herbage, Fernando: (II) 245
 Santa María González, Domingo: (III) 48
 Santa María Santa Cruz, Domingo: (II) 261. (III) 92, 127, 214
 Santa María Santa Cruz, Julio: (I) 97
 Santelices, María: (I) 80
 Santi Lucherini OMD, Baldo: (I) 143. (II) 8, 51, 251, 252. (III) 9
 Santibáñez Martínez, Abraham: (II) 11, 27
 Santos, + Rufino Cardenal: (I) 309, 310. (II) 67
 Santos Ascarza, + José Manuel: (I) 180, 278. (II) 128, 176, 186, 233, 282, 284, 285. (III) 25, 66, 98, 150, 173, 199, 200, 204, 213, 235, 246, 247, 253
 Sáinz Villalba, + Sótero: (II) 288. (III) 11, 13, 14, 26, 27, 50, 63, 73, 117, 118
 Sapag Chaín, Reinaldo: (III) 42, 43, 45, 92, 269
 Sapieha, + Adam: (III) 144
 Sapunar Dubravcic, RP Jorge: (I) 200, 203, 206, 294
 Sartawi, Isam: (III) 187
 Sarto, Giuseppe: ver Pío X
 Scarpa, Roque Esteban: (III) 186

- Schauff, Johannes: (I) 125, 127
- Schaulsohn Numhauser, Jacobo: (II) 245, 247
- Schlosser Mittelhusser SSCC, André: (III) 267
- Schmidt de Icaza, Rebeca: (I) 207
- Schmidt Henríquez, Alfonso: (I) 207
- Schneider Chereau, René: (II) 167, 168, 190, 193, 194, 209, 261
- Schuster, + Ildefonso Cardenal: (I) 69
- Segura SJ, Manuel: (II) 219
- Seoane CP, Modesto: (I) 281
- Seper, + Franjo Cardenal: (II) 161
- Sepúlveda Donoso, Claudio: (II) 234
- Sepúlveda Galindo, José María: (II) 245, 263, 266
- Serra Despouy, Roberto: (II) 96
- Serrano Viale-Rigo, Enrique: (II) 105
- Sforza, Catalina: (I) 238
- Shazar, Chalmán: (I) 318. (II) 81
- Shelley, Mary: (I) 203
- Sibilia, + Enrique: (I) 27
- Sidarous, + Esteban I Cardenal: (II) 45, 64
- Silva, Jaime: (II) 156
- Silva, Julio: (I) 206
- Silva Algüe, Waldo: (I) 17
- Silva Almarza, Tránsito: (I) 11
- Silva Barazarte, José María: (I) 11
- Silva Bascuñán, Alejandro: (I) 134
- Silva Bernaldes, José Luis: (I) 207
- Silva Carvallo, Alfredo: (I) 206
- Silva Cotapos, + Carlos: (I) 128. (II) 84
- Silva Cox, Enrique: (I) 207
- Silva Cuevas, RP Luis Eugenio: (III) 130, 148, 149, 151, 152, 219
- Silva de Garcés, Mariana: (I) 31
- Silva de Marshall, María Ester: (I) 207
- Silva de Silva, Tránsito: (I) 207
- Silva Garfín, Pablo: (I) 72, 207
- Silva Garfín, Patricio: (II) 166
- Silva Henríquez, Adolfo: (I) 18, 26, 77, 207
- Silva Henríquez, Anita: (I) 18, 26, 72, 77, 207
- Silva Henríquez, Armando: (I) 18, 26, 72, 77, 207
- Silva Henríquez, Clementina: (I) 18, 26, 77, 233. (III) 270
- Silva Henríquez, Eugenio: (I) 17, 26
- Silva Henríquez, Hugo: (I) 18, 26
- Silva Henríquez, Josefina: (I) 18, 26
- Silva Henríquez, Lucía: (I) 18, 26, 77, 233
- Silva Henríquez, María Victoria: (I) 18, 26, 77, 207
- Silva Henríquez, Marina: (I) 17, 26, 72, 77, 210, 233
- Silva Henríquez, Octavio: (I) 18, 26, 77
- Silva Henríquez, Ramiro: (I) 18, 26, 77, 207
- Silva Henríquez, Regina: (I) 18, 26
- Silva León, Ismael: (I) 189
- Silva Pizarro, Gustavo: (I) 26, 77, 77
- Silva Risopatrón, Anita: (I) 26
- Silva Risopatrón, Enrique: (I) 207
- Silva Risopatrón, Eugenio: (I) 26
- Silva Risopatrón, Sara: (I) 26
- Silva Rojas, Lila: (I) 77
- Silva Santiago, + Alfredo: (I) 180, 185, 191, 209, 210, 259, 261, 278, 287. (II) 19, 90, 91, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 186
- Silva Silva, Andrés: (I) 26, 77
- Silva Silva, Bernardo: (I) 26, 207
- Silva Silva, Carmen: (I) 77
- Silva Silva, Clemente: (I) 72, 233, 234
- Silva Silva, Clodomiro: (I) 16
- Silva Silva, Enrique: (I) 12, 77
- Silva Silva, Francisco: (I) 15, 16
- Silva Silva, Luis Ignacio: (I) 12, 13
- Silva Silva, María Angélica: (I) 77
- Silva Silva, Mercedes: (I) 26, 207
- Silva Silva, Ramiro: (I) 77
- Silva Silva, Raquel: (I) 72
- Silva Silva, + Raúl: (II) 186
- Silva Silva, Ricardo: (I) 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 53, 54
- Silva Silva, Rodrigo: (I) 77
- Silva Silva, Teresita: (I) 77
- Silva Silva, Valentina: (I) 72
- Silva Solar, Julio: (II) 122, 159
- Silva Vásquez, Cristina: (I) 26, 72, 207
- Silva Vásquez, Jorge: (I) 77
- Silvestrini, + Achille: (III) 234
- Sinay Sestopal, Gil: (II) 218
- Sinclair Oyaneder, Santiago: (III) 199, 200, 210
- Siri, + Giuseppe Cardenal: (I) 296, 297. (III) 137, 141, 142
- Sívori Alzérrega, Carlos: (II) 44

- Sixto V (Felice Peretti): (I) 228, 233
 Slipyi, + Yosyf Cardenal: (I) 276, 276.
 (II) 45. (III) 137
- Sodano, + Angelo Cardenal: (II) 99,
 100, 101, 106, 108. (III) 118,
 118, 207, 250
- Solar, Miguel Angel: (II) 93, 97, 142,
 178
- Solinas SDB, Miguel: (I) 157
- Somoza, Anastasio: (III) 166
- Sotta Barros, Daniel: (I) 151
- Souper, Roberto: (II) 258
- Spellman, + Francis Cardenal: (I) 159,
 265, 296
- Squella Avendaño SJ, Miguel: (I) 278
- Staffa, + Dino: (I) 307. (II) 31
- Stevens, Tom: (III) 9
- Stevenson, Adlai: (II) 46
- Strecker, + Ignacio J.: (III) 231
- Sturzo, RP Luigi: (I) 299
- Suárez Bastías, Jaime: (II) 212
- Suárez, Leopoldo: (II) 51
- Suenens, + León Josef Cardenal: (I)
 234, 234, 268, 270, 297, 305,
 306, 308, 309, 316, 318. (II)
 26, 32, 33, 35, 65, 133, 209.
 (III) 136, 183, 183, 243
- Sullivan, + Joseph M.: (III) 231
- Swanstrom, + Edward: (I) 199, 199
- Swett Madge, Jorge: (III) 11, 12, 24,
 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 47,
 170, 172, 259
- T**accoli, RP Oddone: (I) 145, 201
- Tagle Covarrubias, + Emilio: (I) 181,
 181, 182, 184, 186, 190, 209,
 211, 211, 212, 213, 214, 216,
 239, 251, 259, 281. (II) 18,
 93, 93, 96, 97, 123, 143, 186,
 243. (III) 49, 124, 220, 253
- Tapia Carvajal, RP Santiago: (I) 280.
 (III) 122
- Tapia Miranda, RP Fernando: (III)
 198
- Tapia Valdés, Jorge: (II) 241, 243,
 244
- Tappouni, + Ignace Cardenal: (I) 265
- Taracón, + Vicente Enrique Cardenal:
 (III) 136, 245, 246
- Tardini, + Domenico Cardenal: (I)
 165, 175, 259, 299, 300
- Tarud Ziwadi, Rafael: (II) 160
- Teitelboim Volosky, Volodia: (II) 211
- Tejido SDB, Ramiro: (I) 157
- Tento Boccalatte SDB, Guido: (I) 157
- Thant, U: (II) 54, 70
- Thayer Arteaga, William: (I) 97. (II)
 108
- Tirado Barros, Hugo: (II) 192
- Tisserant, + Eugene Cardenal: (I) 161,
 265, 265, 268, 293, 295, 296.
 (II) 39, 40, 62, 63, 66
- Tissot: (I) 35
- Tohá González, José: (II) 206, 229
- Tolosa, León: (I) 260
- Tomic, Felipe: (III) 109
- Tomic Romero, Radomiro: (I) 206,
 222. (II) 157, 158, 159, 160,
 171, 174, 183, 185, 261
- Tondini, Mons.: (I) 295
- Torres González, RP Sergio: (II) 202
- Torres Restrepo, RP Camilo: (II) 77,
 77, 78, 138
- Torretti Rivera, Sergio: (II) 148
- Trauner, Gunther: (II) 172
- Trivelli Franzolini, Hugo: (II) 48
- Tucci, RP Roberto: (II) 69
- Turriccia Gardelli SDB, Ambrosio:
 (I) 81, 81
- U**rrutia Manzano, Enrique: (II) 245
- V**agnozzi, + Egidio Cardenal: (III)
 189
- Valcárcel Mateo, Manuel: (III) 243
- Valdés Martínez, Ramón: (II) 167
- Valdés Phillips, Rodolfo: (I) 97
- Valdés Subercaseaux, + Francisco: (I)
 140, 278. (II) 186
- Valdés Subercaseaux, Gabriel: (II) 51,
 95, 100, 261
- Valdivia SDB, Enrique: (I) 157
- Valdivieso Zañartu, + Rafael: (I) 262
- Valech Aldunate, + Sergio: (I) 233,
 234. (II) 212, 225. (III) 52, 52 53,
 68, 78, 95, 112, 122, 262
- Valentini SDB, Eugenio: (I) 52, 61
- Valenzuela, Camilo: (II) 192, 193
- Valenzuela Díaz SDB, Oscar: (I) 37,
 157, 233
- Valenzuela Ríos, + Francisco de Borja:
 (I) 278. (II) 100, 186. (III) 20,
 20, 120, 124, 172, 173, 199
- Valenzuela Valderrama, Héctor: (III)
 96
- Valle Gallardo, + José del Carmen:
 (II) 186. (III) 15
- Vásquez, Juan: (III) 36

- Van Roey, + Cardenal: (I) 161
 Van Schouwen Scher, Gabriel: (II) 266
 Van Straate
 (PREMONSTRATENSE),
 Werenfried: (I) 203. (II) 216
 Van Vlierberghe van de Walle, +
 Polidoro: (I) 278
 Vekemans van Cauvelaert SJ, Roger:
 (I) 204, 213, 216, 218. (II) 48,
 64, 119, 133, 139, 140
 Velasco Alvarado, Juan: (II) 181
 Velasco Baraona, Belisario: (III) 25
 Velasco Letelier, Eugenio: (III) 96,
 96, 99
 Veloso, Carlos: (III) 112, 113
 Venegas, Ramón: (I) 151
 Vera, Gabacho : (I) 13
 Vergara, Roger: (III) 200
 Verlaïne, Paul: (II) 119
 Vial, Agustín: (III) 99
 Vial Correa, Juan de Dios: (II) 105
 Vial Espantoso, Carlos: (II) 44, 105
 Vial Risopatrón, + Manuel Camilo:
 (III) 191, 192, 193, 194, 198, 199,
 205, 212, 240, 243, 244, 261
 Viaux Marambio, Roberto: (II) 166,
 166, 167, 168, 192, 193
 Víctor Manuel: (I) 57
 Vicuña Aránguiz, + Eladio: (I) 96,
 268, 278. (II) 186
 Videla, Jorge Rafael: (III) 151, 158
 Videla Lira, Hernán: (II) 51
 Viera-Gallo Quesney, José Antonio:
 (II) 219, 261
 Viganó Cattaneo SDB, Egidio: (I) 108,
 109, 157, 260. (II) 64, 98, 100,
 101, 133. (III) 165, 195, 195
 Vigilietti SDB, Carlos: (III) 273, 274
 Vilarín Marín, León: (II) 273
 Villegas Mahieu SSCC, Beltrán: (II)
 204. (III) 170
 Villot, + Jean Cardenal: (II) 226. (III)
 26, 115, 142, 156, 157, 254
 Vio Grossi, Eduardo: (II) 94, 96
 Vio Valdivieso SSCC, René: (II) 165,
 286
 Vio Valdivieso, Rodolfo: (II) 286
 Visconti, Teobaldo: ver Gregorio X
 Vismara SDB, Eugenio: (I) 55, 56
 Vives Estévez, RP Francisco: (I) 216
 Vogel Rodríguez, Ernesto: (III) 115
 Von Hayek, Friedrich A.: (III) 215
 Von Unterrichter, Cristóbal: (I) 122
Waldheim, Kurt: (III) 129, 129
 Wallisfurth Ploch, RP Wolfgang: (I)
 120, 121, 121, 122, 123, 125,
 130, 131, 136, 137, 139, 139,
 140, 143, 144, 145, 149, 151,
 153, 190
 Weiss Rodemacher SDB, Carlos: (I)
 42, 45, 57, 61, 65
 Wessin y Wessin, Elías: (II) 54
 Whelan, Gerardo: (III) 77, 78, 85
 Wilson Petit, Sergio: (II) 10. (III) 230
 Wojtyła, Karol: ver Juan Pablo II
 Woodward Iribarri, RP Michael: (I)
 196. (III) 15
 Wright, + Cardenal: (III) 137
 Wyszinski, + Stefan Cardenal: (I) 219.
 (II) 206. (III) 138, 144, 144
Young Reyes, Mario: (II) 73
 Yrarrázaval Covarubias, Jaime: (II)
 295
 Yrarrázaval Lecaros, Raúl: (I) 122,
 233
 Yurjevic Kuljis, RP Andrés: (I) 216,
 240
Zacarías: (III) 259
 Zalaquett Daher, José: (III) 60, 82, 93
 Zaldívar Larraín, Andrés: (II) 106.
 (III) 115, 207, 241
 Zamora Herrera, Jaime: (III) 59, 61
 Zamorano Herrera, Antonio: (I) 173
 Zanin, + Mario: (I) 115
 Zavala Ortiz, Miguel Angel: (II) 51
 Zavala Rojas, Arturo: (II) 90, 92, 93,
 93, 95, 97
 Zavattaro SDB, Mario: (I) 157
 Zepeda Barrios, Hugo: (II) 13, 44
 Ziggliotti SDB, Renato: (I) 152, 230,
 232, 233, 238, 314
 Zin Sacuman SDB, Juan: (I) 31
 Zoghbi, + Elie: (II) 63
 Zorrilla de San Martín SJ, José: (I) 30